

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DERECHOS HUMANOS



TESIS DOCTORAL

**Los derechos fundamentales en la transición a la democracia
en Brasil 1974-1989**

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR
PRESENTADA POR

Helio Mendes Cazuquel

DIRECTOR:

Joaquín Ruiz-Gimenez

Madrid, 2015

d. 95.606

TE
806 A

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Facultad de Derecho

Departamento de Instituto de Derechos Humanos

BIBLIOTECA UCM



5301954965

**LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN
LA TRANSICION A LA DEMOCRACIA EN
BRASIL 1974/1989**



Helio Mendes Cazuquel

Madrid, 1992

Colección Tesis Doctorales. N.º 288/92

© Helio Mendes Cazuquel

na x530795816

Edita e imprime la Editorial de la Universidad
Complutense de Madrid. Servicio de Reprografía.
Escuela de Estomatología. Ciudad Universitaria.
Madrid, 1992.

Ricoh 3700

Depósito Legal: M-29133-1992

**UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE DERECHO
INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS**

TESIS DOCTORAL

**LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA
EN BRASIL 1974/1989**

Director: Profesor JOAQUIN RUIZ-GIMENEZ CORTES

HELIO MENDES CAZUQUEL

1991/92

AGRADECIMIENTOS:

Por un deber que me impone la justicia y la gratitud: agradezco a la dirección del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid por haberme dado la oportunidad de realizar estudios en Derechos Humanos y de asistir a las clases de brillantes e ilustres maestros del saber jurídico español. Y, seguidamente, agradezco al Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI) por haberme concedido en 1987 una beca que posibilitó el inicio de mis estudios en esa área. Por otro lado, agradezco a los rectores de la Universidade Federal da Bahia, a la cual pertenezco, profesor Germano Tabacoff, que en el año de 1987 autorizó mi estancia en el extranjero, y profesor José Rogério da Costa Vargens que prorrogó el plazo de dicha estancia tornando posible la conclusión de mi curso de doctorado. Agradezco, también, al Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) cuyo decisivo apoyo financiero a partir de 1988, hizo posible que continuara mis estudios y que pudiera traer a mi familia a Madrid para compartir juntos tanto momentos difíciles como felices. A la dirección de la Faculdade de Direito de mi Universidade Federal da Bahia, particularmente, a los profesores Alberto Peçanha Martins Junior y Antonio Carlos Araújo de Oliveira, agradezco por el apoyo que me brindaron durante mi estancia en Salvador para la realización de los trabajos de investigación. Además, y muy especialmente,

agradezco al eminente profesor Josaphat Marinho por su atención y, sobre todo, por sus sabios y providenciales consejos. Por último, y no por ello en último lugar, agradezco a quien siempre merecerá el título de defensor del pueblo en España profesor Joaquín Ruiz-Gimenez Cortés por su bondad, buena voluntad y benevolencia para con este ciudadano brasileño y particularmente, por haber orientado al doctorando y examinado este trabajo.

Dedico este trabajo a mi esposa Adália,
a mis hijas Avany y Monica y a mis hijos
Hélío, Marcello y Ulysses por su tolerancia
y comprensión frente a mis constantes
ausencias en la convivencia familiar durante
mis estudios de Derechos Humanos en España.

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE DERECHO
INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS

TESIS DOCTORAL

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA TRANSICION A LA DEMOCRACIA
EN BRASIL 1974 - 1989

I N D I C E

INTRODUCCION	6
--------------------	---

CAPITULO I

NOCIONES GENERALES SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES

I.1. Significación	33
I.2. Fundamentación	35
I.3. Conceptos	51
I.4. Clasificación	58
Citas y Notas	78

CAPITULO II

SITUACION DE BRASIL: DEL ESTADO AUTORITARIO HACIA LA DEMOCRACIA

II.1. La Existencia y Efectos de los Actos de Excepción	83
--	----

II.2. Los Principales Acontecimientos durante el
Período de la Transición

II.2.1. El Marco de Apertura	92
II.2.2. La Evolución Política e Ideológica.....	98
II.2.3. La Situación Económica del País	115
II.2.4. La Doctrina de Seguridad Nacional	120
II.2.5. La Concesión de Amnistía	128
II.2.6. El Movimiento Sindical	132
II.2.7. Los Movimientos Sociales	139
II.2.8. La Actuación de la Iglesia	145
II.2.9. La Actuación de la Justicia	153
II.2.10. El Gobierno y los Derechos Humanos	162
II.2.11. Las Organizaciones No Gubernamentales en la Defensa de los Derechos Humanos	173
II.2.12. La Presión Internacional	178
II.2.13. La Campaña por Elección Directa para Presidente de la República	184
II.2.14. El Proceso de Elección Indirecta de un Civil para la Presidencia de la República	188
II.2.15. La Muerte de Tancredo Neves y la Nueva República	191
II.2.16. Los Derechos Humanos en la Constituyente ...	194
Citas y Notas	203

CAPITULO III
LA SITUACION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
EN EL TRANSITO DEL ESTADO AUTORITARIO AL ESTADO DE DERECHO

III.1. Derecho a la Vida	210
III.2. Derecho a la Integridad Física y Moral	223
III.3. Libertad de Pensamiento y de Expresión	235
III.4. Derecho a la Intimidad	248
III.5. Derecho de Propiedad	251
III.6. Derecho de Participación	255
III.7. Derecho a la Libre Circulación	262
III.8. Derecho a la No Discriminación	267
III.9. Derecho de Reunión	275
III.10. Libertad de Asociación	278
III.11. Libertad de Religión	281
III.12. Derecho a la Educación	284
III.13. Derecho al Trabajo	295
III.14. Derecho a la Huelga	308
Citas y Notas	316

CAPITULO IV
ANALISIS DEL IMPACTO DE LA SITUACION BRASILEÑA
SOBRE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL PERIODO DE TRANSICION

IV.1. Situación Jurídica	326
IV.2. Situación Política	347

IV.3. Situación Económico-Social	358
Citas y Notas	378
CONCLUSIONES	382
BIBLIOGRAFÍA	404
APÉNDICE I	
. Los Derechos Fundamentales en la Constitución de 1967	
(Enmienda Constitucional n° 1, de 17 de octubre de 1969)	419
APÉNDICE II	
. Los Derechos Fundamentales en la Constitución de 1988 ..	433
LISTA DE TABLAS	452

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCION

A modo de mínima introducción al marco social y político que sirvió de escenario a los hechos investigados en este trabajo, sin cuyo conocimiento es muy difícil entender la crítica situación que vivieron los derechos humanos en Brasil desde 1964 a 1989, se relatan algunos de los principales acontecimientos políticos que fueron antecedentes nefasto de tal situación.

El 31 de marzo de 1964 acaeció en Brasil una "revolución" militar que impuso al país un régimen de fuerza que perduró más de 20 años. El Comando Revolucionario, instancia máxima del poder establecido a raíz del movimiento militar, en virtud de los focos de conflictos que existían en el país, de la situación de huelga casi generalizada, y de la existencia incluso de un quiebre de jerarquías en el seno de las fuerzas armadas, se apresuró a determinar las formas y mecanismos para la exterminación de los "subversivos", así llamados los militantes y simpatizantes de la ideología comunista que eran considerados responsables de muchos de estos focos de conflictos. Más tarde los mismos fueron categorizados como terroristas por las fuerzas represoras.

El Gobierno militar que se instaló después del Golpe de Estado pensó que la normalización de la situación política y

social del país sería cuestión de días. No obstante, no ocurrió así, siguieron existiendo focos de resistencia y de descontento en muchos sectores de la sociedad, incluso en algunos sectores militares de baja graduación, todos los cuales acusaban al Presidente de la República de carecer de toda legitimidad para comandar los destinos de la Nación. Por tanto, el estado de emergencia continuaba y la normalización institucional había de esperar, con todo lo que ello implicaba para el reconocimiento y ejercicio efectivo de las garantías individuales.

El restablecimiento de la normalidad institucional fue nuevamente aplazado cuando se acercaba el final del mandato del primer presidente militar, toda vez que, en esos momentos la prioridad de los líderes militares más adeptos a la continuidad de la "revolución", que querían ver prontamente consolidados los ideales revolucionarios, era acordar el nombre del segundo Presidente de la República de entre aquellos generales más alineados con los principios de dicha revolución.

No obstante, el primer Presidente antes de terminar su mandato hizo público su interés de volver al país a una situación de normalidad institucional y mandó preparar un proyecto de Constitución a cuyo efecto convocó al Congreso Nacional, que hasta entonces se encontraba en receso forzado, y le otorgó poderes constituyentes para apreciarla y aprobarla dentro de un plazo determinado. Así fue como en 1967 una nueva

Constitución fue promulgada, y se pensó que Brasil comenzaría a caminar hacia un Estado de Derecho, aunque no democrático, puesto que en tal Constitución estaban contenidas las decisiones arbitrarias emanadas del poder militar y, por lo mismo, existía mucha incertidumbre sobre la legalidad que regiría el futuro.

Sin embargo, cualquiera haya sido su grado de acierto o de legitimidad, el documento constitucional aludido tuvo un tiempo de vigencia muy corto. Las cuestiones políticas y sociales internas se extremaban y segmentos de la sociedad, formados específicamente por los seguidores de ideologías de izquierda, empezaron a actuar con más ahínco en la clandestinidad incitando a la población civil a luchar contra el sistema militar, utilizando inclusive la táctica de guerrilla. Con ello, el régimen militar que no pretendía hacer concesiones a la oposición política, tomó las medidas necesarias para acabar con esas manifestaciones contrarias a la "revolución" y al mismo tiempo garantizar la permanencia de los militares en el poder dictando en 1968 el Acto Institucional número 5, el más brutal y atentatorio de los instrumentos del régimen militar contra las instituciones del Estado y los Derechos Humanos. El mismo no hizo más que agravar la ya difícil situación de los derechos fundamentales del ciudadano brasileño y pasó a ser un texto jurídico con primacía absoluta sobre cualquier otro.

En 1969 el segundo general que ocupó la Presidencia de la República sufrió una grave enfermedad y los Ministros Militares se arrogaron el Poder Ejecutivo y el poder constituyente y otorgan a la Nación otra Constitución en ese mismo año. No obstante, fue corta la permanencia de esa Junta Militar a frente del Gobierno.

Por su parte, el tercer general que asumió la Presidencia de la República no acudió a la vía constitucional sino que sencillamente, de hecho, utilizando todos los instrumentos de excepción de que disponía (Actos Institucionales, Actos Complementarios y otros), procuró consolidar el trabajo del movimiento militar de 1964. Combatió despiadadamente a todas las facciones políticas y movimientos armados que luchaban contra el régimen militar hasta que consiguió aniquilarlos. Además, no hay que olvidar que, paralelamente, en este mismo período y motivado por las facilidades del mercado financiero internacional y por la acentuada captación de recursos externos ocurrió el llamado "milagro económico" brasileño que significó un crecimiento nacional superior al 10% y que sirvió de gran acicate populista al gobierno militar no obstante la grave situación que vivían muchos ciudadanos que veían frecuente y gravemente violados tanto sus derechos individuales como sus derechos sociales, aún existiendo bonanza económica en el país.

Concluida durante la tercera presidencia la fase de

eliminación de los subversivos, el gobierno militar siguiente, empezó a pensar en la "descompresión" política de la Nación. Así en 1974, asumió la Presidencia de la República un cuarto general que prometió una apertura lenta, gradual, pero segura, a la redemocratización del país. Con todo, sin precisar en cuanto tiempo pensaba concretar ese proceso.

A partir de ese año se empezó efectivamente a hablar de transición política. Antes, se había utilizado el término "distensión política" para caracterizar el punto de separación entre la fase más cruenta y más revolucionaria del Movimiento de 1964, y la fase de expectativa de cambios de la situación política y social de Brasil. Distensión política, apertura política y transición hacia la democracia fueron y son términos usados en Brasil, por políticos, cientistas políticos, cientistas sociales y otros profesionales, para designar el proceso de superación del régimen de arbitrariedad y de tentativa de establecer un Estado Democrático de Derecho. Y lo mismo, se señala específicamente puesto que el objeto de este trabajo es analizar la situación de los Derechos Fundamentales del Hombre en Brasil precisamente durante ese período de transición política.

Desde el mismo año 1964 y como resulta evidente según los hechos antes relatados, Brasil estaba viviendo un período de dictadura militar, donde el libre ejercicio de los derechos humanos cedía lugar al ejercicio de la fuerza, de las armas y

de la sumisión. En este estado de cosas, algunos medios de comunicación y entidades y organizaciones de defensa de los derechos humanos insistían en denunciar las arbitrariedades que eran cometidas por los detentadores del poder contra las instituciones establecidas contrarias al régimen y contra todos los ciudadanos. En todo sentido la imagen que prevalecía era la de un Estado que persistía en la violación de los derechos fundamentales de la persona humana.

Una vez desencadenada la distensión política o la voluntad de cambio del Estado autoritario al Estado Democrático de Derecho mediante una etapa de transición, surgió imperiosa la interrogante acerca de la situación en la que quedaría el ejercicio de los derechos humanos durante ese nuevo período. Se pensó que los derechos fundamentales serían, a partir de ahí, íntegramente respetados, que no ocurrirían más violaciones por parte del Estado. No obstante, paralelamente, surgían las interrogantes acerca del modo cómo se comportarían los órganos de represión estatales formados para combatir en principio a los subversivos o si estos serían inmediatamente disueltos, las dudas acerca del papel que cumpliría de allí en adelante la comunidad de información que vigilaba todas las acciones y movimientos de los ciudadanos, etc. Tales interrogantes y dudas persistieron por un largo período generando gran inquietud y sufrimiento.

Una vez transcurrido el período de transición política había que preguntarse de forma general, omnicomprendiva, lo que ocurrió en Brasil con los derechos fundamentales durante dicho período. A esa inquietud, a esa necesidad de información general y sistemática obedece la realización de este trabajo de investigación. En Brasil, los estudios sobre derechos humanos que se han realizado, han sido elaborados en función del criterio de personas u organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos humanos y solo se han referido a determinados derechos generalmente, aquellos derechos cuya lesión o violación más inquietaban a la sociedad y que estaban principalmente relacionados con los ciudadanos más pobres que constituían la gran parte de la población brasileña. Así fueron hechos algunos trabajos sociológicos, políticos y jurídicos centrados en las arbitrariedades cometidas por el régimen militar a partir del año 1964. Sin embargo, fueron realizados con carácter general y no procuraron definir un área espacial o temporal de estudio ni pormenorizar en ella, por ejemplo, en uno de los varios mandatos militares que nos rigieron o en una determinada fase del régimen militar considerado en su conjunto. De ahí el interés y la necesidad de realizar un estudio general y omnicomprendivo.

En 1987, desde el comienzo de los estudios del Programa de Doctorado en Derechos Humanos, impartido por el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, se buscó definir un tema

para investigar, desarrollar y preparar como Tesis Doctoral. El mismo, por lo que antes se ha explicado, había de tener vinculación con los Derechos Fundamentales en Brasil. Así, se definió como tema: "Los Derechos Fundamentales en la Transición hacia la Democracia en Brasil 1974/1989", período en el que el autor ha sido testigo y agente de la larga y tormentosa experiencia impuesta a la Nación brasileña.

Desde el momento en que se decide realizar una investigación de esa naturaleza, que no es solamente jurídica, sino también político-social hay que tener en cuenta que Brasil, comprende una extensión territorial de ocho millones quinientos once mil novecientos y sesenta y cinco kilómetros cuadrados, constituido bajo una República Federal, compuesta de veintiséis estados miembros y que en 1974 tenía una población superior a cien millones de personas, alcanzando al final de la transición una población estimada de ciento y cincuenta millones de habitantes. Por lo mismo en tal país continente, no se puede enfocar la situación de los Derechos Fundamentales, especialmente en su fase de transición a la democracia, sin tomar en cuenta su complejidad institucional, política, social y económica, como estado federal que es, además de las peculiaridades y diferencias regionales. No obstante, y esto también ha de tenerse presente en el momento de analizar este trabajo, con sólo referirse a São Paulo, Rio de Janeiro, Brasilia, Salvador u otro cualquier de los estados o ciudades brasileñas se puede obtener una visión genérica válida, una

completa representación del país, toda vez que, en cada uno de esas ciudades o estados existen las mezclas y características comunes de los pueblos, las costumbres, las necesidades, las expectativas, la ansiedad, etc. que pueden encontrarse en cada uno de los rincones del Brasil. Así, la ocurrencia de cualquier hecho o hechos en una de las partes de Brasil, configura una muestra significativa del su contexto general.

En virtud de esas consideraciones, se estimó pertinente escoger, en especial, las ciudades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília y Salvador como lugares propicios para la ejecución del trabajo de investigación en todas sus fases ya que, además de ser ellas suficientemente representativas, son ciudades que permiten acceder a toda la información, registros y material bibliográfico necesarios para desarrollar el tema elegido.

Inicialmente, existió cierta dificultad en la definición de las fuentes a utilizar debido al carácter "no oficial" de la mayoría de las fuentes de información existentes sobre el tema y la poca difusión que las mismas suelen tener. No obstante, se decidió consultar determinados libros mediante los catálogos de diferentes editoras y librerías así como acceder a otra información más detallada y específica por medio de recortes de periódicos extraídos de los archivos de las principales empresas periodísticas brasileñas y de diferentes documentos y testimonios recogidos y conservados en los

archivos de diferentes asociaciones que tuvieron una destacada actuación en defensa de los Derechos Humanos en el país desde el comienzo e incluso desde antes de haber comenzado la transición política. Dicho material bibliográfico y documental fue recogido en las ciudades mencionadas anteriormente, y además, la ciudad de Salvador de Bahía ha servido como centro de recepción y selección de los mismos, así como centro de trabajo en general. Anteriormente, además, se había procedido a la selección de material bibliográfico de autores españoles, con vista a la elaboración del Capítulo I de la Tesis, en en cual se hace un acercamiento teórico sobre los derechos fundamentales, a cuyo efecto se recurrió también a algunos autores brasileños. En último término, valga resaltar aquí que, aún hoy, es limitado el número de editoras o entidades que se dedican a la edición de libros o documentos sobre los Derechos Humanos o sobre la violación de los Derechos Fundamentales en Brasil.

Se procuró que las fuentes documentales, testimonios, cifras, etc. para la realización de este trabajo procedieran tanto de aquellas personas u organizaciones situadas en la oposición política como de aquellos adeptos o defensores del régimen militar. Sin embargo, es un hecho que gran parte de ese material fue escrito y patrocinado por personas que siempre se opusieron a las decisiones de los Gobiernos del régimen militar, y que se situaban políticamente en la izquierda o en el centro-izquierda. Por lo mismo, la labor primordial ha sido

analizar los mismos sin cuño ideológico y con imparcialidad, algo que presumiblemente ha podido influir en sus autores a la hora de registrar y ofrecer esos hechos a la opinión pública, procurándose, en todo momento, mantener una posición de neutralidad a la hora de analizarlos.

La tesis que se presenta consta de cuatro capítulos y un apartado de conclusiones. En el Capítulo I se hace un breve acercamiento teórico al concepto de Derechos Fundamentales. El Capítulo II se refiere al pasaje del Estado Autoritario hacia a un Estado Democrático de Derecho, subdividido en dos partes: una que trata de los Actos de Excepción y los Derechos Fundamentales, y la otra referida al Período de la Transición. El Capítulo III trata de la situación de los Derechos Fundamentales durante el período 1974-1989, y el Capítulo IV está destinado a analizar el impacto de la situación jurídica, política, económica y social de Brasil sobre los Derechos Fundamentales durante el mismo período.

En el Capítulo I se procura dar una visión general, que no superficial, de las principales teorías sobre fundamentación y conceptualización de los Derechos Humanos. Así como esbozar algunas de las clasificaciones de esos derechos basándose para ello en el trabajo de profesores españoles. Se pretende que este capítulo sirva de introducción a la realidad conceptual de los derechos de la persona de modo de hacer más

asequible su análisis en una situación real concreta, como es la de Brasil entre 1974 y 1989, y por consiguiente verificar si hubo o no violación de esos derechos en Brasil, durante el período estudiado.

Con el Capítulo II se entra en la realidad brasileña del período de la transición. El mismo se inicia relatando el origen de la dictadura militar y su constante práctica arbitraria que incidió fundamentalmente en la vigencia y ejercicio de los Derechos Fundamentales y en la alteración del orden constitucional. Seguidamente, se exponen los principales acontecimientos que operaron como factores determinantes de la distensión política, la apertura y la consumación de la transición a la Democracia. Así se describe la situación política y económica del país en ese período, se expone la doctrina de seguridad nacional que imperó en la transición, se distingue la actuación de los diversos movimientos sociales en defensa de los Derechos Humanos y en pro del restablecimiento del Estado Democrático, se hace mención a las organizaciones y factores internos y externos que presionaron al gobierno militar por la sistemática violación de los Derechos Humanos, y por último, se comenta la caída del régimen militar y el retorno de un Presidente civil, poniendo especial énfasis en las expectativas y esperanzas de toda la población civil por la normalización democrática y la vuelta al Estado de Derecho.

En virtud de todo ello, en este capítulo aparece esbozada la evolución política del país. Se puede apreciar cómo al comienzo de la transición, momento en el que solo existían dos partidos políticos, el MDB, partido de oposición al gobierno, empieza a ganar terreno en el concepto de la opinión pública. En las elecciones generales de 1974 obtuvo una expresiva votación a su favor y, si bien no consiguió la mayoría en el Congreso Nacional, amedrentó a los cuadros políticos del gobierno que a partir de ese momento empezaron a valerse de artificios legales para ganar las futuras elecciones.

A finales de 1979 el gobierno militar, comandado por el general Ernesto Geisel, decidió implantar el sistema de pluripartidismo con el propósito de debilitar la oposición y así no arriesgarse a perder la mayoría que detentaba en el Congreso. Con esta medida el gobierno intentaba mantener la misma ya sea en solitario con su partido ya por medio de una coalición con pequeños partidos. Este es el origen de una serie de partidos políticos de ámbito nacional.

También queda dicho cómo por propia obra del gobierno militar fue posible que un civil accediera a la presidencia del Brasil después de tantos años de gobiernos militares. Como consecuencia del restablecimiento del pluripartidismo, al aproximarse las elecciones presidenciales de 1984 los partidos políticos se preparan para lanzar sus candidaturas. El

partido oficialista se enfrenta, por su parte, con serias dificultades de naturaleza coyuntural y no consigue obtener el consenso de sus militantes en torno a un único candidato. Así, muchos de sus líderes deciden abandonar el partido PDS y fundan el Frente Liberal que más tarde se constituye en el Partido del Frente Liberal (PFL). Este en coalición con el principal partido de oposición, el PMDB, lanza la candidatura de Tancredo Neves, un militante del PMDB.

Así, con la disidencia de los principales líderes y dirigentes del PDS, que ocasionó la formación de un nuevo partido político y la presentación de un candidato civil de la oposición estaba decretado el derrumbe del gobierno militar que desde 1964 estaba al mando de la Nación, y, por consiguiente, marcado el regreso de un civil al cargo de Presidente de la República. Esto ocurrió en marzo de 1985.

En el capítulo II también se explicita cómo al haber asumido la Presidencia de la República un político civil, aún cuando éste haya tenido su origen en el partido que venía dando apoyo político al gobierno - si es que los gobiernos del régimen militares necesitaban de apoyo político - se hacía imperioso e ineludible cumplir los compromisos asumidos con la población en las calles y en las plazas con ocasión de los mítines que llevaron la candidatura de oposición a la victoria y, se explicita también, cómo tal gobierno trató de poner en práctica algunas de esas promesas. En 1986, por ejemplo, en una

tentativa de dar estabilidad a la economía congeló los precios de los productos y de los salarios, medida que funcionó por algunos meses y que causó euforia en la sociedad brasileña que tenía fe en las medidas de la "nueva república" comandada mayoritariamente por políticos del PMDB. La misma, motivó que en las elecciones generales de 1986 el PMDB consiguiera la mayoría absoluta en las dos casas del Congreso Nacional y que eligiera 22 gobernadores estaduais, entre los 23 estados de la Federación.

No obstante, si bien esos eran los derroteros de la política de la "nueva república" la deuda externa, que fue en aumento a partir del primer gobierno militar, empezó a crear obstáculos para el desarrollo de la economía nacional y el control interno de la inflación, porque además de los préstamos que habían de contraerse para mantener la ejecución de sus proyectos acumulábase esa deuda por el constante aumento de las tasas de interés dictadas por los mercados financieros internacionales.

Así mismo, la incontrolable inflación verificada en el período, que alcanzó índices por encima de cualquier expectativa, hizo que el poder adquisitivo de la gran parte de la población decayese considerablemente, llevando a millones de brasileños a una situación de miseria absoluta. Mientras tanto, una pequeña parte de la sociedad poseedores de gran parte de la renta nacional veían esa misma renta aumentada, colocando a

Brasil en la lista de aquellos países que ostentan una de las más altas tasas de concentración de renta del mundo.

Como consecuencia de ello, cuestión que también se analiza en este capítulo, se acrecienta la movilización social. La población civil se organiza en movimientos sociales y exige la concesión de amnistía amplia, general e irrestricta y el establecimiento de una completa normalización democrática en el país. Aparecen nuevos líderes sindicales en razón de cuya acción los sindicatos toman conciencia de su papel y pasan a reclamar sus derechos, surgiendo el llamado "nuevo sindicalismo", se crean centrales sindicales y se declaran huelgas en todo el territorio nacional en defensa de los derechos laborales, especialmente por cuestiones de salario.

La iglesia católica, por su parte, que siempre denunciaba y combatía las arbitrariedades practicadas por el régimen militar contra los presos políticos, asume en ese momento la "opción preferente por los pobres" y pasa a proteger y defender los derechos humanos de los menos favorecidos, de los marginados y de los olvidados por la sociedad.

La actuación del poder judicial, en cambio, no varía. Con un comportamiento que ya es tradicional, con su inercia y su complacencia con los gobiernos militares, mantiene los derechos fundamentales "hibernando" en los textos constitucionales vigentes en el período de transición. Con ello, los

ciudadanos veían en él un obstáculo insalvable para hacer uso de los instrumentos de garantías constitucionales que podrían tornar efectivo el ejercicio de sus derechos.

La Orden de los Abogados de Brasil, aliada a la iglesia católica y a algunos profesionales de la prensa, estuvo siempre defendiendo, incluso en juicio, a los perseguidos por la fuerza. Desde ya es destacable la actuación del jurista Sobral Pinto como representante de todos aquellos que, bajo amenazas o persecuciones constantes, persistieron en la defensa intransigente de sus hermanos brasileños que veían sus derechos fundamentales brutalmente violados. Incluso, existió dentro de las instituciones del gobierno de la Nación, el Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana, órgano creado poco antes de la eclosión del golpe de Estado de 1964 que resistió a la arbitrariedad del poder a pesar de todas las dificultades que le fueron impuestas.

El capítulo II está dedicado, también, a explicitar cómo la sociedad se movilizaba y creaba sus órganos de defensa, como un medio de denunciar las arbitrariedades del régimen militar y de alzar su voz en favor de los perseguidos y violentados, por ejemplo, el Movimiento Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, organización de ámbito nacional encargada de coordinar las acciones de los centros y comisiones de defensa de los derechos humanos para facilitar la difusión y divulgación de las denuncias y conseguir para ellas apoyo de la

opinión pública nacional e internacional. También se menciona algunas organizaciones internacionales que se preocuparon por los derechos humanos en Brasil como Amnistía Internacional, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, la Comisión Internacional de Juristas, etc.

Finalmente, se refiere como hecho muy significativo para el tema que nos ocupa la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, que dio cabida a las ansiedades y expectativas de todos los brasileños y desde donde surgió una nueva constitución sin los resquicios legales del período arbitrario. Como se verá, en dicha Asamblea el debate sobre los derechos fundamentales fue muy amplio, algunos de estos derechos pasaron a integrar el nuevo texto constitucional y otros, aunque muy significativos, no obtuvieron la aprobación de la mayoría de los constituyentes.

El Capítulo III, por su parte, está dedicado al estudio particularizado de la situación de algunos de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales durante el período de transición. En primer lugar, se refieren los preceptos constitucionales relativos a tales derechos consignados tanto en la Constitución de 1969 - que estuvo vigente en casi todo período de la transición hasta el 5 de octubre de 1988 - como en la Constitución de 1988, aprobada y promulgada por una Asamblea Nacional Constituyente, fruto de

las luchas sociales y políticas que se refieren en el capítulo II. En segundo lugar, se mencionan algunas de las violaciones a tales derechos ocurridas durante el período analizado, se indican órgano, entidad o agente causante de tal violación. Se procede de esta manera, incluyendo en el análisis una amplia gama de derechos, porque se entiende que todos los derechos humanos son básicos y esenciales a la existencia y supervivencia de la persona humana, y que no es correcto dar énfasis sólo a aquellos relativos a la libertad o a la integridad física o moral, derechos que suelen ser los más alcanzados con ocasión de la vigencia de un Estado de Excepción.

Especial mención se hace, en este Capítulo III, a algunos de los derechos que, según la investigación realizada, fueron los más violados o que los que más constaron en las denuncias de violación, a saber y a vía de ejemplo:

El derecho a la vida gravemente afectado por el Acto Institucional nº 14 que introdujo la pena de muerte para el caso, entre otros, de guerra revolucionaria o subversiva, no obstante lo cual y afortunadamente ningún ciudadano perdió su vida en ese período en razón de la aplicación de esa disposición, lo que no quiere decir que no haya sido víctimas de otros actos que sin apoyatura legal alguna acarrearón igual resultado. Tal derecho fue, en cambio, violado sistemáticamente por la acción del Estado a través de sus órganos de represión, por la acción de los llamados "justicieros", por la acción de

los escuadrones de la muerte, por las acciones de algunos policías civiles y militares y personas marginales y delincuentes.

El derecho a la integridad física y moral, a su vez, no obstante estar constitucionalmente protegido fue violentado por las torturas cometidas por los órganos de represión, por la aplicación de los métodos violentos de las policías civiles y militares en todo territorio nacional y, más aún, por la falta de toda protección jurídica de las personas arrestadas. El mismo también fue violado abiertamente en las calles del país.

Igualmente, el derecho a la libertad de expresión fue perseguido por los gobiernos militares aunque estaba constitucionalmente protegido. El ejercicio de ese derecho dificultaba las acciones de los órganos de represión, en tanto sus arbitrariedades podían llegar al conocimiento de la opinión pública nacional o internacional. Por lo mismo, la imposición de la censura a todos los medios de comunicación y al arte y literatura pretendió ser una forma de impedir a cualquier costo el ejercicio de ese derecho. Por su parte, ciertos sectores de la prensa, la radio y la televisión aceptaron la censura y pasaron a actuar en consonancia con la práctica represiva de esos gobiernos.

El derecho a la libertad de movimiento o a libre circulación, aunque no estuvo prohibido formalmente, se vio

tremendamente afectado por la suspensión del Habeas Corpus, instrumento de garantía de ese derecho fundamental que permitiría la puesta en libertad inmediata de un ciudadano que fuese arrestado ilegalmente.

El derecho de participación política, por su parte, podía ser ejercido solo a través de los moldes dictados por el régimen militar que por medio de sus artificios legales definía la forma de creación y actuación de los partidos políticos y la forma y ocasión para ejercer el derecho de voto. Así, los estudiantes, profesores y trabajadores no podían participar en actividades políticas en sus sitios de estudio o trabajo, los cargos y empleos públicos estaban destinados en exclusiva a los adeptos y seguidores del régimen, etc.

En lo que respecta al derecho a la intimidad, éste no estaba constitucionalmente consagrado para la mayoría de los ciudadanos brasileños, solamente las autoridades extranjeras de visita en el país y las autoridades del gobierno contaban con la protección de su honor, según la ley de seguridad nacional; el derecho a la no discriminación si bien se encontraba constitucionalmente protegido mediante el principio de igualdad ante la ley, también se vio afectado por la existencia de una flagrante violación a los derechos humanos de los negros, de las mujeres, de las llamadas "minorías", de los pobres, etc., en suma de la gran mayoría de la población de Brasil; los derechos de asociación y de reunión, también

constitucionalmente consagrados, estuvieron vigentes solo según el arbitrio de las autoridades policíacas que se valían de algunos instrumentos jurídicos para determinar la disolución de entidades constituidas legalmente así como para determinar las condiciones en las que habrían de realizarse reuniones, aún cuando no fuesen en sitios públicos o abiertos.

Con relación al derecho a la educación, se establece lo poco que valió su protección constitucional, como en los casos anteriores, ya que los gobiernos no destinaban recursos financieros suficientes para que los niños y los jóvenes tuvieran una oferta de educación digna. Por consiguiente, la demanda educacional fue mayor que el número de plazas existentes en los colegios públicos, los gobiernos militares y el gobierno civil de la "nueva república" por lo mismo, no consiguieron acabar con el analfabetismo en el país. Así, Brasil continuó situándose entre los países del mundo que ostentan una mayor tasa de analfabetismo.

El derecho al trabajo, por su parte, no contó con el amparo político del gobierno para que pudiese ser plenamente ejercido, sino que por el contrario, las políticas de los gobiernos de transición estuvieron siempre orientadas a menoscabar ese derecho. Con la política de determinación de cuales productos o industria debían ser prioritariamente estimuladas con vistas a la exportación, se dificultó la opción que las personas podían tener de escoger un determinado trabajo

y, aún más, se establecieron políticas salariales que redujeron considerablemente el poder adquisitivo de la clase trabajadora. Además nuevas normas legales dictadas por el régimen militar crearon varios impedimentos para el ejercicio del derecho a la huelga. Se prohibió su ejercicio en los servicios públicos y en los servicios considerados esenciales para la población. Con todo, y en virtud de la emergencia del "nuevo sindicalismo" fue posible romper esa barrera acaeciendo a partir de 1978 miles de huelgas por todo el país en defensa de los derechos económicos y sociales. De todo lo sucedido con estos, y otros derechos, su tratamiento legal y pragmático, se hace análisis pormenorizada en el capítulo III referido.

Finalmente, en el Capítulo IV, se estimó necesario hacer un comentario particular sobre la situación jurídica, política, social y económica del país en el período de la transición, toda vez que las mismas tuvieron repercusión en el estado de los derechos fundamentales, y por último, se consigna la conclusión de ese trabajo con sus justificaciones.

Hay que señalar que cuestiones de objeción de conciencia y de medio ambiente que consideramos de gran importancia en el tema de los derechos humanos, hemos dejado de consignar en este trabajo por no haber sido tratado convenientemente en la carta constitucional de 1967 vigente en la mayor parte del período de la transición, aunque se debiera

registrarlas aquí por un deber moral sus constantes violaciones en ese período, y de forma más acentuada en los años 80.

En lo que se refiere a la objeción de conciencia esa cuestión solo es tratada en la parte destinada a la libertad religiosa. La Constitución de 1967 preveía la pérdida de los derechos políticos si el ciudadano se eximía a cumplir una obligación legal a todos impuesta, como es el caso del servicio militar obligatorio para todos los ciudadanos mayores de 18 años, con todo la Constitución de 1988 prevé la prestación de servicio alternativo para aquellos ciudadanos que se excusen, por motivo de convicción política, filosófica o religiosa, a prestar servicio militar, de conformidad con lo que podemos verificar en el apartado III.11. de este estudio.

La Constitución de 1967 con su total Enmienda nº 1, fue omisa en el que respeta a las cuestiones de medio ambiente, entre tanto la Constitución de 1988 se presenta como innovadora y progresista en este asunto, dedicándole un capítulo entero en su título destinado al Orden Social, sin con todo traducirse en la eficacia esperada, lo que por cierto se justifica por el poco tiempo de su vigencia y por falta de una reglamentación que esté de acuerdo con los problemas de medio ambiente, además de la escasa concienciación y de la ausencia de una cultura ambiental responsable de la casi totalidad de la población de Brasil.

Cabe resaltar que el autor de esta tesis no pretende agotar el tema de los Derechos Fundamentales durante el período de transición a la democracia en Brasil, y por lo mismo, si bien se han tomado como base para tratamiento del tema algunos de los derechos procurase seguir al convencimiento que se tiene de que el carácter universal de los derechos humanos permite analizar una muestra significativa de su conjunto y extender luego las conclusiones obtenidas al todo. Así, si se trabajara solamente con una categoría de los Derechos Humanos - individuales o sociales, económicos o culturales - o si se ampliase o acortase el listado de los Derechos Humanos contenido en este trabajo, no se alteraría substancialmente el resultado de la conclusión, del mismo modo en que no se puede trasgredir o violar cualquier derecho de la persona humana como pretexto para garantizar o defender otro, sea de un individuo, de un grupo, de una minoría o de la mayoría, porque los Derechos Fundamentales del Hombre son uno.

CAPÍTULO I

NOCIONES GENERALES SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES

I.1. Significación.

I.2. Fundamentación.

I.3. Conceptos.

I.4. Clasificación.

Citas y Notas.

CAPITULO I

NOCIONES GENERALES SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES

Para una mejor comprensión de lo que vamos a presentar en este estudio sobre los derechos fundamentales en la transición a la democracia en Brasil, entendemos que deberíamos hacer un capítulo con algunas consideraciones genéricas a cerca de los derechos humanos. El abordaje que aquí se hace está basado tan solamente en los conocimientos transmitidos por los profesores españoles, profundos conocedores y expertos del área del Derecho, especialmente de aquellos que impartieron clases en el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, en los cursos académicos 1987/88 y 1988/89.

Así, y por un deber de gratitud y reconocimiento para con los maestros de la enseñanza jurídica española, creemos que no se podría empezar a discurrir sobre los derechos fundamentales sin antes enfocar algunos significativos planteamientos y relevantes aportaciones, además de sus preocupaciones en el campo de los derechos del hombre.

Procuramos no hacer en este capítulo ninguna nueva aportación a la comprensión de los derechos humanos, pues entendemos que las aportaciones que serán presentadas satisfacen plenamente a nuestra intención de introducirnos al

estudio de los derechos fundamentales en Brasil como pretendemos, y servirá como una introducción al tema central de esta tesis, cuyo desarrollo propiamente dicho empezaremos a partir del capítulo II.

Hechas esas breves consideraciones, presentamos a continuación las nociones generales sobre los derechos humanos.

I.1. Significación

Antes de que se pueda abordar los diversos fundamentos de los derechos humanos en sus diferentes aspectos es necesario que se aporte un principio formal de razonamiento moral: aquel que establece como la única condición para ser beneficiario de los derechos humanos la de pertenecer a la especie humana. Cuando se dice que "todos los hombres son iguales" la afirmación solo puede tener el significado de que "todos los hombres son igualmente hombres", (1) sin considerar las diferencias o desigualdades biológicas, sociales o de cualquier otra índole.

Los derechos humanos en el entender del profesor Antonio Truyol y Serra dentro del "contexto historico-espiritual" son los "derechos fundamentales que el hombre posee por el hecho de ser hombre, por su propia naturaleza y dignidad; derechos que son inherentes, y que, lejos de nacer de una concesión de la sociedad política, han de ser por ésta

consagrados y garantizados" y añade "que la conciencia clara y universal de tales derechos es propia de los tiempos modernos".

(2)

Son varias las corrientes y los defensores de las teorías de los derechos humanos. El primer problema con el que nos encontramos es el de la determinación terminológica, cuestión muy debatida y discutida por los estudiosos de este polémico y apasionante tema. Muchas son las denominaciones y los términos utilizados para definir los Derechos Humanos y no siempre aquellos definen con precisión lo que estos son realmente, provocándose mucha ambigüedad y controversia para su exacta comprensión. Ello demuestra que el tema ha sido tratado de acuerdo con las conveniencias de las corrientes doctrinarias o de los modelos sócio-políticos e ideológicos que lo han ido abordando al pasar del tiempo. En el transcurso de la historia hasta hoy, para hablar de derechos humanos se han empleado expresiones tales como: derechos naturales, derechos innatos, derechos individuales, derechos del hombre, derechos del ciudadano y del trabajador, libertades públicas, derechos públicos subjetivos, libertades fundamentales, derechos fundamentales, derechos fundamentales del hombre, entre otros.

Es de suma importancia la aclaración de un término que pueda descifrar coherentemente y de forma general la problemática terminológica de los Derechos Humanos. La definición terminológica de los derechos humanos ha sido

estudiada de forma exhaustiva por renombrados profesores y estudiosos de este tema y por lo tanto no cabe en este trabajo establecer aún más confusión semántica, pero hay que intentar aclarar minimamente lo que aquí se pretende estudiar, evitando cualquier tipo de ideologización o de tratamiento interesado. Debemos buscar una terminología racionalmente aceptable que represente el fundamento que se expone, toda vez que, como cita el profesor Perez-Luño "a medida que se va alargando el ámbito del uso del término derechos humanos, su significación se ha tornado más imprecisa. Ello ha determinado una pérdida gradual de su significación descriptiva de determinadas situaciones o exigencias político-jurídicas, en la misma medida en que su dimensión emocional ha ido ganando terreno. Esta situación ha conducido a que fuera empleada en la lucha ideológica para exteriorizar, justificar o agudizar ciertas actitudes, desde posturas en las que el término derechos humanos se ha utilizado con significación muy diversa". (3)

I.2. Fundamentación

En la fundamentación de los derechos humanos exigiese respuestas racionales capaces de buscar una posible comprensión del ser humano. Hoy en día, en virtud de la doctrina desarrollada a lo largo del tiempo, es posible encontrar muy diferentes respuestas sobre la fundamentación de los derechos humanos. A continuación se presentan resumidamente las más significativas:

I.2.1. Fundamentación iusnaturalista

I.2.2. Fundamentación historicista

I.2.3. Fundamentación positivista

I.2.4. Fundamentación dualista

I.2.5. Fundamentación ética

I.2.6. Otras corrientes.

I.2.1. Fundamentación iusnaturalista

Esta corriente de fundamentación considera los derechos humanos como derechos naturales, inherentes a todos los hombres y como derivados de la naturaleza humana en tanto tienen su origen en el propio hombre y le acompañan para siempre. Fundamenta los derechos humanos a partir de una visión metafísica y abstracta, identificando los derechos con valores superiores determinados por un orden trascendental y supra estatal. Es decir, son derechos que pertenecen al hombre por su condición humana y "no son concedidos por el Estado - porque les son precedentes - que, por eso mismo, el Estado, no puede y no debe ni suprimirlos ni, de ninguna manera, violarlos, porque su propia violación irá importar en la violación de la

personalidad humana". (4) Según el profesor Eusebio Fernandez la fundamentación iusnaturalista "es la que plantea más problemas teóricos de aceptación por parte de alguna de las más importantes corrientes contemporáneas de la Filosofía y Teoría del Derecho", toda vez que la misma se basa en la "creencia en el Derecho natural" (5).

Esta corriente de fundamentación tiene dos rasgos característicos, a saber: la distinción entre derecho natural y derecho positivo y la superioridad del derecho natural sobre el derecho positivo. Es complicada la clarificación de este tipo de fundamentación dada la imposibilidad de definir cuáles serían aquellos los derechos naturales derivados de la propia naturaleza humana que "ostenta la persona como reflejo subjetivo de un orden normativo natural", (6) cuya anterioridad y superioridad les hace prescindir del Derecho positivo para ser considerado como Derecho.

La "creencia" que tiene las personas de que sus derechos fundamentales son anteriores y que son independientes del derecho positivo, parece plenamente aceptable desde el punto de vista de la dignidad humana, en tanto en cuanto la misma no puede estar condicionada por otra teoría sobre el Derecho o sobre la Justicia.

La fundamentación iusnaturalista de los derechos fundamentales del hombre contempla dos tipos de Derecho

Natural que expresan "una distinción generalmente admitida entre Derecho natural ontológico y Derecho natural deontológico". (7) El Derecho natural ontológico se presenta como "ciencia del ser" del derecho, mientras el Derecho natural deontológico aparece como un conjunto de valores que determinan el carácter de obligación del Derecho, y que constituyen su medida.

El Derecho natural ontológico está corporificado en las teorías iusnaturalistas tradicionales; el iusnaturalismo escolástico medieval; el iusnaturalismo racional y, en la modernidad, por la corriente neotomista, mientras que el Derecho natural deontológico tiene su representación en la Filosofía del Derecho contemporáneo. La primera corriente correspondería a la "fundamentación iusnaturalista tradicional" y la segunda a la "fundamentación iusnaturalista atenuada". (8)

Merece ser destacada la contribución hecha a la historia de los derechos humanos por el pensamiento iusnaturalista de los filósofos de la edad antigua, los filósofos medievales, y el cristianismo. No se pueden olvidar las aportaciones de los juristas y teólogos españoles de los siglos XVI y XVII, entre ellos: Bartolomé de las Casas, Francisco de Victoria, Fernando Vazquez de Menchaca y Francisco Suárez.

No se puede prescindir de la contribución de la fundamentación iusnaturalista sea cual sea la concepción de los derechos humanos que se asume en tanto como dice el profesor N. Martínez Morán: - posición que se comparte - "el hombre es un ser histórico y que por tanto cuando hablamos de la naturaleza del hombre estamos refiriéndonos, no a una naturaleza pura y simplemente ontológica, anquilosada en el tiempo, petrificada, sino a una naturaleza histórica, dinámica lo que es perfectamente compatible con la afirmación de que los derechos fundamentales son universales, pues lo que ocurre es que un mismo derecho se manifiesta históricamente de formas diversas". (9).

El iusnaturalismo racionalista, que según el profesor Eusebio Fernandez abarca el iusnaturalismo ontológico, (10) ha ejercido una influencia decisiva en las ideas durante los siglos XVII y XVIII y sobre todo después de la segunda guerra mundial con el renacimiento del Derecho natural.

I.2.2. Fundamentación historicista

Deseosos de buscar una nueva concepción de los Derechos Humanos que no fuera el iusnaturalismo surgieron a finales del siglo XIX y principio del siglo XX autores que contestaban la teoría del Derecho natural y que se englobaban en corrientes llamados historicistas o relativistas. Para los historicistas la fundamentación de los derechos humanos no

tiene arraigo en la naturaleza humana, sino que se fundamenta en las variables históricas y relativas a cada contexto histórico y de acuerdo con el tipo de sociedad en que se vive.

Existen profundas diferencias entre éstas y las corrientes de la fundamentación iusnaturalista, puesto que las primeras no admiten ni la fundamentación de los derechos humanos basada en la naturaleza humana - Derechos naturales - ni la anterioridad y superioridad de los derechos naturales. Por lo contrario en lugar de derechos naturales, universales y absolutos plantean la existencia de derechos históricos, variables y relativos, que tienen su origen en la evolución de la sociedad.

Para los defensores de esta corriente "el concepto y formulación de los Derechos Humanos se ha ido decantando a través de la historia a partir del núcleo histórico más amplio de la humanidad entendida esta no en su apoyo sentimental, sino como un proceso de autoconciencia, mediante el cual se ha objetivado la esencia del hombre como un concepto unitario y abstracto". (11)

Decir que los derechos fundamentales se fundan "en las necesidades humanas y en las posibilidades de satisfacerlas dentro de una sociedad", (12) es negar, creo, todo un pensamiento racionalista que ha contribuido para la búsqueda de una conciencia crítica de los caminos de la naturaleza humana,

incluso para el surgimiento de nuevas teorías sobre los Derechos Humanos.

Es cierto que la descripción del desarrollo y evolución sobre los derechos humanos que hacen los historicistas aparece como un modelo explicativo, correcto y realista de la evolución de esos derechos, no obstante, no se puede, por lo mismo, negar ni olvidar lo que ha representado el iusnaturalismo racionalista, principalmente en los siglos XVII y XVIII.

El profesor Eusebio Fernandez hace dos precisiones muy importantes acerca de la fundamentación historicista: la primera de ellas responde a la pregunta de si es tan amplia la variabilidad histórica aplicada a todos los derechos. Y a ella responde que "La variabilidad es bastante cierta en el caso de los derechos civico-políticos, y en el caso de los derechos económico-sociales y culturales; pero, - se pregunta luego - ¿lo es igual en el caso de los derechos personales, como el derecho a la vida y a la integridad física y moral? En este último caso - continúa E. Fernandez - creo que nos encontramos ante un sustrato permanente, con variabilidad solo de matices". La segunda precisión se refiere a la consideración de los derechos humanos como satisfacción de necesidades humanas. Al respecto dice E. Fernandez, "Los derechos fundamentales concebidos así, como exigencias basadas en las necesidades humanas y en las posibilidades de satisfacerlas dentro de una

sociedad, pero también como derechos, es decir, valores integrados en normas jurídicas, deben reconocer y garantizar todo tipo de necesidades. Se pregunta luego, "¿es esto posible y como sería posible?, ¿es necesario llevar a cabo una elección entre necesidades más apremiantes y fundamentales y las menos?, ¿de acuerdo con qué valores se hará esta elección? Parece correcto y realista - agrega - contestar, generalmente, que es necesario efectuar esta elección y que los derechos humanos se referirán a las necesidades más importantes y relevantes para la vida humana". (13)

Una cosa es tener una "visión histórica" de los derechos humanos, la otra es hacer una "fundamentación historicista", pues en el primer sentido, toda corriente de fundamentación ha que tener en cuenta una visión histórica de los derechos a los que se refiere. Ello resulta lógico e incontestable.

I.2.3. Fundamentación positivista

La fundamentación positivista sostiene que los Derechos Humanos para ser "derechos" en el sentido estrictamente jurídico tienen que estar recogidos por el ordenamiento jurídico de un determinado Estado, es decir, han de estar constitucionalizados o positivados. Para esta corriente el único fundamento de los derechos humanos es el ordenamiento jurídico-positivo. No se puede hablar de derechos fundamentales

si no están establecidos y garantizados por las leyes concretas del Estado. De éste modo, son derechos humanos aquellos que están contenidos en las leyes vigentes y nada más. Así, esta concepción sostiene que los derechos humanos serían un producto que proviene de la fuerza del Estado a través de su proceso de legitimación y reconocimiento legislativo. La esencia de los derechos fundamentales, entonces, dependería de la aquiescencia del poder estatal.

Según el profesor Gregorio Peces-Barba "La afirmación de que los derechos fundamentales son los que decide la voluntad del poder, aquellos que sea cual sea su contenido se designen como derechos fundamentales por una norma jurídica regularmente establecida, de acuerdo con el sistema de competencias en un ordenamiento jurídico, es también, a mi juicio, inexacta y sería la otra cara de la moneda iusnaturalista". (14) A esa corriente el profesor Peces-Barba la llamó "voluntarista-positivista". Una concepción que se fundamenta única y exclusivamente en la voluntad del poder para considerar o no un derecho fundamental como Derecho, independiente de su contenido.

I.2.4. Fundamentación dualista

Es una concepción defendida por el profesor Gregorio Peces-Barba para superar las contradicciones presentadas según el citado profesor por las fundamentaciones iusnaturalistas y

positivistas. Estas dos fundamentaciones, "por sus extremosidades respectivas han confundido y llenado de pasión este debate a lo largo de la historia. Y esa es quizá la mayor dificultad, o al menos una de las mayores, a la hora de construir el concepto: el carácter antagónico y excluyente con que han presentado el problema esos modelos".(15)

Para el profesor Gregorio Peces-Barba, "los derechos fundamentales no son Derechos si son sólo valores, sin incorporar al Derecho positivo como pretenden los iusnaturalistas, ni es tampoco derecho fundamental cualquier Derecho válido, sea cual sea su contenido, como pretenden los positivistas voluntaristas". (16)

Emplea el profesor Peces-Barba el término "voluntarista" por entender que se trata de una corriente de positivistas que considera derechos fundamentales todo y cualquier derecho sin tener en consideración la Filosofía de los derechos fundamentales y añade que "la concepción dualista sostiene la autonomía de la realidad de los valores de los derechos fundamentales, que deben por consiguiente ser estudiados en el primer nivel, es decir, como filosofía de los derechos fundamentales". Añade luego, que lo que sobre todo interesa es "análisis de los factores sociales que han influenciado en su génesis y las corrientes de pensamiento que han contribuido a articular su actual sentido". Eso lleva - añade - a un análisis histórico de ese primer nivel desde dos

perspectivas: desde la perspectiva de la situación económica, social, cultural y política de cada momento y desde la perspectiva del pensamiento político y filosófico, que influido por ese marco socio-económico, cultural y político, crea la filosofía de los derechos fundamentales. (17)

La concepción dualista, según el profesor Eusebio Fernandez implica "el estudio de los derechos fundamentales desde la perspectiva de dos niveles: el nivel axiológico o Filosofía de los derechos fundamentales y el nivel jurídico o Derecho de los derechos fundamentales, que vendría dado por la inserción de esos valores en normas jurídicas en el Derecho positivo, y la configuración de los derechos fundamentales como derechos públicos subjetivos". (18)

Se ve en esta concepción el tránsito de los derechos humanos como valores a los derechos humanos como "derechos", desde el punto de vista jurídico. O sea el paso del tratamiento los derechos humanos dentro de la Filosofía de los Derechos Humanos a su tratamiento del Derecho positivo, a cuyo efecto, para el profesor Peces-Barba, creador de la concepción dualista, es necesario cumplir los siguientes requisitos:

1. Que una norma jurídica positiva los reconozca (normalmente con rango constitucional o de ley ordinaria).

2. Que de dicha norma derive la posibilidad para los sujetos de derecho de atribuirse como facultad, como derecho subjetivo, ese derecho fundamental.

3. Que las infracciones de esas normas, y, por lo tanto, el desconocimiento de los derechos subjetivos que derivan de ellas legitime a los titulares ofendidos para pretender de los tribunales de justicia el restablecimiento de la situación del derecho subjetivo, utilizando si fuese necesario para ello, el aparato coactivo del Estado.

Solamente en este caso - según el autor - estaremos ante la plenitud de un derecho fundamental. (19)

I.2.5. Fundamentación ética

Una contribución de la más alta importancia a la fundamentación de los derechos fundamentales ha aparecido en esta década bajo la inspiración del profesor Eusebio Fernandez. Tratase de la fundamentación que concibe los derechos humanos como derechos morales.

Para el brillante profesor Eusebio Fernandez "ni la fundamentación iusnaturalista (por la cual el fundamento de los derechos humanos estaría en el Derecho natural, deducido de una naturaleza humana supuestamente universal e inmutable) ni la fundamentación historicista (cuyo fundamento estaría en la

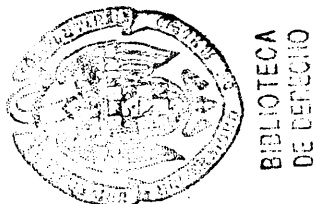
historia, cambiante y variable) responden coherentemente a esa pregunta sobre el fundamento. Creo que la fundamentación ética, que paso a exponer - dice el profesor Eusebio Fernandez - lo hace de forma más satisfactoria. (20)

El profesor Eusebio Fernandez presenta la concepción ética con los siguientes argumentos:

"La fundamentación ética o axiológica de los derechos humanos fundamentales parte de la tesis de que el origen y fundamento de estos derechos nunca puede ser jurídico, sino previo a lo jurídico. El Derecho (me refiero siempre al Derecho positivo) no crea los derechos humanos. Su notable labor, sin la cual el concepto de derechos humanos no tendrá efectividad, está en reconocerlos, convertirlos en normas jurídicas y garantizarlos también jurídicamente.

Si toda norma, tanto moral como jurídica, "presupone" una serie de valores acerca de los fines de la vida individual, social y política, esto es aún más evidente, me parece, cuando tratamos de justificar racionalmente los derechos humanos fundamentales.

Por tanto, una vez supuesta la idea anterior, entiendo por fundamentación ética o axiológica de los derechos humanos la idea de que ese fundamento ético axiológico o valorativo, en torno a exigencias que consideramos imprescindibles como condiciones inexcusables de una vida



digna, es decir, de exigencias derivadas de la idea de dignidad humana.

Esta creo que es la razón de ser de todos los precedentes históricos del concepto moderno de los derechos naturales, de las declaraciones de derechos del siglo XVIII y de las declaraciones, pactos internacionales y textos contemporáneos, en general, referentes a los derechos humanos.

Para esta fundamentación y consiguiente concepción que defiendo, - así se expresa profesor Eusebio Fernandez - los derechos humanos aparecen como morales, es decir, como exigencias éticas y derechos que los seres humanos tienen por el hecho de ser hombres y, por tanto, con un derecho igual a su reconocimiento, protección y garantía por parte del poder político y el Derecho; Derecho igual, obviamente basado en la propiedad común a todos ellos de ser considerados seres humanos, y Derecho igual de humanidad independiente de cualquier contingencia histórica o cultural, característica física o intelectual, poder político o clase social.

Quizás el término "derechos morales" que utilizo para definir los derechos humanos fundamentales levante alguna suspicacia. Voy a explicarlo:

Con el término "derechos morales" pretendo describir la síntesis entre los derechos humanos entendidos

paralelamente como derechos. El calificativo "morales" aplicado a "derechos" representa tanto la idea de fundamentación ética como una limitación en el número y contenido de los derechos que podemos comprender dentro del concepto de los derechos humanos. Según esto, solamente los derechos morales, o lo que equivale a decir los derechos que tienen que ver más estrechamente con la idea de dignidad humana, pueden ser considerados como derechos fundamentales. El substantivo "derechos" expresa la idea de que los derechos humanos estén a caballo entre las exigencias éticas y los derechos positivos, pero también la necesidad y pretensión de que, para su "auténtica realización", los derechos humanos estén incorporados en el ordenamiento jurídico, es decir, que a cada derecho humano como derecho moral le corresponda paralelamente un derecho en el sentido estrictamente jurídico del término.

En definitiva, la fundamentación ética de los derechos humanos fundamentales se basa en la consideración de esos derechos como derechos morales, entendiendo por derechos morales el resultado de la doble vertiente ética y jurídica. Creo que esta fundamentación de los derechos humanos nos permite salir del círculo vicioso de la tradicional polémica entre iusnaturalismo y positivismo. En relación con la fundamentación iusnaturalista, porque no se queda en la simple defensa de la existencia de los derechos humanos, como derechos naturales, independientemente de su incorporación al Derecho positivo, sino que al mismo tiempo que insiste en su especial

importancia e inalienabilidad propugna la exigencia de reconocimiento, protección y garantías jurídicas plenas. En relación con el positivismo jurídico, porque defiende la existencia de los derechos humanos aún en el caso de que estos no se hallen incorporados al ordenamiento jurídico (en este supuesto, su existencia es parcial e incompleta, pero también es cierto que, si no aceptar esa existencia moral previa, no es posible ni criticar a cualquier ordenamiento jurídico, porque no los reconoce ni garantiza, ni defiende la necesidad de su incorporación al Derecho positivo)". (21)

Guardando una estrecha relación con lo que arriba ha afirmado profesor Eusebio Fernandez, así se expresa el renombrado profesor Carlos Santiago Nino: "la existencia de los derechos individuales, en tanto derechos morales, no está condicionada a su reconocimiento a través de ciertas normas jurídicas, ya que ellos incluyen precisamente pretensiones de que se establezca normas jurídicas prescribiendo medios de protección de los derechos en cuestión". (22)

I.2.6. Otras corrientes

Hay quien se niega a dar validez y sentido en la actualidad al concepto de los derechos fundamentales y plantea con su escepticismo su rechazo a la noción mismo de los derechos humanos. A esta corriente el profesor Peces-Barba la llamó "modelo escéptico", y el Profesor João Ricardo W.

Dornelles "concepción crítico materialista". La misma, cualquier sea su denominación surgió como crítica al pensamiento liberal, y entiende que los derechos humanos no pasan de ser una simple expresión formal de un proceso político social e ideológico producto de las luchas sociales en el momento de la ascensión de la burguesía al poder político, una concepción inspirada en las obras filosóficas de Karl Marx. (23)

Otros, se preocupan únicamente por las técnicas positivistas, especialmente procesales. Es decir, se evocan sólo al análisis en el campo internacional de los modestos procedimientos supranacionales de derechos fundamentales, demostrando así desinterés por la teoría general y por la Filosofía del Derecho. Ellos forman la llamada corriente o "modelo pragmático". (24)

I.3. Conceptos

Como ya hemos visto anteriormente la significación heterogenea, polémica de los derechos humanos ha contribuido - en términos expresados por el profesor Antonio Enrique Perez-Luño - para que el problema sea "un paradigma de equivocidad". A esa vaguedad conceptual de los derechos humanos se ha referido Norberto Bobbio, para quién en la mayor parte de las ocasiones esta expresión - se refiera a "derechos humanos" - o no es realmente definida, o lo es en término poco

satisfactorio. Siguiendo el planteamiento del profesor Norberto Bobbio, el profesor Perez-Luño (25) distingue tres tipos de definiciones de los derechos humanos, a saber:

I.3.1 - Tautológicas

Son las definiciones que no aportan ningún elemento nuevo que permita caracterizar tales derechos. Por ejemplo la definición "los derechos del hombre son los que le corresponden al hombre por el hecho de ser hombre".

I.3.2 - Formales

Estas no especifican el contenido de los derechos humanos, limitándose a alguna indicación sobre su estatuto deseado o propuesto. Así: "los derechos del hombre son aquellos que pertenecen o deben pertenecer a todos los hombres, y de los que ningún hombre puede ser privado".

I.3.3 - Teleológicas

Las definiciones teleológicas apelan a ciertos valores últimos susceptibles de diversas interpretaciones. Veamos: "los derechos del hombre son aquellos imprescindibles para el perfeccionamiento de la persona humana, para el progreso social, o para el desarrollo de la civilización".

Los conceptos dados a los derechos humanos están propiciados por la consideración de los límites dentro de los cuales esta expresión puede tener un significado preciso. Como podremos observar más adelante todos los conceptos guardan respecto a los derechos humanos una proximidad significativa. Algunas de estas definiciones son:

A) Derechos naturales

Aquellos que derivan de la propia naturaleza humana y que se fundan única y exclusivamente en la naturaleza humana, no debiendo su origen, por tanto, a la voluntad normativa de ninguna autoridad. Esos derechos corresponden a la naturaleza racional y social del hombre y de ahí se basa la fundamentación iusnaturalista.

B) Derechos innatos u originarios

Derechos que nacen con el hombre, sin requerir ninguna otra condición, es una contraposición a los derechos adquiridos o derivados que para existir concretamente, han menester de un hecho político.

C) Derechos individuales

Una terminología empleada en el período en que los derechos humanos se identificaban con el reconocimiento de

determinadas libertades conectadas con la autonomía de los individuos. Como dice Pablo Lucas Verdú, "la expresión derechos individuales es poco correcta, no solo porque la sociabilidad es una dimensión intrínseca del hombre, como lo es la racionalidad, sino, a mayor abundamiento, en la época actual, transida de exigencias sociales". (26)

D) Derechos del hombre y del ciudadano

Ha existido en una época en que era necesario distinguir los derechos del hombre y los derechos del ciudadano. El hombre dentro de esta concepción tenía necesidades diversas de sí defender frente al poder del Estado como individuo y como ciudadano.

E) Derechos del ciudadano y del trabajador

Fue una ampliación de la concepción anteriormente citada, dada para acompañar en los tiempos actuales las conquistas sociales de los trabajadores.

F) Libertades fundamentales

Aparecen muchas veces esta expresión en algunas constituciones y documentos de las Naciones Unidas y también en la "Convención Europea para la Protección de los Derechos del

Hombre y de las Libertades Fundamentales". Aplicase a los clásicos derechos civiles y políticos.

G) Derechos subjetivos

Es el derecho concebido como atributo jurídico individual, como poder concedido a la voluntad de los particulares, como "facultas agendi". Fue perfectamente conocido por el Derecho romano y por las escuelas filosófico-jurídicas tradicionales. (27) Esta denominación de Derechos subjetivos corresponde al siglo XIX.

Los derechos subjetivos son la expresión de todos los atributos de la personalidad y están directamente relacionados con las facultades de autodeterminación del individuo. Son aquellos "en que el sujeto se encuentra en relaciones de coordinación y en que predomina el sentido de libertad sobre el de función." (28)

H) Derechos públicos subjetivos

Es el Derecho público subjetivo una moderna figura jurídica introducida como consecuencia de la concepción de Estado de Derecho, que obliga a considerar como relaciones jurídicas las relaciones entre el Estado y los particulares. Implica una relación de subordinación entre el Estado y sus súbditos, en la que puede ser sujeto el Estado o el ciudadano.

Esta concepción va acompañada de un fuerte sentido formalista y positivista. (29)

Subrayamos que el tránsito del Estado liberal al Estado Social de Derecho ha determinado un progresivo abandono de esta concepción, porque era un producto de la ideología individualista liberal en contra de la noción más amplia de los derechos humanos.

I) Derechos de la personalidad

Mucho se ha escrito sobre el Derecho de la personalidad, pero no cabe duda que ese concepto es más reducido que cualquier otro definido para los derechos humanos. Los derechos de la personalidad se ejercitan sobre la propia persona y sobre determinadas cualidades o atributos, físicos o morales, de la persona humana. Su teoría pertenece hoy al Derecho privado, requiriendo para tanto la protección civil.

No se puede negar los puntos de coincidencia entre los derechos humanos de una forma general y los derechos de la personalidad. Unos y otros pueden ser considerados como derechos naturales, ya que los derechos de la personalidad representan también atributos que corresponden a la persona por su misma naturaleza y están enraizados en la propia condición del ser humano.

J) Derechos fundamentales

Tal expresión parece la más correcta, comprensiva y precisa para conceptuar los derechos humanos. Se puede entender por derechos fundamentales, los derechos esenciales del hombre e indispensables para la calificación de su personalidad, que pasan de las abstracciones teóricas al campo de la efectividad práctica en todos los sentidos de la realización humana. Según el profesor Castán Tobeñas "los derechos humanos, en efecto, considerados en su significación más propia, como elemento de un complejo jurídico, son, a la vez, fundamentales por cuanto sirven de fundamento a otros más particulares, derivados o subordinados a ellos, y esenciales en cuanto son derechos permanentes e invariables, inherentes al hombre, a todos los hombres como tales". (30)

Este término aparece en Francia en 1770 en el movimiento político y cultural que condujo a la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789. De ahí alcanzó especial relieve en Alemania cuando se articuló un sistema de relaciones entre el individuo y el Estado, como fundamento de todo el orden jurídico-político, formándose una doctrina en la cual los derechos fundamentales son aquellos derechos humanos positivados en las constituciones estatales.

Ahora bien, los Derechos fundamentales posee una ambivalencia, pues son tanto resultante de las exigencias de

la Filosofía de los Derechos humanos como exigen su plasmación positiva en el Derecho positivo.

Sin embargo, entendemos que la denominación "Derechos Humanos" es la más amplia, toda vez que como dijo el profesor Castán Tobeñas "todos los derechos son humanos" (31) o por lo menos deberían ser así considerados. No obstante, la expresión "Derechos Fundamentales" encierra en su contenido la esencia de los derechos humanos.

I.4. Clasificación

Para empezar a escribir sobre este tema tan vasto y controvertido como todo y cualquier asunto de Derechos Humanos parece de extrema claridad las afirmaciones hechas sobre la idea de dignidad por el profesor Eusebio Fernandez, las que se transcriben para una mejor comprensión de las varias clasificaciones que luego veremos. Así comenta el referido profesor: "De la idea de dignidad humana se derivan unos valores que han de fundamentar los distintos derechos humanos. Estos valores son la seguridad, la libertad y la igualdad. El valor "seguridad" fundamenta los derechos personales y de seguridad individual y jurídica, el valor "libertad" fundamenta los "derechos cívico-políticos" y finalmente, el valor "igualdad" fundamenta los derechos económico-sociales y culturales". (32) Veamos esto más detenidamente:

A) Los derechos personales y derechos de seguridad, son los más estrechamente enlazados con la idea de dignidad humana y expresan derechos de la persona considerada como individuo autónomo, libre y responsable. Sus contenidos son, como ha apuntado José Castán Tobeñas, una "derivación de aquél derecho del hombre verdaderamente primario y básico, que es el derecho a que sea reconocida y protegida su personalidad".

Me refiero aquí a los derechos a la vida y a la integridad física, a la libertad de conciencia y de pensamiento, al derecho al honor y a la fama, a las garantías procesales y a la legalidad de las penas entre otros de semejantes condición y naturaleza.

B) Del valor libertad se deducen, y encuentran en él su fundamento, los derechos de libertad o derechos de la persona como ciudadano y miembro activo de la sociedad política o Estado. Estos derechos tienen su núcleo, con palabras de H.L.A. Hart, en "el derecho igual de todos los hombres a ser libres" e incluyen dos aspectos de la libertad que tradicionalmente se han denominado libertad negativa y libertad positiva.

Se trataría, por ejemplo, de los derechos a la libertad de expresión, de reunión y asociación y en general del derecho a la participación política.

C) Del valor de igualdad se derivan los derechos de igualdad, fundamentalmente los derechos económico-sociales y culturales, es decir, derechos que amplían la idea de igualdad formal, dándole un nuevo sentido que la convierta, además en igualdad sustancial. Se trataría de derechos de la persona como trabajador y creador de su entorno cultural.

La idea de igualdad, sin adjetivos, ha sido citada repetidamente en las declaraciones históricas sobre derechos humanos y sigue siendo invocada en textos contemporáneos. Pero generalmente suele ser mencionada de forma imprecisa, vaga y ambigua; por ello creo conveniente insistir, en honor a la claridad de lo que con este término se quiera significar, que deben precisar dos puntos:

1. Que la defensa de la idea de igualdad como objetivo y valor moral no ignora el hecho comprobado de la existencia de seres desiguales en características biológicas, intelectuales y morales", y continúa el profesor Eusebio Fernandez ...

2. Que existen distintos significados del término igualdad ..., pero que generalmente no se expresan abiertamente y esto puede ser una fuente de errores. Estos distintos significados hacen referencia a las ideas de igualdad moral, igualdad ante la ley, igualdad de derechos cívico-políticos, igualdad de oportunidades e igualdad económica.

Aún añade el citado profesor que "los derechos económicos, sociales y culturales deducidos del valor de igualdad entendidos de esta manera sería, por ejemplo, el derecho al trabajo, a la seguridad social y a una remuneración justa, el derecho a la protección de la salud, los derechos de los consumidores y los derechos a la cultura y a la educación". (33)

El criterio subjetivo y las características de cada derecho fundamental establecen el tipo de clasificación que debe hacer de esos derechos. En el criterio subjetivo la clasificación se hace atendiendo primordialmente al carácter del sujeto que se constituye en portador o titular de los diversos tipos de derechos. En las características objetivas en que se desarrollan los derechos fundamentales encuentra su criterio o peculiar referencia en el propio carácter de los derechos que se clasifican, en su contenido.

Partiendo del carácter o contenido peculiar de los derechos fundamentales se puede señalar tres grupos de derechos: - el de los que reconocen y tutelan la integridad física y moral del individuo; - el de los que garantizan su libre actuación; - y el de los que promueven una ordenación justa de relaciones sociales que asegure el ejercicio de los derechos de integridad y de libertad. (34)

Las transformaciones que sufren la sociedad con el desplazamiento, por un proceso evolutivo de Estado liberal al Estado Social de Derecho, hacen con que se va adquirir conciencia de los derechos fundamentales asumiendo esos derechos carácter histórico hasta el punto de existir vasta literatura sobre estas transformaciones. De ahí que en el entendido del profesor Perez-Luño ha surgido una "concepción generacional" de los derechos fundamentales que se presenta de la siguiente forma: a) una primera fase o generación de los derechos fundamentales, que corresponde a las libertades de signo individual; b) unos derechos de la segunda generación que se concreta en los sucesivos derechos económicos, sociales y culturales; y c) los denominados derechos de la tercera generación vinculados a temas tales como el derecho a la paz, a la calidad de vida o a la libertad informática". (35) Según el emérito profesor Perez-Luño todos los derechos se presentan como respuesta al fenómeno de "contaminación de las libertades". (36)

Los derechos humanos en su primer fase generacional son la expresión de las luchas revolucionarias, con base en la filosofía de la ilustración y en la tradición liberal, contra el despotismo de los antiguos Estados absolutistas, y que se materializaron como derechos civiles y políticos o derechos individuales atribuidos a la condición natural del individuo, son por lo tanto la expresión formal de necesidades individuales que requieren la abstención del Estado para su pleno

ejercicio, son los derechos de la afirmación de la libertad. La segunda generación de los derechos humanos es la fase de la búsqueda de la igualdad, podemos decir que la fase de la colectivización de los derechos, con idea de socialización de los derechos, aparecen los términos de "derechos sociales", "derechos económicos" y derechos culturales, ya no se trata solamente de reconocer los derechos, más también de garantizarlos con mecanismos jurídicos introducidos en las Constituciones de los Estados modernos, y en los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos frutos de esa fase. La tercera generación de los derechos humanos, considerada la fase de los derechos de los pueblos o de los derechos de solidaridad, son el conjunto de los derechos individuales y colectivos que interesan a toda la humanidad. Podemos destacar como derechos de la tercera generación: el derecho a la paz; el derecho al desarrollo de los pueblos; el derecho a la libre y autodeterminación de los pueblos; el derecho a un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado, y el derecho a la utilización del patrimonio común de la humanidad. (37)

Por su parte, el profesor Joaquín Ruiz-Gimenez Cortés (38) presenta una sistematización de los derechos humanos de la siguiente forma: 1º - Derechos fundamentales de la persona en sí misma, (es decir, con independencia, siempre relativa, de los grupos sociales a que pertenezca). 2º - Derechos de la persona como ser social o comunitario "in genere". 3º - Derechos de la persona como ser familiar y

doméstico. 4* - Derechos de la persona humana como ser trabajador. 5* - Derechos de la persona humana como ser político. 6* - Derechos del hombre como ciudadano del mundo. 7* Derechos de la persona humana como ser religioso.

Basado en la relación contenida en la Declaración Universal de Derechos Humanos el profesor Gonzalez Campos (39), a su vez, hace la siguiente clasificación de los derechos humanos: 1) Derechos inherentes a la existencia misma de la persona. 2) Derechos relativos a la protección y seguridad de la persona. 3) Derechos relativos a la vida política. 4) Derechos de contenidos económico-social y 5) Derechos relacionados con la vida social y familiar de la persona.

De otro lado, el profesor Luis Sanchez Agesta (40), atendiendo a la naturaleza del bien protegido por los derechos humanos y a la diversa naturaleza de su realización y garantía jurídica, clasifica los derechos humanos en cuatro grupos: 1) Derechos civiles, que protegen a la vida individual, que son: a) los derechos de la intimidad personal; b) los derechos de seguridad personal; c) los derechos de seguridad económica; d) los derechos de libertad económica. 2) Derechos públicos: que son los derechos de intervención en la formación de la opinión pública. 3) Derechos políticos: que son los derechos de participación en la vida pública. 4) Derechos sociales que se presentan en dos subgrupos: a) derechos de desenvolvimiento personal, y b) derechos sociales estrictos, que implican una

prestación positiva del Estado, inspirado en los principios de justicia y seguridad social.

Desde el ángulo de la Filosofía del Derecho, el profesor Sanchez de la Torre (41) clasifica los derechos humanos en dos especies: 1) los llamados derechos de la intimidad, que positivamente han de estar contenidos en el ordenamiento jurídico como parte integrante de la vida privada del individuo, y 2) los derechos derivados de la pertenencia de un individuo o grupo a la colectividad amplia, que se traducen en la libertad de poder establecer y sin discriminación alguna, toda clase de responsabilidades públicas según las condiciones en que participa cualquiera de los demás individuos o grupos.

El profesor José Castán Tobéñas, (42) por su parte, nos presenta la clasificación hecha por el iusnaturalista J. Messner a la luz de la doctrina de los principios del Derecho natural: a) la libertad de conciencia; b) la libertad de practicar la religión; c) el derecho a la propia vida; d) el derecho a la inviolabilidad de la persona; e) el derecho al matrimonio y a la familia; f) el derecho a la educación de los propios hijos; g) el derecho a la adquisición de lo necesario para el sustento; h) el derecho de propiedad; i) el derecho al asilo (por razones políticas); k) el derecho al desarrollo de la personalidad; l) el derecho de libre expresión (en la palabra hablada y escrita y, en especial, en

la prensa, la ciencia, la literatura y el arte); m) el derecho de libre asociación, y n) el derecho a participar en orden y administración de la comunidad.

Sin ánimo de agotar el tema , el profesor Elías Díaz, (43) presenta una clasificación bastante criteriosa y de acuerdo con el Estado Social de Derecho, a saber:

- derecho a la vida y a la integridad física;
- respecto a la dignidad moral de la persona;
- derecho a la libertad de pensamiento y de expresión;
- derecho a una veraz información;
- derecho a la libertad religiosa y de creencias, con manifestación externa de culto;
- derecho a la libertad de reunión y asociación (partidos políticos, sindicatos);
- derecho a la libertad de circulación y residencia e inviolabilidad del domicilio, correspondencia, etc.;

- derechos económicos y sociales, tendentes a una efectiva nivelación e igualdad sócio-económica (derecho al trabajo, seguridad social, huelga, etc.);

- derechos políticos tendentes a la institucionalización de la democracia y del Estado de Derecho (intervención y fiscalización efectivas en las funciones de gobierno, elecciones libres, etc.);

- derecho efectivo de todos los hombres a una participación igualitaria en los rendimientos de la propiedad, que tenderá así a adoptar formas de carácter colectivo;

- derecho de igualdad ante la ley;

- derecho a la seguridad y garantía en la administración de justicia, concebida ésta independientemente de toda instancia política (derecho a no ser arbitrariamente detenido, derecho del detenido a no ser objeto de malos trato, derecho a un proceso dotado de las suficientes garantías, derecho a contar con recursos jurídicos adecuados).

Uno de los más prestigiosos defensores de los derechos fundamentales, autor de la concepción dualista, profesor Gregorio Peces-Barba, (44) hace una clasificación, distribuida en cinco grupos:

- 1) Derechos personalísimos;
- 2) Derechos económicos, sociales y culturales;
- 3) Derechos de sociedad, comunicación y participación
- 4) Derechos cívico-políticos, y
- 5) Derechos relativos a la seguridad jurídica.

1) Los derechos personalísimos comprenden: - el derecho a la vida y a la integridad física; - derecho a la libertad de pensamiento y de conciencia; - derecho al honor y a la fama; - derecho a la libertad de expresión; - derecho a la objeción de conciencia.

2) Los derechos económicos, sociales y culturales comprenden: - el derecho al trabajo; - derechos sobre las condiciones de trabajo; - derecho a la seguridad social; - derecho a la huelga; - derecho a la libre sindicación; - derecho a la protección de la salud; - derecho a la cultura; - derecho al medio ambiente; - derecho a la vivienda; - derecho de los consumidores y usuarios a la seguridad, la salud y la defensa de sus intereses económicos; - derecho de autor.

3) Los derechos de sociedad, de comunicación y de participación son más amplios que los estrictamente políticos y se destacan: - derecho de reunión; - derecho de asociación; - derecho a la información; - derecho de asilo; - derecho a la nacionalidad; - libertad de residencia y de circulación; -

inviolabilidad del domicilio y de las comunicaciones; - derecho a la no discriminación.

4) Los derechos cívico-políticos son aquellos que favorecen o hacen posible la democracia. Son: - derecho a la participación política; - derecho de petición; - derecho de participar en el sostenimiento de los gastos públicos.

5) Los derechos de seguridad jurídicas que son: - derecho a la jurisdicción y a las garantías procesales, y el derecho a la legalidad de las penas.

Además, se considera útil y oportuno presentar el exhaustivo esquema de clasificación de los derechos humanos hecha por el profesor Benito de Castro Cid: (45)

"1. Derechos que reconoce y tutelan la integridad física y moral del hombre:

1.1. Derechos para la subsistencia y la integridad física:

1.1.1. Derechos que protegen la vida y la salud de forma directa:

-Derecho a la vida.

-Derecho a un nivel de vida adecuado.

-Derecho a la integridad física.

-Derecho a la salud y a la

protección de la salud.

-Derecho a la seguridad social y a la asistencia pública.

-Derecho a beneficiarse de servicios sociales adecuados.

1.1.2. Derechos que protegen la vida y la salud de forma indirecta:

-Derecho a la propiedad.

-Derecho a la herencia.

-Derecho al trabajo.

-Derecho a la seguridad y higiene en el trabajo.

-Derecho a aviso previo en caso de cese.

-Derecho a la protección contra el desempleo.

-Derecho a una jornada laboral limitada.

-Derecho al descanso diario y semanal.

-Derecho a vacaciones anuales.

1.2. Derechos para la subsistencia e integridad moral:

- Derecho al nombre.

- Derecho a la nacionalidad.

- Derecho al reconocimiento de la persona-

dad jurídica.

- Derecho al desarrollo de la personalidad.
- Derecho a la educación.
- Derecho a la formación y orientación

profesional.

la propia cultura.

- Derecho a la conservación y desarrollo de
- Derecho a participar en la vida cultural.
- Derecho a la integridad moral.
- Derecho al honor.
- Derecho a la rectificación.
- Derecho al respecto.
- Derecho a la intimidad.
- Derecho a la inviolabilidad de domicilio.
- Derecho a la inviolabilidad de la corres-

pondencia.

2. Derechos que reconocen y tutelan la libre actuación del hombre:

2.1. Derecho general de libertad.

2.2. Derechos de libertad física:

- Derecho a no ser sometido a esclavitud.
- Derecho a no ser arbitrariamente detenido o

encarcelado.

- Derecho a circular libremente en territorio nacional o internacional.

- Derecho a elegir residencia.

2.3. Derechos de libertad espiritual-razional:

- 2.3.1. En el plano privativo individual:
- Derecho a la libertad religiosa.
 - Derecho a la libertad de creencia y conciencia.
 - Derecho a la libertad de pensamiento.
- 2.3.2. En el plano comunitario:
- Derecho a la libertad de opinión y expresión.
 - Derecho a la libertad de comunicación.
 - Derecho a la libertad de información y de prensa.
 - Derecho a la libertad de idioma.
 - Derecho a la libertad de elección cultural.
 - Derecho a la libertad de educar a los hijos.
 - Derecho a la libertad de enseñanza.
 - Derecho a la libertad de culto.
- 2.4. Derechos de libertad propiamente social:
- Derecho de los pueblos a la libre determinación del desarrollo social.
 - Derecho a la libertad de portar armas.
 - Derecho a la libertad de matrimonio.
 - Derecho a la libertad de reunión.
 - Derecho a la libertad de asociación.
- 2.5. Derechos de libertad económica:

- Derecho a la libertad de comercio y de industria.

- Derecho a ejercer cualquier actividad lucrativa.

- Derecho de los pueblos a promover libremente su desarrollo económico.

2.6. Derechos de libertad política:

- Derecho de libre determinación.

- Derecho de resistencia.

- Derecho a intervenir en el gobierno del país.

- Derecho a votar y ser votado.

- Derecho al tiempo libre para el ejercicio de los derechos políticos.

- Derecho de petición.

- Derecho de defender al país.

2.7. Derechos de libertad laboral:

- Derecho a la libertad de trabajo.

- Derecho al ocio.

- Derecho de negociación colectiva.

- Derecho a colaborar en la gestión.

- Derecho de huelga.

3. Derechos que promueven un orden social que garantice el ejercicio de los derechos de integridad y libertad:

3.1. Derechos que garantizan un orden social justo en que se hace posible el disfrute de todos los derechos:

- Derecho a que establezca un orden social e internacional en el que los derechos humanos se hagan plenamente efectivos.

- Derecho a la igualdad.
- Derecho a la seguridad jurídica.
- Derecho a condiciones equitativas de trabajo.

- Derecho a participar en los beneficios.
- Derecho a escalafón.
- Derecho a la reinstalación o a indemnización.

- Derecho a vacaciones retribuidas.

3.2. Derechos que aseguran la existencia de condiciones de disfrute de los derechos de integridad física o moral:

- Derecho a una retribución justa y suficiente.

- Derecho a un aviso previo en caso de cese.

3.3. Derechos que aseguran la existencia de condiciones de disfrute de los derechos de libertad:

- Derecho a la seguridad.
- Derecho a no ser detenido o arrestado si no es conforme a derecho.

3.4. Derechos que establecen garantías simultáneamente válidas para la integridad físico-moral y para la libertad:

- Derecho a la protección social, jurídica y

económica.

- Derecho de asilo.
- Derecho a ser juzgado.
- Derecho a no ser condenado sin defensa.

Finalmente, a partir de las tres categorías de los derechos fundamentales presentadas por el profesor L. J. MacFarlane, que agrupa esos derechos en primarios, civiles y políticos y económicos, el profesor Julio Cesar Tadeu Barbosa (46) hace la siguiente clasificación:

A - Derechos Primarios: son aquellos inherentes a la propia concepción de sociedad y de los que nadie puede ser despojado. Se refieren a la protección que la sociedad da a sus miembros:

- 1) el derecho a la vida (o el derecho a no ser muerto).
- 2) el derecho de no ser esclavizado o de no se sujetar a trabajos forzados.
- 3) el derecho de no ser arbitrariamente privado de alimentación, de la posibilidad de protegerse y de la propiedad.
- 4) el derecho de no ser arbitrariamente privado de la libertad de movimientos y de residencia.
- 5) el derecho de no ser privado del ejercicio de la libertad de creencia.
- 6) el derecho de cada uno a no ser sujeto a

intervención en su libertad y seguridad.

7) el derecho de no ser sometido a tortura o apresado de modo inhumano.

B - Derechos Civiles: son los derechos inherentes a la sociedad, y que dicen con el modo de vida y las formas de gobierno:

1) el derecho a la libertad de expresión y publicación.

2) el derecho a la libertad de reunión.

3) el derecho a la libertad de asociación.

4) el derecho de votar y de ser votado.

5) el derecho a la huelga.

C - Derechos Económicos y Sociales: son los que se refieren a la responsabilidad de la sociedad, en el sentido de proveer a sus miembros la satisfacción de sus necesidades básicas:

1) el derecho a la adecuada alimentación, vestuario y vivienda.

2) el derecho a la educación.

3) el derecho a cuidados médicos.

4) el derecho a la protección en caso de desempleo, enfermedad, viudez y vejez. y

5) el derecho al trabajo, al descanso y al ocio.

Es evidente que no es fácil enumerar, en el plano teórico, los derechos fundamentales por la distinción que se presenta en cada época, por su complejidad y por su

configuración en cada uno de los ordenamientos jurídicos. Los derechos fundamentales han sido objeto de una considerable evolución por su reconocimiento y garantía en los textos constitucional y en las convenciones y declaraciones supranacionales. Por ello, el profesor Joaquín Ruiz-Gimenez, (47) con respecto a la concreción de los derechos humanos, hace el siguiente comentario: "con la mutación de las circunstancias históricas aparecen (o por lo menos acentúan su perfil y su significación) determinadas aspiraciones y exigencias del hombre que para esa epifanía han necesitado la maduración de un cierto clima natural o, si prefiere, de un nivel ético-social más alto y más abierto a la plenitud de la existencia".

Citas y Notas:

- (1) SANTIAGO NINO, Carlos: **Ética y Derechos Humanos**. Editorial Paidós, Buenos Aires, 1984, pág. 43.
- (2) TRUYOL Y SERRA, Antonio: **Los Derechos Humanos**, Editorial Tecnos, Madrid, 1984, págs. 11.
- (3) PEREZ-LUÑO, Antonio Enrique: **Los Derechos Humanos: Significación, estatuto jurídico y sistema** (obra colectiva). Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1979. Capítulo titulado "Delimitación Conceptual de los Derechos Humanos", págs 14 y 15.
- (4) BICUDO, Hélio: **Direitos Cíveis no Brasil, Existem?**. Editora Brasiliense, São Paulo, 1982, pag. 9.
- (5) FERNANDEZ, Eusebio: "El Problema del Fundamento de los Derechos Humanos" en **Anuario del Instituto de Derechos Humanos**, 1982, Madrid, pág. 80.
- (6) FERNANDEZ-GALIANO, Antonio: **Derecho Natural - Introducción Filosófica al Derecho**. Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, 1974, pág. 133.
- (7) FERNANDEZ, Eusebio, ob. cit., pág. 80.
- (8) Ibidem, pág. 81.
- (9) MARTINEZ MORÁN, Narciso: **Derechos Fundamentales**. Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, 1988, pág. 43.
- (10) FERNANDEZ, Eusebio, ob. cit. (5), pág. 81.

- (11) FERNANDEZ, Eusebio, ob. cit. (5) pág. 93.
- (12) PERIS, Manuel: *Juez, Estado y Derechos Humanos*, Editora Fernando Torres, Valencia, 1976, págs. 135/137
- (13) FERNANDEZ, Eusebio, ob. cit. (5), pág. 94.
- (14) PECES-BARBA, Gregorio: *Derechos Fundamentales*, Sección de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, 1986, pag.21.
- (15) Ibidem, págs. 24/25.
- (16) Ibidem, pág. 25.
- (17) Ibidem, pág. 25.
- (18) FERNANDEZ, Eusebio, ob. cit. (5), pág. 101.
- (19) PECES-BARBA, Gregorio, ob. cit. (14), pág. 63.
- (20) FERNANDEZ, Eusebio, ob. cit. (5), págs. 97.
- (21) Ibidem, págs. 97-100.
- (22) SANTIAGO NINO, Carlos: *Introducción al Análisis del Derecho*. Editorial Astrea, Buenos Aires, Argentina, 1980, pag.418.
- (23) W. DORNELLES, João Ricardo: *O que são Direitos Humanos*. Editora Brasiliense, São Paulo, 1989, pag. 7
- (24) PECES-BARBA, Gregorio, ob. cit. (14), pág. 23.
- (25) PEREZ-LUÑO, Antonio Enrique, ob. y Capítulo cits. (3) págs. 17/18.

- (26) LUCAS VERDU, Pablo, "Derechos Individuales" en T-VIII, Ed.Nueva Enciclopedia Jurídica, Barcelona, 1955, pág. 38.
- (27) CASTAN TOBEÑAS, José: **Los Derechos del Hombre**. Editorial Reus, Madrid, 1985, pág. 22.
- (28) Ibidem, pág.23.
- (29) Ibidem, pág. 24.
- (30) Ibidem, pág. 7.
- (31) Ibidem, pág. 9.
- (32) FERNANDEZ, Eusebio, ob. cit. (4), págs. 108/110.
- (33) Ibidem, pág. 111.
- (34) CASTRO CID, Benito de: **Los Derechos Humanos; Significación, estatuto jurídico y sistema** (obra colectiva). Publicaciones de la Universidad de Sevilla, Capítulo Segundo, 1979, págs. 120/121.
- (35) PEREZ-LUÑO, Antonio Enrique, "Análisis Funcional de los Derechos Humanos" en **Anuario de Derechos Humanos 5**, Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Complutense de Madrid, 1988/89, pág. 186.
- (36) Ibidem, pág. 186.
- (37) W. DORNELLES, João Ricardo, ob. cit.(23), págs. 18/36.
- (38) RUIZ-GIMENEZ CORTES, Joaquín: **El Concilio y los Derechos Humanos**. Edicusa, Madrid, 1968, pág. 108.

(39) Citado en la obra ONU años XX - La Protección de los Derechos Humanos. Editorial Tecnos, Madrid, 1966, pág. 271.

(40) SANCHEZ-AGESTA, Luis: Lecciones de Derecho Político. Ed. Granada, 1959, págs. 562 y siguientes.

(41) SANCHEZ DE LA TORRE, Angel: Teoría y Experiencia de los Derechos Humanos. Del Toro, Madrid, 1968, págs. 47/68.

(42) CASTAN TOBERNAS, José, ob. cit. (27), pág. 38.

(43) DIAZ, Elias: Estado de Derecho y Sociedad Democrática. Editora Taurus, Madrid, 1988, pág. 41.

(44) PECES-BARBA, Gregorio, ob. cit. (14) págs. 98/99.

(45) CASTRO CID, Benito de, ob. cit. (34), págs. 147/150.

(46) TADEU BARBOSA, Julio César: O que é Justiça. Editora Brasiliense, São Paulo, 1984, pags. 86/87.

(47) RUIZ-GIMENEZ CORTÉS, Joaquín: "El Derecho a la Intimidad", Artículo publicado en el periódico "Ya", de 14 de enero de 1969, Madrid.

CAPITULO II

SITUACIÓN DE BRASIL: DEL ESTADO AUTORITARIO HACIA LA DEMOCRACIA

II.1. La Existencia y Efectos de los Actos de Excepción.

II.2. Los Principales Acontecimientos durante el Período de la Transición.

- II.2.1. El Marco de Apertura.
- II.2.2. La Evolución Política e Ideológica.
- II.2.3. La Situación Económica del País.
- II.2.4. La Doctrina de Seguridad Nacional.
- II.2.5. La Concesión de Amnistía.
- II.2.6. El Movimiento Sindical.
- II.2.7. Los Movimientos Sociales.
- II.2.8. La Actuación de la Iglesia Católica.
- II.2.9. La Actuación de la Justicia.
- II.2.10. El Gobierno y los Derechos Humanos.
- II.2.11. Las Organizaciones No Gubernamentales en la Defensa de los Derechos Humanos.
- II.2.12. La Presión Internacional.
- II.2.13. La Campaña por Elección Directa para Presidente de la República.
- II.2.14. El Proceso de Elección Indirecta de un Civil para la Presidencia de la República.
- II.2.15. La Muerte de Tancredo Neves y la Nueva República.
- II.2.16. Los Derechos Humanos en la Constituyente.

Citas y Notas.

CAPITULO II

LA SITUACIÓN DE BRASIL: DEL ESTADO AUTORITARIO HACIA LA DEMOCRACIA

II.1. La Existencia y Efectos de los Actos de Excepción

En la noche del 31 de marzo de 1964 algunos jefes militares de las Fuerzas Armadas (Ejército de Tierra, Ejército del Aire y Marina) destituyeron al Presidente de la República bajo el pretexto de amenaza comunista. El dos de abril, el Presidente del Senado declaró vacante el cargo de Presidente de la República, atendiendo a las exigencias de los jefes de ese movimiento militar, sin tener amparo legal alguno. Ello provocó serias y contundentes reacciones de algunos parlamentarios del Congreso, principalmente del Partido Laborista (Trabalhista) Brasileño (PTB), que apoyaban al Presidente depuesto. De conformidad con lo que establecía la Constitución de 1946, vigente en esos momentos, asumió el Gobierno el Presidente de la Cámara de los Diputados, señor Ranieri Mazzili, por un plazo máximo de 30 días. Los Jefes Militares de las tres armas obtuvieron del Presidente en funciones el nombramiento de Ministros de sus respectivas armas y en tales calidades constituyeron el Comando Supremo Revolucionario. El día 9 de abril de 1964 ese Comando militar, ignorando todo proyecto de los Diputados y Senadores, del Congreso Nacional que continuaba en funciones dictó el primer

instrumento arbitrario con el nombre de Acto Institucional. Es de resaltar que ese primer acto de excepción fue redactado por Francisco Campos, el mismo jurista que elaboró la represiva Constitución de 1937, también llamada "Constitución del Estado Nuevo", y por Carlos Medeiros da Silva, abogado de posiciones extremadamente conservadoras. (1)

El primer Acto Institucional en su introducción, procurando legitimarse, decía que "la revolución se distingue de otros movimientos armados por el hecho de que en ella se traduce no el interés y la voluntad de un grupo, sino el interés y la voluntad de la Nación" y declaraba que "la revolución victoriosa se inviste del ejercicio del Poder Constituyente ... forma más expresiva y más radical del Poder ..." y que "se legitima por sí misma" y añadía que "queda, así, bien claro que la revolución no procura legitimarse a través del Congreso. Sino que es éste el que recibe de este Acto Institucional ... su legitimación". (2) En virtud del poder constituyente que se abrogó el Comando Supremo Revolucionario determinó las siguientes medidas: 1) Mantuvo la Constitución de 1946 con las alteraciones introducidas por este Acto. 2) Fijó elecciones presidenciales para dos días después de la edición del AI-1, por medio de votación indirecta que habría de realizarse en el Congreso. 3) Concedió plenos poderes al Presidente de la República que resultara electo mediante tal elección indirecta, destacando el otorgado para presentar enmiendas constitucionales, el poder exclusivo para presentar

proyectos de leyes sobre gastos, no obstante que el Congreso no podía aumentarlos, la facultad para decretar estado de sitio y suspender los derechos políticos por el plazo de 10 años, para cesar mandatos legislativos federales, estatales y municipales sin derecho a recursos judicial en contra, etc. Además de suspender a partir de aquella fecha las garantías constitucionales que hacían a los Magistrados vitalicios, estables y inamovibles en su cargos.

Designado un nuevo Presidente de la República el 11 de abril de 1964, el general Humberto de Alencar Castelo Branco, investido de todos los poderes que le fueron conferidos por el Comando Supremo Revolucionario, dio continuidad a las medidas de la "revolución", ahora como Jefe del Gobierno y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Dictó el 27 de octubre de 1965 el Acto Institucional nº 2 (3) en el que afirmaba que la revolución "ha promovido reformas y continuará promoviéndolas, insistiendo en sus propósitos de recuperar a Brasil económica, financiera, política y moralmente ..." y que "agitadores de varios matices y elementos de la situación eliminada, temen mientras tanto valerse del hecho de haber ella reducido a corto plazo el periodo de indispensable restricción a ciertas garantías constitucionales, ya amenazan y desafían el propio orden revolucionario, precisamente en el momento en que ésta - la revolución, atenta a los problemas administrativos, procura colocar la población en la práctica y en la disciplina del ejercicio democrático". Añadiendo luego

"democracia supone libertad, pero no excluye responsabilidad ni significa licencia para contrariar la propia vocación política de la Nación". La preocupación básica del comando del movimiento revolucionario era el combate contra los comunistas, que según ellos se infiltraron en la vida administrativa y política del País.

A continuación se reseñan las principales violaciones contra los derechos de los ciudadanos que implicaba el Acto Institucional número 2: 1) sometió a la jurisdicción de la Justicia Militar a todo civil acusado de práctica de actos contra la seguridad del Estado o contra las "instituciones militares"; 2) suspendió la garantía constitucional de inamovilidad de los Jueces; 3) proscribió todos los partidos políticos; 4) declaró suspendidos los derechos políticos a que se refirió en el artículo 10 del Acto Institucional nº 1, a saber: el privilegio de foro por prerrogativa de función; el derecho de votar y de ser votado en las elecciones sindicales; el ejercicio de actividad o manifestación sobre asunto de naturaleza política, decretando además la aplicación, cuando fuere necesaria para la preservación del orden político y social, de las siguientes medidas de seguridad: a) libertad vigilada; b) prohibición de frecuentar determinados lugares y c) arresto domiciliario; y 5) suspensión de los recursos judiciales contra todos los actos practicados por el Comando Supremo de la Revolución y Gobierno Federal, en virtud de los actos institucionales y complementarios.

Dando continuidad al proceso de institucionalización de los ideales de la "revolución" de 1964, el segundo acto discriminatorio dictado por el general Castelo Branco fue el Acto Institucional nº 3 por medio del cual se fijan elecciones indirectas para los cargos de gobernadores y alcaldes de las Capitales de los estados, coartando a los ciudadanos brasileños su derecho a votar para escoger sus propios representantes máximos en los estados miembros de la Federación.

El último acto del Presidente Castelo Branco dictado el día 7 de diciembre de 1966 - Acto Institucional nº 4, convocó extraordinariamente el Congreso Nacional para que estudiara un proyecto de Constitución elaborado por el Gobierno dentro de un plazo fijo: el 12 de diciembre de 1966 al 24 de enero de 1967. Justamente 42 días corridos en un período de fiestas de finales de año.

De modo increíble el Gobierno Militar procuraba la legitimación de sus actos en el Congreso. Así se puede presumir de los considerandos que aparecen en el preámbulo del AI-4: "considerando que el actual Congreso Nacional, elaboró la legislación ordinaria de la Revolución debe proceder también a la elaboración de la ley constitucional del movimiento de 31 de marzo de 1964". No obstante, añade "... el Gobierno continua detentando los poderes que le fueron conferidos por la Revolución; ...". Así, en virtud de los poderes discrecionales que tenía el Presidente del Gobierno, es posible concluir que

estrictamente hablando no era necesaria o mejor era prescindible la consulta al Congreso para la edición de una "nueva" Constitución.

De conformidad con la determinación del Gobierno, la Constitución fue promulgada por las Mesas Directoras de la Cámara de los Diputados y del Senado Federal el 24 de enero de 1967. Esta Constitución refrendaba todos los actos practicados por el Comando Supremo de la Revolución, por el Gobierno Federal, y por las Asambleas Legislativas de los Estados, excluyendo los mismos de todo recurso judicial.

Antes de completar un año de la promulgación de la Constitución de 1967, el Gobierno de la "revolución", ahora en manos del general Arthur da Costa e Silva, dictó el 13 de diciembre el Acto Institucional nº 5 (AI-5). Este es el más conocido símbolo de la arbitrariedad del régimen militar, pues en él la "revolución" de 64 exacerbaba en sus acciones de autoritarismo. Persistía en la persecución a los "subversivos oriundos de los más distintos sectores políticos y culturales", y en la idea de que "los instrumentos jurídicos que la Revolución otorgó a la Nación para la defensa, desenvolvimiento y bienestar de su población, están sirviendo de medios para combatirla y destruirla", y que en razón de ello aún hacía falta "la adición de medidas que impidan sean frustrados los ideales superiores de la Revolución ...". En virtud de este instrumento el Presidente de la República podía decretar el

receso del Congreso Nacional, de las Asambleas Legislativa y de las Cámaras de Concejales. Sin ninguna limitación podía suspender los derechos políticos de cualquier ciudadano por un plazo máximo de diez años y cesar mandatos electivos federales, estatales y municipales. Podía hacer restricciones o prohibiciones relativas al ejercicio de cualquier otro derecho público o privado y suspender la concesión de Habeas Corpus en caso de "crímenes políticos", aquellos tipificados contra la seguridad nacional, el orden económico y social o la economía popular.

El gobierno del general Costa e Silva estuvo marcado por la dictación permanente de actos institucionales. En su corto período de gobierno, menos de tres años, dictó 7 actos institucionales, a saber: el AI-6 que trata del Supremo Tribunal Federal y del Superior Tribunal Militar; AI-7 que disciplina el funcionamiento de las Asambleas Legislativas y de las Cámaras de Concejales; AI-8 que dispone sobre reforma administrativa en los Estados y Municipios; AI-9 acerca de la reforma agraria; AI-10 complemento sobre la suspensión de los derechos políticos o cesación de los mandatos electivos federales, estatales y municipales; AI-11 sobre prorrogación de mandatos de Alcaldes, Tenientes de Alcaldes y Concejales.

El 31 de agosto de 1969 los Jefes Militares retornan al Comando de la Nación, esta vez como consecuencia de la enfermedad acometida al Presidente Costa e Silva. Y dado que el

Congreso Nacional se encontraba en receso decretado por Costa e Silva, a través del Acto Complementar nº 38, los Ministros Militares entendieron que debían asumir provisionalmente las funciones del Jefe del Poder Ejecutivo. El 5 de septiembre de 1969 fue dictado el Acto Institucional nº 13 que otorgaba competencia al Poder Ejecutivo para que a propuesta de los Ministros Militares o de la Justicia determinara el destierro del territorio nacional de cualquier ciudadano brasileño considerado nocivo, inconveniente, o peligroso para la Seguridad Nacional. Los Jefes Militares por medio del Acto Institucional nº 14, impusieron la pena de muerte al ciudadano brasileño en caso de guerra revolucionaria o subversiva. El Acto Institucional nº 15, a su vez postergó las elecciones municipales. El Acto Institucional nº 16 declaró vacantes los cargos de presidente y vicepresidente de la República, suspendiendo la vigencia del artículo 80 de la Constitución de 1967 que establecía la escala de sustitución del Presidente, manteniéndose, por tanto, ellos en el cargo hasta el día 25 de octubre de 1969, día en que se nombraría un nuevo general Presidente. La Junta Militar dictó, el 14 de octubre de 1969, el Acto Institucional nº 17, el último del período más autoritario del movimiento militar, que daba poderes al Presidente para transferir a la reserva remunerada a aquéllos militares que atentasen contra la cohesión de las fuerzas armadas.

Terminada la fase de actos institucionales la misma Junta Militar, considerando que el Congreso Nacional aún encontraba en el receso decretado por el Acto Complementar n° 38, promulgó la enmienda n° 1 a la Constitución de 1967 en virtud de la cual se alteró por completo todo el texto original, de modo que lo que en realidad resultó fue una "nuevo" texto constitucional: La Constitución de 1969. En ella, en el Capítulo destinado a los Derechos y Garantías Individuales, se consagraron ciertos derechos políticos, económicos, sociales y culturales compatibles con la ansiedad de una sociedad moderna, pero a la vez se mantuvieron incoherentemente las normas institucionales del arbitrio, conforme estaba consignado en su artículo 182 que decía "continúan vigente el Acto Institucional n° 5, del 13 de diciembre de 1968, y los demás actos posteriormente editados". Como se puede observar Brasil tenía una Carta Magna, pero las personas no tenían protección jurídica ordinaria para el ejercicio de los derechos fundamentales en ella consignados.

A partir de la dictación de la Constitución de 1969, el gobierno pasó a legislar institucionalmente por medio de enmiendas a la Constitución y por medio de actos complementarios. Volvió a decretar el receso del Congreso Nacional a través del Acto Complementar n° 102 de 1 de abril de 1977 para imponer dos enmiendas constitucionales (las números 7 y 8), conocidas como "paquetes de abril", con el objetivo de articular medios para ganar las elecciones siguientes. Es de

destacar que la Enmienda Constitucional n° 11, de de 13 de octubre de 1978, que había de regir a partir de 1 de enero de 1979, tuvo un cuño más liberal y conciliador, pues entre otras medidas, suprimía la pena de muerte establecida por la práctica de actos considerados de guerra revolucionaria o subversiva y derogaba todos aquellos Actos Institucionales y Complementarios que contrariasen la Constitución vigente. La Enmienda Constitucional n° 15, de 19 de noviembre de 1980, a su vez, restablece elecciones directas para Gobernadores y Vicegobernadores de los estados y Senadores de la República, mientras que la número 25, de 15 de mayo de 1985, primera enmienda de un gobierno civil después de 21 años - el Gobierno de la Nueva República - restablece elecciones directas para Presidente y Vice Presidente de la República. La Enmienda Constitucional n° 26, de 27 de noviembre de 1985 convocó una Asamblea Nacional Constituyente para que fuese elaborada una nueva Constitución a partir de 1 de febrero de 1987, y concedió amnistía más amplia para los condenados por actos de la "revolución" de 1964.

II.2 - Los Principales Acontecimientos durante el Período de la Transición

II.2.1. El Marco de Apertura

Al inicio de la "revolución" militar, con la destitución del Presidente de la República, Señor João Goulart,

que había sido electo democráticamente, asumió el cargo el Presidente de la Cámara de los Diputados, hasta que el Congreso Nacional, refrendase el nombre de un General del Ejército de Tierra para ocupar la Presidencia de la República, candidato que fue sometido a su consideración por los líderes del movimiento militar. Eso ocurrió el 11 de abril de 1964. Habiendo sido electo el General Humberto de Alencar Castelo Branco, comenzó allí el régimen de excepción o propiamente la dictadura militar. El General Castelo Branco gobernó Brasil hasta el 15 de marzo de 1967. Su periodo de gobierno fuera considerado como de "organización de la casa" y de institucionalización de las ideas "revolucionarias". Para sustituirlo, el Congreso eligió el General Arthur da Costa e Silva, también previamente designado por las fuerzas militares, quien permaneció en el cargo solamente hasta 1969 ya que por motivo grave en su salud tuvo que dejar el cargo antes de la fecha prevista. El período del General Costa e Silva se caracterizó por el endurecimiento de los militares, destacándose la edición del Acto Institucional número 5. El tercer Presidente fue el General Emilio Garrastazu Médici, que gobernó de 1969 a 1974, período también considerado autoritario. No obstante, ya a mediados de 1972 se hablaba de una posible "descompresión política". Después del General Médici asumió la Presidencia de la República de Brasil el General Ernesto Geisel Beckmann de 1974 a 1979 período en el cual se configuró el punto máximo del proceso revolucionario y el inicio de forma efectiva de la distensión política

brasileña. El quinto Presidente de la "revolución" de 1964, fue el General João Batista de Figueiredo, 1979 a 1985, el último presidente-general, en cuyo gobierno comenzó una gran crisis económica y, también, la decadencia del régimen militar.

Hicimos arriba una sumaria presentación de los generales presidentes que gobernaron el País en el período del régimen militar para que se pueda tener una visión del comienzo y final del proceso autoritario en Brasil. En 1972, el Señor Leitão de Abreu, Jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, (4) tuvo la iniciativa de plantear la discusión sobre como la represión podría ser acabada en favor de un sistema más abierto, de esa discusión participó también el Profesor Cândido Mendes, ilustre estudioso de ciencia política e influyente líder católico. El, a su vez, cursó una invitación al Profesor Samuel Huntington, especialista en asuntos de los países subdesarrollados, para que hiciese un informe sobre la situación de Brasil y este reconoció la "necesidad de extinción de las formas extremas de represión que existieron y una abertura del sistema político". En 1973, el Profesor Samuel Huntington escribió un documento titulado "Métodos de Descompresión Política", en el que afirmó que "la relajación de los controles en cualquier sistema político autoritario puede, muchas veces, tener efecto explosivo en el sentido de que el proceso escapa del control de aquellos que lo iniciaron", sugiriendo, por tanto, que el gobierno brasileño estudiase un sistema de partido único similar al de México para

salir del autoritarismo, evitando así el efecto explosivo. El Profesor Wanderley Guilherme dos Santos, científico político, en contestación a la propuesta del Profesor Huntington, presentó en un seminario realizado en Brasilia en septiembre de 1973, un documento en que preconizaba una liberalización gradual y controlada del régimen vigente, liberalización que constaba de seis puntos básicos: "1) independencia del Poder Judicial, 2) libertad de expresión y de prensa, 3) habeas corpus y otros derechos individuales, 4) libertad de organización en apoyo de ideas políticas, 5) reglas relativas a la disputa del poder político y 6) procedimientos legales bien definidos para el uso de la coerción." (5)

En los primeros meses de 1974, el General Golbery do Couto e Silva, que fue jefe del Gabinete Civil del Presidente Geisel, continuó los contactos con especialistas extranjeros y nacionales a fin de definir como realizar la "descompresión" del régimen y terminar con la represión. En el mismo año empezaba la presión interna de políticos de oposición: algunas entidades como la Orden de los Abogados de Brasil (OAB) y la iglesia católica, por medio de la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil (CNBB), defendían la vuelta de Brasil al Estado de Derecho. En marzo de 1974, el Presidente Geisel, en su primer discurso en reunión ministerial afirmaba: "empeñaremos sinceros esfuerzos para el gradual y más seguro perfeccionamiento democrático ampliando el diálogo honesto y mutuamente respetuoso y estimulando mayor participación de las

elites responsables y de la población en general para la creación de un clima saludable de consenso básico y la institucionalización acabada de los principios de la Revolución de 64..." (6). A partir de ahí se puede pensar en una distensión política, transición para la democracia o apertura política gradual, aunque altamente controlada.

Ese inicio de la transición política, según María Cecilia Spina Forjaz, (7) pudo tener su origen en una o varias de las siguientes causas:

1. La apertura política pudo plantearse como fruto de la crisis económica que el país atravesaba a partir de mitad de la década de 70, relacionada con el petróleo. El régimen militar autoritario precisaba reestructurar el pacto político para mantener y readaptar el modelo económico vigente.

2. La apertura pudo ser también una búsqueda de la institucionalización y legitimidad para el régimen militar autoritario: por motivo del agotamiento de la legitimidad basada en el logro económico y en la ideología del Brasil potencia, se hizo imprescindible crear nuevas formas de institucionalización y legitimidad menos fundamentadas en la coerción/represión y más conducidas para el consenso/participación.

3. La apertura también puede verse como estrategia de la facción militar castelista, que al reasumir el poder con Ernesto Geisel, pretende corregir los rumbos de la Revolución y mantenerse en el poder, promoviendo un proceso de

liberalización y relativa separación política de las Fuerzas Militares, debido a los altos costos organizacionales adquiridos con el prolongado ejercicio del poder político.

4. Finalmente, la apertura pudo ser fruto de una crisis jurídica-institucional: una respuesta de adaptación a la excesiva centralización político-administrativa, que provocaba un colapso de los mecanismos de mando y obediencia y cierta ineficacia en la ejecución de las decisiones, además de un despedazamiento de los canales de representación política".

La voluntad manifiesta del Presidente Ernesto Geisel de promover la distensión política, estaba aliada a factores, que en parte correspondían a las estrategias de la Doctrina de Seguridad Nacional, como la eliminación de los focos de subversión y agitación en el país, el acelerado crecimiento y desarrollo de la economía durante el período del "milagro económico", y otros que empezaron a surgir con el agotamiento y derrumbe de la política económica que se venía practicando hasta 1973. Ellos obligaron al Gobierno a adoptar medidas para la revitalización de algunas instituciones de cuño democrático, aún que bajo control del régimen militar, con vista a evitar disensiones en las clases dominantes y no entorpecer el proceso de legitimación e institucionalización del régimen. Y, en verdad, no hubo en ningún momento la intención del Gobierno de promover una efectiva transición a la democracia, y sí ampliar el apoyo político para consolidar las estructuras del Estado autoritario.

II.2.2. La Evolución Política e Ideológica

El primer gobierno de la "revolución" sometió a la consideración del Congreso en 1965 un proyecto de ley titulado "Estatuto Nacional de los Partidos Políticos", el que con la determinación de tramitación rápida recibió varias enmiendas de los congresistas. La expresión original fue substituida, ya que la palabra Estatuto tiene sentido múltiple, y surgió el de Ley Orgánica de los Partidos Políticos, que se dictó con el número 4.740 el 15 de julio de 1965. Esta Ley creaba una serie de dificultades para la creación de partidos. Antes de dictación de esa Ley existían en Brasil 13 partidos legalmente constituidos que habían concurrido a las elecciones generales de 1962, a saber: Partido Social Democrático (PSD); Partido Laborista (Trabalhista) Brasileño (PTB); Unión Democrática Nacional (UDN); Partido Social Progresista (PSP); Partido Republicano (PR); Partido Laborista (Trabalhista) Nacional (PTN); Partido Social Brasileño (PSB); Partido Demócrata Cristiano (PDC); Partido Libertador (PL); Partido de Representación Popular (PRP); Partido Republicano Laborista (Trabalhista) (PRT); Partido Social Laborista (Trabalhista) (PST) y Movimiento Laborista (Trabalhista) Renovador (MTR).

(8) De forma sorprendente, el 27 de octubre de 1965, el gobierno de la "revolución" dictó el Acto institucional nº 2 que extinguía la vida de todos los partidos políticos y por Acto Complementar nº 4, de noviembre de 1965, determinó la creación por medio de los miembros efectivos del Congreso

Nacional, de organizaciones políticas con atribuciones de partidos políticos, mientras estos no fuesen constituidos.

Con la dictación de la Enmienda n° 1 a la Constitución de 1967, hubo, en cambio, una cierta flexibilidad para la organización, el funcionamiento y la extinción de partidos políticos. Se establecía un régimen representativo y democrático, basado en la pluralidad de partidos y en la garantía de los derechos fundamentales del hombre, personalidad jurídica para los mismos, mediante registro de sus estatutos, actuación permanente dentro del programa aprobado por el Tribunal Superior Electoral, disciplina partidaria y ámbito nacional para sus funciones. Se exigía el apoyo de un cinco por ciento del electorado que hubiese votado en la última elección general (la ley anterior fijaba un diez por ciento) y se establecía la prohibición de coaliciones partidarias. Para que fuese adecuada a la situación impuesta por la Constitución de 1969 fue aprobada una nueva Ley Orgánica de los Partidos: Ley 5.582/1971. Al igual que los instrumentos jurídicos anteriores esta Ley creaba grandes dificultades para el surgimiento del pluripartidismo. Ella permaneció vigente durante gran parte del periodo revolucionario, incluso en los primeros cinco años de la apertura política, pasando por una radical reforma a través de la Ley 6.767, de 20 de diciembre de 1979, texto éste que volvió a introducir el sistema de pluripartidismo en Brasil. Finalmente, la Constitución de 1988 democratizó el sistema político, al decir en su artículo 17 que

"es libre la creación, fusión, incorporación y extinción de partidos políticos" ... en cuanto sea respetado ... el régimen democrático, el pluripartidismo y los derechos fundamentales de la persona humana". (9)

Al inicio de la transición había en Brasil un sistema político de bipartidismo y el Congreso Nacional (Cámara de los Diputados y Senado Federal) funcionaban precariamente, manipulados por el Gobierno Central (Poder Ejecutivo). En 1974 existían dos partidos políticos: La Alianza Renovadora Nacional (ARENA) y el Movimiento Democrático Brasileño (MDB). El primero era una reunión de personas que "apoyaron" la "Revolución" de 1964 y que en su mayoría habían conseguido ser reelegidos en las elecciones subsiguientes a 1964. Eran poseedores de grandes parcelas de capital y constantemente favorecidos por el Gobierno militar. Este Partido, que no tenía una clara definición política, podía caracterizarse como un partido de ideología de "derecha", mientras que el MDB, también una reunión de personas de diversas índoles, se definía como un partido de resistencia, de oposición a los actos del gobierno, nacido de aquellos que no aceptaron la "Revolución" de 1964. Dentro del MDB podía encontrarse radicales de izquierda, moderados y liberales.

Antes de las elecciones generales de 1974, la ARENA detentaba la mayoría en las dos cámaras del Congreso - 223 diputados contra 165 del MDB y 59 senadores contra 20 del MDB .

Sin embargo, con las elecciones de 1974 hubo un crecimiento del MDB elevándose el número de sus Diputados a 165 contra 199 de la ARENA, y sus Senadores a 20 contra 46 de la ARENA. No obstante ese crecimiento del MDB, el partido que apoyaba al Gobierno continuó con mayoría en el Congreso. La sorpresa del crecimiento del MDB fue motivada porque el mismo centró su campaña política en tres temas principales: la justicia social (denunciando la tendencia de una distribución de renta cada vez más desigual), las libertades civiles (denunciando las violaciones de los derechos humanos, tema que tanto preocupaba a la elite más crítica) y la desnacionalización de los bienes brasileños (denunciando la penetración extranjera en la economía brasileña). (10) Se sumó a ellos el descontento de la población con la política económica de Brasil y el acceso relativamente libre de los candidatos a la radio y televisión dentro de los programas dedicados a los partidos. Resáltase la importancia de ese crecimiento del MDB en el Congreso, pues el Gobierno perdió los dos tercios que tenía en el Congreso y por lo mismo se hizo más difícil la aprobación de las materias que requerían tal mayoría, en caso las enmiendas a la Constitución requerían la aprobación de los dos tercios de los congresistas. En el mismo año de 1974, en octubre, se realizaron elecciones para Gobernadores de los estados miembros de la Federación del modo artificioso creado por el Gobierno anterior que ya había previsto que si las elecciones eran libres y directas se perderían la mayoría de los gobiernos de los estados. Así los Gobernadores de los estados fueron electos por sus respectivas

Asambleas Legislativas, de forma indirecta, ya que, al efecto, si se tenía control sobre los parlamentarios de tales Asambleas.

Pasadas las elecciones generales de 1974, el Gobierno se mantuvo preocupado por el revés que podría sufrir en las elecciones próximas, y procuró intimidar a los parlamentarios que actuaban en defensa de los derechos humanos, estableciendo límites a sus actuaciones, y cesando en 1976 los mandatos de cinco parlamentarios. El Gobierno decidió utilizar golpes autoritarios para no perder el control sobre el Congreso: como no tenía la mayoría de dos tercios necesaria para decretar el receso del Congreso, resolvió echar mano del Acto Institucional nº 5 (aquella medida de excepción dictada en el auge de la "Revolución" del 1964) para decretar el mismo, cerrando sus puertas el 1 de abril de 1977. Así pudo legislar arbitrariamente e hizo profundos cambios en la Constitución de 1969 por medio de la dictación del llamado "paquete de abril" casi todos los preceptos visaban las elecciones de 1978. Entre las medidas adoptadas en ese "paquete" se pueden destacar: enmienda a la Constitución podría ser hecha por mayoría simple; que todos los gobernadores de los estados serían elegidos de modo indirecto en 1978; que un tercio de los senadores de la República serían también elegidos indirectamente por colegios electorales estatales (que incluirían concejales, quedándose asegurado el control de la ARENA), y que el acceso de los candidatos a la radio y a la televisión quedaba rigurosamente

limitado a los términos de la "Ley Falcão" (así llamada porque fue redactada por Armando Falcão, que era Ministro de la Justicia del Gobierno Geisel). La oposición política y la opinión pública reaccionaron violentamente a este acto del Presidente Geisel, que se decía dispuesto a hacer la transición gradual, y en razón de lo cual éste reabrió el Congreso el 15 de abril de 1977. En este año el Congreso aprobó una enmienda a la Constitución estableciendo el divorcio, lo que significó una derrota para la iglesia católica, que era contraria a la legalización del divorcio, y venía criticando el Gobierno por los constantes atentados que cometía contra los Derechos Humanos. El Presidente Geisel (un luterano), (11) en cierto modo, se alegró con la derrota del clero que no cesaba de combatirlo.

El 14 de octubre de 1978, se celebró la primera elección para Presidente de la República, después de la distensión política, claro que no se trataba de elección por sufragio libre y directa sino por vía de un Colegio Electoral integrado por Diputados y Senadores que en su mayoría no representaban la voluntad de la población brasileña. No obstante, un hecho de gran importancia para el momento fue el surgimiento de una candidatura de oposición encabezada por el general de reserva Euler Bentes Monteiro que había sido Superintendente de la SUDENE, órgano de desarrollo regional del Nordeste y del Senador Paulo Brossar, un histórico y destacado militante de la oposición. El General João Baptista de

Figueiredo, candidato indicado por el Gobierno militar y de la ARENA, y el candidato a la vicepresidencia el señor Aureliano Chaves, ingeniero civil, prometían dar continuidad a la democratización gradual, iniciada por el General Geisel, mientras tanto el General Euler Bentes defendía la inmediata convocación de una asamblea nacional constituyente para elaborar una nueva Constitución. Sin sorpresa alguna para nadie, fue electo el General João Baptista de Figueiredo por 355 a 266 votos. Un mes después a las elecciones presidenciales se realizaron las elecciones generales. Los cambios introducidos en la legislación electoral, incluso con elecciones indirecta de un tercio de los Senadores garantizaron mayoría al Partido del Gobierno en el Congreso, pero la tendencia de los votos directos demostrara la progresión política del partido de oposición - el MDB.

A finales de 1978 el General Geisel cumplió parte de su promesa de promover la apertura gradual llevando a la aprobación del Congreso una enmienda a la Constitución que revocaba un conjunto de actos excepcionales, entre ellos el Acto Institucional nº 5 que entre otras facultades otorgaba al Jefe del Poder Ejecutivo Federal poderes para decretar el receso del Congreso. Sin embargo permanecía vigente la estructura básica del Estado autoritario, a saber: la Ley de Seguridad Nacional, la Ley de Prensa, la Ley de Huelga y varios actos de excepción. El Gobierno Geisel también encaminó a la aprobación del Congreso una nueva versión de la Ley de

Seguridad Nacional, reduciendo el número de posibles casos de atentados contra la seguridad del Estado, proyecto que no fue votado en tanto el MDB se negó a estudiarlo alegando que el texto contenía impropiedades en lo que se refería a los derechos humanos. El Poder Ejecutivo utilizando un artificio legal llamado "decurso de plazo" promulgó el proyecto "in totum" transformándolo en ley. También a finales de 1978, Geisel revocó los decretos de destierro de más de 120 brasileños que habían sido expulsos de Brasil por la "Revolución" de 1964, en una demostración de "reconciliación política". (12)

Iniciado el gobierno del General João Figueiredo, que tenía como objetivo principal dar continuidad al proceso de apertura política, estimulado por el Jefe de la Casa Civil General Golbery do Couto e Silva, ello envió en noviembre de 1979 un proyecto de ley, que instituyó el sistema de pluripartidismo en el país, e ya en aquel mismo año nuevos partidos políticos surgieron en el escenario político nacional. Los antiguos partidos, Alianza Renovadora Nacional (ARENA) fue extinguido apareciendo en su lugar el Partido Democrático Social (PDS), mientras que el Movimiento Democrático Brasileño (MDB) fue transformado en Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), pero en verdad se creó un nuevo partido político preservando el reconocimiento del nombre anterior añadiéndose solamente la palabra "partido" que era obligatoria por ley. A partir de ahí otros partidos menores

fueron surgiendo, a saber: Partido Laborista Brasileño (PTB) que existía antes de la "revolución" de 1964, Partido Democrático Laborista (Trabalhista) (PDT) que tuvo su creación a causa de un desentendimiento entre los líderes del PTB, Partido de los Trabajadores (PT) gremio político integrado por trabajadores de la zona industrial de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná y Rio Grande del Sur, que fue un partido genuinamente de la clase obrera que contaba con la simpatía de algunos intelectuales, caracterizándose como un partido de izquierda. Y por último, dentro de este bloque de partidos creados a la luz de la nueva ley, surgió el Partido Popular (PP) integrado por banqueros, políticos y empresarios liberales. La estrategia definida por el Gobierno al establecer el pluripartidismo tendía fortalecer el partido que le daba apoyo y enflaquecer el partido de oposición. Y lo consiguió, se logró pulverizar el antiguo MDB en varios otros partidos (PMDB, PP, PTB, PDT, y PT), perdiéndose el voto general de la oposición entre todos ellos. Con ello, además, el nuevo partido del Gobierno, el PDS, en caso necesario, podría hacer coalición con un otro partido menor y continuar apoyando al Gobierno. Ello constituía para el General Golbery la táctica de "dividir para conquistar". El Gobierno tenía en mente las elecciones pasadas de 1974, 1976 (municipales) y 1978, que se tradujo en avances para el partido de oposición y buscaba nuevas formulas para poder enfrentar las elecciones de 1982.

Dentro del programa de liberalización lenta y gradual

del sistema político vigente, el Gobierno de João Figueiredo tuvo la iniciativa de promover medidas con vista a la creación de nuevos partidos políticos, de determinar elección directa para gobernadores de los estados en 1982 y de conceder amnistía general. El Ministro de la Justicia del Gobierno de Figueiredo, Petronio Portela, preconizaba un escenario político basado en la formación de un fuerte partido de centro, aún que menor que el partido del Gobierno (PDS), uniendo disidentes de la antigua ARENA y moderados del ex-MDB, que serviría de "auxiliar" al gobierno cuando fuese necesario y que, a nivel estadual, sería un fuerte concurrente a los partidos de oposición para las elecciones de 1982. (13)

La mayoría de sustentación del gobierno en el Congreso, con la fragmentación de los partidos y la falta de definiciones partidarias no era fiable, por eso importantes proyectos de leyes de iniciativa del Poder Ejecutivo tuvieron que ser aprobados por el recurso constitucional del "decurso de plazo", por ejemplo, la ley de aplazamiento de las elecciones municipales de 1980 que fueron aplazadas para 1982 y la ley que determinaba la vinculación total del voto con chapas completas y prohibición de coalición, el llamado "paquete de noviembre". Con motivo de las medidas del paquete de noviembre el Partido Popular que resultó perjudicado, se fusionó con el PMDB, dejando por lo tanto de existir en febrero de 1982. A pesar de no ser el Congreso Nacional muy fiable, el PDS, presionado por el gobierno consiguió movilizar 222 diputados y

34 senadores, numero necesario para constituir mayoría simple en el Congreso, y aprobó los siguientes cambios en la Constitución: aumentar el "quorum" constitucional de una mayoría simple para una mayoría de dos tercios; aumentar el numero de miembros de la Cámara Federal de 420 para 479; aplazar los requisitos mínimos para sobrevivencia de pequeños partidos políticos hasta 1986; mejorar ligeramente las prerrogativas parlamentarias y adoptar un sistema electoral "mixto" para 1986. También la elección para Presidente de la República fue transferida de octubre de 1984 para enero de 1985. El Colegio Electoral que elegiría el Presidente vio alterada su composición y número, pasando a ser además de 548 miembros del Congreso Nacional (Cámara de los Diputados y Senado Federal), 123 delegados de los 23 estados de la Federación (6 escogidos por el partido mayoritario en Asambleas Legislativas de cada estado).

En 1982 se realizan en Brasil elecciones generales a todos los niveles, excepto para Presidente de la República, ya que las elecciones municipales previstas para 1980 fueron transferidas para 1982. Desde 1965 que no se realizaban elecciones directas para Gobernadores de los estados. Después de 18 años de "dictadura militar" se realizaron elecciones libres, donde mas de cuarenta y cinco millones de brasileños pudieron elegir sus representantes, y el Brasil pudo dar una "lección de democracia electoral", (14) de significativa magnitud para la "apertura" política. Los datos oficiales de

esas elecciones confirmaron la estrategia que había sido trazada por el general Golbery. La oposición no obstante haber obtenido el 59% del total de los votos, no consiguieron obtener la mayoría en el Congreso (Cámara y Senado). En la Cámara la oposición obtuvo 240 escaños (incluso los escaños del PMDB, PDT, PTB y PT), mientras que el PDS con 235. Sin embargo, en el Senado el partido del gobierno - PDS - obtuvo 46 contra 23 de la oposición, consiguiendo por lo tanto la mayoría simple en el Congreso Nacional. A pesar de las elecciones de 1982, el Gobierno continuó con mayoría en el Colegio Electoral - órgano que elegía al Presidente de la República, ya que poseía 359 votos contra 321 de la oposición. Ya no existía mayoría absoluta del PDS en la Cámara de los Diputados y era bastante difícil la situación política del Gobierno para hacer aprobar un proyecto de su iniciativa, toda vez que la unión de la oposición podría obstruir la tramitación de ese proyecto, en caso contrario a los intereses partidarios de la oposición. Lo mismo podría acontecer con el Colegio Electoral para elección del Presidente de la República en 1985, que con el resultado, obligaba al Gobierno a mantener constante vigilancia sobre los delegados de cada Estado.

Una manifestación de alto significado político fue la acaecida en 1983/84 cuando se hizo una campaña para solicitar la elección de Presidente de la República por vía directa, o sea por medio del voto libre y directo, campaña defendida por el PMDB y demás partidos de oposición. Esa campaña

multitudinaria ganó las calles y las plazas de Brasil, bajo el liderazgo del Diputado Ulysses Guimarães, Presidente del PMDB y líder de la oposición desde el inicio de la "revolución" de 1964. Consiguió contagiar a casi toda la población, pero la propuesta de enmienda a la Constitución para restablecer elecciones directas, de autoría del Diputado del PMDB Dante de Oliveira, no contó con la aprobación de la mayoría de los diputados y senadores, que todavía seguían la orientación del Gobierno Central. Esa campaña fue conocida bajo el slogan "Directas Ya".

Llegando al final el gobierno del Presidente João Baptista Figueiredo, los medios políticos ya se movilizaban para la designación de sus candidatos. De un lado el Gobierno deseando permanecer en el Poder, pero con su partido fragmentado, del otro la oposición procurando su unidad para dar a la opinión pública un candidato de consenso. La disputa en el seno del PDS era bastante concurrida, con varios candidatos procurando obtener el apoyo de sus correligionarios para la convención del partido. Entre los candidatos del PDS destacamos Aureliano Chaves, que era vicepresidente de la República, Mario David Andreaza, que era Ministro de Transportes del gobierno y Paulo Salín Maluf, ex Gobernador del estado de São Paulo, que en esos momentos era Diputado Federal. En la Convención del PDS salió vencedor Paulo Maluf que no era el candidato que tenía el apoyo del Gobierno. A raíz de la victoria de Paulo Maluf en la convención del PDS algunos

líderes disidentes fundaron el "Frente Liberal", más tarde el Partido del Frente Liberal (PFL) y formaron con el PMDB la "Alianza Democrática", naciendo de ahí una oposición fuerte para la disputa de la Presidencia de la República en el Colegio Electoral con los candidatos Tancredo de Almeida Neves para Presidente, y José Sarney para Vicepresidente, el primero proveniente del PMDB y el segundo del ala disidente del PDS. Procesada las elecciones en el Colegio Electoral, el 15 de enero de 1985, resultó vencedor el candidato Tancredo de Almeida Neves, cuya victoria ya era dada como cierta por las encuestas realizadas antes de esas elecciones.

El presidente electo Tancredo Neves debió haber asumido el poder el 15 de marzo de 1985, no obstante en la víspera fue acometido de una dolencia muy grave y tuvo que ser hospitalizado, a pesar de lo cual, en el mismo hospital, tomó posesión del cargo de Presidente, pero jamás pudo tomar cualquier decisión en tal calidad, pues la gravedad de su dolencia, después de muchas cirugías y un largo periodo de tratamiento, llevóle a la muerte. Asumió el poder el señor José Sarney, vicepresidente electo, quien ejerció provisionalmente la Presidencia de la República hasta a la muerte de Tancredo el 21 de abril del mismo año y con plenos poderes como titular del cargo a partir de la mencionada fecha.

Con la instauración de la "Nueva República" en marzo de 1985, el Gobierno pasó a ser ejercido por un presidente

civil con el apoyo de dos partidos que formaron la Alianza Democrática (el PMDB que detentaba la mayoría de cargos ministeriales y el PFL que tenía cuatro ministros en el gobierno). Algunas medidas adoptadas en el campo político y económico favorecieron al PMDB en las elecciones generales de 1986, ya que gran parte de la población se identificaba y apoyaba esas medidas, tan reclamadas durante todo el periodo de la dictadura militar.

El PMDB fue el gran victorioso en las elecciones de noviembre de 1986, eligiendo nada menos que 22 de los 23 gobernadores de los estados, obtuvo la mayoría parlamentaria y el mando en las dos casas del Congreso, mientras que el PFL ya considerado la segunda fuerza política nacional no tuvo un resultado como era esperado por sus correligionarios, no obstante lo cual consiguió permanecer en ese puesto, ya que el PDS que se había dividido desde la campaña presidencial de 1984, tuvo un peor destino desde su creación en 1979.

Un hecho bastante significativo en el gobierno del Presidente José Sarney fue la convocación de la Asamblea Nacional Constituyente, instalada en enero de 1987, con el encargo de elaborar una nueva Constitución para el país. Esa Asamblea Constituyente estuvo integrada por los Diputados y Senadores electos en noviembre de 1986 y que formaban el Congreso Nacional en ese momento. Además, el Presidente José Sarney constituyó, por medio de Decreto, una comisión que fue

integrada por cuarenta renombrados juristas, que habían de presentarle un anteproyecto de constitución con vistas a auxiliar los trabajos de la Asamblea Constituyente que se iniciarían en 1987. Tal grupo fue conocido como la "comisión de notables".

Siguiendo la agenda de la transición a la democracia, que no había sido establecida previamente, pero que debería consolidarse naturalmente, a fin de posibilitar el retorno del país al Estado Democrático de Derecho, y por consiguiente el cierre de todos los resquicios ilegítimos creados por el Estado de Excepción, ocurrieron en 1989 las elecciones para presidente y vicepresidente de la República de Brasil, que de acuerdo con dictámenes constitucionales habrían de realizarse por sufragio libre y directo de todos los ciudadanos brasileños aptos para ejercer el derecho de elegir sus representantes. Esas elecciones se procesaron en dos vueltas. En la primer vuelta participaron 22 candidatos que en su totalidad prescindieron del apoyo del entonces presidente José Sarney ya que él ostentaba en aquella ocasión un bajo índice de popularidad por la grave crisis económica que alcanzaba el país.

Procesadas esas elecciones presidenciales en primera vuelta salieron vencedores los señores Fernando Collor de Mello, candidato del Partido de la Reconstrucción Nacional (PRN) y Luis Ignacio Lula da Silva, candidato del Partido de los Trabajadores (PT). El primero, con un discurso neoliberal

consiguió sensibilizar la clase empresarial y gran parte de la población pobre, y el segundo, representando las izquierdas, defendía los puntos que de ha mucho tiempo hacían parte de los programas de los partidos políticos de oposición al régimen militar. El 15 de diciembre de 1989 se realizaron esas elecciones en segunda vuelta entre los dos candidatos, con la elección del señor Fernando Collor con 35.089.998 votos, representando 49,94% de los votantes, mientras Lula obtuvo 31.076.364 votos, que correspondió a 44,23%. Hay que resaltar que esas elecciones presidenciales, ocurridas después de 30 años a causa de la dictadura militar, no fueron contestadas por los adversarios perdedores, aunque el elevado índice de votos nulos y blancos que alcanzó 5,69, y también el acentuado porcentual de abstención de 24,78% del electorado, considerando que el voto en Brasil es obligatorio, pudieran de cierta forma empañar o entorpecer lo que se puede llamar de cierre de la transición y el retorno del país a un legítimo Estado Democrático y de Derecho.

El periodo político iniciado con la "revolución" militar de 1964 estuvo marcado por las medidas de excepción, de autoritarismo y de arbitrariedad, durante los primeros 15 años con la vigencia de los actos institucionales y complementarios que alteraron la Constitución. Después se continuó con los "artificios" legales y la Ley de Seguridad Nacional. Aunque existió al inicio de la apertura política un sistema bipartidista, y a partir de 1979 el multipartidismo con una

creciente creación de nuevos partidos, predominó en todo el período la doctrina de seguridad nacional y en razón de eso, varios políticos y parlamentarios tuvieron sus mandatos cesados y/o perdieron sus derechos políticos por algún tiempo.

II.2.3. La Situación Económica del País

Al deflagrar el proceso de apertura política, Brasil venía de un crecimiento acelerado de su producto interior bruto (PIB), a una media de 10% al año. Desempeño de la economía nacional resultante de la política introducida por el Gobierno militar en los cinco años anteriores (1968/73), llamado "milagro económico". Todo indicaba que ese crecimiento se mantendría estable, tanto que el Gobierno llegó a preparar el II Plan Nacional de Desarrollo para ser ejecutado de 1975 a 1979, previendo una tasa de crecimiento anual de 10%. Sin embargo, la crisis del petróleo ocurrida en finales de 1973, tuvo serias consecuencias en la economía mundial y Brasil, siendo el tercer mayor importador de petróleo del mundo, fue alcanzado directamente por la elevación de los precios del petróleo determinándose una interrupción del desarrollo económico experimentado anteriormente (15). El Gobierno brasileño había conseguido salir de la crisis del petróleo de 1973/74 con aplicación de medidas de ajuste. Cuando en 1979 hubo otra brutal alza de precios de esa materia prima, generando o mejor empeorando la crisis económica, el Gobierno se vio obligado a

redimensionar su política económica, en principio dirigida a la obtención del crecimiento acelerado, hacia el control de la inflación que amenazaba la estabilidad de la economía, y también, hacia la obtención de capital extranjero. El producto interior bruto (PIB) aún con la crisis consiguió en 1974 una tasa de crecimiento de 9,7%. En el período de 1975 a 1980 continuó creciendo a tasas menores, pero acusando un crecimiento significativo de media de 6,5% al año. A partir de ahí hubo un descenso, pero luego volvió a tomar un ritmo de crecimiento, tal como se puede observar en la Tabla que seguidamente acompaño.

Tabla I

Producto Interior Bruto - PIB 1974/1989

Año	PIB	Año	PIB	Año	PIB	Año	PIB
1974	9,7	1978	4,8	1982	0,9	1986	8,2
1975	5,2	1979	7,2	1983	-2,5	1987	2,9
1976	9,8	1980	9,1	1984	5,7	1988	0,04
1977	4,6	1981	-3,4	1985	8,3	1989	3,34

Fuente: Coyuntura Económica/Fundación Getulio Vargas

La deuda externa de Brasil venía acumulándose y en 1974 presentaba un "déficit" externo de 17,2 mil millones de dólares y en el transcurso de la transición (hasta marzo de 1990), esa deuda se elevó a 120 mil millones de dólares, con

una media anual de endeudamiento de 6,5 mil millones de dólares, incluido el servicio de la deuda.

En el inicio de la transición política la renta "per capita" brasileña era de 1.900 dólares y dada la situación de inestabilidad de la economía en el periodo, el comportamiento de la distribución de la renta nacional demostró una cierta estabilidad, acusando en 1989 una renta per capita de 2.240 dólares. Ello significaba una distribución de renta por persona de las más bajas de todo el mundo.

El Gobierno del Presidente Geisel al empezar su gestión encontró un índice de inflación ascendente, que alcanzó en 1974 una tasa de 34,5%. Con las medidas adoptadas en los primeros años de la transición fue posible controlar esa ascensión y estabilizar el índice alrededor de 40%. A partir de 1979, con la nueva crisis del petróleo y la crítica situación económica y financiera del País, el índice inflacionario volvió a dispararse al 77,2% obligando al gobierno a adoptar medidas de "choque" para controlarla. No obstante, la eficacia de tales medidas fue insatisfactoria. La crisis inflacionista en ese período desarregló por completo todos los planes de estabilización económica formulados por los gobiernos. En 1989 la inflación registró una tasa de 1.764,9%. Para una mejor comprensión de la situación inflacionaria en el periodo de 1974 a 1989 hay que detenerse en análisis de los índices que siguen:

Tabla II

Indices de Inflación 1974/1989

Año	Inflación	Año	Inflación	Año	Inflación
1974	34,5	1980	110,2	1986	62,4
1975	29,4	1981	95,2	1987	365,9
1976	46,3	1982	99,7	1988	933,6
1977	38,8	1983	211,0	1989	1.764,9
1978	40,8	1984	223,8		
1979	77,2	1985	224,4		

Fuente: Coyuntura Económica/Fundación Getulio Vargas

Un aspecto importante a examinar es justamente el comportamiento de los salarios. Si tomamos como base el salario mínimo, que es el valor mínimo necesario que un trabajador debe percibir para mantenerse él y su familia, hubo una considerable pérdida del valor real del salario mínimo en el período. El valor medio anual del salario mínimo real en 1973 era de Cr\$.2.215,18, de modo que ya presentaba una pérdida de 41% en relación con el valor originario de ese salario, establecido en 1940 (16). En el período de la transición el salario mínimo continuó decreciendo, hasta alcanzar el valor de Cr\$.1.497,66, representando una pérdida de casi 60% del mismo valor originario, como se puede observar en la Tabla siguiente. Ese mismo comportamiento se puede atribuir a los demás salarios, en todos los niveles.

Tabla III

Valor Porcentual del Salario Mínimo* (1974/1989)

Año	Indice	Año	Indice	Año	Indice	Año	Indice
1974	54,44	1978	60,67	1982	65,77	1986	50,12
1975	56,90	1979	61,12	1983	55,95	1987	36,12
1976	56,52	1980	61,66	1984	51,85	1988	37,93
1977	58,88	1981	63,26	1985	52,91	1989	40,18

*Salario Mínimo Julio 1940 = 100%

Fuente: DIEESE, São Paulo

Con relación al desempleo, si tomamos como base las personas con más de 15 años que procuraban empleo y estaban decididas a trabajar, las tasas en el periodo fueron decrecientes, llegando en el último mes efectivo de la transición a 3,43% de la población económicamente activa. Aún así representó una parcela considerable del contingente de la población que no encontraba trabajo.

Otro aspecto de la situación económica del País que merece la debida atención es la excesiva concentración de la renta en manos de pocos. La política económica impuesta por los Gobiernos militares propició que cada año se elevarse el nivel de concentración de la renta nacional. En 1974 el cinco por ciento de las personas detentaban el 34,9% de la renta nacional mientras que en 1989 esa misma parcela de la población ocupaba la fracción de 39,4% del total de la renta.

II.2.4. La Doctrina de Seguridad Nacional

La doctrina de seguridad nacional introducida en el país mucho antes de la "revolución" de 64, ya venía siendo enseñada desde hace algún tiempo por la Escuela Superior de Guerra (ESG). El régimen militar la da a conocer por primera vez por medio del Decreto-Ley nº 314/67 y dos años después, ya bajo la protección del Acto Institucional nº 5, fue editada nuevamente por medio del Decreto-Ley de nº 510/69 que tuvo un corto periodo de vigencia. En noviembre de 1969, basado en el mismo Acto Institucional nº 5, la Junta Militar que gobernaba el país dictó el Decreto-Ley nº 898/69, la más severa y rigurosa legislación sobre Seguridad Nacional, que introdujo la pena de muerte y prisión perpetua por los llamados "crímenes contra la seguridad del Estado". Ese instrumento legal estuvo en vigencia hasta el final de 1978, por tanto tuvo aplicación durante los primeros cinco años de la apertura política. El Decreto-Ley 898/69 establecía como conceptos básicos de seguridad nacional "la garantía de la consecución de los objetivos nacionales contra antagonismos, tanto internos como externos", comprendiendo "esencialmente medidas destinadas a la preservación de la seguridad externa e interna, incluso la prevención y represión de la guerra psicológica adversa y de la guerra revolucionaria o subversiva" que constituyan la "base ideológica democrática contra la ideología totalitaria marxista-leninista" (17) en el sentido de defender sus preceptos, reprimiendo todo lo que a ello se contrapusiese.

La Constitución de 1969 (Enmienda Constitucional n° 1) en su artículo 86 y el Decreto-Ley 898/69 en su artículo 1°, preconizaban que "toda persona natural o jurídica, es responsable por la seguridad nacional, en los límites definidos en ley", precepto que constó también de la Constitución de 1967 y del Decreto-Ley 314/67, que la precedió.

Dentro de la concepción de que la Seguridad Nacional debe interpretar y realizar los intereses de todos los ciudadanos en defensa del Estado, la Constitución de 1969, impuesta por medio de la Enmienda Constitucional ° 1 a la Constitución de 1967, establece que el Consejo de Seguridad Nacional "es el órgano de más alto nivel en la asesoría directa al Presidente de la República, para la formulación de la política de Seguridad Nacional", con el encargo de fijar los "objetivos nacionales permanentes y las bases para la política nacional". Para la ejecución de los objetivos nacionales preconizados por la doctrina de seguridad nacional, la ley creó una complicada red de represión, comandada por el Servicio Nacional de Informaciones (SNI) y por el Departamento de Policía Federal que tenía la atribución de apurar las infracciones penales contra la seguridad nacional y el orden político y social, y formada, además, por varios órganos de seguridad e información localizados en todos los Ministerios, órganos de administración directa, empresas públicas del Gobierno Federal, Secretarías de Seguridad Pública de los estados y también en órganos de los municipios brasileños.

Completado cinco años de apertura política, período en que fue aplicada la Ley 898/69 en flagrante violación a los elementales derechos humanos, el Gobierno decidió llevar a la consideración del Congreso Nacional un proyecto de ley atenuando algunos dispositivos contenidos en la Ley vigente. No obstante, el Congreso no se pronunció sobre el citado proyecto de ley, por considerar que el mismo contenía básicamente la esencia de la filosofía de Seguridad Nacional no compartida por la gran mayoría de la sociedad brasileña, además de que, en ocasiones anteriores, el Gobierno igualmente institucionalizó esa doctrina por medio de Decretos-Leyes. Por tal razón, el proyecto fue transformado en ley mediante el recurso constitucional de "decurso de plazo", siendo que esa Ley llevó el número 6.620 y fue sancionada el 17.12.78. Aunque la nueva Ley de Seguridad Nacional no hubiese sido aprobada por el Congreso, ésta puede ser entendida como una manifestación de buena voluntad del General Geisel para con el Congreso, puesto que hacía parte del proceso de cambio político y de retirada gradual de los instrumentos legales más arbitrarios.

Tal Ley 6.620/78 define como Seguridad Nacional el "estado de garantía proporcionada a la Nación, para la consecución de sus objetivos nacionales, dentro del orden jurídico vigente", y declaraba como objetivos nacionales: la soberanía nacional, la integridad territorial, el régimen representativo y democrático, la paz social, la prosperidad nacional y la armonía internacional. La dictación de este texto legal

significó una adecuación al que estaba establecido en la Enmienda Constitucional nº 11, en tanto suprime del sistema jurídico penal las penas de muerte y de prisión perpetua.

Cumplida una etapa más de la transición política, la Nación no necesitaba de un instrumento jurídico que continuaba siendo un pesadilla en las cabezas de los ciudadanos brasileños. Las presiones de los parlamentarios de oposición, los reclamos de toda la comunidad civil, especialmente de la Orden de los Abogados de Brasil (OAB), de la Asociación Brasileña de Prensa y de la Iglesia Católica, (18) motivaron al Gobierno del Presidente João Figueiredo a llevar a la consideración del Congreso Nacional un nuevo proyecto. En su "Exposición de Motivos" el señor Ministro de Justicia Ibrahim Abi-Ackel justifica la promoción de ese proyecto mediante la necesidad del país de tener una "Ley de Seguridad Nacional más ajustada a evolución actual de la sociedad brasileña en el sentido de la construcción del régimen democrático y del Estado de Derecho". La tramitación del proyecto de ley tardó en el Congreso menos de 30 días ya que el mismo fuera tramitado en "régimen de urgencia", no obstante lo cual varios juristas de renombre nacional pudieron manifestar su posición al respecto en algunas sesiones de las Comisiones de las dos Casas del Congreso. El proyecto fue aprobado en el Congreso y sometido a la sanción presidencial el 14 de diciembre de 1983, habiendo llevado el número 7.170.

Una de las cuestiones más discutible por los juristas del área del Derecho Constitucional y Derecho Penal fue la sujeción de los civiles a la Justicia Militar, hecho admitido a través del Acto Institucional nº 2 de 1965 en casos de crímenes cometidos contra la seguridad nacional. Otro caso típico de arbitrio contenido en la Ley de Seguridad Nacional fue el poder conferido a la "autoridad responsable por investigación" para determinar prisión por 30 días de una persona acusada de haber practicado un delito considerado atentado a la seguridad del Estado, y para determinar la incomunicación de esa misma persona por 8 días, a criterio de esa misma autoridad. En cualquier país civilizado, como lo era en Brasil antes de 1965, es competente para decretar la prisión de una persona la autoridad judicial (el Juez), o en casos de flagrante delito la autoridad de la Policía, guardando las formas legales del caso.

Paradójicamente, había un cierto desencuentro entre los "legisladores" del Poder, el aparato de seguridad (policía civil y militar, que sometía la Nación al terror de la arbitrariedad), y la Justicia Militar. No siempre la calificación de las acciones como delitos contra la Ley de Seguridad Nacional que hacían las autoridades responsables de la represión de los crímenes contra los objetivos nacionales, eran considerados de igual forma por la Justicia Militar que en muchos casos no aceptó las pruebas que habían sido obtenidas mediante torturas, atenuando y desclasificando la aplicación

de dispositivos de una ley perversa. Es importante señalar la actuación del Superior Tribunal Militar (STM) en la apreciación de las apelaciones que a él eran presentadas por personas condenadas por crimen contra la Seguridad Nacional que en su mayoría conseguían la absolución de ese Órgano Superior de Justicia. El ilustre jurista Antonio Evaristo de Moraes Filho (19) dijo que el desempeño del STM, en relación a los juicios de los presuntos delitos contra la Seguridad Nacional, fue "el único y verdadero milagro brasileño" ocurrido durante la vigencia del arbitrio.

Para consecución de los objetivos de la Doctrina de Seguridad Nacional, los Gobiernos militares montaron e hicieron funcionar un complejo sistema de informaciones, integrado por agentes civiles y militares que, comandado por el Servicio Nacional de Informaciones (SNI), vigilaba y perseguía a todos los ciudadanos contrarios al régimen impuesto por la "revolución" de 1964. (20)

Como ya hemos visto, la doctrina de seguridad nacional surgió en Brasil mucho antes de la "revolución" de 1964, esa ha ocurrido después de la segunda guerra mundial, con la creación de la Escuela Superior de Guerra (ESG) la cual se encargó de fijar las directrices ideológicas de esa doctrina, realizando para tanto estudios de los diversos problemas nacionales y procediendo a la enseñanza de sus principios y métodos que era obligatoria a todos los oficiales superiores de las

fuerzas militares, bien como a aquellos civiles simpatizantes del sistema militar que ocupaban puestos de gran magnitud y importancia en los escalones de los órganos y entidades del gobierno federal, de los estados y de los municipios. El conocimiento de esa doctrina era considerado fundamental por los órganos del sistema de informaciones toda vez que una persona pudiera acceder a un alto cargo o función pública en cualquier esfera de poder. Fueron tantos los que se sometieron a ese doctrinamiento que en cada estado brasileño aparecieron las Asociaciones de Diplomados de la Escuela Superior de Guerra (ADESG), esas asociaciones también promovían cursos, seminarios y conferencias sobre temas de interés nacional, dando énfasis a los contenidos y metodologías preconizados por la doctrina de seguridad nacional, o sea a que se puedan alcanzar los objetivos nacionales establecidos en el orden jurídico vigente, que se traducían en el intento de propiciar un desarrollo con seguridad.

Esa doctrina que tenía como objetivo primordial proteger el Estado del enemigo externo - países que defendían los procesos revolucionarios marxistas, y también combatir el enemigo interno - que según los militares eran las personas que de dentro del propio país buscaban o intentaban a subvertir el orden político y crear un caos económico y social, no consiguió que Brasil alcanzarse la situación que ella propugnaba, y que por lo contrario estableció en el país un clima de inseguridad política, jurídica, económica y social, generando con todo eso

una inestabilidad interna sin precedentes en la historia de esa nación que ha dejado reflejos negativos para toda la sociedad brasileña.

Con el correr del tiempo ya con el proceso de transición caminando para su consolidación (si es que se puede llamar de consolidación de la fase de transición a la derogación de los actos arbitrarios y el retorno del país a la normalidad democrática), la ideología de seguridad nacional en Brasil dejó de ser el punto principal, y sus fundamentos ideológicos pasaron a un plano que se puede decir secundario, mismo porque el bipolarismo este-oeste (mundo comunista, comandado por la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas contra el mundo capitalista, comandado por los Estados Unidos de América, o al revés) cede lugar a los problemas norte-sur, es decir países dichos ricos contra los países reconocidos como pobres. De ahí que en el período estudiado, aunque bajo el dominio y la hegemonía de un Estado de Seguridad Nacional, ocurrieron en el país algunos hechos políticos y sociales que se contradicieron con esa doctrina, entre los cuales se puede señalar: a) pluralidad ideológica, que se constataba con las discusiones y divergencias dentro del propio gobierno militar de la forma de organización política que el país debería adoptar; b) luchas entre tendencias, una defendía el binomio seguridad y desarrollo y la otra integración nacional y soberanía; c) conflictos entre algunas empresas públicas y empresas privadas, cuyas decisiones escapaban del control del aparato del Estado, y d)



enfrentamiento creciente entre militares y la gran burguesía.

II.2.5. La Concesión de Amnistía

Con el advenimiento del movimiento militar de 1964 muchas violaciones y arbitrariedades fueron cometidas contra los Derechos Humanos por todos los canales represivos creados a partir de la edición del Acto Institucional nº 1. Así varios políticos (expresidentes, Gobernadores, Diputados Federales, Senadores, Diputados Estaduales, Alcaldes y Concejales), vieron cesados sus mandatos y/o sus derechos políticos suspendidos por diez años. Líderes de sindicatos, de asociaciones de clases, militares, profesores, padres y otros representantes de todas las clases de la sociedad brasileña, también vieron sus derechos políticos suspendidos o fueron encarcelados y condenados en base a los Actos Institucionales y a la Ley de Seguridad Nacional. La oposición que desde el primer momento se rebeló contra las medidas represivas y las agresiones a los derechos fundamentales a que eran sometidos los ciudadanos brasileños, insistía en la necesidad de volver al país a la normalidad democrática. En 1978 la oposición representada por el PMDB consiguió movilizar una gran parte de la población para exigir en grandes concentraciones en plaza pública la concesión de amnistía amplia, general e irrestricta a todos aquellos que sufrieron la aplicación de tan perversa norma legal. El Presidente Geisel en conformidad con su esquema de apertura gradual y para promover la reconciliación política concedió la

revocación de los decretos en virtud de los cuales se había expulsado del país 120 ciudadanos que fueron desterrados en su mayoría en los años de 1969/1970. No obstante, ocho influyentes políticos desterrados fueron específicamente excluidos de esta amnistía, entre ellos el señor Leonel Brizola, ex-Gobernador del estado del Rio Grande del Sur y cuñado del expresidente João Goulart, depuesto por la "revolución", y el señor Luis Carlos Prestes, ex-Secretário General del Partido Comunista Brasileño. (21)

Los movimientos y las acciones de los políticos de oposición y de la mayoría de los sectores de la sociedad civil en favor de que el Congreso Nacional votarse una ley de amnistía amplia, general e irrestricta hizo que el Presidente João Figueiredo sometiera a la consideración del Congreso un proyecto de ley en ese sentido, aunque no tan amplio. La coordinación política de ese proyecto estuvo a cargo del Ministro de Justicia, señor Petrônio Portela, quien tuvo un papel de gran importancia en la conducción de esta tarea. De ahí surgió la Ley 6.683, de 28 de agosto de 1979, que concedía amnistía a todos quienes, en el período comprendido del 2 de septiembre de 1961 a 15 de agosto de 1979, cometieron crímenes políticos o conexos con estos, crímenes electorales y a los que vieron sus derechos políticos suspendidos. Con vistas a crear instrumentos eficaces a la aplicación de la Ley aprobada, el Gobierno dictó el 31 de octubre de 1979 el Decreto 84.143. La oposición que deseaba una ley de amnistía amplia, general e

irrestriccta no estuvo totalmente satisfecha toda vez que los "crímenes conexos" amnistiados podrían beneficiar a militares acusados de práctica de tortura, y, además, el Gobierno no había dado una respuesta para los casos de los 197 ciudadanos brasileños muertos en manos de las fuerzas de seguridad del Estado, desde 1964. (22) A mayor abundamiento, no obstante la vigencia de la Ley de Amnistía, muchos brasileños continuaron sufriendo la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional que permanecía en vigor.

Como la aplicación de la Ley de Amnistía no satisfacía a todos aquellos que se hallaron perjudicados por los actos de la represión militar, fueron surgiendo varios grupos y asociaciones organizadas, tanto en la área militar como civil, para defender ante las fuerzas políticas y ante la justicia los derechos que esas personas consideraban violentados. Esos movimientos, entre los cuales se puede citar a la Asociación dos los Militares Cesados, a la Asociación Democrática y Nacionalista de Militares, a la Unión de los Militares no Amnistiados y al Movimiento Femenino por Amnistía y Libertades Democráticas defendían principalmente el regreso de los militares a las filas de las Fuerzas Armadas. Con ocasión de la discusión en el Congreso Nacional del proyecto de Enmienda Constitucional que convocaría una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva Constitución, las mismas entidades organizaron una movilización de la opinión pública y presionaron a los congresistas, consiguiendo que fuesen

introducidos en el texto de la enmienda normas que concedían amnistía a todos los servidores públicos civiles, de la Administración directa e indirecta y militares, penalizados por actos de excepción, y a los autores de crímenes políticos o conexos, dirigentes y representantes de sindicatos y órganos estudiantiles, servidores y empleados que hubiesen sido cesados o dispensados por motivación exclusivamente política, con base en otros textos legales, por ejemplo la Ley de Seguridad Nacional. Se dejó a criterio de la Administración Pública la iniciativa de readmitir o revertir al Servicio Público a los funcionarios dimitidos, así como la aplicación integral de la amnistía concedida en los términos de la Enmienda Constitucional n° 26 en cuestión.

Aún con dictación de los instrumentos jurídicos arriba mencionados, persistían dudas sobre la aplicación de la amnistía y las personas que no se sintieron beneficiadas por la legislación vigente sobre este asunto, volvieron a presionar a las fuerzas políticas, presión que llegó a la Asamblea Nacional Constituyente. Algunos militares castigados por la "revolución", reclamaban que deberían volver a los cuarteles con derecho a las promociones y a los sueldos que tendrían derecho si no hubiesen sido apartados de sus puestos militares. Los Jefes Militares y algunos destacados líderes políticos no concordaban que esos militares retornasen a sus antiguas corporaciones militares, argumentando que el periodo fuera de los cuarteles (algunos por más de 20 años) ya no les

permitía acompañar y sintonizarse con la disciplina y la dinámica militar. La Asamblea Nacional Constituyente aprobó en su artículo 8º de los Actos de Las Disposiciones Constitucionales Transitorias (23) una ampliación a la amnistía, concediendo a la personas afectadas por actos de excepción en razón de haber cometido crímenes exclusivamente de naturaleza política durante el período comprendido entre el 18 de septiembre de 1946 y 5 de octubre de 1988 promociones en la inactividad al cargo, empleo, puesto o graduación a que tendrían derecho si estuviesen en servicio activo, derechos que solo generarían efectos financieros a partir de la fecha de promulgación de la Constitución (5 de octubre), prohibiéndose los efectos remuneratorios retroactivos.

II.2.6. El Movimiento Sindical

Al estallar el movimiento militar de 1964, regía en Brasil la Constitución de 1946, considerada una carta democrática. Fue justamente en la década de 40 y en los años siguientes a este Documento Mayor, cuando los derechos sociales de los trabajadores empezaron a ser reconocidos y garantizados. La Carta de 1946 reconocía el derecho de huelga y la libre asociación profesional y sindical, pero dentro de los términos de la ley (arts. 158 y 159 del Texto Constitucional). (24) El Gobierno militar al reglamentar el ejercicio al derecho de huelga, la prohibió para los servidores públicos y creó bastantes dificultades para los servidores del sector

privado, imposibilitando así su práctica por los empleados. Este derecho de huelga aun estando consignado en la Constitución de 1946 no fue reglamentado por los gobiernos sucesivos. Gobiernos esos que fueron llamados "populistas", en tanto estaban siempre gobernando con la mayoría de la población y no encontraban dificultades legislativas para aprobación de cualquier de sus proyectos.

La Constitución de 1967 también admitía la libertad de asociación profesional y sindical y aseguraba el derecho de huelga, pero no permitía huelga en los servicios públicos y actividades esenciales definidas en ley. La prohibición de huelga para las actividades esenciales contenida en documento constitucional hizo que el gobierno reglamentase esa cuestión, por medio del Decreto-Ley 1.632/78 que tornó más rigurosa la decretación de legalidad de una huelga, incluso porque el Presidente de la República podía considerar, a su criterio, cualquier actividad como esencial y la infracción de ese precepto podría ser encuadrado en la Ley de Seguridad Nacional que preveía penas arduas para los infractores. La Carta Constitucional de 1969 (Enmienda Constitucional nº 1) mantuvo los mismos preceptos consignados en la Constitución de 1967, sin embargo su aplicación siempre estuvo dependiendo de las reglamentaciones, que generalmente eran contrarias a los intereses de los trabajadores.

Desde el inicio del régimen militar, los sindicatos empezaron a ser desmovilizados. Las conquistas obtenidas por algunos trabajadores quedaron sin efecto y el Gobierno comenzó a idear una nueva relación entre sindicatos y Estado, donde estos estarían sujeto a la deliberación del Ministerio del Trabajo para su organización y funcionamiento. En ese período los "líderes" sindicales recibían becas de preparación para las actividades sindicales pagadas por el Estado. Una prueba de esa subordinación de los sindicatos al Gobierno está en el Decreto 76.404, de 8 de octubre de 1975, que disponía sobre el apoyo financiero con recursos de la Unión, a programas ejecutados por entidades sindicales.

A pesar de una serie de leyes, decretos-leyes, decretos, portarías, resoluciones y otros instrumentos reglamentarios dictados por el régimen militar, alterando la legislación anterior y creando mecanismos jurídicos de organización, funcionamiento y control de los sindicatos, es de subrayar que la Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT), texto dictado en 1943 por el entonces presidente de la República Getulio Vargas, permaneció casi intacta en su esencia, durante todo el tiempo de la arbitrariedad.

Dentro del proceso de apertura lenta y gradual, el Gobierno intentó liberalizar un poco la legislación sindical y de huelga, llegando a presentar una propuesta de revisión de la legislación laboral que hacía concesiones cuanto a la

organización interna de los sindicatos, negociación colectiva, política salarial y representación sindical. (25) No obstante, la misma no fue aceptada por los sindicatos bajo la alegación de que aún contenía limitaciones en cuanto al derecho de huelga y permanecían otros tipos de controles por parte del Gobierno sobre la autonomía de los sindicatos.

La primera acción del "nuevo sindicalismo" brasileño ocurrió en mayo de 1978 con una paralización "blanca" que consistía en registrar la frecuencia, permanecer en sus sitios de trabajo pero no conectar las máquinas. Esto aconteció en la fábrica de camiones y autobuses "Saab Scania" en la zona industrial paulista de San Bernardo del Campo, donde 2.500 metalúrgicos, comandados por Luiz Inácio Lula da Silva, así procedieron. Los dirigentes de la fábrica nada pudieron hacer, pues no sabían como colocar a los empleados para trabajar ni podían llamar a la policía para retirarlos de dentro de la fábrica. A partir de ahí varias paralizaciones similares o disminución del ritmo de trabajo (huelga "tortuga") ocurrieron para diversas fábricas, obligando a los empresarios a negociar directamente con los trabajadores. El gobierno, a su vez, adoptó una posición un poco liberal (26) eximiéndose de intervenir en la cuestión, lo que, en todo caso, no significó que los trabajadores siempre obtuvieron éxitos, muchos no lograron alcanzar resultados satisfactorios. La actuación del sindicato de los metalúrgicos bajo el comando de Luis Inacio da Silva (Lula), fue bastante comentada e incluso elogiada por

sectores progresista de la iglesia católica y por gran parte de la prensa, que alegaban haber sido la apertura política utilizada para promover la activa participación sindical y la repuesta represiva del gobierno que evidenciaba sus verdaderas intenciones. (27) La gran mayoría de las huelgas ocurridas a partir de 1978 fueron consideradas ilegales y atentatorias a la seguridad nacional, originando varias detenciones de sindicalistas e intervenciones en sindicatos, principalmente los considerados "combativos".

Los sindicatos se preocupaban en fortalecer sus estructuras internas y al mismo tiempo crear una organización de carácter nacional con el objetivo de conjugar esfuerzos para discutir la problemática sindical a nivel nacional. En 1977 surgió la propuesta para la realización de un evento que se llamaría Congreso Nacional de la Clase Trabajadora (CONCLAT). Por esa fecha existía en los movimientos sindicales activos, algunas tendencias sindicales que luego se destacarían: una primera, llamada "oposición sindical" integrada por sindicalistas de base que optaban por formar comisiones de fábricas y acciones fuera de la estructura sindical direccionada para el gobierno; una segunda, llamada "auténtica", trabajaba dentro de la estructura sindical, preconizaba una autonomía sindical, y una tercera promovía la creación de la "Unidad Sindical" y buscaba conquistas de posiciones jerárquicas dentro del movimiento operario. En el primer CONCLAT realizado en 1981, entre los varios temas de

interés de los trabajadores, fue creada la Comisión Pro-CUT (posible Central Única de los Trabajadores). De ahí surgió la división del movimiento sindical, de un lado los que estaban a favor de un sindicalismo de base, bajo el comando de los metalúrgicos de São Bernardo, y del otro los que estaban a favor de una acción sindical más moderada. En julio de 1983 los "auténticos" adeptos a la facción Pro-CUT instituyeron la Central Única de los Trabajadores (CUT), y en noviembre de este mismo año la tendencia opuesta instituyó la Coordinación Nacional de la Clase Trabajadora (CONCLAT). La utilización del término "coordinación" dejaba claro que esta tendencia no pactaba con la idea de una central. Con la creación de estas dos entidades intersindicales, el movimiento sindical brasileño pasó a estar orientado por dos corrientes: la primera (CUT) liderada por sindicalistas emergentes ("auténticos"), y la segunda, conducida por sindicalistas tradicionales (moderados) que ya habían sido dirigentes o interventores de sindicatos en el periodo "áureo" de la dictadura.

Aún con las dificultades con las que se encontraron en el periodo de transición, el movimiento sindical brasileño consiguió expandirse pasando de 2.925 en 1974 a 10.180 entidades sindicales en 1988, según datos suministrados por la Subsecretaría de Organización Sindical del Ministerio de Trabajo computados hasta el 31 de octubre de 1988. Este considerable

incremento se suscitó a partir del año 1979 gracias al impacto social que produjo la concesión de la amnistía.

La Constitución de 1988 en su artículo 8º establece que la asociación profesional o sindical es libre, excluyendo la autorización del Estado para la creación de sindicatos, y vedando la interferencia o intervención del Poder Público en su organización y funcionamiento. Según ella es libre la afiliación sindical y obligatoria la participación de los sindicatos en las negociaciones colectivas de trabajo. El párrafo XVIII del Capítulo I "De los Derechos y Deberes Individuales y Colectivos" señala que la creación de asociaciones no depende de la autorización ni admite interferencias del Estado en su funcionamiento. En virtud de ello, los trabajadores que crearon sindicatos a partir de la vigencia de esta Carta Magna entendieron que no era necesario hacer el registro en el Ministerio del Trabajo ni someterse a ningún tipo de control. Ello ocasionó que el asunto fuese a la consideración de la Justicia. El Superior Tribunal de Justicia apreciando la acción de Mandamiento de Seguridad determinó al Ministro del Trabajo que examinase las peticiones de registro de los sindicatos que le fueren sometidas y, a la vista de los documentos presentados, conceda o deniegue el registro. El Ministerio del Trabajo, basado en la decisión de la Egregia Corte de Justicia, dictó algunos requisitos para el procesamiento de registro de entidades sindicales. Sin embargo los sindicatos no hallaban necesario tal registro y

continuaron creándose y funcionando sin proceder al registro en el Ministerio del Trabajo.

II.2.7. Los Movimientos Sociales

Los movimientos sociales en Brasil existen mucho antes de la dictadura militar de 1964, como forma de presionar y llamar la atención de los poderes públicos para ver atendidas sus reivindicaciones o necesidades. La represión y compresión a que estaba sujeta la población brasileña en los primeros diez años del régimen militar, llevaron a que las necesidades materiales de gran parte de la población se intentasen satisfacer a través de la búsqueda de medios de supervivencia personal, pues el individuo no tenía condiciones de discutir masiva o colectivamente sus derechos que estaban siendo violados o no atendidos.

En el inicio de la década de 70 empezaron a emerger los primeros movimientos sociales de insatisfacción contra las pésimas condiciones de vida de la población, principalmente de la población de periferia, y contra la política económica del gobierno central que se demostraba esencialmente concentradora de renta - los más ricos cada vez más ricos y los más pobres, la gran mayoría de la población, cada vez más pobre, no obstante estar en un época en que el crecimiento económico - "el milagro" - alcanzó índices de los más expresivos. Con esa política el Estado es visto como una matriz esencialista,

enemigo autoritario contra el cual se moviliza la sociedad civil y ese carácter "antiestado" preconizado por movimientos sociales configura una relación de negación y oposición que encubre el potencial del Estado de actuar como inductor de las demandas de la sociedad insatisfecha. (28)

El crecimiento y la amplitud de los problemas urbanos llevaron a ciertos sectores de la población civil a una insatisfacción generalizada, pues en las ciudades, principalmente de gran porte - capitales de los estados y ciudades con más de 50.000 habitantes - no tenían, en casi su totalidad, ninguna condición de infraestructura urbana, tales como: energía eléctrica, saneamiento básico, habitación, servicios de transportes colectivos, asistencia sanitaria etc. Aquellos que detentaban el capital (empresarios y altos funcionarios públicos) conseguían formar sus propias comunidades dotados de todos los medios infraestructurales, además de alcanzar, cuando fuese deseable, los órganos del poder público para presentar sus solicitudes casi siempre atendidas. Los altos escalones del gobierno tenían una perfecta relación con esa parcela privilegiada de la sociedad civil, mientras que los obreros, empleados de comercio y funcionarios públicos que no eran parte de la cúpula del gobierno, no disponían de mecanismos legales o políticos para llevar sus reivindicaciones hasta el conocimiento de los órganos del poder público. Ni los mismos políticos acorralados y manipulados por el gobierno, podían hacer la defensa de los

derechos y de las necesidades de ese gran contingente de la población de Brasil. Esa camada marginada de la población no tenía ningún otro medio o instrumento para presionar o hacer llegar sus reivindicaciones a los órganos del gobierno que no fuese por medio de manifestación colectiva o popular. Esas manifestaciones en algunos casos eran organizadas, otras funcionaron de forma espontánea e inmediata, desencadenando una reacción inesperada y explosiva frente a una situación insatisfactoria de supervivencia y de "contradicción urbana".

Esos movimientos sociales procuraban en la medida de lo posible ser "apartidario", es decir no demostrar vinculación con ningún partido político, pero sus reivindicaciones, por ser de cuño social, encajaban con los programas defendidos por los partidos políticos, notoriamente con aquél o aquellos partidos que constituyeran la oposición. Citamos el estado de São Paulo - el más grande de Brasil - en que esos movimientos en su mayoría tenían el incentivo y el comando del Partido de los Trabajadores (PT). (29) Otro segmento de la sociedad que ha servido de paño de fondo para las manifestaciones de esos movimientos sociales fue la iglesia católica, que por medio de sus organismos de defensa de los derechos humanos (Centros de Derechos Humanos y Comisiones de Justicia y Paz), y por las creadas Comunidades Eclesiásticas de Base (CEB,s), incentivó y apoyó muchas de las reivindicaciones de los movimientos sociales.

Es importante subrayar que el nivel de las reivindicaciones de los movimientos sociales no se limitó solamente a las cuestiones de las necesidades urbanas, fue más allá, ellos defendieron también la vuelta del país al Estado de Derecho y a la Democracia. Así lo hicieron, por ejemplo, los Comités Pro Amnistía y la Campaña "Directas Ya", entre otros.

A partir de la apertura política surgieron millares de movimientos, previamente organizados o no, en todo el país, entre los cuales se puede mencionar: las Asociaciones de Barrios o Asociaciones de Vecinos, las Asociaciones de Clases o de Categorías Profesionales, los Clubes de Madres de la Periferia, los Clubes de Jóvenes, las Comunidades Eclesiásticas de Base, las Sociedades de Amigos de Barrios, la Asociación de Consumidores, la Asociación de los Trabajadores Sin Tierras, los Movimientos Contra el Costo de Vida, los Movimientos pro Guarderías, los Movimientos pro Amnistía etc. Muchos movimientos sin organización previa también acontecieron y tuvieron participación de real importancia en varios puntos del país, a saber: los que provocaron "quiebra-quiebra" de autobuses, de trenes y estaciones de pasajeros, los de invasión o toma de tierras y fincas abandonadas, los de invasión o toma de conjuntos de vivienda, etc.

Otros movimientos surgieron también como factor de presión para que fuese reconocidos y institucionalizados ciertos derechos de "minorías" que sufrían discriminación por

parte de otros sectores o grupos de la sociedad, entre los cuales destacamos: Movimientos Feministas, Movimientos de Defensa de las Mujeres Obreras, Movimientos de Protección a los Negros, Movimientos de Homosexuales, Movimientos Culturales, etc.

En el transcurso de la transición los movimientos sociales pasaron a tener una relación más estrecha con el gobierno. Las reivindicaciones de las necesidades urbanas en su gran mayoría dejaron de ser consideradas simplemente reivindicaciones y merecieron un tratamiento institucional, pues es justamente en la interacción con el gobierno que la mayoría de los movimientos sociales concreta y consigue alcanzar sus demandas. El Estado procura así diluir la insatisfacción social creando en la esfera del poder, órganos de atención, orientación y defensa de esos derechos y necesidades e incentivando a los gobiernos de los estados y municipios para de la misma forma proceder. A nivel del gobierno federal fueron creados para atender a la demanda de los movimientos sociales una Secretaría Especial de Asuntos Comunitarios, una Comisión de Estudios sobre la Censura, un Consejo de Defensa del Consumidor, un Consejo Nacional de los Derechos de la Mujer.

Los movimientos sociales, como expresión inmediata de la necesidad y voluntad popular, siguieron un determinado ciclo de vida, configurado por la obtención de resultados positivos o

negativos en relación a las demandas. Generalmente la obtención de los servicios reivindicados representó el fin del movimiento y solamente en ciertas situaciones los líderes consiguieron mantener la población movilizada para reivindicar la solución de otras necesidades y carencias. (30)

Aunque no se presente en este trabajo una lista completa de los principales derechos fundamentales que fueron reivindicados por los movimientos sociales en su conjunto, se puede señalar que esas reivindicaciones se configuraban como derechos sociales y económicos que surgían por motivo de las precarias condiciones de vida y de una carencia absoluta en todos los sentidos de la mayoría de los ciudadanos brasileños. Los movimientos sociales que representaban las clases populares, es decir los pobres y los desafortunados, se confrontaba con serios obstáculos para exigir el cumplimiento de los derechos humanos de sus representados. En primer lugar por la primacía de forma institucionalizada dada a los derechos individuales en detrimento de los derechos colectivos, y en segundo lugar estaba la imposibilidad que tenía los gobiernos del período de la transición de tornar efectivo el ejercicio de los derechos sociales, pues los derechos reivindicados por las clases populares podrían no contribuir o mismo distorsionar los planes económicos establecidos por los gobiernos militares, o aún generar conflictos sociales y desajustes políticos graves.

II.2.8. La Actuación de la Iglesia

Desde el inicio del proceso dictatorial la iglesia católica tuvo una destacada participación en la lucha contra la dominación militar. Es cierto que, lo que se podría llamar, el ala conservadora de esa misma iglesia mantuvo por algún tiempo una vinculación hasta cierto punto de complicidad con el gobierno militar en la medida que se callaban delante de barbaries que eran practicadas por las fuerzas militares y sus mecanismos "legales" por ellas impuestos.

No obstante, existían en el seno de la iglesia católica algunos movimientos de militantes jóvenes paraeclesialísticos que actuaban en las cuestiones religiosas-sociales, entre las cuales se destacaron la "Juventud Estudiantil Católica" (JEC), la "Juventud Universitaria Católica" (JUC) y la "Juventud Obrera Católica" (JOC), pero el gobierno militar consiguió, luego en el inicio de la dictadura, librarse de esa militancia activa de la iglesia católica por medios de medidas represivas y opresivas. Además contribuyó denotadamente para la aniquilación de esos movimientos la división interna que se procesó en la iglesia con la aparición de dos segmentos, los llamados "progresistas" y los "conservadores". La participación de la iglesia católica quedó por algún tiempo limitada a las acciones y pronunciamientos estrictamente religiosos de los miembros del episcopado. (31)

La crisis vocacional en la iglesia católica redujo su capacidad de renovación, pero las contradicciones urbanas que atravesaba la mayoría de la población brasileña, sin las mínimas condiciones dignas de vida, hicieron con que los religiosos "progresistas" con la colaboración de intelectuales, teólogos y laicos, adoptasen una nueva postura de acción surgiendo una "iglesia renovada". Es importante decir que todo eso sufrió la influencia de dos eventos significativos de la Iglesia Católica: La Segunda Conferencia de los Obispos de la América Latina, realizada en Medellín, Colombia, en octubre de 1968 y la Tercera Conferencia de los Obispos de América Latina, realizada en Puebla, México, en 1974. A partir de la discusión de los temas allí tratados, especialmente en Puebla, la iglesia católica brasileña empezó a dirigir sus acciones hacia los pobres y oprimidos, proclamando la "opción preferencial por los pobres", e instituyendo la "iglesia del pueblo".

El Estado empezaba a ver a la iglesia católica llena de "subversivos" y comunistas. Padres y obispos eran perseguidos y denunciados por grupos de ultraconservadores apoyados por el régimen militar que les acusaba de atentar contra la seguridad del Estado. Pero toda esa persecución no fue bastante para intimidarlos. La iglesia ya había escogido su camino: defender los pobres y oprimidos. En 1973, con ocasión del vigésimo quinto aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos las iglesias cristianas, excluida la pentecostal, lanzaron por el país una campaña en defensa de los

derechos humanos, primer decisivo llamamiento colectivo de
afrenta a las arbitrariedades que venían practicando las
fuerzas del Estado autoritario.

Ya dentro del periodo de transición las atrocidades
del régimen militar continuaban aconteciendo. En São Paulo la
muerte del periodista Vladimir Herzog, en octubre de 1975, y
cuatro meses después del operario Manoel Fiel Filho, torturados
en las dependencias de las fuerzas militares represivas,
acusados de comunistas, tornáronse en la "última gota" que la
sociedad civil podría soportar. La iglesia promovió un culto
ecumenico que marcó su compromiso contra todo aquellos abusos,
y pasó a obrar con credibilidad moral en nombre de la sociedad
civil. La Comisión de Justicia y Paz del Arzobispado de São
Paulo comandó una campaña contra la tortura y por el
restablecimiento de los derechos que estaban siendo violados.

Esa misma iglesia católica enfrentaba problemas para
su supervivencia. La marginación de las grandes ciudades
propiciaba la proliferación de sectas, confesiones e ideologías
religiosas que hacían concurrencia con ella. Los fieles y
adeptos de esas nuevas "religiones" aumentaban cada vez más
amenazando la capacidad de la iglesia católica de mantenerse y
continuar combatiendo las violaciones a los derechos humanos.
Unido a ello, pesaba su secular y medieval estructura y la
falta de recursos financieros. Sin embargo, la regionalización
de la iglesia católica en Brasil favorecía la imaginación y

creatividad de ideas y acciones para continuar con sus propósitos. Mientras en São Paulo esa iglesia procuraba medios para suplantar sus dificultades de supervivencia, en otras regiones del país, sobre todo en el Nordeste, fueron surgiendo las Comunidades Eclesiásticas de Base (CEB,s) que eran un instrumento dentro de la estructura de la iglesia católica, surgido para "crear nuevos métodos de evangelización". (32) Ellas en su primer plan de acción, ya con la integración de São Paulo, empiezan a actuar junto a los desempleados, trabajadores de renta baja, habitantes de la periferia y obreros no sindicados de las ciudades satélites.

La iglesia católica por medio de su órgano máximo la "Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil" (CNBB) estuvo siempre contestando y presentando denuncias por los ataques que sufrían. En sus asambleas anuales los obispos de todo el País examinaban y se pronunciaban sobre todas las cuestiones de violación de los derechos humanos y contra la ingerencia del Estado en los asuntos de la iglesia. La CNBB procurando ir al encuentro de la población, especialmente de los pobres y perseguidos, formalizó la institución de nuevos organismos para apoyar y proteger los derechos de estos segmentos de la sociedad. Así surgieron en 1972 el Consejo Indigenista Misionero (CIMI), en 1974 el Encuentro Nacional Intereclesiástico (para cambio de experiencia de las CEB,s), y la Comisión Pastoral de la Tierra en 1975. Todos esos organismos se tornaron autónomos de la CNBB, pero vinculados al Arzobispado

del lugar de su actuación. Básicamente ellos desempeñaron las siguientes funciones: en caso del CIMI se localizaban en lugares de fronteras del país luchando contra la intervención del capital que amenazaba las tierras indígenas y actuaba como portavoz de los indios, procurando darles asistencia donde los órganos del gobierno eran omisos y negligentes; en el caso de la Comisión Pastoral de la Tierra actuaba en la defensa de los trabajadores rurales, pequeños propietarios de tierra y de los trabajadores sin tierra, y en el caso de las CEB,s existían más de 800 comunidades organizadas en todo el país, que se confundían en algún momento y en algún lugar con un movimiento popular organizado, pero eso no era todo, era una organización donde se cultivaba el espíritu por medio de la fe cristiana y de la enseñanza de la religión católica y también se buscaban fórmulas para la superación de la pobreza y de la miseria profunda. Para el fraile Leonardo Boff (33) "las CEB,s fueron elaborando, consecuentemente, una caminata bien articulada con la gran iglesia y con los demás movimientos populares. Es en el interior de ellas (CEB,s) que la propia iglesia como un todo se está renovando en sus prácticas, en un nuevo tipo de comunicación con la realidad y en la definición de las prioridades más urgentes de la vida de la población" y añade "que el desarrollo, la solidificación y la ampliación de las CEB,s son tan poderosos que cargan consigo el futuro y, con eso, el destino de la propia fe cristiana en la historia".

En la defensa de los pobres y oprimidos y en busca de un orden social justo, la iglesia hizo varios estudios sobre las cuestiones de derecho a la tierra, suelo urbano, situación de los indios, educación en todos los niveles, derechos de los trabajadores, de los niños y de la juventud y pronunciamientos a través de sus Archidiócesis, Diócesis y de la CNBB, que se transformaron en documentos de gran repercusión nacional. En algunas ocasiones, los mismos provocaron la ira del gobierno, pues esos documentos contrariaban los principios y las metas establecidas para el desenvolvimiento social y político del régimen autoritario. Estos fueron algunos de los principales documentos distribuidos por la iglesia católica: "Yo Oí los Clamores de mi Pueblo", de 1973; "Marginalización de un Pueblo: Gritos de las Iglesias, de 1974; "Comunicación Pastoral al Pueblo de Dios", de 1976; "Exigencias Cristianas de Orden Político, de 1977; "Subsidios para una Política Social", de 1979; "Reflexión Cristiana sobre Coyuntura Política", de 1981; "Iglesia, Comunión y Misión en la Evangelización de los Pueblos", de 1988, y "Exigencias Éticas de Orden Democrático", de 1989.

Otra tarea de extraordinario alcance implementada anualmente por la iglesia católica por medio de la CNBB son las "Campañas de Fraternidad", que cada año enfocan un problema que más angustia provoca en la sociedad. Esas campañas han contado con el apoyo del Vaticano y de todos los sectores de la sociedad brasileña, y llevan a discutir, encontrar soluciones y

obtener apoyo material y solidaridad humana para cuestiones que afligen principalmente los más pobres y/o marginados.

La declarada opción por lo pobres, incluso de actuar con los pobres, asumida por la iglesia católica - identificada como "Iglesia de los Pueblos" - haciendo que surgiesen y proliferasen por todo Brasil las Comunidades Eclesiásticas de Base también provocó una cierta división de sus obispos y sacerdotes. Los religiosos que asumieron la causa de los pobres fueron llamados "progresistas", mientras que aquellos que eran más reticentes a endosar o encajarse en ella fueron titulados de "conservadores". Entre los primeros estaban los teólogos partidarios de la "teología de la liberación" que tuvo en ese período como su representante mayor al fraile Leonardo Boff, quien fue censurado algunas veces por la propia iglesia católica - Vaticano - por las posiciones asumidas públicamente en conferencias y documentos publicados en revistas especializadas de la iglesia. Entre los obispos más activos en la defensa de la dignidad de la vida humana y de la justicia social, siempre al lado de las manifestaciones de los movimientos sociales estaban el Cardenal Don Paulo Evaristo Arns, de São Paulo, Don Aloisio Lorscheider, de Fortaleza; Don Helder Câmara, de Olinda y Recife; Don Luciano Mendes, Presidente de la CNBB, Don Adriano Hipólito, de Nova Iguaçu; Don Mauro Moreli, de Duque de Caxias; Don Pedro Casaldáliga, de Conceição de Araguaia/Tocantins. Otros eran más cautelosos y comedidos a la hora de otorgar total apoyo y de participar

en ese tipo de "ideología" o manifestaciones, entre los cuales citamos el Obispo Boaventura, y los Cardenales Don Vicente Scherer, de Porto Alegre; Don Eugenio Sales, de Rio de Janeiro, y Don Avelar Brandão Vilela, de Salvador y Primaz de Brasil.

Dentro de la iglesia católica la existencia de dos corrientes de evangelización, una iglesia de la fe seguidora de los dogmas de la Santa Sede y otra iglesia del pueblo, propició una crisis en su seno, principalmente en las iglesias del Nordeste de Brasil. En una medida considerado autoritaria por religiosos progresistas, la Congregación para la Educación Católica, con sede en el Vaticano, determinó el cierre del Seminario Regional del Nordeste y del Instituto de Teología de Recife, en Pernambuco, como forma de callar la acción de los defensores de una iglesia popular. (34)

La iglesia católica por medio de la CNBB acompañó todo el desarrollo de los trabajos de la Asamblea Nacional Constituyente, presentando propuestas y sugerencias a los señores constituyentes y a las varias comisiones, discutiendo y llevando informaciones a sus parroquias y bases sobre asuntos de carácter de justicia social que debiesen ser sometidos a la consideración de esa Asamblea. También editó un boletín semanal que se llamó "Noticias-Constituyente", preparado por una Comisión de Acompañamiento, creada por la propia CNBB. Vale subrayar que la incesante participación de la iglesia católica en la vida de la sociedad civil brasileña durante todo el

tiempo de la dictadura militar, contribuyó a modificar y crear nuevas formas de actuación de los más diversos segmentos de esa sociedad. Así, el profesor José Eduardo Farias dijo: "quién del punto de vista de los movimientos sociales, tiene verbalizado con mayor precisión ese proceso de expansión del concepto y de la práctica de los derechos humanos, llamando la atención para la importancia de la actuación de los nuevos sujetos históricos colectivos emergentes en los debates y en la reforma constitucional, es la Iglesia Católica, por medio de la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil". (35) Con referencia a las otras iglesias, ellas no tuvieron una participación declarada contra los abusos y arbitrariedades practicados por el régimen militar, tal vez porque no sufrieron con la misma intensidad las violaciones cometidas por el poder.

II.2.9. La Actuación de la Justicia

La Constitución de 1969 (Enmienda Constitucional n° 1 a la Constitución de 1967) mantuvo básicamente la misma estructura del Poder Judicial consignada en la Constitución de 1946, que era la siguiente: Supremo Tribunal Federal (STF), Tribunales Federales de Recursos (TFR) y Jueces Federales, Superior Tribunal Militar (STM) y Jueces Militares, Tribunales y Jueces Electorales, Tribunales y Jueces del Trabajo y Tribunales y Jueces de los estados.

El Supremo Tribunal Federal tenía entre otras competencias la de juzgar al Presidente y al Vicepresidente de la República, los Diputados, Senadores, Ministros de Estado y el Procurador General de la República, en casos de crímenes comunes, fallar en representaciones de inconstitucionalidad de leyes federales presentadas por el Procurador General de la República, juzgar las peticiones de extradición solicitadas por Estados extranjeros, declarar la suspensión de derechos individuales o políticos, juzgar en última instancia, mediante recurso extraordinario, las acciones o causas decididas en otros Tribunales.

Los Tribunales Federales de Recursos tenían entre sus competencias las de juzgar los Mandamientos de Seguridad" y "Habeas Corpus" entablados contra actos de Ministros de Estado y del Director General de la Policía Federal. Así como, juzgar en grado de recursos las causas decididas por Jueces Federales.

La Justicia Militar tenía como órganos: el Superior Tribunal Militar (STM), los Tribunales Regionales y los Jueces Militares ordinarios. Al STM competía procesar y juzgar a los militares y como tribunal especial a los civiles en los casos expresados en la Ley de Seguridad Nacional, incluyéndose allí los Gobernadores de los estados y Secretarios.

La Justicia Electoral estaba formada por el Tribunal Superior Electoral (TSE), los Tribunales Regionales

Electorales, los Jueces Electorales y las Juntas Electorales. EL TSE estaba compuesto de tres Ministros del Supremo Tribunal Federal, dos Ministros del Tribunal Federal de Recursos y dos jueces togados indicados por el STF. Los Tribunales Regionales Electorales estaba integrados por dos Desembargadores del Tribunal de Justicia de cada estado de la Federación, dos Jueces de Derecho, un Juez Federal y por dos abogados escogidos por el Tribunal de Justicia.

La Justicia del Trabajo se componía del Tribunal Superior del Trabajo (TST), de los Tribunales Regionales del Trabajo y de las Juntas de Conciliación y Juzgado. La composición del TST era la siguiente: once Ministros togados nombrados por el Presidente de la República, previa aprobación del Senado Federal; seis Ministros clasistas y temporales en representación paritaria de los patrones y empleados. Competía a la Justicia del Trabajo conciliar y juzgar los conflictos individuales y colectivos de trabajo.

Los estados brasileños en obediencia de los preceptos de la Constitución Federal organizaban su propio sistema judicial, existiendo en cada uno de ellos un Tribunal de Justicia y Jueces Estaduales, a quienes competía procesar y juzgar las causas de ámbito e interés de esos estados.

La Enmienda Constitucional nº 7 de 13 de abril de 1977, dictada por el Presidente de la República modificó en

parte la estructura y el funcionamiento del Poder Judicial e introdujo en ella el Consejo Nacional de la Magistratura. Este Consejo estaba formado por siete ministros del Supremo Tribunal Federal y su función básica era la de conocer y juzgar reclamaciones contra jueces de primera instancia, pudiendo para tanto avocarse a procesos disciplinarios y determinar la disponibilidad o jubilación de jueces con sueldos proporcionales al tiempo de servicio. El funcionamiento de este Consejo fue reglamentado por la Ley Complementaria n° 35, de 14 de marzo de 1979, llamada "Ley Orgánica de la Magistratura Nacional".

La llamada "Reforma del Poder Judicial", objeto de la Enmienda n° 7 a la Constitución de 1967, fue una consecuencia de un "diagnóstico" aprobado por el Supremo Tribunal Federal que buscaba dinamizar y perfeccionar los servicios de la justicia, pero el Poder Judicial había recibido anteriormente un duro golpe a través del Acto Institucional n° 5, que continuaba vigente, suspendiendo las garantías constitucionales que tenían los miembros de la Magistratura en tanto vitalicios, inamovibles y estables en sus cargos y en cuanto irreductibilidad de sus sueldos. También la dificultad de un presupuesto capaz de satisfacer las necesidades de los servicios de la justicia contribuyó al estrangulamiento de los mismos. El Poder Judicial no poseía autonomía financiera y vivía completamente dependiente del Poder Ejecutivo, y por consiguiente los Presidentes de los Tribunales estaban siempre

dependiendo de la buena voluntad de los jefes de los órganos de Economía y Hacienda para conseguir liberar recursos financieros para mantenimiento de sus órganos. (36)

Desde el punto de vista procesal la justicia dejó de ser la garantía máxima del cumplimiento y aplicación de los derechos individuales y colectivos fijados en la Constitución, ya que los Actos Institucionales establecían la exclusión de recursos ante el Poder Judicial en relación a todo y cualquier acto arbitrario practicado con base en esos instrumentos discrecionales.

La Constitución de 1988 eliminó de la estructura del Poder Judicial al Consejo Nacional de la Magistratura y al Tribunal Federal de Recursos. Sin embargo, instituyó el Superior Tribunal de Justicia y los Tribunales Regionales Federales. Con referencia a la Justicia Militar esta nueva Carta Magna mantuvo el Superior Tribunal Militar (STM), pero definió que la competencia de ese órgano es exclusivamente para procesar y juzgar crímenes militares definidos en ley.

El Poder Judicial - parte de la estructura estatal de poder que debería funcionar de forma armónica e independiente - poco se manifestó contra las violaciones a los derechos individuales y colectivos perpetradas por el régimen militar, permaneciendo intocable como una institución de la República, cuyo sentido conservador, tan típico de las clases

jurídicas brasileñas, posibilitó su distanciamiento de los avances (desarrollo económico) impuestos por el régimen militar. (37) Con pasividad y obediencia al Poder Ejecutivo Central, el Poder Judicial admitió incluso la creación en su propio seno de un órgano de punición de los jueces - el Consejo Nacional de la Magistratura.

En el transcurso de la apertura política, si bien fueron derogados los actos de excepción y el Poder Judicial fue gradualmente readquiriendo sus prerrogativas constitucionales, la justicia continuaba lenta y inaccesible. Algunos juristas reivindicaban una asistencia judicial estatal en forma de Defensoría Pública para que la justicia pudiera ser más accesible a la mayoría de los brasileños que vivían oprimidos, en la pobreza, y con sus derechos de ciudadanía menoscabados. Se defendía la gratuidad de la asistencia judicial para posibilitar un mejor acceso y protección a la mayor parte de la población que era pobre y que era justamente la que sufría más con la injusticia social. Se decía frecuentemente que los ricos no iban a la cárcel y que tampoco eran afectados por las injusticias políticas y sociales.

Factores tales como: la inexistencia de asistencia judicial gratuita que debía ser prestada por abogado contratado exclusivamente para esa finalidad, los gastos judiciales elevados, las dificultades para la constitución de las pruebas y la necesidad de la individualización de las partes en

litigio para que fuese posible acceder a los Jueces o Tribunales, también dificultaron el acceso a la Justicia, pues no siempre la persona dañada tenía condiciones económicas o psicológicas para así proceder, y muchas veces no confiaba en la Justicia. Pasados algunos años del inicio de la apertura, instituyese un instrumento jurídico que permitía el acceso a la justicia de asociaciones constituidas hacia más de un año, y, en este mismo sentido, recientemente la Constitución de 1988 instituyó el Mandamiento de Seguridad Colectivo.

La Constitución de 1969 aseguraba a los necesitados la concesión de asistencia judicial gratuita, pero solamente en algunos estados de la Federación existen órganos específicos para tal finalidad. El Gobierno Federal modificó la Ley 1.060/50 a través de la Ley 6.465/77 para que fuese obligatorio a los profesionales de derecho aceptar el encargo de defender gratuitamente esas personas cuando fuesen nombrados por autoridad judicial competente. Esta medida no contó con la simpatía de los abogados que hallaban que era una forma del gobierno de huir de sus responsabilidades constitucionales. Lo cierto es que en la mayoría de los estados de Brasil la asistencia judicial a los necesitados se venía prestando por medio de los Servicios de Asistencia Judiciaria de las Facultades de Derechos, de Comisiones de Derechos Humanos de la Orden de los Abogados de Brasil (OAB), entidades no gubernamentales, y principalmente de las Comisiones de Justicia y Paz y de órganos de Derechos Humanos de la Iglesia

Católica. La mayoría de los demás abogados se negaba a defender a los perseguidos por el régimen militar, con recelo de sufrir represalias por parte de las fuerzas represoras.

La lentitud procesal de la justicia, aún que pudiese estar justificada por la falta de condiciones materiales y humanas del Poder Judicial, provocó un descrédito casi generalizado de los ciudadanos comunes en la actuación de ese Poder. La no eficacia de la justicia estimuló a sectores carentes de la población incentivados por los movimientos sociales organizados, a buscar otras fórmulas de hacer "justicia", sin burocracia, sin formalismo y con rapidez. Surgió la llamada "justicia informal" con la instalación de Consejos de Justicia (38), como una manera ideada por las comunidades sin recursos para dar solución a sus conflictos.

La justicia en Brasil, aún basada en una cultura liberal clásica estimulaba en su seno la corrupción, siendo una práctica casi generalizada el pago de "propina" a los funcionarios de la justicia para que proceso tuviera tramitación normal. Esa práctica ilegal era ejecutada por todas las partes interesadas en proceso, pero de difícil denuncia ya que las personas que hacían el pago, incluso abogados, no confirmaban tal procedimiento con miedo de sufrir mayores consecuencias dentro de los propios órganos del Poder Judicial.

Con la Constitución de 1988, hoy vigente, nuevos mecanismos de garantía y protección de los derechos fundamentales fueron establecidos. Para facilitar el acceso a la justicia y protección de los derechos fundamentales fueron creados los instrumentos jurídicos llamados "Mandamiento de Seguridad Colectivo", "Mandamiento de Injunción" y "Habeas Data".

Durante el período de la transición, principalmente durante los dos gobiernos militares, los casos más señalados en la justicia penal brasileña fueron justamente aquellos que se encuadraban en la Ley de Seguridad Nacional y que fueron apreciados por la Justicia Militar. Mientras tanto, a partir de 1975, hubo un considerable descenso del número de delitos que fue encuadrado en esta Ley, llegándose en 1986 a que el Superior Tribunal Militar no juzgase ningún proceso a nivel de recurso o de apelación, conforme demuestran los datos siguientes:

Tabla IV

Procesos Conocidos por el Superior Tribunal Militar 1975/85

Año	Cantidad	Año	Cantidad	Año	Cantidad
1975	140	1979	85	1983	-
1976	117	1980	11	1984	01
1977	90	1981	-	1985	04
1978	107	1982	29		

Fuente: Diretoria de Documentación del STM, Brasilia

II.2.10. El Gobierno y los Derechos Humanos

Quince días antes de la deposición del señor João Goulart, más precisamente el 16 de marzo de 1964, fue sancionada por ese mismo Presidente la Ley 4.319 que instituyó el Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana (CDDPH), vinculado al Ministerio de la Justicia. Su tramitación por el Congreso ha sido bastante lenta, pues su iniciativa tuvo origen en un proyecto de ley de autoría del señor Bilac Pinto, presentado a la Cámara de los Diputados en 2 de abril de 1956. (39)

El artículo 4º de la ley 4.319/64 prevé una amplia competencia para el Consejo en materia de defensa y promoción de los derechos fundamentales, entre las cuales destacamos las siguientes: promover investigaciones y estudios acerca de la eficacia de las normas aseguradoras de los derechos de la persona humana, establecidos en la Constitución del País, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes Fundamentales del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La efectiva implantación y el pleno funcionamiento de ese Consejo ha tardado mucho tiempo: primero pasaron cuatro años para que se procediese la reglamentación de la Ley, después tres más para que el gobierno entendiese que debía hacer modificaciones en su composición y determinar que sus reuniones habrían de ser secretas. La instalación efectiva del

CDDPH ocurrió en 1969, cinco años después de su creación, pero su funcionamiento fue siempre irregular, porque la convocación dependía del Ministro de Justicia, que era su presidente. Inicialmente el Consejo estaba integrado por nueve miembros, a saber: el Ministro de Justicia, el Líder de la ARENA en el Senado, el Líder de la ARENA en la Cámara de los Diputados, el Líder del MDB en el Senado, el Líder del MDB en la Cámara de los Diputados, los presidentes de la Orden de los Abogados de Brasil (OAB), de la Asociación Brasileña de Prensa (ABI), de la Asociación Brasileña de Educación y un profesor catedrático de Derecho Constitucional. En tanto sus decisiones algunas veces podrían traer dificultades para el gobierno, éste trató de modificar su estructura ampliando el número de miembros a 13, añadiendo representantes del Ministerio de las Relaciones Exteriores, del Consejo Federal de Cultura, del Ministerio Público y un profesor catedrático de Derecho Penal. Redujo también el número de reuniones ordinarias anuales que pasó de 24, en tanto se podían realizar dos reuniones al mes, a apenas 6, es decir una reunión cada dos meses. Estas medidas provocaron el vaciamiento del Consejo, además de que sus decisiones en relación a las denuncias presentadas eran siempre la de archivo del proceso.

La innocua actuación del Consejo provocó del eminente jurista profesor Heráclito Fontoura Sobral Pinto, por ocasión de la VII Conferencia Nacional de la Orden de los Abogados de Brasil, una rotunda manifestación en defensa de los derechos

humanos y del Estado de Derecho. Así se expresaba el ilustre maestro: "poco me importa que hasta ahora el Consejo de Defensa de los Derechos Humanos no haya podido ejercer, como era su obligación, las nobles, necesarias e indispensables atribuciones que la ley le confiere, para que haga barrer de nuestras costumbres los abusos de la autoridad y del Poder, que atentan impunemente, contra los derechos de la persona humana ...". (40)

Para el profesor Heleno Fragoso el Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana durante el periodo de la dictadura militar "fue apenas una farsa que sirvió al gobierno para defenderse en el plano internacional", (41) citando como ejemplo su prisión y la de otros abogados por motivos políticos, quienes habiendo recurrido a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, por medio de la Comisión Internacional de Juristas, no pudieron seguir adelante con su proceso en tanto el Gobierno brasileño argumentó en su defensa que el demandante no había agotado los recursos internos de apelación, a saber, no habían presentado la denuncia ante el CDDPH.

Con la revocación en 1979 de algunos instrumentos arbitrarios y la reintroducción del multipartidismo, el Consejo volvió a funcionar con la misma composición de 13 miembros y sus reuniones dejaron de ser secretas. Uno de los hechos más importantes en la actuación del CDDPH fue la

tentativa de investigación de la desaparición del diputado Rubens Paiva, presuntamente muerto en las dependencias del DOI-CODI - órgano de represión policíaco-militar del primero Ejército de Tierra, localizado en São Paulo. La familia del desaparecido después de varias incursiones junto a los órganos de seguridad del gobierno en intento de localizar el diputado, resolvió acudir al CDDPH, que con el apoyo del diputado Pedroso Horta, Líder del MDB e integrante de ese Consejo, contrariando la cúpula militar admitió la denuncia y procuró oír el pronunciamiento de la referida corporación militar que, por medio de su comandante, presentó un informe señalando no haber responsabilidad de los jefes militares bajo su comando en la desaparición del diputado. El senador Eurico Rezende, representante de la mayoría en el Senado y por lo tanto del propio gobierno, como relator del proceso opinó por el archivo del mismo. El proceso, en definitiva, fue archivado con el voto decisivo del señor Alfredo Buzaid que, a la razón, era Ministro de Justicia y Presidente del Consejo. En ese caso, hubo empate de cuatro a cuatro entre los miembros del Consejo presentes en la reunión, los votos contrarios al archivo fueron el de los líderes del MDB en las dos Casas del Congreso y el de los Presidentes del Consejo Federal de la Orden de los Abogados de Brasil (OAB) y de la Asociación Brasileña de Prensa (ABI). Esta decisión provocó un clima de insatisfacción generalizada en la oposición y en la opinión pública.

En tanto con la maniobra del gobierno ampliando el número de miembros a 13, se garantizó la mayoría oficialista en las decisiones, los líderes del partido de oposición en las dos Casas del Congreso decidieron en 1972 no participar más de las reuniones del CDDPH. Los miembros del Consejo que siempre se manifestaban a favor de la investigación de las denuncias eran los líderes de la minoría en el Congreso (MDB), los Presidentes de la Orden de los Abogados de Brasil y de la Asociación Brasileña de Prensa, y más tarde, cuando el Consejo ya contaba con 13 miembros ellos contaron también con el apoyo del Presidente de la Asociación Brasileña de Educación (ABE).

La actuación del CDDPH que debió estar dirigida hacia la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos brasileños quedóse por casi toda la década de los 70 - década decisiva para la transición - sometida al control del Poder Ejecutivo. El gobierno tenía la mayoría de los votos, pues estos eran formulados por personas representantes del régimen y por lo tanto manipulados por él. La convocatoria para las reuniones ordinarias - jamás hubo una convocatoria extraordinaria - quedaba a criterio del Ministro de Justicia, y no se cumplió al menos, en ese período, el número de seis reuniones ordinarias anuales de conformidad con la Ley. En sus sesiones se discutía casi de todo, pero nada se decidía con objetividad en pro de las personas que tenían sus derechos violados, llegándose al extremo de que algunos de sus miembros propusiesen su cierre, bajo alegación de que "aquello parecía

un espectáculo de teatro chino, cada uno representaba su papel", conforme se quejó cierta vez el Consejero profesor Benjamín Albagli, representante de la Asociación Brasileña de Educación. (42) Nada pudo ser decidido por ese Consejo hasta 1979. A finales de 1978, por iniciativa del general-presidente Ernesto Geisel y del Ministro de Justicia Petronio Portella, el Consejo fue reactivado, aunque sin la presencia de los líderes de la oposición (minoría), que abandonaron el Consejo cuando las sesiones pasaron a ser secretas. Pero, también, esa nueva fase tuvo una duración efímera, porque el propio Ministro de Justicia consideró a bien no investigar más las denuncias del pasado y determinó el archivo de todos los procesos.

Ya en el período de la Nueva República, a partir de 1985, el Consejo intentó hacer reuniones fuera de su sede en Brasília, como por ejemplo en la ciudad de Conceição de Araguaia, región de conflicto de tierra en el Estado del Pará, en Norte de Brasil, y creó varias comisiones para proceder a la investigación de las denuncias presentadas por las víctimas de violaciones de derechos fundamentales de otras regiones brasileñas.

En 1985 el Consejo reunióse solamente una vez que fue en diciembre para conmemorar el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A partir de 1986 se procedió a su reorganización volviendo a actuar normalmente en el recibimiento de denuncias y prestación de informaciones a

los denunciantes, bien como intercambio con otros órganos de derechos humanos de los estados brasileños, bien con órganos de otros países. Participó de varias campañas de promoción de los derechos humanos entre las cuales es destacable una promovida por el Ministerio de Justicia, titulada "Vamos a Vivir Sin Violencia", así como, la campaña llamada "Pinte su Derecho", realizada en conjunto con el Ministerio de Educación y la Fundación Nacional del Bienestar del Menor (FUNABEM) en conmemoración a los 40 años de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos. Esta última contó con la participación de niños y niñas en la ilustración de los 30 artículos de la Declaración Universal. El Consejo también estimuló a los gobiernos de los estados para la creación de consejos regionales de derechos humanos.

Por haber sido creado justamente en el mismo mes de la instalación de la dictadura militar el Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana, aún sin haber correspondido a los objetivos para que fue creado, resistió todo el período del régimen de excepción, a veces callado, inhibido o incluso ignorado, otras veces intentando buscar la justicia. Aún así pero constituyóse un órgano impar dentro de la estructura del gobierno en la defensa de los derechos fundamentales.

En 1986 el Gobierno del Presidente José Sarney creó la Comisión de Defensa de los Derechos del Ciudadano (CODICI), inicialmente vinculada a la Presidencia de la República y que

en febrero de 1989 pasó a integrar el Ministerio de Justicia. Esa Comisión recibía reclamaciones, denuncias y sugerencias de ciudadanos brasileños y los encaminaba a las autoridades competentes para la debida averiguación. Hay que destacar que esa Comisión aprobó por unanimidad una moción sugiriendo a los consejos de educación del gobierno federal y de los estados que examinasen la posibilidad de ser introducido en los programas de las enseñanza básica, media y superior, el estudio relativo a los Derechos de los Ciudadanos.

Con la consolidación de la apertura política otros órganos gubernamentales fueron siendo creados o asumieron sus atribuciones en el campo de los derechos humanos. A nivel federal podemos citar el Consejo Nacional de los Derechos de la Mujer, creado por la Ley 7.353 el 29 de agosto de 1985 con la finalidad precisa de promoción de políticas para eliminar la discriminación a la mujer y vinculado al Ministerio de Justicia. Ese órgano ha tenido en los últimos años una destacada actuación en defensa de los derechos fundamentales de las mujeres en el sentido más amplio posible. Otro ejemplo, el Consejo Nacional de Defensa del Consumidor, también perteneciente a la estructura del Ministerio de Justicia, con encargo de defender los ciudadanos consumidores contra la ganancia abusiva de ciertos segmentos de la sociedad. El Ministerio Público, representado por los Procuradores de la República en los estados también tuvieron efectiva participación en la garantía de los preceptos constitucionales. Los Consejos

Penitenciarios existentes en cada estado con el encargo de velar por el cumplimiento y la integridad física y moral y por los derechos fundamentales de las personas detenidas y encarceladas. Las Defensorías Públicas encargadas de prestar asistencia judicial a los necesitados. Las Comisarías Especializadas de Mujeres, para facilitar que las mujeres presten quejas directamente a estos órganos, cuando sus derechos a la integridad física y moral fuesen violados. Los Consejos de Protección de los Derechos Humanos creados en la estructura de cada estado, con la misión de rescatar la concientización a la dignidad humana y el respeto a los derechos fundamentales. Los Consejos de la Condición Femenina, creado inicialmente en el estado de São Paulo y posteriormente en algunos estados. Las Asambleas Legislativas de los estados y las Cámaras Municipales constituyeron, también Comisiones de Derechos Humanos para acompañar las denuncias de violaciones de los derechos fundamentales y exigir del gobierno, o de la parte violadora, solución inmediata.

Varias fueron las iniciativas legislativas tomadas por parlamentarios de la oposición para introducir una asignatura de derechos humanos en los currículums académicos del sistema regular de enseñanza. El senador Itamar Franco del PMDB Minas Gerais, ha intentado aprobar un proyecto de ley desde el año 1976 para la introducción obligatoria de una asignatura de los Derechos Fundamentales en los currículums de los cursos de derecho de las universidades brasileñas, sin

obtener el logro deseado hasta el presente momento. Algunos estados brasileños aprobaron leyes introduciendo la enseñanza de Derechos Humanos en sus Academias de Policía Civil y Militar, caso en que se encuentran los estados de Rio Grande del Sur y Bahía. Ministros de Justicia, Gobernadores y líderes políticos hablaron y hasta firmaron carta de intención sobre esto, pero no lo concretaron. El Gobierno Federal (Poder Ejecutivo) en cambio no tuvo ninguna iniciativa formal para que fuese introducida la enseñanza de los derechos fundamentales en los currículos académicos de los cursos de las enseñanzas básica y superior.

La Orden de los Abogados de Brasil (OAB), entidad creada por la Ley 4.215 para tratar, como un colegiado profesional, de problemática del ejercicio de la abogacía. En palabras de la profesora María Helena Moreira Alves "la actuación de la OAB fue particularmente importante: 1) en el establecimiento de los límites entre un cuadro jurídico legítimo - el de las leyes promulgadas por el Congreso de acuerdo con la Constitución, y un sistema paralelo e ilegítimo - el de las leyes de excepción impuestas por el Ejecutivo a partir de 1964 sin aprobación del Congreso; 2) en la defensa de los derechos humanos y en la exigencia de revocación de la legislación represiva; 3) en el esclarecimiento de la opinión pública a cerca de cuestiones legales y derechos públicos y civiles". (43)

Por su organización estratificada por todo el Brasil y por su credibilidad jurídica y social, la OAB fue el primer órgano en defender la instalación de un orden jurídico legítimo y en protestar contra las violaciones de los derechos humanos fundamentales. La OAB no aceptaba la vigencia de dos sistemas jurídicos paralelos: un sistema jurídico legal legítimo emanado de un instrumento constitucional democrático surgido de la voluntad del pueblo, y otro sistema jurídico legal ilegítimo oriundo de la fuerza de un autoproclamado poder constituyente sin consentimiento ni autorización popular que se institucionalizó por medio de actos institucionales, actos complementarios, enmiendas constitucionales y decretos-leyes.

En el inicio de la transición en 1974 con ocasión de la V Conferencia Nacional de la Orden de los Abogados de Brasil cuya agenda fue totalmente dedicada a los derechos humanos, varias recomendaciones fueron aprobadas. En ellas se exigía del gobierno providencias y se denunciaba a toda la sociedad civil la grave represión que sufría el país. Al efecto fueron creadas una Comisión de Derechos Humanos, vinculada al Consejo Federal de la OAB y, por determinación de ese Consejo, comisiones de derechos humanos en todas las Secciones y Subsecciones de la OAB en el país.

Con frecuencia, la OAB recibía un gran número de denuncias de violaciones de los derechos fundamentales practicados por agentes del régimen militar. La Comisión de Derechos

Humanos del Consejo Federal de la OAB llegó a poseer el más extenso archivo de denuncias de violaciones de los derechos humanos en Brasil, que era guardado con mucha seguridad.

El Presidente del Consejo Federal de la OAB era miembro del Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana (CDDPH). Las denuncias presentadas a la Comisión de la OAB eran laboriosamente investigadas y si era procedente la propia OAB, por medio de su presidente, las sometía a la consideración del órgano acusado de violación, de la justicia o del CDDPH. Las actividades de las comisiones de derechos humanos de la OAB no consistía solamente en recibir, investigar y encaminar denuncias a los órganos competentes, también prestaban servicio gratuito de asistencia judicial a las personas carentes de recursos financieros.

II.2.11. Las Organizaciones No Gubernamentales en la Defensa de los Derechos Humanos

Desde los primeros años de la instauración de la dictadura en el Brasil la lucha por el restablecimiento del Estado de Derecho y por el establecimiento de un orden social más justa venía siendo trabajada por algunos sectores de la sociedad civil. En principio esa lucha se traducían en la busca de mecanismos posibles para combatir las medidas represivas adoptadas y practicadas por el régimen militar (arrestos arbitrarios, intimidaciones, torturas, muertes etc.) en

flagrante violación de los derechos civiles y políticos. Más tarde se tradujo en la lucha contra la política económica impuesta (crecimiento a cualquier costo) que creaba condiciones para el surgimiento de movimientos populares y organizaciones de defensa de los derechos humanos, con vista a luchar e intentar corregir las injusticias (legales y sociales) cometidas por el "Estado de Seguridad Nacional".

Al ser declarada la distensión política por el Presidente Ernesto Geisel, en 1974, ya existía en ámbito nacional varios organismos de naturaleza privada que se preocupaban de la protección y defensa de los derechos humanos, sin embargo la militancia de esas organizaciones sufrían asedio y persecución de las fuerzas militares so pretexto de que se trataba de personas disfrazadas de defensores de los derechos humanos pero que apoyaban a subversivos, comunistas, agitadores y perturbadores del orden público, o bien so pretexto de que eran revolucionarios que procuraban atentar contra la seguridad del Estado.

La prensa brasileña tuvo una significativa participación en la formación de la opinión pública contra los actos arbitrarios que estaban siendo practicados por el régimen militar. Como un punto de convergencia de las denuncias y de las reclamaciones contra las agresiones a la libertad de expresión, amparando en su seno todos los profesionales del periodismo, estaba la Asociación Brasileña de Prensa (ABI). Este

organismo ejerció, en nombre de aquellos que defendían la libertad de pensamiento en todos sus sentidos, presión directa sobre el Gobierno de la Nación, de forma de sensibilizar a los sectores de la sociedad civil, incluso a la oposición política, para oponerse a las medidas arbitrarias del gobierno, principalmente contra la Ley de Prensa y contra todas las formas de censura. Ello "obligó al Presidente Geisel a eliminar la censura directa a la llamada grande prensa, en 1975, y posteriormente, en 1978, la propia censura previa a la prensa alternativa y más agresiva". (44)

La Asociación Brasileña de Prensa estuvo siempre presente en el Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana (CDDPH), único órgano estatal de defensa de los Derechos Humanos, como miembro nato, por medio de su Presidente, el periodista Alexandre Barbosa Lima Sobrinho, en la defensa intransigente de los derechos fundamentales, exigiendo la investigación y solución de los casos de violaciones de derechos individuales que eran sometidos al referido Consejo.

La Comisión Brasileña de Justicia y Paz de la iglesia católica, con sede en Río de Janeiro, creada en 1971, es decir antes del inicio del proceso de transición política, ha sido integrada por intelectuales, juristas y religiosos, estudiosos de los derechos humanos y congregaba decenas de Comisiones de Justicia y Paz distribuidas por todas las Archidiócesis del país. Esta Comisión Central actuaba en la orientación normativa

de las regionales y se encargaba de realizar investigaciones y estudios referidos a la problemática social de la población, coordinando seminarios y encuentros de ámbito nacional.

El Movimiento Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (MNDDH), surgido por ocasión del I Encuentro de Entidades de Derechos Humanos en 1982, y definitivamente formado en 1986, por ocasión del IV Encuentro Nacional de Derechos Humanos, realizado en Olinda - Pernambuco, de 25 a 26 de enero, reúne todos los centros de defensa de derechos humanos existentes en el país, bien como las diversas comisiones de justicia y paz y otros organismos de carácter privado que se dedican a la defensa y protección de los derechos humanos. La estrategia permanente del MNDDH consistió en buscar medios para tornarse parte de un proceso de construcción de una nueva sociedad brasileña a través del apoyo y fortalecimiento de un proyecto político participativo y popular, y por eso mismo implicaba en profunda vinculación con las luchas populares, siempre al lado de la población oprimida y marginalizada. En verdad, el MNDDH representó el punto central o la convergencia de todos los entes de derechos humanos que existían en el país y, cada vez que les era posible, realizaban un encuentro nacional para cambio de ideas y experiencias. El MNDDH procuró dar prioridad a tres áreas de actuación, a saber: 1) promoción de denuncias, incluso a nivel internacional, de las violencias sufridas por la población pobre y marginalizada, que era la mayoría de los brasileños; 2)

actividades de formación para capacitar personas para actuar como agentes de derechos humanos, y 3) comunicación social necesaria en la difusión y en la concienciación de los derechos humanos.

En el IV Encuentro del Movimiento Nacional de Defensa de los Derechos Humanos así quedaron definidas sus funciones:

- 1) A nivel de una concientización crítica y libertadora: rescatar el hecho de que toda persona tiene derechos, ya que nacen con ellos, y por eso debe vivenciarlos;
- 2) A nivel de la pedagogía: apoyar el surgimiento de un nuevo tipo de ciudadano, social y solidario;
- 3) A nivel de luchas: apoyar e incorporarse en las luchas de las organizaciones/movimientos que ya se estructuraran para la defensa y realización de nuevos derechos fundamentales;
- 4) A nivel de la articulación: evitar acciones aisladas y procurar siempre actuar en conjunto con otros grupos y/o movimientos;
- 5) A nivel de la comunicación: propagar denuncias de violaciones de derechos humanos entre los grupos y/o movimientos populares en Brasil y en América Latina y entre los demás medios de comunicación nacionales y extranjeros; y
- 6) A nivel político: denunciar las otras violaciones que se dan a nivel de lo político, de lo ideológico y de lo cultural.

El MNDDH contaba en la fecha de su formación - en 1986 - con poco más de 3 decenas de centros de derechos humanos y otros organismos que actuaban por todo el Brasil, y dada su

capacidad de movilización ya poseía en marzo de 1990 un número superior a 400 centros afiliados al mismo, en perfecta demostración a su eficaz actuación.

La proliferación de organizaciones no gubernamentales ocurrida a partir del inicio de la década de 70 en consonancia con la apertura política, tuvo origen en las actuaciones de la iglesia católica, de la Orden de los Abogados de Brasil (OAB) y en los movimientos sociales emergentes. Todos los centros de defensa de los derechos humanos creados durante el período de la transición tuvieron una destacada participación en la lucha, junto con todos los movimientos populares, por respecto a los derechos humanos y en la búsqueda de una justicia social compatible con la necesidad de la gran mayoría del pueblo brasileño. Estos están representados en la actuación del Centro de Defensa de los Derechos Humanos de Petrópolis, Rio de Janeiro; Centro de Defensa de los Derechos Humanos de Osasco, São Paulo; Comisión Teotônio Vilela; Movimiento de Justicia y Derechos Humanos, Rio Grande del Sur, etc.

II.2.12. La Presión Internacional

Durante el período de transición, la organización Amnistía Internacional (AI) hizo varias denuncias sobre violaciones de derechos humanos ocurridas en Brasil. Ese organismo internacional, con domicilio central en Londres, tiene como objetivos principales la lucha contra la pena de

muerte, la tortura y los tratos inhumanos, crueles y degradantes. Posee en Brasil una sección nacional, con sede en São Paulo, y varios grupos distribuidos por algunos estados y ciudades más importantes. La AI en Brasil tuvo la iniciativa de promover junto a los gobiernos regionales la necesidad de introducir la enseñanza de los Derechos Humanos en los currículums académicos de las Policías Civil y Militar, transformando esa idea en realidad en los estados de Rio Grande del Sul y Bahia. En sus informes anuales Amnistía Internacional presentó varias denuncias de violencia con muerte en el medio rural por conflictos de posesión de tierras, malos tratos y torturas dentro y fuera de las prisiones practicadas por policías civiles y militares, malos tratos y asesinatos de niños y jóvenes entre otras. Así mismo el señor Ian Martín, Secretario General de la AI, en entrevista dada al periódico "Folha de São Paulo" (45) reconoció que las preocupaciones de AI en relación con la efectividad de los derechos humanos en Brasil durante el período de transición eran menores que las que hubieron en la fase anterior del régimen militar.

Amnistía Internacional presentaba al gobierno brasileño sus informes anuales o específicos sobre violaciones ocurridas en el país, como también a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y OEA y a otros organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, como forma de presionar y exigir solución a las transgresiones. En el transcurso de la

transición, altos dirigentes de AI visitaron el Brasil, destacando las presencias de Ian Martin, Secretario General, en 1988, y de Franca Sciuto, Presidenta del Comité Ejecutivo, en 1989.

En 1988, Amnistía Internacional promovió en Brasil (São Paulo) un espectáculo musical, titulado "Derechos Humanos Ahora", con la participación de algunos cantantes brasileños y extranjeros, que consiguió reunir más de 30.000 personas, en una sola presentación, con la finalidad de difundir los trabajos que estaban siendo realizados por este organismo en todo el mundo, y obtener fondos para la cobertura de sus actividades.

En febrero de 1977 el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, dentro de la política de Derechos Humanos preconizada por el Presidente Jimmy Carter, envió al gobierno brasileño un informe en que constataban violaciones de los derechos humanos en Brasil. El gobierno de Brasil no aceptó tal informe y lo devolvió al gobierno norteamericano, considerando indigna tal ingerencia en los asuntos internos de Brasil. El referido polémico informe fue contestado por casi la totalidad de las fuerzas políticas y sociales las que, admitiendo la veracidad de las denuncias, consideraban aquéllo como una intromisión en la soberanía nacional. Este asunto fue noticia por un largo tiempo en los principales periódicos brasileños, (46) con editoriales en favor de la soberanía

nacional. Ocurre que la controversia formada en torno del informe era apenas de especulación, pues el contenido del informe no había sido divulgado y basabanse en declaraciones de autoridades y notas diplomáticas de los dos países. No obstante, este asunto afectó en la época las buenas relaciones que tenían Brasil y Estados Unidos de América, llegando a ser denunciado el Acuerdo de Cooperación Militar que existía entre los dos países, ya que el gobierno del Presidente Carter no admitía ayuda militar a gobiernos que violasen los derechos humanos. Divulgado el informe por el Senado norteamericano la situación contenida en él no era demasiada acusatoria como se pensaba, siendo al Brasil clasificado en este informe como un país "parcialmente libre".

Los informes subsecuentes, a partir de 1977, sobre la situación de los derechos humanos, preparados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, declaraban una gradual mejoría de Brasil en el respeto a los derechos humanos, pero continuaban las denuncias sobre la actuación de la policía en la práctica de la tortura por las invasiones de tierras y el tratamiento dispensado a los indígenas.

En febrero de 1987 la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acusó al Brasil de violar los derechos humanos. Según esta Comisión, de 1985 hasta el primer semestre de 1986, 386 personas murieron en el país

víctimas de conflictos de tierras, atribuyéndose gran número de esas muertes a la policía. Esos datos fueron comunicados con antelación al gobierno de Brasil, el 27 de octubre de 1986, solicitándosele informaciones sobre las medidas que estaban siendo adoptadas para la protección de trabajadores rurales y sobre la implicación de la policía en muertes en el campo. El gobierno brasileño no contestó a la solicitud de información de la Comisión de la ONU, alegando tener otros quehaceres.

En las Asambleas Generales de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de 1977 y 1978, hubo una cierta preocupación sobre los derechos humanos en América Latina. Brasil fue duramente criticado y se abstuvo de tomar decisiones formales en ese campo. A pesar de posiciones favorables de algunos países para establecimiento en el Continente Americano de una política integrada y eficaz de derechos humanos, muchos continuaron reticentes, como fue el caso de Brasil, y no adhirieron a la Convención Americana de Derechos Humanos por temor a quedar sometidos a la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Interamericano de Derechos Humanos. Las autoridades brasileñas no admitían la ingerencia de instituciones internacionales en su territorio porque, según ellas, podrían dificultar el proceso de redemocratización del país. La OEA también acusó algunas veces al gobierno brasileño de violación de los derechos humanos, sugiriendo medidas y exigiendo solución.

Varios otros organismos internacionales presionaron al gobierno brasileño, presentando denuncias, informes y patrocinando visitas de juristas y expertos en derechos humanos con vista a un cambio y una mejoría de la política de derechos humanos en el país, por ejemplo la UNICEF, la Comisión Pontificia de Justicia y Paz del Vaticano, la Unión Interparlamentar Mundial, la Comisión Internacional de Juristas, etc.

Durante el período de transición hacia la democracia, Brasil ha experimentado, a nivel internacional, algunos hechos importantes en el campo de los derechos humanos, que podrían explicarse por el reconocimiento de su importancia, quizás económica, en el contexto internacional. Primero fue la elección, en 1981, del diplomático brasileño Carlos Calero Rodríguez para la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra, Suiza, que tuvo grandes responsabilidades en su gestión, tales como la ultimación de la convención internacional contra la tortura y la convención sobre los derechos de los niños y de la juventud. Luego, en 1987 la jurista brasileña Gilda Russomano asumió la presidencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

II.2.13. La Campaña por la Elección Directa de Presidente de la República

Con el restablecimiento de las elecciones directas para Gobernadores de los estados y de Alcaldes para las Capitales, y también con el resultado de las elecciones de 1982, en las que la oposición eligió gobernadores en los principales estados de Brasil, empezó una serie de conflictos entre el Gobierno Federal y esos estados que consideraban que la centralización de los recursos presupuestarios en poder del Gobierno Central, imposibilitaba a los mismos la ejecución de sus programas de gestión. El Presidente de la República había sido electo por vía indirecta y no contaba con legitimidad popular en contraste con los gobernadores de los grandes Estados que fueron electos directamente por sufragio universal. Así ya en 1982, varios políticos de oposición empezaron a trabajar en todos los sectores de la sociedad en el sentido de sensibilizar a la opinión pública para la necesidad de restablecerse elecciones directas para Presidente de la República. En ese sentido puede destacar la actuación del Senador del PMDB Señor Teotonio Vilela. Tal movimiento fue ganando fuerza. En principio era discutido apenas en los medios políticos e intelectuales, en la iglesia y en las universidades, luego pasó a ser reivindicado en las calles y en las plazas públicas.

Los partidos de oposición (PMDB, PDT y PT), la Unión Nacional de los Estudiantes (UNE), la Central Única de los Trabajadores (CUT), la Coordinadora de las Clases Trabajadoras (CONCLAT) y la Comisión de Justicia y Paz de São Paulo, (47) organizaron el primero mitin de la campaña en pro de la "Directa Ya", que se realizó en São Paulo con la participación de aproximadamente 15.000 personas. A partir de ahí varios mítines fueron realizados por todo el Brasil siempre con la presencia del Diputado Ulysses Guimarães, Presidente del PMDB; de Luis Inácio Lula da Silva, Presidente del Partido de los Trabajadores (PT) y del Diputado Doutel de Andrade, Presidente del Partido Democrático Laborista (PDT). Esos mítines acontecieron durante todo el año de 1983 y hasta la víspera de la fecha de la votación - 25 de abril de 1984 - consiguiendo agrupar millones de brasileños. Los principales ocurrieron en Porto Alegre con 300.000 personas, Goiânia con 300.000 personas, en Rio de Janeiro con un 1.100.000 personas y, el mayor de todos, en São Paulo con un público estimado en 1.500.000 personas.

Cada día que pasaba, la campaña "pro directas" para la Presidencia de la República obtenía la adhesión de la casi totalidad del pueblo brasileño. La prensa, de una forma general, tuvo una destacada actuación en ese movimiento. Al principio con la cobertura del periódico "Folha de São Paulo" el que a través del periodista Ricardo Kotscho hizo un completo acompañamiento de las ocurrencias de los mítines. El sistema

Globo de radio, televisión y periódicos - el mayor grupo empresarial de comunicaciones del país y que recibió muchos favores del Gobierno militar - tardó un poco en divulgar lo que estaba ocurriendo, pero percibiendo el entusiasmo popular resolvió dar énfasis a las actividades de la Campaña, incluso con transmisión en directo de los mítines de principio al fin. Cada mitin contaba con la participación de representantes de todos los sectores de la sociedad civil, como políticos de la oposición, intelectuales, cantantes, líderes sindicales, universitarios, etc. Entre esas personalidades, además de los líderes de los partidos de oposición se puede destacar Leonel Brizola, que era Gobernador del Rio de Janeiro; Franco Montoro, Gobernador de São Paulo; Tancredo Neves, Gobernador de Minas Gerais; Senador Fernando Henrique Cardoso; Senador Mário Covas; Diputado Dante de Oliveira; Miguel Arraes; Alceu Collares; el jurista Sobral Pinto, el gran defensor de los perseguidos por el régimen militar; los cantantes Pafá de Belém, Elba Ramalho, Chico Buarque de Holanda y muchos otros, y el presentador de radio y televisión Osmar Santos.

La campaña por elecciones directas para Presidente de la República culminaría, en 1984, con la votación de la enmienda a la Constitución de autoría del Diputado Dante de Oliveira que restablecería esa forma de participación popular. La coordinación de ese movimiento había marcado para el día 25 de abril - fecha de la votación - una caminata alrededor de la Plaza de los Tres Poderes, en Brasilia, con la finalidad de

llamar la atención de los Diputados y Senadores que aquel día deberían votar la referida enmienda, pero el Gobierno Federal receloso que la multitud pudiese presionar a los legisladores, decretó el "estado de emergencia" en Brasilia, prohibiendo el acceso de personas al centro de la Capital Federal, prohibiendo cualquier tipo de manifestación popular, incluso en la Universidad de Brasilia, censurando los medios de comunicación. Fue nombrado como ejecutor de las medidas de emergencia el General Newton Cruz, Comandante Militar del Planalto, quizás el último representante de la "línea dura" del régimen militar. La actuación del General Newton Cruz en el día de la votación fue desastrosa, pues actuó de forma brutal contra la muchedumbre, simbolizando "la personificación del militar extremista", que "parecía al mismo tiempo impotente y ridículo". (48)

La enmienda Dante de Oliveira, que necesitaba de dos tercios de los parlamentarios para ser aprobada, consiguió solamente 298, de los 479 congresistas, 20 menos de lo que precisaba para su aprobación. Vale subrayar que del total de votos obtenidos favorables la enmienda contó con 55 votos de Diputados provenientes del PDS -partido que apoyaba al Gobierno - que ya en aquél momento no obedecía ciegamente al Gobierno Central. No obstante la derrota de la enmienda Dante de Oliveira en el Congreso Nacional, el espíritu cívico dejado por la campaña "Directa Ya", demostraba que se continuaría buscando el derecho al voto libre y directo para la Presidencia de la República.

II.2.14. El Proceso de Elección Indirecta de un Civil para Presidente de la República

Pasada la turbulencia del movimiento por elecciones directas para Presidente de la República las atenciones se volvieron para las elecciones indirectas que se realizarían en enero de 1985, es decir algunos meses después de la derrota de la enmienda para reintroducción de la elección directa. El PDS - partido que apoyaba el Gobierno - empezó a presentar deserciones en su seno, conforme ya habían quedado demostrado con ocasión de la votación de la enmienda constitucional. Eso partido contaba con varios candidatos a la Presidencia de la República en las elecciones de enero de 1985, los principales fueron Aureliano Chaves, que era Vicepresidente de la República; Mário David Andraza, Ministro de Transportes que ya había ocupado otros cargos ministeriales, y Paulo Salin Maluf, ex Gobernador de São Paulo. Todos los pre candidatos tenían pros y contras dentro del PDS y del Gobierno. La dirección del partido disconforme con los procedimientos adoptados por Paulo Maluf para la obtención de votos de los convencionales y en razón de su consecuente victoria resolvió abandonar el PDS y crear el Frente Liberal. El Gobierno Central y las fuerzas militares no escondían su desconformidad con la elección de Paulo Maluf como candidato del PDS, pues el mismo Maluf ya había anteriormente contrariado el régimen militar cuando derrotó en la convención de ese partido al candidato indicado por el Gobierno Central para Gobernador de São Paulo.

El Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) con la derrota de la enmienda de las directas, decidió que debería concurrir a las elecciones indirectas para Presidente en el Colegio Electoral y buscó un candidato de consenso que tornase posible aunar fuerzas de la sociedad civil y militar. Esta decisión no era muy compartida por todos los partidos de oposición, principalmente por el Partido de los Trabajadores (PT). Como un candidato que podría lograr el consenso político surgió el nombre del Gobernador de Minas Gerais, señor Tancredo de Almeida Neves, un político práctico, conciliador, que había fundado el Partido Popular que se fusionó al PMDB, ex Ministro de Justicia en el Gobierno de Getúlio Vargas (1953/54), y Primero Ministro en el Régimen Parlamentarista en 1962. Tancredo fue definido como "un moderado situado a la izquierda del centro" (49) que consiguió una cierta simpatía de las fuerzas militares e incluso un discreto apoyo del ex Presidente General Ernesto Gaisel y de otros influyentes jefes militares de la activa y retirados. Este cambio en la opinión militar posibilitó, además, la decisión del Alto Comando del Ejército de Tierra de apartar al General Newton Cruz, de la Jefatura del Comando Militar del Planalto, en Brasilia, en tanto que había ensayado la adopción de las mismas medidas que fueron adoptadas por ocasión de la votación de la enmienda constitucional que proponía elecciones directas para Presidente de la República, transfiriéndole a ejercer funciones puramente burocráticas en su corporación militar.

El candidato Paulo Maluf, en la medida que se aproximaban las elecciones de enero de 1985, con su arrogancia dentro del Partido (PDS) continuó dispersando sus compañeros de cúpula del partido, a lo que se añadía la situación de falta de apoyo e indiferencia que le era dispensada por los Ministros y altas autoridades del Gobierno. Ello fortaleció la facción disidente que ya habíase transformado en un partido político, el Partido de Frente Liberal (PFL). El PMDB estableció un acuerdo con el PFL para lanzar candidatura única a la Presidencia de la República, constituyeron la Alianza Democrática y formaron una candidatura integrada por Tancredo Neves, del PMDB, y José Sarney, ex Presidente del PDS y disidente creador del Frente Liberal. El PDS, que detentaba el mayor número de diputados y senadores en el Congreso, vio su número de parlamentarios reducido considerablemente con la defección de una gran cantidad de sus miembros que se pasaron al Partido de Frente Liberal. También la prensa, de una manera general, daba apoyo a la candidatura de Tancredo Neves, y aquí una vez más se puede destacar el apoyo del sistema Globo de Radio, Televisión y Periódico. (50)

El Colegio Electoral se reunió el 15 de enero de 1985 con la presencia de 686 electores (Diputados, Senadores y Delegados de los estados de la Federación) y eligió a Tancredo Neves y José Sarney, Presidente y Vicepresidente de la República, por 480 votos contra 180 dados a Paulo Salin Maluf.

Del total de votos obtenidos por Tancredo Neves, 166 fueron provenientes de políticos militantes y disidentes del PDS. La victoria del PMDB, que por más de veinte años luchó contra el arbitrio del régimen militar, finalmente ocurría, pero ahora había de compartirla con sus adversarios políticos que vinieron del PDS, fundaron el PFL y estaban formando con el PMDB la Alianza Democrática.

II.2.15. La Muerte de Tancredo y la Nueva República

Electo por el Colegio Electoral, en 15 de enero de 1985, por vía indirecta, el Señor Tancredo Neves, un anciano de 70 años, político "conciliador", se preparaba para asumir el cargo el 15 de marzo del mismo año. Antes emprendió viaje por varios países de Europa y de América del Norte y algunos de América Latina con vistas al entendimiento y a la busca de apoyo para su programa de gobierno, especialmente en lo que tocaba a la deuda externa. Tancredo Neves constituyó su Ministerio integrado por 9 políticos del PMDB y 4 del PFL, demostrando un perfecto equilibrio entre las fuerzas políticas que lo apoyaron. Con su discurso de salvación nacional creó una expectativa y esperanza para toda la sociedad civil brasileña, que ansiaba mejorar sus condiciones de vida. Fue el primer presidente civil desde el golpe de 1964, por lo tanto veinte y un años después, y por eso mismo es considerado el fundador de la "Nueva República".

En 14 de marzo de 1985, un día antes de la investidura en el cargo de Presidente de la República, el señor Tancredo Neves fue internado en el Hospital de Base de Brasília, con fuertes dolores y tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica en el intestino, afecciones que, en realidad, el presidente electo venía ocultando, hace algunos meses, a fin de evitar posibles dificultades en cuanto a su toma de posesión. (51) El internamiento del señor Neves causó en el país una profunda conmoción que perduró por más de un mes hasta cuando falleció, el 21 de abril de 1985. (52)

En 15 de marzo de 1985, en razón de la enfermedad de Tancredo Neves asumió el cargo de Presidente de la República, provisionalmente, el señor José de Ribamar Sarney, electo Vicepresidente. La transferencia de cargo desde un militar hacia un civil transcurrió sin grandes incidentes, a no ser, la negativa del señor João Baptista de Figueiredo, último General Presidente del régimen militar, de transmitir la banda presidencial al señor José Sarney ya que lo consideraba un "traidor" por haber desertado del PDS. El señor José Sarney procuró mantener, en principio, el Ministerio y el programa de acción de Tancredo Neves, toda vez que la Nación aún se encontraba perpleja con lo ocurrido. Con la muerte de Tancredo, en 21 de abril de 1985, el señor José Sarney asumió definitivamente las funciones de Presidente de la República Federativa de Brasil, quedando por consiguiente el país sin un Vicepresidente efectivo, a partir de ahí las cosas no se

ajustaron bastante bien en la cúpula de los dos partidos que detentaban el Poder. Los líderes de izquierda del PMDB, PDT. y PT estimaban que inmediatamente debía ser electa una Asamblea Nacional Constituyente, a fin de suprimir los resquicios autoritarios de la Constitución de 1969 vigente. Entretanto, otra corriente abogaba que la misma Asamblea debía ser formado por los Diputados y Senadores que serían electos en las elecciones generales de 1986. Prevalció la segunda alternativa y el Presidente José Sarney decidió convocar, por medio de enmienda a la Constitución, la Asamblea Nacional Constituyente que había de instalarse en febrero de 1987.

La Nueva República era la esperanza del pueblo brasileño y en ella estaba depositados todos los deseos y ansiedad de la población civil. El país que ya venía sufriendo con una inflación acelerada superior a 10% al mes, y con la mayor deuda externa de los países subdesarrollados, ahora se enfrentaba a un serio obstáculo que era el cumplimiento de las promesas de Tancredo Neves ratificadas por José Sarney para sanear la deuda interna y acabar con las injusticias y desigualdades sociales, así como volver al país a un Estado de Derecho. El Gobierno de José Sarney intentó varias medidas en los campos económicos y sociales para atenuar tan grave situación, entre ellas: los programas de mejoría de las condiciones de vida (como el programa de distribución de leche gratuitamente), el establecimiento de un sistema de distribución de la renta más justo, una nueva política salarial y un aumento y garantía de

empleo, la reforma agraria, con implementación de concesión de títulos de pose de tierra, las reformas en la ley de huelga y en la legislación sindical, el término de la tortura, etc.

II.2.16. Los Derechos Humanos en la Constituyente

Con la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente en febrero de 1987 la ansiedad y la esperanza de toda la población brasileña para la solución de sus problemas convergieron hacia los señores diputados y senadores constituyentes. Esta Asamblea funcionó con varias comisiones temáticas, que a su vez tenían varias subcomisiones. Los Derechos Humanos fueron tratados en más de una Comisión. Pero aquí nos interesa verificar el tratamiento que tuvieron esos derechos en la Comisión de la Soberanía y de los Derechos y Garantías del Hombre y de la Mujer, que estaba dividida en tres subcomisiones, a saber: 1) Subcomisión de la Nacionalidad, de la Soberanía y de las Relaciones Internacionales; 2) Subcomisión de los Derechos Políticos, de los Derechos Colectivos y Garantías, y 3) Subcomisión de los Derechos y Garantías Individuales.

Las subcomisiones fueron integradas proporcionalmente por constituyentes de los varios partidos, de conformidad con la representación de cada uno en la Asamblea. En los primeros meses del funcionamiento de esa Asamblea, con ocasión de los trabajos de las Subcomisiones y Comisiones Temáticas,

las organizaciones, entidades de clases y los ciudadanos en general tuvieron la oportunidad de presentar sugerencias respecto de todo y cualquier asunto que iba a ser estudiado por los señores constituyentes. Así fueron recibidas millares de ellas y gran parte merecieron el análisis e inclusión en los proyectos de las subcomisiones. Durante su funcionamiento cada subcomisión realizó, además de reuniones estrictamente con sus miembros, otras de carácter público, en número superior a una decena, con la presencia de invitados ilustres (autoridades del Gobierno Federal, juristas, intelectuales, dirigentes de sindicatos, de asociaciones de clase y de organizaciones populares). (53)

El tiempo empleado para realización de los trabajos de las subcomisiones y de la comisión temática, menos de tres meses, fue corto en relación a la cantidad y complejidad de asuntos que debieron ser estudiados, discutidos y aprobados, pero ellas disponían de vasto material y de valiosa contribución de expertos en esa área, destacando el anteproyecto constitucional elaborado por la Comisión de Estudios Constitucionales, la llamada "Comisión de los Notables", (54) constituida por Decreto del Presidente José Sarney y presidida por el jurista Afonso Arinos de Melo Franco. Subrayamos que el señor Afonso Arinos fue elegido Diputado Constituyente en 1986 y fue Presidente de la Comisión de Sistematización de la Constituyente, comisión encargada de armonizar los varios

anteproyectos y hacer la redacción final del proyecto constitucional.

La Subcomisión de los Derechos Políticos, de los Derechos Colectivos y Garantías basada en las propuestas de varios Constituyentes de dentro y fuera de la Subcomisión, y de las sugerencias de entidades y ciudadanos brasileños presentó con ocasión de su informe y anteproyecto, algunas novedades para el Derecho Constitucional brasileño, (55) entre los cuales es de destacar las siguientes: 1) La creación del Tribunal de Garantías Constitucionales para "ofrecer garantía eficaz a la implementación de las normas constitucionales" y garantía de "pleno ejercicio de las prerrogativas inherentes a la soberanía popular y de los derechos fundamentales de la persona humana, sean individuales, colectivos o difusos, previstos en la Constitución"; 2) El voto facultativo de los jóvenes de 16 años; 3) El voto para todos los Militares, sin excepción; 4) La institucionalización del voto de destitución por medio de cual los electores podrían revocar el mandato de los parlamentarios para, en determinadas condiciones, poder sustituirlo cuando éste ya no sea digno de la confianza de los electores; 5) la gratuidad de todos los actos necesarios al ejercicio de la ciudadanía, incluidos los registros civiles; 6) El derecho del contribuyente de opinar sobre las decisiones públicas que impliquen gastos que en la verdad son colectivos, no siendo justificable la existencia de cuentas secretas; 7) El derecho a la prisionera de sitio especial en las penitenciarías para la

amamantación da sus hijos; 8) El derecho del consumidor a la creación un código de defensa del consumidor para asegurar a los ciudadanos la defensa de sus intereses en ese ámbito, y contribuir a la perfección de los productos y a una vida sana; 9) El derecho de asilo para protección de personas y de sus familiares perseguidas en sus países por motivo políticos o ideológicos; 10) La institucionalización del Defensor del Pueblo como órgano que fiscalizaría la Administración Pública y que se encargaría de la protección de las libertades públicas cuyo titular sería elegido por la población y nombrado por el Parlamento; 11) La prohibición absoluta de la tortura, en cualquier modalidad, como crimen no sujeto a fianza, imprescriptible y sin posibilidad de ser amnistiado; y 12) El establecimiento del Mandamiento de Seguridad Colectivo que puede ser interpuesto contra cualquier persona física o jurídica, de ámbito público o privado, para la protección de derechos no amparados por "Habeas Corpus", específicamente para la defensa de los intereses colectivos.

De la misma forma la Subcomisión de los Derechos y Garantías Individuales al presentar su informe y anteproyecto a la Comisión Temática expresó un elenco de derechos y de garantías constitucionales, que en gran parte coincide con los que están mencionados en el apartado anterior. No obstante, existen algunos diferentes, a saber: 1) La introducción del "Mandado de Injunção" instrumento de garantía de los derechos fundamentales que a la falta de una norma reglamentaria permite

el cumplimiento de esos derechos; 2) El establecimiento de la prisión perpetua para los crímenes de estupro o secuestros seguidos de muerte; 3) La creación del "Habeas Data" que posibilita el acceso de los ciudadanos que se sintieren afectados por los bancos de datos existentes en órganos y entidades de la Administración Pública; 4) La adopción del servicio civil sustitutorio o alternativo al servicio militar; 5) El derecho al silencio y el derecho del acusado de conocer la causa de su arresto o detención y de participar a su familia o abogado, y el derecho de que cualquier arresto o detención deba ser inmediatamente comunicada al Juez competente; 6) El derecho al medio ambiente sano; 7) La punición como crimen del aborto deliberadamente provocado; 8) La presunción de inocencia de las personas encarceladas hasta la dictación por un juzgado de la sentencia penal condenatoria.

Esas disposiciones, creemos, son los más inolvidables de aquellas que fueron acogidas y aprobadas por las dos Subcomisiones y sometidos a la consideración de los señores Miembros Constituyentes de la Comisión de la Soberanía y de los Derechos y Garantía del Hombre y de la Mujer. En esta Comisión algunos de esas disposiciones fueron eliminadas y otras perfeccionadas, mientras que otras nuevas surgieron en el anteproyecto de la referida Comisión como resultado del trabajo del propio relator y de enmiendas de adición, de sustitución, de modificación y de supresión presentadas por los señores Constituyentes en el transcurso de las discusiones. El relator

de esa Comisión, señor José Paulo Bisol, Senador electo por el Partido de los Trabajadores del Río Grande del Sur, procuró en su anteproyecto preservar las disposiciones consideradas avanzadas contenidos en los anteproyectos de las Subcomisiones, y detallar dentro de lo posible los derechos individuales y colectivos reclamados por todos los segmentos de la sociedad brasileña, además de dotar el nuevo texto constitucional de instrumentos de garantías de los derechos fundamentales en ella consignados. De éste modo, en su anteproyecto contenía disposiciones que para algunos Constituyentes no era necesario incluir en una carta magna, porque más parecían con disposiciones de ley ordinaria. No obstante, según el relator una "Constitución analítica e instrumental," tendería "a la construcción de una democracia social, donde la propia Constitución ha de ser la herramienta del proceso de democratización de la sociedad." Veamos algunos de esas disposiciones: 1) la ley no limitará el número de disoluciones de la sociedad conyugal; 2) No habrá empresas y actividades privadas de investigación y prestación de informaciones sobre la vida íntima y familiar de las personas; 3) el Brasil no adoptará el sistema de numeración única para sus ciudadanos; 4) la concesión de asilo a extranjeros perseguidos en razón de raza, nacionalidad y convicciones políticas, filosóficas o religiosas, o en razón de defensa de los derechos y libertades fundamentales de la persona humana; 5) nadie puede ser detenido sino en caso de flagrante delito o por decisión u ordenes escritas y fundamentadas de autoridad judicial competente.

Es importante resaltar que durante las discusiones en la Comisión Temática de la Soberanía y de los Derechos y Garantías del Hombre y de la Mujer, de los anteproyectos elaborados por los relatores de las Subcomisiones, algunos avances consignados en esos documentos no fueron aprobados por la mayoría de los señores Constituyentes, miembros de la Comisión Temática, y no constaron del anteproyecto de esa Comisión, entre ellos el que instituyó el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Defensor del Pueblo.

El próximo paso en la discusión de los derechos humanos que deberían constar en el nuevo texto constitucional ocurrió en la Comisión de Sistematización, donde todos los anteproyectos de las Comisiones Temáticas estuvieron en manos del relator de la Constituyente que preparó el primer proyecto constitucional, siguiendo el mismo ritual de presentación de enmiendas y discusiones. Aprobada esa fase se tuvo un segundo proyecto para ser discutido y enmendado y surgir la tercera versión o proyecto final de la Comisión de Sistematización. A partir de entonces ese proyecto fue discutido, alterado y aprobado en el Plenario de la Asamblea Nacional Constituyente. El relator de la Comisión de Sistematización procuró sintetizar y dar una redacción a las disposiciones compatible con un texto constitucional. El proyecto final de esa Comisión era un texto más consolidado, con algunos avances, como el caso de la retirada de la disposición que preveía la prisión perpetua en casos de crímenes de estupro o secuestro seguido de muerte, o

el caso de la supresión de la pena de muerte en caso de guerra externa (56). Además, fue garantizado el derecho de herencia; garantizada la libre prestación de asistencia religiosa en las entidades civiles y militares de internación colectiva, asegurado a todos el derecho de petición a los órganos Públicos en defensa de derechos o contra actos ilegales o abuso de poder. Pero, también aparecieron algunas disposiciones que se puede considerar como un retroceso, a saber: en el caso de asilo se restringió éste a los extranjeros perseguidos en razón de convicción política, se introdujo disposición que permite calificar una huelga como abusiva, no se permitió el gozo de vacaciones anuales remuneradas con el doble de sueldo, se amplió la duración semanal de horario de trabajo a 44 horas, y se estableció la gratuidad de los actos necesarios al ejercicio de la ciudadanía, solamente para las personas "realmente" pobres.

La redacción final del proyecto constitucional fue exhaustivo y demoradamente estudiado y discutido en plenario de la Asamblea Nacional Constituyente. Allí los derechos humanos fundamentales pasaron por el último examen y aprobación. Para algunos juristas y expertos en Derecho Constitucional, la Constitución brasileña promulgada el 5 de octubre de 1988 presenta algunas disposiciones que se puede considerar como progresistas, como por ejemplo, el voto facultativo para los jóvenes de 16 a 18 años, los institutos de garantía de los derechos fundamentales llamados Habeas Data, Mandado de



Injunção y Mandado de Seguridad Colectivo, la Iniciativa Popular para la presentación de proyecto de ley, y la ampliación de la Acción Popular. En otro sentido ella no recoge la ansiedad de millones de brasileños en asuntos como la reforma agraria, existencia de la obligatoriedad de voto para los mayores de 18 a 70 años, la existencia del servicio militar obligatorio y la remisión a la ley complementaria para la definición de muchos derechos fundamentales contenidos en esa Constitución.

Citas y Notas

- (1) SKIDMORE, Thomas E.: Brasil: de Castelo a Tancredo. Editora Paz e Terra, São Paulo, 1988, pág. 48.
- (2) Constituições do Brasil. Vol. I, Subsecretaria de Edições Técnicas, Senado Federal, Brasília, 1986, pág. 314.
- (3) Ibidem, págs. 326/327.
- (4) SKIDMORE, Thomas E., ob. cit. (1), pág. 322.
- (5) Ibidem, pág. 324.
- (6) Ibidem, pág. 321.
- (7) FORJAZ, Maria Cecília Spina: Da Distensão Lenta, Gradual e Segura: Pequenos Avanços e Grandes Recuos. Relatório de Pesquisa 37/1976. Fundação Getúlio Vargas - EAESP, São Paulo, pág. 41.
- (8) MARINHO, Josaphat Ramos: "Lei Orgânica dos Partidos Políticos no Brasil" en Revista da Informação Legislativa, nº 12, Senado Federal, Brasil, 1966, pág. 48.
- (9) BARBOSA, Alair: "Partidos Políticos: aspectos do fenômeno" en Revista de Informação Legislativa, nº 103, Senado Federal, Brasília, 1989, pág. 218.
- (10) SKIDMORE, Thomas E.: "A Lenta Via Brasileira para a Democratização: 1974/1985". Democratizando o Brasil. Editora Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1988, pág. 35.
- (11) SKIDMORE, Thomas E., ob. cit. (1) pág. 374.

- (12) SKIDMORE, Thomas E., ob. cit. (1), pág. 396.
- (13) FLEISCHER, David: O Novo Pluripartidarismo: Perfil Socioeconômico da Câmara dos Deputados, Da Distensão à Abertura. Editora Universidade de Brasília, 1988, pág. 123.
- (14) SKIDMORE, Thomas E., ob. cit. (1), pág. 454.
- (15) SKIDMORE, Thomas E., ob. cit. (10) pág. 138.
- (16) Salário Mínimo Real - Médias Anuais. DIEESE, São Paulo, Janeiro de 1990, pág. 2.
- (17) FRAGOSO, Augusto. "A Segurança Nacional e a Justiça Militar". Conferência pronunciada en el Forum de Ciencia y Cultura. Promovida por la Universidade Federal do Rio de Janeiro, junho de 1974, pág. 23.
- (18) Varios pronunciamientos de juristas y intelectuales brasileños criticando la Ley de Seguridad Nacional y solicitando su revocación en Pela Revogação da Lei de Segurança Nacional. Comissão de Justiça e Paz do Estado de São Paulo, 1982.
- (19) MORAES FILHO, Antonio Evaristo de: "Lei de Segurança Nacional: Revogação ou Reformulação, Tribunais de Exceção". Congresso Nacional de Advogados Pró-Constituinte. Faculdade de Direito da Universidade do Estado de São Paulo, agosto de 1983.
- (20) BAFFA, Airton: Nos Portões do SNI, O Retrato do Monstro de Cabeça Oca. Editora Objetiva, Rio de Janeiro, 1989. El autor presenta varios hechos de violación de los derechos humanos practicados por el órgano de comando de información y contra-información, en el período del régimen militar.
- (21) SKIDMORE, Thomas E., ob. cit. (10), pág. 49.

- (22) SKIDMORE, Thomas E., ob. cit. (10), pág. 53.
- (23) Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Centro Gráfico do Senado Federal, Brasília, 1988, pág. 165.
- (24) Constituições do Brasil, ob. cit. (2), pág. 290.
- (25) KECK, Margaret E.: "O Novo Sindicalismo na Transição Brasileira" en Democratizando o Brasil, ob. cit. (10) , pág. 382.
- (26) SKIDMORE, Thomas E., ob. cit. (1), pág. 400.
- (27) Ibidem, pág. 401.
- (28) JACOBI, Pedro R.: Movimentos Sociais Urbanos numa Época de Transição: Limites e Potencialidades. Editora Cortez, São Paulo 1987, pág. 11. También DOIMO, Ana Maria: Movimento Social Urbano, Igreja e Participação Popular. Editora Vozes, Petrópolis, 1984, analiza un determinado movimiento social con sus reivindicaciones específicas.
- (29) JACOBI, Pedro R., ob. cit. (28) pág. 14.
- (30) Ibidem, pág. 20.
- (31) DELLA CAVA, Ralph: "A Igreja e a Abertura" en Democratizando o Brasil, ob. cit. (10), pág. 233.
- (32) Ibidem, pág. 231.
- (33) BOFF, Frei Leonardo: "Comunicação, Libertação e Direitos Humanos: Releitura do Discurso da Igreja no Brasil" en Direitos Humanos: Um Desafio à Comunicação. Edições Paulina, 1983, pág. 88.

(34) Autoritarismo ou Agudização na Igreja? en Revista Tempo e Presença, publicação CEDI, nº 246, octubre de 1989, págs. 41/41.

(35) Notícias-Constituinte nº 157. Encarte del Boletim de la CNBB. Comissão de Acompanhamento à Constituinte, Brasília, 12.04.90.

(36) RIBEIRO, Antonio de Pádua: "Poder Judiciário: Algumas Inovações e Transformações" en Revista de Informação Legislativa nº 104. Senado Federal, Brasília, 1989, pág. 201.

(37) BICUDO, Hélio: Direitos Cíveis no Brasil, Existem?. Editora Brasiliense, São Paulo, 1982, pág. 61.

(38) PINHO, Evangelina de Almeida, y RIGUEIRA NETO, Ademar, "Acesso à Justiça: A Caminho da Democratização" en Cadernos GAJOP nº 7. Olinda-PE, pág. 38.

(39) ARAGÃO, Selma Regina: Direitos Humanos: Do Mundo Antigo ao Brasil de Todos. Editora Forense, Rio de Janeiro, 1990, pág. 137.

(40) Fragmento del discurso hecho por el Jurista Sobral Pinto en la VIII Conferencia Nacional de la OAB titulado: "A Liberdade e o Conselho de Defesa dos Direitos Humanos", Manaus, 1980, pág. 10., contenido en la obra citada de Selma Regina Aragão, págs. 137/138.

(41) FRAGOSO, Heleno Claudío. "Elementos para a Defesa e Garantia dos Direitos Humanos" en Congresso Nacional da Advogados Constituintes. Ordem de los Abogados de Brasil, Faculdade de Direito da Universidade do Estado de São Paulo, agosto de 1983, pág. 253.

(42) "CDDPH, reativado se reúne pela primeira vez na Nova República" en Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 20.12.85.

(43) ALVES, Maria Helena Moreira: *Estado e Oposição no Brasil - 1964/1984*, 5ª edição. Editora Vozes, Petrópolis, 1989, pág. 210

(44) Ibidem, pág. 217.

(45) "Mais de 60 Países Torturam presos políticos, diz Anistía" en Folha de São Paulo, São Paulo, 10.12.88.

(46) "Brando - É o que dizem do Relatório" en Jornal da Tarde, São Paulo, 09.03.77.

(47) KOTSCHO, Ricaro: *Explode um Novo Brasil - Diário da Campanha das Diretas*. Editora Brasiliense, São Paulo, 1984, pág. 21.

(48) SKIDMORE, Thomas E., ob. cit. (1) pág. 471.

(49) Ibidem, pág. 482.

(50) Ibidem, pág. 486.

(51) Ibidem, pág. 493.

(52) Para un completo conocimiento de la enfermedad de Tancredo Neves y su predecimiento ver el testimonio de Antonio Britto a Luis Claudio Cunha en el libro *Assim Morreu Tancredo*. Editora L/PM, Porto Alegre, 1986.

(53) Segun Informe de la Asamblea Nacional Constituyente, preparado por su Mesa Directiva, las Subcomisiones de la Comisión de la Soberanía y de los Derechos y Garantías del Hombre y de la Mujer, realizaron 21 reuniones públicas en que personas de todas las clases y segmentos de la sociedad (juristas, profesores, dirigentes de movimientos de derechos humanos, sindicales

y sociales, etc), presentaron sus ponencias y debatieron con los parlamentarios, sobre cuestiones relacionadas con los derechos fundamentales.

(54) Ver MENDES, Cândido: *A Inconfidência Brasileira - A nova cidadania interpela à Constituinte*. Editora Forense, Rio de Janeiro, 1986, que defiende el proyecto de la Comisión de Notables, de la cual el autor fue miembro: y XAUSA, Leonidas R.: *A Constituinte Questionada*. Editora L/PM, Porto Alegre, 1986, que cuestiona el referido proyecto por considerarlo excesivamente detallista y aún retrógrado.

(55) *Parecer y Substitutivo de la Comisión de la Soberanía y de los Derechos y Garantías del Hombre y de la Mujer*. Centro Gráfico del Senado Federal, Brasília, junho de 1987, pág. 3.

(56) *Projetos de Constituição - Quadro Comparativo*. Elaborado por Senador José Ignácio Ferreira, Senado Federal, Brasília, 1987, pág. 12.

CAPITULO III

LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL TRANSITO DEL ESTADO AUTORITARIO AL ESTADO DE DERECHO

- III.1. Derecho a la Vida.
- III.2. Derecho a la Integridad Física y Moral.
- III.3. Libertad de Pensamiento y de Expresión.
- III.4. Derecho a la Intimidad.
- III.5. Derecho de Propiedad.
- III.6. Derecho de Participación.
- III.7. Derecho a la Libre Circulación.
- III.8. Derecho a la No Discriminación.
- III.9. Derecho de Reunión.
- III.10. Libertad de Asociación.
- III.11. Libertad Religiosa.
- III.12. Derecho a la Educación.
- III.13. Derecho al Trabajo.
- III.14. Derecho a la Huelga.

Citas y Notas.

CAPÍTULO III

LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL TRANSITO DEL ESTADO AUTORITARIO AL ESTADO DE DERECHO

Haya visto el numeroso elenco de los derechos fundamentales reconocidos en varios instrumentos internacionales patrocinados por la Organización de las Naciones Unidas, por la Organización de los Estados Americanos y otros organismos oficiales de proyección mundial, muchos de ellos contenidos en las Constituciones de Brasil que rigieron durante el período de la transición, en esta tesis se presenta tan solamente algunos de esos derechos, que son clasificados como derechos civiles, políticos, sociales y económicos, porque entendemos que ellos en el presente estudio representan todos aquellos demás derechos fundamentales que fueron más violados o conculcados en este período. Con eso no se quiere menospreciar o menoscabar los demás derechos fundamentales no tratados en este capítulo, tan poco dar prioridad a los que serán aquí analizados, por lo contrario lo que se pretende es poner a claro la situación de los derechos humanos en Brasil en su conjunto, en la forma que van a ser expuestos a seguir.

III.1. Derecho a la Vida

La Constitución de 1969, otorgada por una Junta Militar, estuvo vigente durante todo el período de la transición

hacia la democracia y fue símbolo y reflejo de la arbitrariedad que empezó en Brasil a partir de 1964, toda vez que, la misma, institucionalizó todos los actos de excepción dictados por el régimen militar hasta 1969. Así, ella contenía una disposición que permitía la pena de muerte en "casos de guerra externa, psicológica adversa, revolucionaria o subversiva en los términos que la ley ha de determinar" (artículo 153 párrafo 11 del Texto Constitucional). (1) Este precepto fue introducido en la legislación brasileña por medio del Acto Institucional nº 14, de 5 de septiembre de 1969, también dictado por la misma Junta Militar (Ministros del Ejército de Tierra, Ejército del Aire y Marina), justamente 42 días antes de la edición de la Enmienda Constitucional nº 1 a la Constitución de 1967, de 17 de octubre de 1969, que pasó a ser conocida como la Constitución de 1969.

El precepto constitucional se refería a que la aplicación de la pena de muerte sería "en los términos que la ley ha de determinar". Ocurre que la única ley que trató de los crímenes que estarían sujetos a ese tipo de pena fue el Decreto-Ley nº 898, de 29 de septiembre de 1969, también dictado por la misma Junta Militar, basado en el Acto Institucional nº 14 que definía los crímenes contra la seguridad nacional y el orden político y social. Así es que preveía la aplicación de la pena de muerte en los siguientes casos: 1) negociación y actos con gobiernos extranjeros que provoquen guerra o actos de hostilidades contra el Brasil; 2)

intentos, con o sin auxilio extranjero, someter el territorio nacional o parte de ello al dominio o soberanía de otro país, o suprimir o poner en peligro la independencia del Brasil; 3) incentivar a individuos de otra nación para que invadan el territorio brasileño bajo cualquier motivo o pretexto; 4) comprometer la seguridad nacional, sabotando, con muerte, instalaciones militares, buques, aviones y material de las Fuerzas Armadas y equipamentos de interés público. La disposición constitucional que introdujo la pena de muerte en casos de "guerra revolucionaria, psicológica o subversiva" fue suprimida del texto constitucional a través de la Enmienda nº 11, de 13 de octubre de 1978, permaneciendo todavía la disposición que permite la pena de muerte en caso de guerra externa.

La pena de muerte permaneció por casi diez años en la legislación constitucional brasileña, sin embargo no hubo en el período de la transición democrática ninguno caso de aplicación de la misma, así como tampoco casos de condena de personas en virtud de la Ley de Seguridad Nacional por práctica de crímenes pasibles con resultado sancionatorio, según esa misma ley, de pena de muerte.

La represión política continuó aún en el período de transición democrática. Aquellos caracterizados como "subversivos" - los comunistas o adeptos de los comunistas - continuaban siendo perseguidos, pues eran acusados de procurar

subvertir el orden social y de crear partidos políticos ideológicamente prohibidos por ley. El gobierno militar había constituido un aparato policial militar para la represión de la actuación de las personas o grupos considerados subversivos por todo el país. Formaban parte de ello, el Destacamento de Operaciones e Informaciones (DOI), y el Centro de Operaciones de Defensa Interna (CODI), ambos, integrados por militares (principalmente oficiales) de las Fuerzas Armadas, como también de las Policías Civiles y Militares de los estados brasileños. Los presuntos culpables de pertenecer a grupos comunistas eran arrestados y encarcelados en cuarteles de los DOI-CODI para que fuesen interrogados sobre su posible participación a esos grupos, eran considerados como enemigos de la "Revolución de 1964".

Por las dependencias de los DOI-CODI pasaron millares de brasileños acusados de practicaren actos subversivos o de pertenecer a grupos comunistas. Según testimonios de varias personas arrestadas por agentes de los DOI-CODI, (2) muchas de ellas fueron sometidas a sesiones de torturas de las más crueles con ocasión de los interrogatorios, y obligadas a presentar confesiones, que muchas veces no eran verdaderas, con la finalidad de librarse así de las torturas. Dentro de los casos de tortura con muerte ocurridos en los DOI-CODI en el período de la transición hacia la democracia, es importante subrayar aquellos que acontecieron en la sede del DOI-CODI del Segundo Ejército de Tierra, localizado en São Paulo. El

periodista Wladimir Herzog, entonces director de la Televisión Educativa de São Paulo, compareció voluntariamente a ese órgano policial militar, en el mes de octubre de 1975, para hacer aclaraciones respecto de su vinculación o no con "conspiradores comunistas" (3) o partidos comunistas de otros países. Desde ese momento, no pudo volver más a su casa: apareció al día siguiente muerto en su celda. Los policías dijeron que se trataba de un caso de suicidio, confirmada esa hipótesis por el Comando General del Ejército de Tierra basada en investigación realizada por militares. La muerte de Wladimir Herzog conmocionó a la sociedad civil de todo el país, hubo manifestaciones de los estudiantes de la Universidad de São Paulo, de la Iglesia Católica y de la Orden de los Abogados de Brasil. Su familia, con apoyo de esas entidades, recurrió a la Justicia, quedando comprobado que su muerte fue en consecuencia de las graves torturas practicadas por los policías del DOI-CODI del 2º Ejército de Tierra. Otro caso ocurrió al inicio de enero de 1976 con la muerte del sindicalista Manuel Fiel Filho, perteneciente al sindicato de los metalúrgicos, que se encontraba sometido a interrogatorio en la sede del DOI-CODI de São Paulo. Una vez más las autoridades militares dieron la versión de suicidio, pero, según varios testimonios de personas que se encontraban encarceladas en el DOI-CODI en aquella ocasión, no existen dudas que su muerte fue causada por las torturas recibidas por ocasión del interrogatorio.

La violación del derecho a la vida en el período de la transición no acaeció solamente por la práctica de torturas con resultado de muerte a los supuestos militantes comunistas o "subversivos" - aquellos que podrían practicar los llamados "crímenes políticos" - porque muchas otras formas de violación a ese derecho preliminar, básico y supremo se pudieron constatar. Los considerados delincuentes comunes, los ciudadanos indefensos, los trabajadores rurales, los negros, los indios y otros grupos y personas pertenecientes a las "minorías", sufrieron las más diversas formas de opresión y represión del régimen militar y perdieron sus vidas.

Las muertes en las prisiones como consecuencia de violencias policiales y de malas condiciones de alimentación, higiene y asistencia sanitaria eran una constante. En las penitenciarias de las principales ciudades, los presos se rebelaban provocando motines y tomando funcionarios de presidios como rehenes en búsqueda de la fuga. Para reprimir esos casos la policía actuaba como mucho rigor y violencia ocasionando siempre la muerte de algunos detenidos que muchas veces nada tenían que ver con lo ocurrido, como sucedió en la Casa de Detención de São Paulo. Aún más, en razón de las pésimas condiciones carcelarias y superpoblación en los presidios, los presos mataban en el propio presidio otros presos escogidos por ellos para morir. El caso que llamó más la atención de la opinión pública ocurrió en la Comisaría de Hurtos y Robos en Belo Horizonte, Minas Gerais, y que quedó conocido como la

"lotería de la muerte", donde los propios encarcelados elegían los compañeros de prisión que debían ser muertos por ellos mismos. La aparición de muertos en las dependencias de los presidios y de las casas de detenciones, ocasionadas por la violencia policial y pugnas entre los presidiarios era una constante en todos los presidios de Brasil. También la falta de atención a las condiciones físicas de los "logradouros" o celdas donde se colocaba a los detenidos ocasionó varias muertes, como fue el caso ocurrido en febrero de 1989 en el Distrito Policial São Lucas, en la ciudad de São Paulo, donde en una celda con poco más de cinco metros cuadrados fueron colocados más de 50 detenidos, por el cual se produjo la muerte por asfixia de 18 de ellos.

La cuestión agraria, que generó graves conflictos en varias partes de Brasil, principalmente en las regiones Norte y Nordeste, fue un de los principales motivos de violación al derecho a la vida. Las estadísticas demuestran que hubo en el período de la transición una creciente evolución de muertes causadas por la disputa de posesión de tierra, especialmente a partir del auge de la apertura política (1979) y del establecimiento del gobierno civil (1985). En 1974, inicio de la transición, fueron asesinados 22 campesinos, y sólo en el año de 1985 un número diez veces mayor, o sea 222. Paradójicamente, cuanto más apertura más cadáveres aparecían en el campo, así es que en el auge de la apertura "lenta, gradual y segura", período de 1980 a 1984, fueron asesinados

más trabajadores rurales (499 personas) que en un período cuatro veces mayor, o sea de 1964 a 1979 (386 personas). (4) Varios sacerdotes, abogados, líderes sindicales y campesinos fueron asesinados a mando de los terratenientes, de los hacendados y de supuestos propietarios de tierra que contrataban "pistoleros" para expulsar por la fuerza a las personas que ocupaban sus tierras, bien como a aquellos que les protegían. Esos conflictos ocasionaban muertes en los dos lados, siendo expresivamente elevado el número de campesinos muertos a consecuencia de esos conflictos, ultrapasando en el período de transición a 1.000 en todo el Brasil. Entre los casos de mayor repercusión nacional, e inclusive internacional, se pudo citar la muerte del Cura Josino Tavares, que era defensor de los campesinos sin tierra y miembro de la Comisión Pastoral de la Tierra, órgano de la Iglesia Católica, así como el del sindicalista rural y cauchutero Chico Mendes, entonces presidente del Sindicato de los Trabajadores de Xapuri, estado de Acre, el 22 de diciembre de 1988, ambos asesinados por pistoleros contratados por latifundistas.

A seguir se presenta las cantidades de los asesinatos registrados en la zona rural en el período de 1974 a 1989:

Tabla V
Asesinatos en el Campo 1974/1989

Año	Cantidad	Año	Cantidad	Año	Cantidad
1974	22	1980	91	1986	298
1975	39	1981	131	1987	244
1976	44	1982	58	1988	93
1977	51	1983	96	1989	56
1978	37	1984	123		
1979	66	1985	222		

Fuente: Datos del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra, contenidos en el Informe de Amnistía Internacional; del MIRAD y de la Comisión Pastoral de la Tierra.

La violencia urbana en sus varias modalidades, sea policial o caracterizada por la delincuencia social, contribuyó sobre manera a violentar el derecho a la vida en todos los rincones del país, con mayor incidencia para los Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco y Bahía. La violencia policial practicada no solamente dentro de las prisiones sino también con ocasión de simple detención, muchas veces arbitrarias, aterrorizaron a la sociedad civil. Los llamados "Escuadrones de la Muerte", y otros grupos de exterminio integrados por policías que asesinaban "marginales" tuvieron una actuación destacada en la "Baixada Fluminense", región de Rio de Janeiro. Estos tipos de "defensores de la sociedad" recibieron muchas críticas y rechazo de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, pero la violencia policial que practicaban

ejecuciones sumarias casi a diario continuó: siguieron apareciendo cadáveres de personas indefensas o con pasaje por los Distritos de Policía, que eran siempre atribuidos a los policías. La pobreza y la miseria causadas por la injusticia social, la falta de educación, alimentación, asistencia sanitaria y habitación, y la migración para las grandes ciudades motivada por la búsqueda de mejores condiciones de vida, fueron factores preponderantes para el surgimiento de otros tipos de violación al derecho a la vida entre los cuales se puede destacar la actuación de los grupos de "justicieros" que aparecieron en las "favelas" y periferias de las grandes ciudades, formados por personas, generalmente con antecedentes criminales, que recibían dinero para proteger determinadas "comunidades" (segmentos de la población) y en nombre de esa supuesta defensa mataban personas consideradas marginales. (5)

Otras formas de violencia urbanas que llevaban a la muerte también fueron practicadas en ese periodo de transición. A saber, el "linchamiento", que consistía en la reacción de un grupo de personas de hacer "justicia" por sus propias manos, asesinando a supuesto culpable, antes que el individuo que cometió un crimen bárbaro o un robo, pudiese ser llevado a juicio o fuese formalmente declarado culpable. Ese tipo de violencia también ocurría en las prisiones, normalmente cuando un prisionero cometía un crimen que en el entender de los otros prisioneros era considerado "hediondo", como por ejemplo, matar a un niño. El secuestro con muerte, el estupro con muerte y el

consumo excesivo de drogas fueron otras formas de atentado al derecho a la vida que ocurrieron en el período. En el caso del "linchamiento", que era practicado por personas enfurecidas, los policías a veces se limitaban a observar lo que la muchedumbre hacía. Dada tal escalada de violencia urbana la población pedía a los Gobiernos Federal y estatales medidas de seguridad más severas.

Brasil ostentaba el degradante título de mayor índice de pobreza en el mundo, en tanto el 40% de su población no sabía leer ni escribir y más de 7 millones de niños y jóvenes vivían en las calles sujetos a toda la suerte de degradación y menosprecio, lo que los conducía a la práctica de hurtos y actos delictivos y a la marginalización. Por eso mismo estaban siempre siendo perseguidos por la Policía y terminaban siendo asesinados por los grupos de exterminio, por los "justicieros" o por los propios "colegas" de pandilla y banda criminal. (6)

En los años de 1980 a 1983 Brasil ha vivido una ola casi generalizada de atentados terroristas atribuidos a los militantes de extrema derecha, en intento de provocar un retroceso en la distensión hacia la democracia, que a esa altura ya caminaba hacia su consolidación. En 27 de agosto de 1980 un atentado por medio de una carta bomba en la sede de la Orden de los Abogados de Brasil (OAB) en Rio de Janeiro provocó la muerte de una funcionaria que era Secretaria del Presidente de la Orden. Otro atentado ocurrió en la noche del día 30 de

abril de 1981, con ocasión de un espectáculo de música popular en el Riocentro, en conmemoración al Día del Trabajo (1º de Mayo), también en la ciudad de Río de Janeiro, con la presencia de aproximadamente 20 mil personas: una bomba explotó dentro de un pequeño coche, en el estacionamiento del mencionado órgano, muriendo un sargento de la Policía Especial del Ejército de Tierra e hiriendo gravemente a un capitán del Ejército de Tierra que se encontraban dentro del referido vehículo. Ese atentado, según averiguación del Ejército de Tierra, fue atribuido a terroristas, conclusión no compartida por los demás segmentos de la sociedad que lo atribuye a las propias víctimas, que estaban a mando de las fuerzas de represión.

En 1988 la Policía Militar del estado brasileño de Pará reprimió una manifestación de los buscadores de oro, los llamados "garimperos" (mineros), que intentaban obstruir una puente sobre el río Tocahtins en una carretera que daba acceso a esa región, en defensa de la continuidad de la extracción de oro, ocasionando la muerte de muchos de ellos.

En noviembre de 1988 soldados del Ejército y de la Policía Militar del Río de Janeiro fueron enviados para la ciudad de Volta Redonda para, según los comandos militares, proteger el patrimonio de la Compañía Siderúrgica Nacional que se encontraba amenazado con la posible invasión de los obreros de esa empresa estatal que se encontraban en huelga en demanda

de mejores salarios. Al reprimirse la manifestación de los obreros, dentro de la fábrica hubo una batalla desigual entre los soldados y los obreros, éstos intentando por todos los medios posibles permanecer en las dependencias de la fábrica y aquéllos con la misión de retirarlos para cuyo efecto fue necesario utilizarla fuerza (allá estaba el Ejército de Tierra con cañones, ametralladoras, perros amaestrados y avanzados aparatos militares). Finalmente tres obreros perdieron sus vidas, víctimas de la sangrienta acción militar.(7)

En los primeros cinco años de la transición era constante la persecución de los presuntos miembros, activistas o simpatizantes del proscrito Partido Comunista Brasileño, que intentó actuar en la clandestinidad. Esas personas que eran detenidas arbitrariamente no siempre volvían a sus hogares, muchas de ellas fueron vistas torturadas en las dependencias de los DOI-CODI, conforme varios testimonios relatados en procesos archivados en las Auditorías Militares o que fueron prestados al grupo de trabajo del proyecto Brasil: Nunca Más. De este grupo de trabajo surgió el más completo documento sobre las torturas y arbitrariedades practicadas por la dictadura militar en Brasil gracias al testimonio de personas que también fueron detenidas, pero que tuvieron mejor suerte por haber sido puestas en libertad. Los órganos de represión policíaco-militar jamás asumieron responsabilidad alguna por la desaparición de esas personas, atribuyéndolas en algunos casos, a que las personas desaparecidas nunca estuvieron bajo su

guarda, y en otros, a fugas realizadas durante el período de interrogatorio. Es importante subrayar que esas personas continúan desaparecidas y sus parientes (padres, madres, hijos) hasta hoy no saben si están muertos o vivos.

III.2. Derecho a la Integridad Física y Moral

La Constitución vigente en casi todo el período de la transición aseguraba la inviolabilidad de la seguridad de toda la persona y preconizaba que "se impone a todas las autoridades el respeto a la integridad física y moral del detenido y del presidiario". (8) Con todo, en este período aún imperaba la ley de la arbitrariedad y de la fuerza policíaco-militar, y los arrestos y detenciones ocurrían siempre a criterio y a voluntad de la autoridad de la "comunidad de informaciones" del régimen militar, con lo cual los abusos y las violaciones al derecho a la integridad física y moral era una constante.

El Gobierno brasileño del período de la dictadura militar no quiso firmar ni ratificar la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así procediendo solamente en el año de 1988 cuando ya se encontraba en el Gobierno de la llamada "Nueva República".

Durante los trabajos de la Asamblea Nacional Constituyente hubo una gran presión de los sectores

organizados de la sociedad civil sobre los constituyentes que ocasionó la aprobación y fijación en la Constitución de 1988 de algunas disposiciones que contenían derechos fundamentales en favor de la protección y defensa de la integridad física y moral de las personas, a saber, asegurando que "nadie será sometido a tortura ni a trato deshumano o degradante", (9) asegurando "a los presos el respeto a la integridad física y moral" (10) y afirmando, también, que "la ley considerará la práctica de torturas como crimen no sujetos a fianza y no susceptible de gracia o amnistía". (11)

Como ya hemos visto la represión política continuó aún después de deflagrado el proceso de apertura hacia la democracia, sin embargo los graves acontecimientos de tortura con muerte ocurridos en el DOI-CODI de São Paulo en los años de 1975 y 1976 provocaron que el Presidente de la República substituyese el Comando del Segundo Ejercito de Tierra. A partir de ahí, con la gran repercusión que este hecho tuvo en todos los sectores de la represión militar en Brasil, esas fuerzas de la represión institucionalizada pasaron a tener una actuación más moderada. Entretanto, acaecieron varios casos de violación al derecho a la integridad física y moral con el cometimiento de los más diversos tipos de violencias y tortura contra personas presuntamente denunciadas o acusadas de pertenecer a alguno segmento o "célula" comunista que, según los militares, aún estarían encargados de promover la

"subversión" o revolución comunista en Brasil, incluso con penetración en las fuerzas armadas.

En ningún momento del período de transición democrática la tortura estuvo oficialmente autorizada, pero su práctica era un medio considerado "eficaz" por los órganos de seguridad del régimen militar para la obtención de informaciones y de confesiones, y muchas veces, esas confesiones eran falsas y obtenidas por los efectos de la tortura. Las fuerzas policíacas y militares que constituían las "comunidades de informaciones" utilizaban los métodos más crueles para conseguir sacar de las personas bajo interrogatorio las informaciones que hallaban convenientes, entre esos métodos destacáanse: 1) Choque eléctrico; 2) Palo-de-Arara; 3) Silla de Dragón; 4) Sumersión en el agua; 5) Uso de Teléfono; 6) Palmatória; 7) Palizas por todo el cuerpo; 8) Abofeteamiento; 9) Quemaduras de cigarros; 10) Congelador; 11) Mordida de perros; 12) Corona de Cristo; 13) Violación sexual; 14) Extracción de Dientes; 15) Inyección subcutánea de éter; 16) Extracción de uñas; 17) Suero de la verdad (aplicación de Pentotal); 18) Fusilamiento simulado; 19) Amenaza de muerte a la propia persona, esposa, hijos, compañeros, etc. 20) Presencia en la tortura de compañeros presos; 21) Aplicación de tortura en otros compañeros; 22) Desorganización temporal espacial. (12) Esos métodos producían considerables desgaste físicos y psicológicos, no solamente con dolor físico, y una completa desorganización emocional, que llevaba la persona que

estaba siendo torturada a un largo período de incapacidad física y de recuperación.

Las fuerzas represivas utilizaron varios sitios como cárceles privados en los cuáles las personas arrestadas permanecían por muchos días, en flagrante violación de la legislación penal militar que determinaba un máximo diez días al efecto. Allí se pretendía la obtención de informaciones y la aclaración de denuncias muchas veces forjadas por la utilización de la tortura. El documento "Brasil: Nunca Más", publicado bajo la responsabilidad del Arzobispado de São Paulo, (13) cita algunas de esas "cárceles" ilegales que han funcionado desde el inicio de la dictadura hasta el año de 1978, es decir, aún funcionaron por un período de cinco años durante la transición democrática. Entre ellas, la llamada Casa de los Horrores, en Fortaleza en el Estado del Ceará; las Casas de São Conrado y de Petrópolis, en el Estado del Río de Janeiro; el Colegio Militar de Belo Horizonte; una Finca y una Casa en el Estado de São Paulo, etc. Muchas otras "cárceles privadas" y por eso mismo, clandestinas, existieron por todo el país que no pudieron ser identificados por las personas afectadas que prestaron declaraciones a la Justicia Militar o posteriormente al estar libres de las acusaciones, a los órganos no gubernamentales de defensa y protección de los derechos humanos, puesto que ellas siempre que eran arrestadas o que se presentaban voluntariamente a los órganos de represión eran conducidas con sus cabezas cubiertas a lugares distantes

de donde ocurrían los arrestos o de las sedes de esos órganos represores.

La tortura, como el método más "eficaz" utilizado por los órganos de represión de la dictadura militar, se ha configurado como la más cruel y deshumana forma de violación a la integridad física y moral de las personas presuntamente acusadas de crímenes políticos - atentado contra el orden público y la seguridad del Estado - en el período de la transición hacia la democracia. Merecen citación algunos de esos casos relatados por personas torturadas, a saber: (14)

- en Brasilia, en 1975, el Abogado José María Pelúcio Pereira sufrió choques eléctricos a raíz de los cuales dice: "no podía dormir, y si lo recuerdo me provoca visiones";

- en Rio de Janeiro, en 1977, el estudiante José Mendes Ribeiro después de padecer choques eléctricos, puñetazos y pasar por la "nevera" llegó a perder la noción del tiempo;

- en Belo Horizonte, en 1976, el publicitario Paulo Elisário Nunes contó que sufrió sevicias y malos tratos hasta perder la noción del tiempo;

- el señor Haroldo Borges Rodrigues Lima en carta-denuncia a la Justicia Militar dijo que empezó "a perder la noción del tiempo, pues ya no veía la luz del día ..." y que "después de la larga sesión de choque eléctrico, enfurecido (el agente militar) por no haber conseguido lo que deseaba, aplicóme tan violento golpe sobre el corazón que, momentáneamente, perdí los sentidos. El dolor en la región

afectada me acompañó por más de dos meses, dificultándome la respiración";

- en Curitiba, en 1977, Newton Cândido contó que estaba preso con una persona que parecía louca, y que esa persona de nombre Teodoro Ghescov "intentó meter un clavillo en la cabeza, usando el zapato como martillo";

- en Río de Janeiro, en 1975, Manoel Henrique Ferreira declaró: "las torturas tuvieron en mí un efecto de desorganización psicológica. Ellas me llevaron hasta el punto de ir a la televisión a hacer un pronunciamiento contra la lucha de la cual yo participaba ... e hice esto bajo un estado completo de desestructuración por todas las torturas sufridas, por todas las amenazas y por el miedo que tenía de ser asesinado";

- en São Paulo, en 1976, José Milton Ferreira Almeida prestó declaración denunciando "que fue, por dos veces, en ese período, colgado en el "palo-de-arara" sufriendo un paro cardíaco y respiratorio, e inclusive, se le diagnosticó por el enfermero que hacía el acompañamiento de los torturados el padecimiento de la enfermedad de la aerofagia, o sea de bloqueo de las vías respiratorias, en razón de los choques eléctricos, y el de que su presión arterial había llegado a lo máximo de 20 por 14, habiendo sido suministrado masivas dosis de Cepasol de 25 miligramos y relajantes musculares, de modo que su cuerpo volviese a ser sensible al dolor ... puesto que a partir de un cierto momento su cuerpo ya se había quedado insensible a cualquier dolor";

- en São Paulo, en 1975, Antonio Martins Fonseca, 1º Sargento de la Policía Militar, declaró: "cuando fui para el "palo-de-arara", donde permanecí durante más o menos media hora fue apeleado por 3 elementos, de los cuales uno era el encargado de la máquina de choque, cuyo filo era amarrado en el mi órgano genital y el otro, que hacía "tierra", era colocado en mi ano";

- en São Paulo, en 1975, Renato Oliveira da Motta declaró: "había sufrido tres insuficiencias cardíacas, en las decenas de veces en que estuve en el "palo-de-arara", siendo que en la última vez, trajeron dos médicos para que me examinara. Ellos me consideraron "bien", con todo, en el día siguiente un de ellos retornó para decirme que iría a proponer mi remoción, por cuestión humanitaria";

- en Porto Alegre, en 1978, los cónyuges uruguayos Universindo Rodríguez Díaz y Lílían Celiberti fueron secuestrados por policías del DOPS (Departamento de Orden Político y Social) del Rio Grande del Sul, y mientras permanecieron detenidos ilegalmente en Porto Alegre, fueron torturados. Lílían obligada a desnudarse de la "cintura para arriba en una sala del Palacio de la Policía, recibió puñetazos en las espaldas, fue acostada en lo suelo y le aplicaron choques eléctricos" y "casi no pude mover el brazo derecho durante una semana" y Universindo tuvo su cabeza sumergida en una laguna dos veces. (15)

Después de la concesión de amnistía, a partir de 1979, a las personas condenadas por la práctica de delitos encuadrados en la Ley de Seguridad Nacional, la persecución política disminuyó pero empezó a aparecer una ola de violencia generada por factores de los más diversos. En todas partes de Brasil la violencia de la Policía era una constante. Las Policías Civil y Militar de los estados brasileños continuaron utilizando los mismos métodos de tortura de los órganos represores del régimen militar, para la "investigación" de crímenes comunes. Como órganos acusados de práctica de tortura en personas presuntamente culpables de crímenes comunes estuvieron, entre varios otros, la ROTA (Ronda Ostensiva Tobias de Aguiar) y el DEIC (Departamento Estadual de Investigaciones Criminales), ambos de São Paulo. Órganos similares a éstos, también acusados de ser violadores del derecho a la integridad física y moral, existieron en las estructuras de las Secretarías de Seguridad Pública de todos los estados brasileños.

En 1987, tres miembros de la organización americana "Américas Watch" realizaron una investigación sobre la tortura en Brasil, más específicamente, sobre las ocurridas en São Paulo y Río de Janeiro. Al efecto mantuvieron contactos con dirigentes de entidades y Abogados de defensa de los derechos humanos, inclusive obtuvieron permiso para visitar un Presidio. De esas investigaciones fue preparado un informe, divulgado en todo el mundo, en el que se hacen denuncias sobre la violencia

policial en Brasil. (16) El uso de los más crueles métodos de tortura fueron denunciados en este Informe, tales como: "palo-de-arara"; choque eléctrico, ahogamiento parcial; palmatoria; teléfono, y el más tradicional método de violación a la integridad física el golpeamiento o apeleamiento por todas las partes del cuerpo.

Cualquier persona que fuese detenida como sospechosa de practicar algún delito por más simples que hubiera sido, estaba expuesta a sufrir violencia física y moral. La práctica de violencia por la Policía era generalizada en todas las partes de la Nación. La persona que era arrestada para averiguación, es decir para posibilitar la investigación sobre un presunto delito, o como medida correccional para apartar un "marginal" de la convivencia social, sufría todas las formas brutales de violencia, sin un mínimo respeto por la dignidad de la persona humana y por sus derechos fundamentales, siendo el detenido "tratado como animal". (17) A través de la Ley 7.960, de 21 de diciembre de 1989, el Gobierno Federal aprobó las formas y los plazos en que había de efectuarse un arresto provisional, para evitar abusos de los policías y de las autoridades policíacas.

Los organismos no gubernamentales de derechos humanos nacionales e internacionales, denunciaban constantemente la violación del derecho a la integridad física y moral en las zonas rurales, en las cárceles, en los presidios y

penitenciarias, en las periferias de las grandes ciudades y en las zonas urbanas. La mayoría de las veces, la tortura no aparecía al conocimiento de la opinión pública, porque ocurría en las dependencias de las Comisarias o porque las víctimas no presentaban denuncias a las autoridades competentes, con miedo a sufrir nuevos castigos. Los casos de tortura solamente eran registrados por los organismos de defensa de los derechos humanos existentes por todo el país, cuando las personas acusadas o condenadas presentaban denuncias a esos organismos, ya libres de los presidios con sus penas cumplidas o cuando, raramente, y con autorización de esas entidades éstos visitaban los presidios y las penitenciarías. Existían algunos órganos oficiales para la investigación de casos de tortura, como por ejemplos: en São Paulo y Rio de Janeiro en los gobiernos de Franco Montoro y Leonel Brizola, respectivamente, pero no han tenido resultados satisfactorios, no solamente por la presión interna de las Secretarías de Seguridad Pública, como también por algunos sectores de la sociedad, que hallaban que esos órganos apenas defenderían los derechos de los presos (delincuentes) en detrimento de los derechos de las víctimas.

El derecho a la integridad física y moral fue también violado en los hospitales psiquiátricos, manicomios judiciales, casas oficiales y particulares de internación de menores, en los sitios de trabajo por las caóticas condiciones laborales que llevan a las personas a contraer graves enfermedades, y fundamentalmente en las plazas y calles del

inmenso Brasil.

Se torturaba por un presumible robo de un paquete de cigarrillos, como ocurriera en São Paulo cuando dos hermanos fueron cruelmente violentados por policías solamente porque estaban fumando cigarrillos de la misma marca de aquellos que habían sido robados de un gerente de bar muerto en un atraco. (18) Se torturaba una persona cuando era acusada de robo de joyas o de un coche, por tráfico y consumo de drogas, por no portar documentos de identificación o cédula de trabajo, por invasión de tierras en áreas rurales o urbanas y por toda y cualquier sospecha de delito. Ocurrieron millares de casos de torturas por todo el Brasil, muchas practicadas por las propias Policías de los Estados y muchas otras por grupos organizados muchas veces con la connivencia de los policías. A esos casos los estudiosos brasileños los llaman de "violencia institucionalizada", ya que presumen la participación o omisión de los órganos oficiales de Seguridad Pública en los mismos.

Señalamos algunos casos brutales de violación a la integridad física y moral de ciudadanos acusados de delitos contra el patrimonio o contra la persona: en 1987, en la ciudad de Nova Viçosa, Estado de Bahia, tres jóvenes fueron acusados del destrozo de casas de veraneo en la región Sur del referido estado. Rodrigo Borges de Carvalho, un de los acusados, hizo una declaración en la que señaló haber sido torturado por cinco días consecutivos para que confesase los delitos, sufriendo

sevicias sexuales y quemaduras provocadas por plástico derretido. Elías Lopes de Lima, el otro acusado, presentaba quemadura de tercer grado por varias partes del cuerpo, las nalgas plagadas de llagas y el ano hinchado. No resistió a tales atrocidades y falleció. (19) En septiembre de 1984, en la ciudad de Porto Alegre, Estado del Río Grande del Sur, el joven Antonio Clovis dos Santos, el popular "Doge", fue torturado en una Comisaría de la Policía Civil, inclusive con la utilización del "palo-de-arara", cuyas escenas de tortura fueron filmadas y fotografiadas por el Inspector Arquimedes Ribeiro de la propia Policía, (20) que por primera vez denunciaba con fotos la práctica de la tortura oficial. Debe subrayarse, todavía, que la acusación contra Doge no fuera comprobada.

La violencia a la integridad física y moral no fue solamente restringida a los segmentos de la sociedad civil, en algunos sectores de las fuerzas militares también se constató la práctica de tortura a los reclutas y subalternos, especialmente en el Ejército de Tierra y en las Policías Militares de los estados. Ello, independientemente de la obligatoriedad de cumplimiento de los rígidos reglamentos militares, lo que en algunas ocasiones causa secuelas físicas y psíquicas en los soldados. Como ejemplos, se puede citar las quemaduras provocadas en 108 soldados del Ejército de Tierra por la utilización de gas, durante un ejercicio de guerra realizado en Sobradinho cerca de la ciudad de Brasília, Capital de Brasil. (21) La Policía Militar del estado de São Paulo

apareció en las portadas de los principales periódicos acusada de torturar 20 soldados en una clase de tortura comandada por oficiales superiores de la Compañía de Operaciones Especiales de la citada corporación militar. (22)

Como ya hemos visto la violación a la integridad física alcanzaba a todos los ciudadanos de una manera general y de forma específica a los negros y a los pobres, sin distinción de sexo o edad. (23) Por lo mismo, en São Paulo el número de denuncias de violencia contra niños y jóvenes aumentaba mes a mes, llegando en 1988 a presentar una media de 178 denuncias mensuales registradas por la "Coordinadora SOS Crianza" de la Secretaría del Menor, que afirmó que esas violaciones transcurrían por la larga permanencia de esos jóvenes en sus casas, pues era justamente en los meses de vacaciones escolares que ese número presentaba mayor incidencia, y que las madres eran las causantes de agresión física, mientras que los padres y tíos, además de practicar violencia física, cometían estupros. (24)

III.3. Libertad de Pensamiento y de Expresión

La Constitución de 1969, vigente en el período de transición, preconizaba en el párrafo 8º del artículo 153 que era libre la manifestación del pensamiento, como también la prestación de información que no estaba sujeta a censura. Ocurre que esa misma disposición constitucional establecía la

censura para las diversiones y espectáculos públicos, y para las publicaciones y exhibiciones contrarias a la moral y a las buenas costumbres. (25) Además permanecieron en vigor por mucho tiempo la Ley 5.250 de 9 de febrero de 1967 que reglamentaba la libertad en la manifestación de pensamiento y de información, la ley 5.536 de 21 de noviembre de 1968 que creó el Consejo Superior de Censura y establecía censura a las obras teatrales, el Decreto- Ley 972 de 17 de octubre de 1969 que disponía sobre la profesión de periodista, la ley 5.988 de 14 de diciembre de 1973 que regulaba los derechos de los autores y conexos, la ley 6.615 de 16 de diciembre de 1978 que definía los derechos de los trabajadores de las radios, la ley 6.800 de 25 de junio de 1980 que definía las competencias del Consejo Nacional de Derecho del Autor y la Ley de Seguridad Nacional que definía los crímenes contra el Estado y los considerados actos de subversión contra el orden político y social del Estado. Todos esos instrumentos legales imponían límites al pleno ejercicio de la libertad de pensamiento y de expresión.

Competía al Ministerio de Justicia por medio del Departamento de Policía Federal el control y la reglamentación de la actividad de censura en el país. Existía en ese Órgano una División de Censura de Diversiones Públicas localizada en Brasilia y un Servicio o Sección de Censura de Diversiones Públicas en cada Estado de la Federación, así mismo esos

órganos actuaban en conjunto con los demás órganos que formaban la "comunidad de informaciones" del Gobierno Federal.

Formalmente existían dos modalidades de censurar. Primero, la censura previa: 1) un censor se instalaba en el propio domicilio de una empresa de comunicación (radio, prensa, televisión etc.) examinando todas las materias a ser divulgadas y procediendo a los cortes parcial o total de asuntos considerados ofensivos de acuerdo con la ley de prensa y la Ley de Seguridad Nacional, y 2) esas empresas tenían que enviar a un órgano del Departamento de Policía Federal, antes mismo de la divulgación o venta, todo o material producido - textos de libros, reportajes, artículos, noticias, ilustraciones, filmes publicitarios y cinematográficos, cintas magnéticas, discos, fotografías etc., para la obtención de la aprobación y liberación de ese órgano censor. (26) Segundo, la censura a "posteriori", esto es, la retirada de una edición de un periódico o revista ya preparada o la prohibición de transmitir un programa que, a veces, ocurría aún poseyendo el mismo material el "certificado de liberación". En el período de 1974 a 1977, algunas empresas de comunicaciones y algunos profesionales del periodismo tuvieron enormes pérdidas materiales y morales en consecuencia de la práctica constante de la censura, debiendo proceder a la cancelación de sus actividades, al cierre de sus empresas y al fin del ejercicio de la profesión.

Así, quedaban sometidas a la censura previa de la Policía Federal la programación diaria de las emisoras de radio y televisión, incluida la publicidad, la grabación de discos, cintas magnéticas o cualquier otro proceso de reproducción sonora, las películas cinematográficas y las materias a ser publicadas en los periódicos y revistas. Censura que también podía ser hecha a "posterior", caso en el que el infractor veía su material retenido y quedaba sujeto a las penas previstas en la legislación vigente. (27) La censura no socavaba solamente las actividades culturales desempeñadas por las emisoras de radio, televisión, cine, literatura y por la prensa escrita, también afectaba a todas las formas de expresión que pudiese tener un cuño ideológico contrario a los intereses nacionales, así es que durante las exhibiciones de espectáculos teatrales los censores estaban siempre presente para verificar si los actores estaban cumpliendo fielmente los términos contenidos en los textos que habían sido previamente liberados.

Oficialmente el ejercicio de la censura competían a los censores, que eran funcionarios del Ministerio de la Justicia, establecidos en el Departamento de Policía Federal, y que estaba localizados por toda parte en el país. No obstante, durante los cuatro primeros años de la transición (1974/1977) esa actividad también pudo ser ejecutada extra oficialmente por oficiales de las Fuerzas Armadas, principalmente del Ejército de Tierra, y por el personal del Servicio Nacional de Informaciones (SNI).

Diversos fueron los casos de violación a la libertad de pensamiento y de expresión ocurridas por todo el país. Durante el período de transición democrática las víctimas fueron principalmente los editores, periodistas, artistas y actores de Rio de Janeiro y de São Paulo. En la área de comunicación escrita, el Semanario "Opinião" de Rio de Janeiro fue perseguido por mucho tiempo por los censores federales, lo que ocasionó su cierre en 1977. Otros periódicos como "El Pasquim", "El Jornal de los Debates", "Tribuna de la Imprensa" y "El Movimiento", fueron los más perseguidos por haber sido considerados por las fuerzas represivas como periódicos que incitaban a la "guerra psicológica" o "guerra subversiva", y por eso mismo rotulados de "prensa alternativa" por las autoridades del gobierno militar, mientras que sus simpatizantes los titulaban de "prensa de la resistencia" al régimen opresor. (28) Varios periodistas fueron acusados de difamar el honor de autoridades constituidas, nacionales y extranjeras, cuestión prohibida por la Ley de Seguridad Nacional, o por publicar hechos en desacuerdo con la orientación del régimen militar, habiendo sido arrestados, torturados y en muchos casos condenados por la justicia brasileña. Entre esos casos se puede mencionar la brutal y violenta detención en el Rio de Janeiro en 1974, del periodista Dimas Perrin, Redactor del "Jornal do Povo", acusado de "subversivo" y "agitador comunista". Ese profesional después de ser víctima de las más atroces violencias físicas por un largo período, fue juzgado y absuelto por unanimidad por la

Justicia Militar por insuficiencia de pruebas. (29) También hay que recordar la muerte del periodista Vladimir Herzog, en las dependencias del DOI- CODI del Segundo Ejército de Tierra, en São Paulo, ya citada en este trabajo, la detención y tortura de los periodistas Rodolfo Konder, Ricardo Kotscho y Maurício Azevedo, condenados por la Justicia Militar, que consiguieron la suspensión condicional de sus penas, Carlos Dias, Milton Soares y muchos otros.

Algunos periódicos de la prensa brasileña continuaron publicando materias consideradas livianas e infamantes en relación con las autoridades del gobierno, originando de ahí proceso en la Justicia Militar, pues esos casos eran entendidos como crimen contra el orden político y social, y estaban previstos en la Ley de Seguridad Nacional. El periódico "Hora do Povo" divulgó un texto con el título "Sale el Listón de los Corruptores" en que presentaba los nombres de las autoridades brasileñas que tenían cuentas bancarias numeradas en Suiza. Por la controversia del asunto su director, señor Cláudio Campos y dos directores más de esa empresa, fueron condenados, inicialmente por la Auditoría de Justicia Militar en Río de Janeiro a un año y seis meses de prisión. Más tarde en un nuevo juicio el Superior Tribunal Militar agravó la pena para dos años y tres meses, pena que fue recurrida al Supremo Tribunal Federal - órgano máximo del Poder Judicial - que mantuvo la sentencia. Aún, por haber reproducido esa información cuatro periodistas del diario "Gazeta do Vale" de

Itajaí y de "Affinal", de Florianópolis, fueron encuadrados en disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, y por fin el señor Aguinaldo Timóteo, Diputado Federal por Estado del Rio de Janeiro, estuvo implicado en proceso abierto en el Departamento de Orden Político y Social (DOPS) de São Paulo por haber criticado en un programa de televisión la falta de providencias de las autoridades del gobierno para la investigación de tales denuncias. En diciembre de 1981 los periodistas Paulo Branco, Hélio Fernandes, Hélio Fernandes Filho y Eustáquio de Alvarenga Cruz, de la "Tribuna de la Imprensa" fueron encuadrados en la LSN por haber publicado un reportaje con el título "Cals da uma de Giscard y embolsa diamantes" (Cesar Cals era entonces Ministro de Minas y Energía del Gobierno Federal). En ese reportaje se acusaba al Ministro de haber recibido un collar de esmeralda de una poderosa empresa de mineración en pago de una concesión para poder extraer piedras preciosas. Un otro proceso fue instaurado contra el señor Julio de Mesquita Neto, del periódico "O Estado de São Paulo", acusado de ofensa al honor del señor Leitão de Abreu, en aquella época Ministro-Jefe de la Casa Civil, por el contenido del editorial, cuyo título era "Cae la máscara del falso liberal". Uno de los episodios más flagrantes de violación al derecho que aquí estamos tratando, ocurrió en Brasília, en el día 17 de diciembre de 1983, cuando el General Newton Cruz, entonces Comandante Militar del Planalto, agredió física y moralmente al reportero Honório Dantas por no haber le gustado la manera en la que el referido profesional hizo su reportaje, obligándole a que el mismo

pidiese disculpa delante del público, hecho gravado y transmitido para todo el país por cadena de televisión "Rede Globo".

El cercenamiento a la libertad de pensamiento y de expresión alcanzó a todos los segmentos de la sociedad brasileña. En la música popular nombres como de Taiguara, Chico Buarque de Holanda, Geraldo Vandré, Caetano Veloso y muchos otros, por sus convicciones políticas e ideológicas, fueron impedidos de grabar sus músicas, en tanto que las empresas de grabación de discos no aceptaban sus trabajos alegando que podrían sufrir represalias del Gobierno con relación a la autorización para permanecer ejerciendo esa actividad. Muchos autores utilizaban seudónimos o nombres de otras personas amigas para que sus letras fuesen gravadas por cantantes de prestigio nacional. Es importante realzar que la insistencia de la censura llevaba a que los editores, autores y actores estableciesen la "auto censura", ellos mismos ya hacían sus producciones culturales dentro de las normas establecidas por los mecanismos de la censura a fin de no estar sujetos a cortes o prohibiciones de sus producciones. Ello preconizó una etapa en el escenario intelectual brasileño conocida como "cultura del miedo".

Los gobiernos militares poseían, en su seno, los "defensores de la moral y de las buenas costumbres". El Ministro de la Justicia del Gobierno del General Geisel, señor Armando Falcão, (30) tomó directamente a su cargo el ejercicio

de "censor", y en el ejercicio informal de ese cargo perseguía deliberadamente el periódico "Tribuna de la Imprensa" pues, como decía, "ya conocía de larga fecha, el estilo violento y contra revolucionario del periódico y no podía abrir una excepción que lo favoreciese", impidiendo así varias veces que materiales de ese periódico fuesen publicadas; estableció censura para los libros, revistas y periódicos procedentes del extranjero; prohibió en 1976 la exhibición del Ballet Bolshoi de la Unión Soviética incluso por televisión; hizo cortes de escenas y de capítulos de las telenovelas, bajo alegación de que "casi todos los autores de telenovelas son marxistas disfrazados o asumidos, que utilizan indebidamente la novela para infiltrar la propaganda de sus ideas, de modo ostensible o subliminar"; hizo cortes en las películas nacionales y internacionales, como "Doña Flor y Sus Dos Maridos", "Naranja Mecánica" y "Último Tango de París". El propio señor Armando Falcão en su libro "Todo a Declarar" se refiere así al fin de la censura en Brasil: "el 15 de marzo de 1979 no había ya ninguno medio de comunicación de masa bajo régimen de censura permanente. El último en escapar de las manos de la Policía Federal fue el perioducúcho "El Sñõ Paulo" de Don Paulo Evaristo Arns, afectuoso correligionario del dictador comunista Fidel Castro, el Stalin de Cuba". (31)

Prevalecieron aún en el período de la transición los llamados "atestados ideológicos" necesarios para efectuar el nombramiento en cualquier cargo o función de la Administración

Pública Centralizada o Descentralizada, y que consistía en el certificado de "nada consta" concedido por un órgano de la "comunidad de informaciones", especialmente del Servicio Nacional de Información, para que una persona pudiese ejercer determinada función en el Servicio Público aunque hubiese obtenido una clasificación en Concurso Público. Las personas acusadas de haber pertenecido o de ser adeptos a partidos comunistas, de haber sido líderes de huelgas, líderes de gremios estudiantiles o de movimientos contrarios al régimen militar quedaban, por ello, impedidos de ejercer cargos públicos. Los Militares, incluso aquellos retirados, no podían manifestarse o hacer público su pensamiento sobre cuestiones políticas, ideológicas o filosóficas.

En el gobierno del General Geisel, en 30 de junio de 1977, por expresar su pensamiento respecto de las arbitrariedades y violaciones cometidas por el régimen militar el Diputado Federal Alencar Furtado vio cesado su mandato y sus derechos políticos suspendidos por diez años. El motivo que dio origen a ese acto arbitrario del Presidente Geisel fue la transmisión por las emisoras de radio y televisión dentro de un programa, en horario político del MDB, de un pronunciamiento del parlamentario en que él afirmó el siguiente : ..."el programa del MDB defiende la inviolabilidad de los derechos de la persona humana para que no haya hogar en llantos, hijos huérfanos de padres vivos - quién sabe - tal vez muertos. Huérfanos del tal vez y del quién sabe. Para que no hayan

esposas que enviuden con maridos vivos, tal vez, o muertos ¿quién sabe? Viudas del quién sabe y del tal vez". El Gobierno que jamás daba explicaciones para cesar a cualquier Diputado, alegó esta vez, que "el gobierno no admite excesos".

La censura tuvo una considerable actuación en la área cinematográfica, varias películas fueron prohibidas en el período inicial de la transición y más tarde liberadas por el Consejo Superior de Censura, órgano creado en el segundo gobierno militar del período de transición. (32) Entre ellas: "El Imperio de los Sentidos", censurada en 1976, por ser "una obra cinematográfica de enredo chocante y de mensaje dudoso" y "nociva a nuestra sociedad", la película fue liberada en septiembre de 1980; "Sacco y Vanzetti", liberada en diciembre de 1979; "Saló o 120 Días de Sodoma", liberado en 1988 después de la promulgación de la nueva Constitución, etc. La prohibición que causó mayor impacto en la opinión pública ha sido "Je Vous Salue Marie", de Godard, prohibida en 1986 ya dentro del período de gobierno de la Nueva República, esta prohibición se debió al compromiso asumido por el Presidente José Sarney con la Iglesia Católica, en tanto ésta estaba considerada una película blasfema y polémica. El Censor Coriolano Loyola Cabral Fagundes, entonces Director de la División de Censura de Diversiones Pública de la Policía Federal, en su parecer sobre esta película, así se manifestó: "me encuentro delante de un conflicto de conciencia. Por un lado mi convicción personal me induce en el sentido de



liberación, pero mis compatriotas - por lo menos un segmento mayoritario de la sociedad brasileña - claman por la prohibición del ingreso de la creación de Godard". (33)

Existía dentro de los órganos de censura una censura propia, pues los funcionarios eran vigilados por sus propios compañeros y tenían que seguir en línea las orientaciones recibidas de sus superiores. Muchas veces debían mostrarse favorables a las prohibiciones o cortes de determinada materia simplemente por miedo a sufrir punición o a ser apartados de sus empleos de forma temporal o definitiva. Los criterios para la admisión de personal en los cuadros de censores del Departamento de Policía Federal eran muy rigurosos y las personas habilitadas tenían que estar de acuerdo con la política de represión para ingresar en ellos.

Ha sido considerado notable el nivel del Brasil en la producción de novelas para la televisión. Al frente de esa producción, en cantidad y calidad, estuvo siempre la "Rede Globo", pero no siempre las "sinópsis", que tenían que ser previamente presentadas a la Censura Federal, recibía la liberación de ese órgano. Para evitar esa dificultad, funcionarios de la propia empresa de televisión sugerían a la censura que hiciese cortes antes de la grabación. Hubo casos de novelas censuradas que solo fue liberadas, con cortes, después de algunos meses de negociaciones entre las partes. Entre las principales telenovelas que sufrieron cortes en su guión

original están: "Memorias de un Gigoló" en 1984, "Mandala" en 1987, basada en el romance "Édipo Rey" y que no pudo presentar la escena de incesto, "Guerra de los Sexos", más tarde liberada por el Consejo Superior de Censura; "Vereda Tropical" en 1984, y la más controvertida de todas "Roque Santeiro" censurada en 1975, liberada en 1986 para ser transmitida a las 20 horas, y en 1988 para ser transmitida en horario libre. (34)

Con el objeto de verificar previamente los anuncios publicitarios que eran divulgados a través de la radio, de la televisión y de la prensa escrita, que también estaban sujetos a la censura, fue creado el Consejo de Autoreglamentación Publicitaria con el objetivo de reducir la interferencia de la censura federal.

Durante el período de transición, la División de Censura tuvo varios directores y entre esos se destacaron el señor Coriolano Cabral Fagundes y la señora Solange María Teixeira Hernandez quien en su gestión (1981/1984) firmó 2.800 prohibiciones en todas las áreas sujetas a la censura.

El control impuesto a la libertad de pensamiento y de expresión en Brasil, según el periodista Moacir Pereira "va a ser el responsable por muertes de niños, cuyos padres no fueron advertidos de la epidemia de meningitis - la censura no permitió la divulgación de esa noticia ..., va a ser el responsable de la violencia ejercida contra los seres humanos

- la censura cortaba denuncias de arbitrariedades de la policía ... , va a ser la responsable por el atrofiamiento en la producción de obras teatrales, crónicas, obras literarias, músicas y películas - la censura archivó centenas de trabajos de artistas brasileños conceptuados en el exterior", (35) lo que por cierto ocurrió en el período de transición.

Con la promulgación de la nueva Constitución el 05 de octubre de 1988, la censura ha quedado institucional y definitivamente prohibida en el Brasil. El artículo 5º de esta Carta Magna señala que "es libre la manifestación del pensamiento ..." y "es libre la expresión de la actividad intelectual, artística, científica y de comunicación, independientemente de censura o de licencia". (36) Por eso, ya el día 6 de octubre del mismo año fue extinguida la División de Censura de Diversiones Públicas del Departamento de Policía Federal, juntamente con todas sus secciones regionales.

III.4. Derecho a la Intimidad

Este derecho caracterizado como un "derecho de la personalidad" no obtuvo en la Constitución brasileña vigente a la época de la transición el trato debido, no se ha consignado en ella ninguna disposición específica que se refiera a lo mismo, a no ser de forma implícita en un artículo genérico que decía: "las especificaciones de los derechos individuales y

garantías expresas en esta Constitución no excluye otros derechos y garantías originados del régimen y del principio que ella adopta". (37) La primera referencia explícita al derecho a la intimidad en uno texto legal en Brasil aparece en la llamada "Ley de Imprensa", la Ley 5.250 de 9 de febrero de 1967, que en el párrafo 1º de su artículo 49 consigna que en los casos de calumnia y difamación la prueba de la verdad excluirá el deber de indemnizar "excepto si el hecho imputado aunque verdadero, dice relación con la vida privada del ofendido, y la divulgación no fue motivada por interés público". Más tarde la Ley de Informática de número 7.232 de 29 de octubre de 1984 que regulaba la política nacional de informática, en párrafo VIII de su artículo 2º estableció la protección del secreto de los datos almacenados, procesados y vinculados en interés de la privacidad de las personas. En el campo del Derecho Penal hubieron escasas iniciativas políticas para introducir disposiciones que penalizase por la violación de ese derecho fundamental, sin embargo no lograron aprobación del Parlamento.

El derecho a la intimidad como un todo, solamente fue reconocido en el derecho constitucional brasileño en la nueva Constitución de 1988 que establece varias disposiciones que garantizan ese derecho, a saber, aquella que dice "son inviolables la intimidad, la vida privada, el honor y la imagen de las personas, asegurando el derecho a indemnización por el daño material o moral causado por su violación", la que esta-

blece que "la casa es asilo inviolable del individuo, nadie en ella podrá entrar sin consentimiento del morador..." y aquella que dice "es inviolable el secreto de la correspondencia y de las comunicaciones telegráficas, de datos y de las comunicaciones telefónicas ...". Además ese Texto Magno creó el instituto del "Habeas Data" como un instrumento de garantía "para asegurar el conocimiento de informaciones relativas a la persona del denunciante, constantes de registros y bancos de datos de entidades gubernamentales o de carácter público". (38)

Las autoridades del gobierno militar así como las autoridades extranjeras o diplomáticas tenían sus derechos a la imagen y al honor protegidos por disposiciones de las leyes de prensa y de Seguridad Nacional, por eso mismo muchas cuestiones fueron calificadas como de violaciones al Derecho a la Intimidad cometidas por periodistas y dirigentes de los medios de comunicación contra esas autoridades. Varias de ellos recibieron condenación y tuvieron que cumplir pena en los presidios de Brasil, principalmente de Rio de Janeiro y São Paulo. La no existencia de disposiciones legales en los Códigos Civil y Penal, así como en la Constitución de 1969, hizo que la casi totalidad de la población civil quedarse sin protección jurídica en el ejercicio de ese derecho fundamental. Con excepción de las personas arriba señaladas, las personas de la sociedad civil que vieron su derecho a la intimidad violado, aun recurriendo a los Tribunales en base en los preceptos

legales mencionados, no consiguieron el derecho de respuesta o indemnización por posibles daños materiales o morales. (39)

III.5. Derecho de Propiedad

El Derecho Constitucional brasileño, vigente a la época de transición, aseguraba el derecho de propiedad, atribuyéndole la función social. La Constitución de 1969 establecía ese derecho, admitiendo la expropiación de bienes urbanos y rurales por necesidad o utilidad pública y por interés social, vedaba a los extranjeros el acceso a la propiedad de empresas periodísticas de cualquier especie, inclusive de radio y de televisión, así como aseguraba a los respectivos autores el derecho de propiedad de las obras literarias, artísticas y científicas producidas. La propiedad de los inventos industriales y de las marcas de industria y comercio estaba, también, garantizada en el texto constitucional citado. (40) La Constitución de 1988 mantuvo todos los preceptos anteriormente previstos en la Constitución de 1969 y, además, añadió el derecho de herencia que no estaba explícitamente fijado en la Constitución precedente. (41)

El derecho positivo brasileño se vio contemplado con varios instrumentos jurídicos que buscaban la garantía del derecho de propiedad. Antes de la distensión política, más precisamente en el mismo año del golpe militar, el primer gobierno de la dictadura hizo votar por el Congreso Nacional el

Estatuto de la Tierra, un documento considerado progresista para la ocasión, que aseguraba el derecho de propiedad de la tierra a quien la estuviese utilizando de forma productiva, con la consecuente distribución de títulos de propiedad a las personas que poseyesen un trozo de tierra. También preveía la expropiación de fincas consideradas improductivas por el Gobierno Federal para fines de asentamiento y distribución a los campesinos sin tierra que necesitaban trabajar en ella. Más tarde, ya en el último gobierno del período de la transición, surgió la Ley de Reforma Agraria que en la práctica debía hacer lo mismo que estaba previsto en el Estatuto, pero ni uno ni otro instrumento jurídico obtuvieron los resultados esperados por la sociedad, especialmente por los defensores de una distribución más justa de tierra. A la vez que surgieron esos instrumentos que propiciarían una justicia social en el campo, otras disposiciones ya existían en el Código Civil que garantizaban el derecho de propiedad a aquellos propietarios considerados latifundistas, dificultando la acción del gobierno y neutralizando las presiones de sectores de la sociedad, particularmente de la Iglesia Católica, por medio de la Comisión Pastoral de la Tierra, que exigían la efectividad de tal política social. Durante ese período, el mecanismo de la expropiación por interés social con vista a la reforma agraria fue utilizado por el Gobierno sin que ello se tradujera en la atención de los trabajadores sin tierra. Por la controversia a que está sujeto el derecho de propiedad y también por la crisis existente en el campo, con millones de campesinos sin

posibilidades de trabajo por falta de acceso a la tierra, y para quienes la tierra se constituía, entonces, en un derecho básico a la supervivencia, ocurrieron millares de conflictos armados en varias regiones de Brasil, especialmente en las regiones Norte y Nordeste.

Otra cuestión conflictiva del derecho de propiedad en Brasil, dice relación con las tierras habitadas por los indios que segun la Fundación Nacional de los Indios (FUNAI), órgano del Gobierno Federal encargado de dar asistencia y protección a la comunidad indígena en todo el Brasil, asciende a 67 millones de hectáreas ya identificados, y pudiendo alcanzar a 850 millones de hectáreas que significaría 8,5% de la totalidad de la superficie del país. (42) La Constitución de 1969 consigna en su artículo 198 que las tierras habitadas por los silvícolas son inajenables, correspondiéndoles la posesión permanente y el derecho al usufructo exclusivo de las riquezas naturales como de todas las utilidades de ellas provenientes, entre tanto esas tierras son consideradas constitucionalmente bienes de la Unión (artículo 4º, párrafo IV). En la Constitución de 1988, hay un capítulo exclusivamente dedicado a los indios, que mantuvo los derechos originarios que los indios poseen sobre las tierras que ocupan y habitan y en el que se obliga a la Unión a demarcarlas, protegerlas y hacer respetar todos sus bienes, declarando que las mismas son inajenables e insusceptibles de contrato alguno, como también son imprescriptibles los derechos que las comunidades indígenas tienen sobre ellas. A pesar de

toda la garantía de la legislación constitucional y ordinaria, las tierras indígenas fueron invadidas por hacendados, que establecieron en ellas la cría de ganado, y por los "garimperos" (mineros) en busca de metales preciosos, principalmente oro, generándose así conflictos entre todos los involucrados y la constante expulsión de los indios de sus tierras.

En las zonas urbanas de las grandes ciudades de todo el país, particularmente en las periferias de esas ciudades, ocurrieron invasiones de terrenos de propiedad privada por personas del sector más pobre de la sociedad, en el intento de construirse viviendas, obligando, en muchos casos, a que los Gobiernos Federal y regional determinasen la expropiación de tales áreas para atender al interés social.

El derecho de propiedad, con su amplitud vasta, se encuentra disperso en algunos capítulos de los dos documentos constitucionales vigentes en el período de transición (la de 1969 vigente hasta 5 de octubre de 1988 y la de 1988 en vigor), aunque éste esté consignado más precisamente en las partes referidas a los Derechos Individuales y Colectivos, y del Orden Económico. Sin embargo, es el derecho de propiedad privada de bienes inmóviles el que está sujeto a la figura de la expropiación, sea por necesidad y utilidad pública o sea por interés social, según la forma establecida por la ley. Existen en el derecho ordinario brasileño, institutos legales

específicos de reglamentación y garantía del derecho de propiedad, que tuvieron origen en los gobiernos militares de la transición, a saber: La Ley 7.232 de 29 de octubre de 1984 que reglamenta la Política Nacional de Informática estableciendo en el país la "reserva de mercado" para la producción de equipos de informática; La Ley 7.463 de 17 de abril de 1986 que dispone sobre el Plan Nacional de Informática y Automación; La Ley 7.646 de 18 de diciembre de 1987 que dispone sobre la protección de la propiedad industrial, entre otras.

III.6. Derecho de Participación

Este es el derecho político de ciudadanía y de ejercicio de la democracia que más puede contribuir para la eficacia de los derechos fundamentales, pues, a través de él, los individuos, en particular, y los grupos sociales, de una forma generalizada, consiguen reivindicar el cumplimiento y la garantía de los demás derechos, especialmente de los derechos políticos, económicos y sociales. En la Carta Constitucional de 1969 este tema está consignado en el Capítulo alusivo a los Derechos Políticos que trata del derecho a votar y ser votado y establece, también, limitaciones para que el ciudadano brasileño pueda elegir o ser elegido para cargos electivos. En virtud de los preceptos de esa Constitución no podrán votar ni ser votados los brasileños menores de 18 años, los analfabetos, los que no sepan expresarse en la lengua nacional, los militares de escalón inferior y los que fueren privados,

temporal o definitivamente, de sus derechos políticos. (43) La cuestión del acceso a un cargo político en los cinco primeros años de la transición fue demasiado polémica porque el gobierno de la "revolución" se valía de los actos de excepción vigentes, y constantemente adoptaba medidas discrecionales - por medio de Enmienda a la Constitución y Decretos-Leyes - en favor de sus adeptos con la intención de mantenerse en el poder. Mientras tanto la Constitución de 1988 adoptó una cierta liberalización en la cuestión de acceso a un cargo electivo considerando el voto facultativo para los analfabetos y los mayores de 16 y menores de 18 años, también los militares pueden elegir y ser elegibles, excepto los que estén en el servicio militar obligatorio.

Una de las formas de participar en la vida pública es a través de los partidos políticos. Ello efectivamente no ocurrió hasta 1979, momento en el que los brasileños solamente disponían para tal participación de dos partidos - el MDB y la ARENA - que abrigaban siempre los mismos ciudadanos, de un lado los que hacían, en la forma que podían, oposición al gobierno, y del otro, aquellos que estaban siempre dispuestos en cualesquiera circunstancias a apoyar el gobierno militar, por eso era casi imposible motivar la participación de otros ciudadanos sin compromiso con esa realidad. A partir de 1979, con el pluripartidismo o sea la aparición de nuevos partidos políticos, la derogación de algunos dispositivos arbitrarios, y también por la emergencia de varios grupos y movimientos

sociales, el cuadro político nacional pasó a tener una nueva fisionomía. Cada vez que se realizaba una elección general o municipal ese cuadro tomaba una nueva configuración, hecho que quedó consumado con las elecciones generales de 1982, en donde los partidos de la oposición consiguieron elegir diez Gobernadores en los estados de mayor significación e importancia política y económica del país y aumentó el número de escaños para Diputados Federales y Senadores de la República. Aún más contundentes fueron las elecciones generales de 1986 en las que la oposición consiguió elegir 22 entre los 23 Gobernadores de los Estados de la Federación, y un mayor número de Diputados y Senadores alcanzando la mayoría en las dos Cámaras del Congreso Nacional.

Aunque la Constitución preveía como forma de acceso a los cargos públicos efectivos de la Administración Pública, el concurso público, este expediente fue poco utilizado por los Gobiernos Federal, Estaduales y Municipales, que preferían hacer uso del mecanismo de contrato individual de trabajo, porque facilitaba el proceso de admisión de personal dentro de los criterios de cada dirigente, que a su vez obedecían las normas preconizadas por la Doctrina de Seguridad Nacional. Muchos ciudadanos que se sometieron a concursos públicos o tests de selección para admisión en empleo o cargo público, aunque habiendo obtenido la calificación necesaria, quedaron imposibilitados de acceder a los mismos, en razón de haber supuestamente participado en grupos comunistas, entidades

sindicales, movimientos obreros o de otras agremiaciones contrarias a los objetivos de la "revolución", para lo cual era suficiente que los nombres de esas personas constasen de los registros de los órganos del Servicio Nacional de Informaciones existentes en todas las reparticiones públicas en cualquier parte del país. Los llamados "cargos de confianza", de los que había millares en las tres esferas de Poder, eran nombrados, en muchos casos, de entre personas sin la mínima calificación o capacidad técnica, pero comprometidas con el régimen militar. La igualdad de participación de los ciudadanos brasileños en la vida pública por medio de empleo o cargo público fue bastante difícil en casi todo el período de la transición.

Una flagrante violación al derecho de participación en la vida pública fue la edición del Decreto-Ley 477 de 1969, período hegemónico del régimen militar, que continuó en vigencia por un largo tiempo de la transición. En él se prohibía la participación de profesores, funcionarios y estudiantes de las entidades de enseñanza pública o privada en manifestaciones o agremiaciones consideradas subversivas o contrarias a la Seguridad Nacional. Este instrumento originario por la arbitrariedad eliminó, por más de diez años, a esas personas del escenario político nacional, por consiguiente de la vida pública brasileña. Otro documento legal ya del período de la transición, la Ley 6.341 de 1976, trataba de la organización y funcionamiento de los movimientos

estudiantiles y de los movimientos de los trabajadores en los partidos políticos, siendo un esquema preconcebido por el régimen para delimitar la actuación de esos segmentos de la sociedad en los moldes que serían aceptos por los órganos represores estatales.

Los ciudadanos poseían limitados recursos jurídicos para participar de la vida pública del país, en tanto esos estaban sujetos a las leyes de la arbitrariedad. Los políticos en mandato electivo, cuando discrepaban de la ideología de Seguridad Nacional puesta en práctica por los militares, eran cesados en sus cargos y veían sus derechos políticos suspendidos por diez años, lo que les imposibilitaba participar en política, votar o ser votado u ocupar cargos públicos. Esto también se aplicaba a los individuos que se negaban a cumplir el servicio militar obligatorio: varios individuos que por convicción religiosa se negaron a prestar el servicio militar tuvieron sus derechos políticos suspendidos, como ocurrió en 1987 cuando, de una sola vez, el Presidente José Sarney cesó los derechos políticos de 123 brasileños. (44)

Algunos mecanismos jurídicos que aseguraban la participación de los individuos en la vida pública de la Nación, estaban fijados constitucionalmente, a saber, la "Acción Popular", que es un medio constitucional puesto a la disposición de cualquier ciudadano para obtener la derogación o anulación de actos o contratos administrativos considerados

illegales y lesivos al patrimonio público o de actos practicados por entidades en que el Estado participe, contrario a la moralidad administrativa, al medio ambiente y al patrimonio histórico y cultural. Entendemos ese remedio jurídico como una forma de participación indirecta que puede ser ejercida después del acto de una autoridad arbitraria, pero de casi ninguna aplicación o eficacia en el período en análisis.

La "Iniciativa Popular" un mecanismo constitucional creado por la Constitución de 1988, artículo 61, párrafo 2º, con el objetivo de democratizar el Poder Legislativo, consiste en dar la posibilidad de que todo ciudadano en pleno goce de sus derechos políticos pueda participar del proceso legislativo, en la presentación al Congreso Nacional de proyectos de leyes complementarias u ordinarias, y cuya iniciativa ha de estar suscrita por un mínimo de 1 por ciento del electorado nacional, distribuido por lo menos por cinco estados de la Federación y con un mínimo de tres décimos por ciento dos los electores de cada uno de los cinco estados. Como se ve las exigencias en cuanto al número de electores para suscribir un proyecto de ley de iniciativa popular torna inviable por completo el funcionamiento de tal dispositivo constitucional.

Los mecanismos institucionales de garantía del derecho de participación en la vida pública no fueron lo suficientemente eficaces para garantizar el ejercicio de ese

derecho en la redemocratización del país, mientras tanto con el inicio de la apertura política varios organismos y movimientos sociales empezaron a exigir la descentralización de la toma de decisiones y una mayor participación de los ciudadanos y de los demás sectores de la sociedad civil en las decisiones políticas del gobierno con base en la soberanía popular, principio básico para el ejercicio de la democracia. Buscaron otras formas más dinámicas y coincidentes con la realidad popular para participar y representarse en el seno de la sociedad como un todo, a través de la participación político partidaria, participación en cooperativas, participación en entidades de representación estudiantil, asociaciones de vecinos, participación sindical, asociaciones de padres y alumnos, grupos de defensa del medio ambiente etc. Como ya vimos la participación popular tuvo una fuerza decisiva tanto en el restablecimiento de las elecciones directas para la Presidencia de la República, como en la elección de un civil para la Presidencia después de 20 años de dictadura militar, en las discusiones democráticas de los temas sometidos a la Asamblea Nacional Constituyente, en las cuestiones de control del medio ambiente etc. Aún en los años finales del período de transición, algunos candidatos a cargos electivos de Alcaldía discutían con la comunidad local, durante los comicios, la necesidad de crear Consejos de Participación y Gestión Popular para que cada comunidad directamente involucrada eligiera sus prioridades, presentase sus proyectos y participase efectivamente de sus ejecuciones. En algunos Municipios

importantes como São Paulo, Recife y Salvador fueron creados consejos municipales o regiones administrativas municipales, pero ellos no correspondieron a la ansiedad de toda la comunidad allí donde se instalaron. Esa búsqueda de participación en la cosa pública pasaba también por la integración del ciudadano en las decisiones políticas del su entorno y del país, pues como señala Paulo Sérgio Pinheiro "de nada sirve participar por participar, debiese participar para interferir, participar para hacer constar en la decisión". (45)

III.7. Derecho a la Libre Circulación

Ese derecho a la libre circulación, también entendido como el derecho de ir y venir y la libertad de locomoción, estaba garantizado constitucionalmente en el período de la transición, de conformidad con el párrafo 26 del artículo 153 de la Constitución de 1969 que decía: "en tiempo de paz, cualquier persona podrá entrar con sus bienes en el territorio nacional, permanecer o salir de él, respetando los preceptos de la ley". El apartado XV del artículo 5º de la Constitución de 1988, así se expresa: "es libre la locomoción en el territorio nacional en tiempo de paz, pudiendo cualquier persona, en los términos de la ley, entrar, permanecer o salir de él con sus bienes". Como se puede observar ambas expresiones dan el mismo sentido normativo de garantizar ese derecho. No obstante, en el aspecto político el derecho de locomoción sufrió graves violaciones en los primeros años de la distensión, ya que el

Acto Institucional n° 5 permaneció vigente hasta 1979 y este instrumento discrecional suspendía la aplicación del derecho constitucional de la concesión de Habeas Corpus - instrumento jurídico constitucional que garantiza la libertad de locomoción a toda persona que fuese coaccionada por acto ilegal o abuso de poder - a las personas acusadas de crímenes políticos, crímenes contra el orden económico y social, la economía popular y otros delitos previstos en la Ley de Seguridad Nacional. (46)

A partir del año de 1979 con la revocación del Acto Institucional n° 5, y la consecuente garantía del Habeas Corpus y la concesión de amnistía a las personas perseguidas por el régimen militar, ese derecho pasó a ser menos trasgredidos en relación a los aspectos políticos. Sin embargo, antes tuvieron que dejar el país, sin pasaporte, más de 5.000 brasileños, forzados por las constantes persecuciones de los órganos de represión, y pasaron a residir clandestinamente en otros países contra sus propias voluntades. El proceso de apertura política iniciado en 1974 tardó justamente cinco años para sacar millares de brasileños del exilio en que estaban viviendo, lo que fue posible con la ley de amnistía de 1979.

La legislación para entrada, permanencia y salida de extranjeros en el país comprendió primero, el Decreto-Ley 914 de 18 de octubre de 1969 dictado por el Comando Revolucionario, y después, ya en el período de la transición, la Ley 6.815 de 19 de agosto de 1980, el llamado Estatuto de los Extranjeros y

su reglamentación el Decreto 86.715 de 10 de diciembre de 1980. Estos documentos legales además de contener las exigencias de cuño de los tratados internacionales sobre el asunto, contenían otras de carácter específico dado al momento de excepción que pasaba el país. En virtud de ellas, no se concedía visado para entrada en Brasil a las personas consideradas nocivas a el orden público; a las personas que no satisficiesen las condiciones de salud, establecidas por el Ministerio competente etc. Legalmente, amparados por los dos textos legales, los extranjeros de países limítrofes, es decir fronterizos al Brasil, estaban exceptuados de requerir visados para entrar en el país, bastando para tanto la presentación del documento nacional de identidad, expedido por autoridad competente del país vecino. Así también los nacionales de otros países podrían entrar en el país sin visado desde que hubiese, mediante acuerdo internacional, reciprocidad para los brasileños.

El Estatuto de los Extranjeros, aprobado por decurso de plazo, a raíz de la resistencia de la mayoría del Congreso Nacional, suscitó vehementes protestas por parte de la Iglesia Católica, del PMDB y de algunos parlamentarios del PDS, que lo consideraban un instrumento puesto a disposición del Gobierno militar para impedir la entrada y para expulsar extranjeros del territorio nacional, y en el caso de la Iglesia Católica había fundamento, en su preocupación, pues sus miembros provenientes de otros países estaban siendo constantemente amenazados, lo que se concretó con la expulsión del sacerdote Vito

Miracapillo que hace tiempo venía irritando las autoridades del estado de Pernambuco, con sus ideas políticas radicales.

El flujo de entrada y salida de extranjeros en el país durante el período de la transición fue considerado normal por el órgano de la Policía Federal encargado de Control de Fronteras, (47) habiendo presentado en los tres últimos años de la transición (1987/89) el siguiente movimiento:

Tabla VI

Entrada y Salida de Personas 1987/89

Ocurrencias	1987	Años 1988	1989
Entrada de Extranjeros	1.970.340	1.224.940	1.069.964
Salida de Extranjeros	1.171.118	886.875	784.140
Entrada de Brasileños	465.213	339.386	460.494
Salida de Brasileños	791.720	516.802	647.186
Expulsiones	36	54	18
Deportaciones	176	214	134
Extradiciones	13	11	06
Repatriaciones	68	68	06

Fuente: Departamento de Policía Federal, Brasília

La misma legislación arriba mencionada también trataba de los institutos de expulsión, deportación, extradición, y asilo político, que pueden ser entendidos como formas de limitación el derecho a la libertad de movimiento. En esos casos Brasil ha seguido las normas de derecho internacional y sus normas jurídicas internas, habiendo ocurrido en el periodo algunos casos de expulsiones y deportaciones. Con referencia a las extradiciones, los pedidos

hechos por los Estados con los cuales Brasil había firmado tratado sobre el asunto, eran examinados por el Supremo Tribunal Federal a quien competía juzgar el pedido y en caso de acogimiento, cabía al Presidente de la República decretar o no la extradición. Muchos de los pedidos de extradición fueron denegados por el Supremo Tribunal Federal, porque las personas acusadas de cometer delito en sus países, no se les habían configurado como práctica de crimen común y también por cuestiones humanitarias. Añadiendo a todo eso la actuación, siempre favorable a los acusados, de entidades privadas como OAB, de notables juristas brasileños y las presiones, siempre contrarias a la concesión extradición, de los movimientos de derechos humanos y de la iglesia católica. El asilo político empezó a ser concedido con mayor intensidad por el gobierno brasileño en los últimos cuatro años del período de transición, ya en la "Nueva República", especialmente a ciudadanos chilenos y argentinos, y solamente en el año de 1986 fueron concedidos 42 asilos políticos, número considerado significativo sobre todo comparando con los años anteriores. Eso se puede atribuir al proceso de redemocratización porque pasaba el país.

(48)

La violación al derecho a la libertad de movimiento también estuvo presente internamente a través de los arrestos y detenciones arbitrarias, por las que personas acusadas de subversión permanecían incomunicadas ilegalmente en prisiones o casas clandestinas. Los secuestros de personas pertenecientes a

todos los segmentos de la sociedad - diplomáticos, periodistas, religiosos, abogados, intelectuales, empresarios, trabajadores etc - practicados por policías, grupos paramilitares, grupos terroristas, cuadrillas de delincuentes y marginales fueron muy frecuentes.

Otro factor que contribuyó a la violación al derecho de libre circulación fue justamente la condición social y económica y la desigualdad en todos los niveles existentes entre las diversas regiones del país. Los ciudadanos brasileños eran obligados a dejar sus tierras en búsqueda de mejores condiciones de vida y otras veces fueron expulsados por aquellos que detentaban la propiedad de la tierra y el poder económico. Además, los gobiernos propalaba una reforma agraria que prometía asentamiento para millones de brasileños lo que jamás dio el resultado esperado. Las personas iban en búsqueda de días mejores a otras regiones, cuando encontraban esa "tierra prometida" no podían permanecer allí por falta de las mínimas condiciones de vida, y volvían a su lugar de origen, si es que lo conseguían, más pobre que antes. (49)

III.8. Derecho a la No Discriminación

El Texto Constitucional de 1969 en el párrafo 1º del artículo 153 preconizaba que "todos son iguales ante la ley, sin distinción de sexo, raza, trabajo, creencia religiosa y convicciones políticas", y preveía la punición por

discriminación de raza en los términos establecidos por la ley. (50) En el período de transición estaba vigente la Ley de número 1.390, de 13 de julio de 1951, conocida como Ley Afonso Arinos, en homenaje a su autor editada bajo la égida de la Constitución de 1946 y que consideraba como crimen de contravención penal la práctica de actos considerados como de discriminación de raza y de color. También la Ley 5.250/67 - la Ley de Prensa - se refería a este tema en su artículo 14 que declaraba que estarían sujeto a condenación y pena de 1 a 4 años de detención aquellas personas que, utilizando de los medios de comunicación, hiciese propaganda de discriminación de raza o clase. Más tarde la última Ley de Seguridad Nacional - Ley 7.170/83 - estableció la pena de 1 a 4 años de detención para las personas que hiciesen en público propaganda de discriminación racial, y aumentaba la pena en un tercio cuando la propaganda fuese hecha en local de trabajo o por medio de radio o televisión.

Con el advenimiento de la Constitución de 1988, se ha pretendido proteger contra cualquier forma de discriminación todos los derechos fundamentales, pues el apartado XLI del artículo 5º dice textualmente que "la ley sancionará cualquier discriminación atentatoria de los derechos y libertades fundamentales", y añade en el apartado XLII que "la práctica del racismo constituye crimen sin fianza e imprescriptible, sujeto a la pena de reclusión en los términos de la ley", (51) mientras tanto, ambas disposiciones constitucionales dependían,

para su plena eficacia y aplicabilidad, de leyes ordinarias que los reglamentasen, así permanecían en vigor los dos textos legales anteriormente citados, pero de aplicación dudosa, el primero por una cierta caducidad dentro del Código de las Contravenciones Penales, y el segundo, por carecer de credibilidad jurídica y legitimación, ya que se trataba de un documento editado por el régimen militar. El 5 de enero de 1989 fue aprobada la Ley 7.716, que define los crímenes de discriminación por razones de raza y de color, y establece sus respectivas penas.

Hemos de señalar que en Brasil existió la discriminación en diversas facetas: la discriminación de raza, la discriminación de color, las discriminaciones sociales con relación al empleo, al trabajo, al nivel de vida digno, a la satisfacción de las necesidades de ocio, a las condiciones sanitarias, etc., las discriminaciones a las llamadas "minorías": los homosexuales, los portadores de enfermedades contagiosas, algunas sectas religiosas, discriminación contra la mujer, contra los ancianos, etc. Brasil es considerado un país plurirracial, en él conviven sin mayores complicaciones o mejor sin conflictos sociales, casi todas las razas existentes en el mundo. De esa convivencia, en principio, con los portugueses, los indios y los africanos desde siglo XVI y, sobre todo a partir del siglo XVII con la presencia de holandeses, franceses, y tiempo después de alemanes, italianos y japoneses, entre otras, surgió lo que se llamó la

"democracia racial", ocurriendo una mezcla de razas, principalmente entre los portugueses (blancos), indios y africanos (negros). Ese "triángulo racial" en la historia de la constitución de la raza brasileña, contribuyó a la formación de un "racismo a la brasileña", donde, en una sociedad que se presenta no declaradamente como jerarquizada y dividida en múltiples posibilidades de clasificaciones, "torna la injusticia algo tolerable y la diferencia una cuestión de tiempo y amor".(52) Sin embargo, la violación a ese derecho a la no discriminación o a un trato de igualdad entre las personas ante la ley y como ser humano, ocurrió durante el período estudiado en las más diversas partes del país.

La población negra brasileña ocupaba la tasa de 44% del total de los nacionales. La gran mayoría vivían en completa miseria económica, percibiendo de media el 40% de la remuneración que ganaban los blancos; el 80% de los niños negros en edad escolar no asisten a la escuela. Los negros, hasta 1987, no tenían representación política en el Congreso de los Diputados ni en el Senado, y casi ninguna influencia junto a los movimientos sociales y sindicatos. (53) Los blancos fueron los colonizadores, señores de las tierras y del poder y aún hoy persiste esta discriminación contra los negros, aunque sin conflictos raciales conforme alude el Profesor Hamilton B. Cardoso "el racismo brasileño ... se inserta dentro de un contexto mucho más implícito de confrontación colonial, donde, de un lado, los blancos privilegiaron el aspecto de la

dominación económica y, de otro las sus relaciones genéticas y culturales con las matrices coloniales", añadiendo que "esto no, significa que no tenga ocurrido la brutalidad del racismo con la misma intensidad que en otros países". (54) Algunos profesores y estudiosos brasileños atribuye esa discriminación, en parte, a la no participación de los negros en los diversos sectores de la sociedad y a la falta de una "conciencia negra", por haber los negros hasta cierto punto absorbido la ideología y la cultura de los colonizadores. (55) El profesor Severino Oliveira, por ser negro y haber sido muchas veces discriminado, denuncia la práctica de discriminación contra los negros, e, incluso, acusa a los negros de asumir padrones y valores de los blancos, y de disociarse de los demás negros cuando consiguen una mejor condición económica. (56) A pesar de la poca participación de los negros en todos los sectores de la sociedad brasileña, en el período de la transición ocurrieron significativos hechos que demuestran una mayor conciencia política de esa clase étnica de la sociedad brasileña en la búsqueda del cumplimiento de sus derechos, como seguidamente mencionamos: la aparición de decenas de movimientos sociales de defensa de los negros y de la cultura africana, la creación, en algunos estados de la Federación como Bahía, por sus respectivos gobiernos, de Consejos de Defensa de los Negros, la elección en el proceso electoral general de 1986, de varios ciudadanos negros, en casi todos los estados, para ocupar escaños de Diputados en el Congreso, el reconocimiento en 1985, por exigencia de notables ciudadanos negros, de la

condición de héroe nacional a Zumbi, un negro que luchó en defensa de su comunidad negra en la Sierra de la Barriga, la capital del Quilombo del Palmares, sitio éste que fue registrado por el Patrimonio Nacional.

Muchos brasileños, por ser negros, fueron acusados de robo o de practicar delitos, con lo que pasaron por graves situaciones y aún siendo inocentes, muchas veces eran detenidos y torturados sin siquiera saber el porque de tal situación. En noviembre de 1989, por lo tanto ya en la fase final de la transición, un señor negro de 80 años fue agredido por Agentes de Vigilancia de una tienda en la ciudad de Porto Alegre (estado del Rio Grande del Sur), por sospecha de haber practicado el robo de una crema dental que se encontraba en su bolsillo, aún habiendo presentado en el momento a los Agentes el "ticket" de compra. Ese caso fue llevado a la consideración de la Secretaría Municipal de la Producción, Industria y Comercio de esa ciudad, que determinó la cancelación de la autorización de funcionamiento de la citada tienda, y más tarde sometido a la consideración del Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana, en Brasilia, para que fuese analizado y se determinase una sanción a los dirigentes de esa tienda. (57)

La discriminación contra la mujer, originaria de la formación socio-cultural del país, ha persistido por todo el período de transición, con la práctica de sumisión, de malos

tratos y de violencia. Las mujeres han sido discriminadas en el empleo, siempre ocupando funciones con sueldos inferiores a los recibidos por los hombres; en sus casas donde el marido ejerce las funciones de jefe de familia, mientras ellas se encargaban de ejecutar y conducir las labores domesticas, y así en adelante. La producción científica y literaria sobre la condición de la mujer y las denuncias sobre la discriminación que sufrían, tuvo en la literatura de Ana Marie Muraro un exponente máximo, quien contribuyó para que algunos "tabús" pudiesen ser discutidos y analizados por toda la sociedad, como en los casos de aborto, divorcio, etc. Las mujeres tuvieron participación activa y decisiva en varios movimientos sociales, a saber, en Clubes de Madres, en Movimiento contra la Carestía, en Movimiento Pró-Amnistía, en Movimiento Feminismo, en Movimiento de Lucha por Guarderías. Es importante subrayar que todos esos movimientos tuvieron actuación nacional, pero fue en São Paulo donde contaron con una gran cantidad de participantes y ejercieron mayor presión sobre los poderes constituidos. De ahí empezó a surgir los primeros órganos oficiales de protección a la mujer, en 1983 fueron instituidos los Consejos Estaduales de la Condición Femenina, en los estados de São Paulo, Paraná y Minas Gerais, seguidos por los demás estados, como también en varios Municipios los Consejo Municipales de la Condición Femenina. Una gran aspiración de las mujeres, representadas por las llamadas feministas, fue la creación por el Presidente José Sarney, en 1985, del Consejo Nacional de los Derechos de la Mujer, vinculado al Ministerio de la Justicia,

que tuvo una destacada actuación desde el inicio de su constitución, promoviendo seminarios, encuentros y reuniones con la participación de representantes de órganos y movimientos sociales interesados en la protección a la mujer, y patrocinando publicaciones de documentos, revistas e informes sobre el mismo tema. También a partir de 1985 empezaron a ser creadas las Comisaría de Policía de Defensa de la Mujer, la primera en São Paulo, seguida por los demás estados de Brasil, para atender a las mujeres y sus dependientes, víctimas de violencia.

Aún se observó la discriminación contra la persona, con relación a su condición social y económica, pues las clases pobres han sido constantemente discriminadas en los sitios de trabajo, clubes sociales, cines, restaurantes, hoteles, etc. En muchas residencias de zonas consideradas "nobles" en las grandes ciudades, trabajadores eran impedidos de usar algunas áreas de esas viviendas (ascensores, áreas verdes y otros compartimientos) y forzados a usar ropas indeseables, bajo el pretexto de establecer la "disciplina", o de cumplir con las "convenciones". En varias fincas de regiones diversas de Brasil ocurrieron casos de trabajo esclavo en que los trabajadores, generalmente personas que vivían en pobreza casi absoluta, eran obligados a trabajar juntamente con sus familias en muchos casos con hijos pequeños, para ganar un sueldo que apenas podría cubrir los gastos con la alimentación que eran suministradas por los propios terratenientes, bajo amenaza de

privaciones y de tortura que eran hechas por los capataces - personas contratadas por esos propietarios para vigilar los trabajadores - impidiéndoles que huyesen de las fincas. Ello, era de todos modos imposible dado que no siempre esos trabajadores sabían en que lugar se encontraban. Esa servidumbre fue una de las formas de violación al derecho a no ser discriminado por muchas veces denunciada a las Secretarías de Seguridad Pública de los estados o a la Policía Federal. (58)

III.9. Derecho de Reunión

Ese derecho fundamental de convivencia entre las personas estaba previsto en la Constitución de 1969 con la siguiente redacción: "todos pueden reunirse sin armas, no interviniendo la autoridad sino para mantener el orden. La ley determinará los casos en que será necesaria la comunicación previa a la autoridad, bien como la designación, por ésta, del local de la reunión." (59) Constitucionalmente, para la realización de reuniones en sitios abiertos eran necesarias tres condiciones: 1) que la reunión fuese pacífica, es decir sin armas; 2) que la reunión persiguiese fines lícitos, o sea no prohibidos por ley, y 3) que fuesen previamente notificada a las autoridades en los casos previsto en ley. Sin embargo, por estar vigentes los actos de excepción, las fuerzas de represión, integradas por los órganos de la "comunidad de informaciones", constantemente disolvían reuniones bajo pretexto de que éstas subvertían o perturbaban el orden público

o intentaban reconstruir el partido comunista en Brasil. Las personas fichadas por el SNI como integrantes o simpatizantes del comunismo eran siempre como sospechas, y no conseguían reunirse, aunque esas reuniones fueran a realizarse en casas, clubes sociales, universidades o cualquier otro sitio, porque siempre eran vigiladas por agentes de seguridad del Estado. Los profesores y alumnos de las escuelas y universidades estaban impedidos de reunirse dentro de sus establecimientos de enseñanza para discutir política o hechos políticos. Los líderes de los movimientos sociales organizados, cuando convocaban personas para discutir en las calles y plazas públicas asuntos de interés colectivo, tales como vivienda, transporte público, asistencia sanitaria etc, tenían problemas con los policías civiles y militares, que a mando de sus superiores no permitían la realización de esas reuniones.

El dispositivo constitucional arriba mencionado, consigna que la autoridad podrá designar, tratándose de una reunión a ser realizada en recinto abierto, el sitio para realización de la reunión. Mientras tanto, permaneció vigente la Ley 1.207 de 25 de octubre de 1950 que dispone sobre el derecho de reunión, preconizando en su artículo 1º que "bajo ninguno pretexto podrá cualquier agente del Poder Ejecutivo intervenir en reunión pacífica y sin armas ..." excepto, agrega, "cuando la convocatoria se hiciera para la práctica de un acto prohibido por la ley". Y el artículo 3º de este mismo texto legal, determina que la autoridad policíaca de mayor

categoría, en el Distrito Federal y en las ciudades, fijará al comienzo de cada año, las plazas destinadas a comicios y dará publicidad a ese acto. Ocurre que la inquietud y la ansiedad de la sociedad brasileña para hacer valer sus derechos no siempre se sentían con la obligación de cumplir con esa exigencia. Un hecho interesante ocurrió en la ciudad de São Luis, capital del estado de Maranhão, nordeste de Brasil, cuando un comité pro ecología pretendió realizar una manifestación en determinada plaza que no constaba en la relación de los sitios previstos para tales eventos de modo que fue prohibida por la Secretaría de la Seguridad Pública de ese estado. Los organizadores de la reunión recurrieron al Tribunal de Justicia del estado para que les garantizara el derecho de realizarla en la plaza escogida, habiendo el recurso sido acogido por ese Tribunal. El Gobierno del estado no se conformó y apeló para el Supremo Tribunal Federal que mantuvo la decisión del Tribunal del estado. (60)

Con la Constitución de 1988, el derecho de reunión adquiere un cariz más democrático, pues ha sido una conquista de aquellas personas que por mucho tiempo en la fase represiva de la dictadura militar, se quedaron imposibilitadas de ejercer plenamente ese derecho. Ese derecho consta en el Texto de 1988 de la siguiente forma: "todos pueden reunirse pacíficamente, sin armas, en sitios abiertos al público, independientemente de autorización, desde que no frustren otra reunión anteriormente convocada para el mismo sitio, siendo apenas exigido previo aviso a la autoridad competente".

III.10. Derecho de Asociación

Consagrado en todos los Textos Constitucionales de la República, el derecho de asociación aparece protegido en la Constitución de 1969, en su artículo 153, párrafo 28, con la siguiente redacción: se asegura la libertad de asociación para fines lícitos" y dispone que "ninguna asociación podrá ser disuelta, sino por motivo de decisión judicial". (61) Ese dispositivo estuvo vigente hasta la promulgación de la nueva Constitución, pero esa protección constitucional no fue suficiente para que el derecho de asociación pudiese ser plenamente ejercido, pues muchas asociaciones de clase que tuvieron sus licencias cesadas antes de la apertura política, continuaron por mucho tiempo sin poder ejercer legalmente ese derecho, como en el caso de Unión Nacional de los Estudiantes (UNE), que hasta 1985 vivió en la clandestinidad. La Ley de las Contravenciones Penales instituyó como contravención penal "participar en asociación con más de cinco personas que se reúnen periódicamente bajo el compromiso de ocultar a la autoridad la existencia, objetivo, organización de la asociación", en ese caso, la entidad que así procediese sería declarada como practicante de actos ilícitos y impedida de funcionar por un cierto tiempo o indefinidamente, sin que para tanto los órganos de represión del Gobierno militar hubiesen de requerir de decisión judicial. Algunas asociaciones violadas en su derecho de constituirse y funcionar libremente, apelaban al Poder Judicial, pero éste basado en disposiciones existentes en

el Código Civil y en la Ley de Contravenciones Penales, mantenía casi siempre las decisiones arbitrarias de los órganos del Poder Ejecutivo.

Otro aspecto importante decía con relación a la adquisición de personalidad jurídica de las asociaciones, es decir poderes para contratar, aceptar bienes a título gratuito o oneroso, enajenar y entablar en juicio a través de sus representantes. Sin esa condición, obtenida en la forma fijado por el Código Civil, las asociaciones no tenían legalmente capacidad representativa. La ley de Registros Públicos - Ley 6.015/73, en su artículo 115, disponía que "no podrán ser registrados los actos constitutivos de personas jurídicas, cuando su objeto o circunstancias relevantes indiquen destino o actividades ilícitas o contrarios, nocivos o peligrosos al bien público, a la seguridad del Estado y de la colectividad, a el orden público o social, a la moral y a las buenas costumbres". Como toda y cualquiera actividad o acción contraria a la doctrina de la Seguridad Nacional - predominante en el período - era perseguida y eliminada por el régimen por ser considerada nociva al país, era imposible que una asociación de clase, que normalmente tenían objetivos diversos al del gobierno militar, consiguiesen registros para obtener la capacidad jurídica y funcionar legalmente.

Un significativo acontecimiento ocurrió el día 25 de septiembre de 1985, cuando la Cámara de los Diputados por

unanimidad aprobó la legalización de la Unión Nacional de los Estudiantes (UNE), una asociación nacional representativa de los estudiantes que había sido disuelta por el régimen militar en el período efervescente del autoritarismo. En esa ocasión, con presencia de líderes estudiantiles, hablaron algunos de los diputados considerados de izquierda, que en aquella época ocuparon la presidencia de esa organización o que actuaron en los movimientos estudiantiles. (62) Esa manifestación de los parlamentarios ha sido un significativo acto político de homenaje a la UNE, por su lucha en defensa de las libertades democráticas en el país, durante todo el tiempo de arbitrio, y aún viviendo en la clandestinidad.

El texto constitucional de 1988 establece que "es plena la libertad de asociación para fines lícitos", que la creación de asociaciones no dependen de autorización, veda la intervención del Estado en su funcionamiento y que, solamente, podrán ser disueltas coactivamente o ver sus actividades suspendidas por decisión judicial, exigiéndose en el primer caso su tramitación en el juzgado. Por falta de una nueva legislación complementaria que permita la aplicación adecuada de esa libertad constitucional, han ocurrido algunas polémicas, en el campo administrativo y mismo jurídico, para la constitución de entidades de esa naturaleza, principalmente con relación a la necesidad de registrarlas en órgano público alguno del Poder Ejecutivo.

El apartado XX del artículo 5º de la Ley Mayor de 1988, garantiza que "nadie podrá ser compelido a asociarse o a permanecer asociado". Es que una de las condiciones para que exista una asociación depende de la voluntad de algunas personas para asociarse. Si ellos no quieren asociarse hay que proteger lo que se llama "libertad negativa de asociación". Así, ni autoridades del poder público ni dirigentes de asociaciones pueden imponer por acto administrativo o una norma jurídica la adhesión o permanencia de una persona en una determinada asociación.

La Constitución de 1988 prohíbe textualmente la creación de asociaciones de carácter paramilitar, que son las que se destinan al adiestramiento de sus miembros en el manejo de aparatos bélicos, o las que por el tipo de organización interna, adopción rígida de reglas jerárquicas, uniformes y signos exteriores, acaben por presentar una apariencia militar. Estarían excluidas de este tipo de organización las de carácter deportivos y las formadas por militares con fines lícitos. (63)

III.11. Libertad de Religión

La libertad religiosa es un derecho para proteger una de las formas de se manifestar la libertad de conciencia y de pensamiento. En este particular Brasil ha sido un país de muchas creencias donde todos los ciudadanos pudieron, sin

trabas y complicaciones, profesar y cultivar su religión sin la intervención estatal. Con el advenimiento de la República en 1889, acaeció definitivamente la separación del Estado de la Iglesia Católica romana, que en aquella época predominaba casi la totalidad de la población brasileña. A partir de ahí todos los Textos Constitucionales garantizaron el culto de cualquier religión o de las llamadas sectas religiosas, en tanto no contrariasen el orden público y las buenas costumbres. La Carta Constitucional de 1969 aseguraba "a los creyentes el ejercicio de los cultos religiosos", garantizaba que nadie perdería sus derechos por motivo de creencias religiosas, a menos que alegase esa causa para excusarse del cumplimiento de una obligación a todos impuesta y no se quisiese cumplir el servicio alternativo, caso en que se quedaría sujeto a la pérdida del derecho compatible con la excusa. Además permitía, a los interesados, la prestación a través de brasileños de asistencia religiosa a las fuerzas armadas y auxiliares, y en los establecimientos de internación colectiva, en los términos de la ley. (64)

Reconociendo la pluralidad religiosa de la población de Brasil, la Constitución de 1988 realza que "es inviolable la libertad de conciencia y de creencias, siendo asegurado el libre ejercicio de los cultos religiosos y garantizada, en la forma de la ley, la protección a los locales de culto y a sus "liturgias". Asegura, también, la prestación de asistencia religiosa en las entidades civiles y militares de

internación colectiva, sin hacer alusión que esa prestación sea exclusiva de brasileños. Y alude aún, que "nadie será privado de sus derechos por motivo de creencia religiosa", sujetando en caso de objeción de conciencia a cumplimiento de un servicio alternativo definido en ley. (65) Como se puede verificar por la lectura en los dos textos constitucionales aquí mencionados, los preceptos que tratan de ese derecho son similares, incluso ambos se refieren a él en tres apartados consecutivos.

En el campo de la libertad religiosa las ocurrencias de violaciones por parte del Estado o de las Unidades de la Federación fueron poco expresivas. Registramos un caso de pretendida violación, cuando, en 1985, la Asamblea Legislativa del estado de Paraíba - nordeste de Brasil - fue cuestionada por el Procurador General de la República porque había una ley aprobada en 1966, que determinaba que los cultos o sectas religiosas dependerían de previa autorización de la Secretaría de la Seguridad Pública de ese estado, para que esos cultos pudieran legalmente funcionar, y establecía algunas condiciones para la obtención de esa autorización. La representación de inconstitucionalidad presentada al Supremo Tribunal Federal fue juzgada perjudicada (sin fundamento) por ya haber sido el texto considerado inconstitucional derogado por una otra ley en 1977, y sustituido por un otro de acuerdo con la Constitución de 1969. (66) Con la aparición de nuevas sectas y cultos religiosos, y el crecimiento de los ya existentes, empezaron a ocurrir algunos conflictos entre ellos, principalmente entre la

iglesia católica romana y otras religiones protestantes y, entre estas, contra las religiones africanas. No obstante, esos conflictos no impidieron el ejercicio de la libertad religiosa.

III.12. Derecho a la Educación

El derecho fundamental a la educación, clasificado como un derecho social, estaba consignado en la Constitución de 1969 en su Título IV que trata de la Familia, de la Educación y de la Cultura, y no ha sido tratado en la parte que trata de los Derechos y Garantías Individuales, mereciendo por lo tanto una consideración específica, por tratarse de un derecho público subjetivo y de un deber del Estado. El artículo 176 de ese Texto Constitucional decía que "la educación, inspirada en el principio de la unidad nacional y en los ideales de libertad y solidaridad humana, es derecho de todos y deber del Estado, y será ofrecida en el hogar y en la escuela." Ese artículo - a través de sus cuatro párrafos y siete apartados - preveía que la enseñanza sería suministrada en los diferentes grados por los Poderes Públicos, preveía la existencia de la libre iniciativa particular, respetadas las disposiciones legales, establecía la concesión de becas, la obligatoriedad para la enseñanza básica a los niños de siete a catorce años y su gratuidad en las entidades oficiales, la enseñanza pública y gratuita en los niveles medio y superior para aquellas personas que demostrase efectivo aprovechamiento y comprobasen falta o insuficiencia de recursos financieros etc. (67) En 1983,

después de años de resistencia por parte del Poder Central, fue aprobada por el Congreso Nacional la enmienda a la Constitución de número 24, la llamada Enmienda João Calmon, por ser este el actor de la misma, que determinaba la aplicación de un 13 por ciento del Presupuesto de la Unión y 25% de los Presupuestos de los estados y municipios en mantenimiento y desarrollo de la enseñanza. Esta disposición permaneció incólume por dos años, hasta que en 1985, el gobierno de la Nueva República bajó el Decreto-Ley nº 7.348 de 24 de julio reglamentando la aplicación de tal precepto constitucional. Según la Constitución de 1969, la enseñanza básica gratuita era de la responsabilidad de los estados y municipios, mientras que la enseñanza superior competiría al Gobierno Federal, que se encargaría de reglamentarla en todos los niveles. Dada la carencia de recursos financieros de los estados y municipios el Gobierno Federal - que centralizaba en gran parte la recaudación de los impuestos - prestaba asistencia técnica y financiera a esas unidades de la Nación, con el objetivo de propiciar una educación pública y gratuita a mayor número de personas.

La Constitución de 1988 trata del derecho a la educación en su Título VIII "Del Orden Social", Capítulo III "De la Educación, de la Cultura y del Deporte". Sin presentar muchas novedades en relación al texto establecido en la Constitución de 1969, consigna en su artículo 205 que "la educación, derecho de todos y deber del Estado y de la familia,

será promovida y estimulada con la colaboración de la sociedad en favor del pleno desarrollo de la persona, su preparación para el ejercicio de la ciudadanía y su calificación para el trabajo". Preconiza esa Constitución una gestión democrática para la enseñanza pública, en la forma de la ley, y aduce que una ley establecerá un plan nacional de educación, de duración plurianual con vistas a la articulación y al desarrollo de la enseñanza en sus diversos niveles y a la integración de las acciones del Poder Público que conduzcan a la eliminación del analfabetismo. Establece, también, la universalización del cumplimiento escolar, la mejoría de la calidad de enseñanza, la formación para el trabajo, y la promoción humana, científica y tecnológica del País. Un avance significativo conseguido por los defensores de la enseñanza pública y gratuita en el que se relaciona con el mantenimiento de los gastos con la educación, fue la introducción en esa Carta Constitucional de disposición que eleva el porcentaje destinado a la educación en el presupuesto de la Unión al 18% de la recaudación de los impuestos previstos anualmente. Permaneciendo los estados miembros y los municipios con la obligatoriedad de aplicar 25% de sus presupuestos. (68)

La legislación básica de la educación nacional en la transición estuvo establecida en la Ley n° 5.692/71 - Ley de Directrices y Bases - que hizo considerables cambios en la educación a todos los niveles de la enseñanza, objeto de contestación por parte de expertos en educación, profesores y

alumnos, dado su carácter de exclusión de la participación de las personas que deberían ser involucradas en el proceso de discusión y elaboración de ese texto legal, porque se trata de un derecho fundamental concerniente a todos los ciudadanos. La reglamentación de la Ley 5.692/71 era de la competencia del Consejo Federal de la Educación, que elaboraba los textos y los sometían al Ministro de la Educación y ese, en su caso, al Presidente de la República que los aprobaba por medio de decretos. También en cada estado-miembro de la Federación existía un consejo de educación con competencias para establecer y coordinar las normas de enseñanza básica y media a nivel de esas regiones.

Los programas y las metas destinadas a la educación estaban casi siempre previstas en los llamados Planos Nacionales de Desarrollo, que los gobiernos militares preparaban para su ejecución en largo plazo (cinco años). Algunas medidas fueron tomadas por el gobierno central para la universalización de la enseñanza y eliminación del analfabetismo, entre las cuales citamos la creación de la entidad titulada Movimiento Brasileño de Alfabetización (MOBRAL) destinado a alfabetizar las personas que estaban por encima de la edad escolar y que por cualquier motivo no han podido frecuentar escuelas regulares de enseñanza básica. En 1981, el gobierno federal lanzó el Programa Nacional de Educación Preescolar para atender a los niños de familia de baja renta de 0 a 6 años - cantidad superior a 15 millones de

personas - y estimularlos a la entrada en la enseñanza regular a partir de los 7 años de edad, ya que de otra forma sería casi imposible dada a las condiciones de sus padres. Más tarde, ya en la Nueva República, fue divulgado por el Gobierno la propuesta de "Educación para Todos - Camino para el Cambio", que pretendía, en menor tiempo posible, extinguir el analfabetismo en Brasil, de ahí que el MOBRAL sufriera significativos cambios en sus acciones, estructura y métodos, y pasó a llamarse Fundación Nacional de Educación de Jóvenes y Adultos (Fundación EDUCAR). Además del combate contra el analfabetismo, el Ministerio de Educación ejecutó proyectos de educación especial destinados a los disminuidos y personas afectadas por deficiencias físicas o mentales, en atención a preceptos constitucionales introducidos a la Constitución de 1969 por la Enmienda número 12/78. Los estados miembros de la Federación y los Municipios se encargaban también de desarrollar y ejecutar programas específicos de educación para suplantar el analfabetismo, y otros destinados a la formación profesional de personas que estuvieron a la margen de la enseñanza regular, siempre con el apoyo financiero y asistencia técnica suministrados por el Gobierno de la Nación.

A pesar de los "esfuerzos" emprendidos por gobiernos militares para acabar con esa llaga educacional y mejorar las condiciones de educación de los brasileños, factores sociales, económicos y políticos contribuyeron para que la situación de la enseñanza pública en el país, sea en cantidad o calidad, no

haya logrado los resultados deseados por la mayoría de la sociedad. Lo que ocurrió fue una "elitización" de la enseñanza en todos los niveles. Los ricos que son minoría en Brasil tomaron los lugares que deberían ser de los pobres, principalmente en las universidades públicas en donde el mayor número de cursos superiores son diurnos, es decir por la mañana o por la tarde, con eso los pobres no pueden frecuentarlas, justamente porque durante el día necesitan trabajar para su manutención, incluso de su familia y las universidades públicas no funcionan por la noche. Las escuelas públicas de enseñanza básica y media presentaban un aspecto deplorable, tanto en sus condiciones físicas como de equipos materiales ya que los gobiernos no aportaban recursos financieros en cantidad suficiente para su recuperación o reparación, y por el número insuficiente de profesores y personal administrativo en esas escuelas por inacción del gobierno y aún por la baja remuneración atribuida a esos profesionales. Las pésimas condiciones de un considerable número de escuelas públicas llevaron a los padres, aún sin disponer de medios económicos, a optar por las escuelas particulares, mientras que la gran mayoría de la población brasileña luchaba por una plaza en los deficientes colegios públicos.

Los gobiernos de la Nación, antes de la "revolución" de 1964, aplicaban cantidades de recursos financieros en la educación superiores a 12% de los presupuestos anuales, aunque en 1965 el gobierno llegó a aplicar 12,5%. En los años de la

transición a la democracia no se aplicó porcentaje mayor a 5%. Es válido subrayar que las cantidades presupuestarias atribuidas a la educación no siempre eran destinadas específicamente a la enseñanza, porque esa aportación era para atender a todos los gastos del Ministerio de Educación y Cultura y de los órganos involucrados en esa área. Aún cuando el gobierno alardeaba en sus pronunciamientos oficiales de que la "educación es la mejor inversión y la meta prioritaria", en la práctica lo que se presenció fue lo contrario: destinación de pocos recursos y sobre todo mala aplicación de esos recursos y administración ineficaz en el sector de la educación. En 1977, según un informe de la Fundación Ford, Brasil ocupaba la 7ª posición en la América Latina, y la 57ª posición en el mundo, en gastos en educación. (69)

Existieron diversos factores determinantes del analfabetismo y de la evasión escolar, como por ejemplos citamos la carencia de las familias de ofrecer condiciones de mantenimientos a sus hijos antes de que los mismos alcanzasen la edad escolar, es decir de 0 a 6 años. El número insuficiente de plazas disponibles para el primer año del curso básico, que en 1973 era de 2,8 millones de niños mientras que las solicitudes de matrículas en este mismo curso alcanzaron a 6,7 millones, cantidad ésta que sobrepasó en más de dos veces al número de niños de 7 años. El gran número de repeticiones y la cantidad de niños con edad superior a los 7 años que estaban ingresando por primer vez en la escuela totalizaban el número

de matrículas verificado. También es de citar la falta de mayores recursos financieros a la educación y de programas de apoyo y asistencia al estudiante necesitado, el proceso selectivo y exclusivista que existió, dificultando el acceso a la educación de personas pobres - mensualidades escolares de las escuelas particulares muy caras, libros y materiales escolares inaccesibles, etc.

Otra observación que demuestra la no eficiencia y la no eficacia de los gobiernos del período de la transición con relación a la área de educación, comprometiendo por consiguiente el ejercicio de ese derecho social, fue la repetición de programas y proyectos de desarrollo de la educación, de apoyo y de asistencia, sea directa o por medio de los estados miembros o de los municipios, que eran anunciados como nuevos y no pasaban de programas y proyectos que ya habían sido ejecutados por órganos de esos mismos estados y municipios, como ocurrió en 1985, cuando el gobierno anunció una serie de nuevos programas y reformas en la educación, tales como elección directa para directores de colegios, ampliación de jornada escolar, distribución de merienda y libro didáctico gratuito, lucha contra la evasión y reprobación de los niños en los primeros años de estudio con aplicación de programas especiales y todo eso ya estaba siendo o se había intentado ejecutar por los estados y municipios desde 1983. (70)

La enseñanza universitaria fue otro grave problema de derecho a la educación. Con la crítica situación política y económica en que vivió Brasil como por la práctica de la opresión y represión a que estaba sometida la sociedad brasileña la enseñanza superior no se quedó fuera de todo el proceso y también fue víctima de ello, incluso por su omisión y pasividad. Las universidades públicas y particulares, y también las escuelas y facultades aisladas de formación superior, se transformaron en "instituciones autoritarias, burocráticas y antidemocráticas". (71) Entre tanto los gobiernos militares se valieron de mecanismos "legales", como el Decreto-Ley 477, que reprimía las manifestaciones en el seno de las universidades, la Ley 5.692, de Directrices y Bases de la Educación Nacional, que tuvo la influencia malévola del acuerdo MEC/USAID (United States Agency for International Development), otros de carácter represivo y de intimidación como la instalación de Asesorías Especiales de Información - agente del Servicio Nacional de Información (SNI) dentro de las propias universidades. Como ya hemos dicho las universidades públicas que solo funcionaban en período diurno, servían para los ricos y hasta cierto punto para la clase media, porque éstos no necesitaban trabajar durante el día, y a los pobres no se les dio otra alternativa a no ser procurar las universidades particulares que funcionaron en tres turnos, generando un problema social grave, ya que los alumnos pobres no poseían condición financiera suficiente para el pago de sus matrículas y manutención de sus estudios. Los profesores universitarios, con rarísimas excepciones,

presionados por la legislación arbitraria y el autoritarismo dentro de las universidades, estuvieron sumisos a esas normas legales y con eso se quedaron callados y ajenos a las reales necesidades de la enseñanza superior y también a la ansiedad y reivindicaciones de los movimientos estudiantiles. (72)

Brasil ocupaba, a finales de 1989, una deplorable posición en el mundo entre los países que detentan las mayores tasas de analfabetismo, más precisamente la 80ª posición, lo que significa que existen 79 países donde la tasa de analfabetismo es menor que este país. Las disparidades regionales de todo orden, principalmente en las regiones Norte, Nordeste y Centro Oeste, en sus aspectos económicos y sociales, sumados a otros factores de naturaleza político-cultural, imposibilitaron la eliminación del analfabetismo. Aún existen más de 7 millones de niños fuera de las escuelas y un número superior a 25 millones de niños frecuentan las escuelas sin las mínimas condiciones de una vida digna, pues viven en la pobreza y en la miseria. Brasil poseía en 1989 una población de 26 millones de analfabetos, correspondiendo a una tasa de 20,1%. Comparando con los datos de 1974, la situación de la educación poco o casi nada ha cambiado para mejor durante todo ese período. Veamos la evolución de las tasas de analfabetismo en el período 1976/89:

Tabla VII

Tasas de Analfabetismo 1976/1989
(personas con 7 años o más de edad)

Año	Tasa	Año	Tasa	Año	Tasa
1976	25,5	1981	24,9	1987	19,3
1977	25,0	1983	24,1	1988	20,5
1978	25,5	1984	23,1	1989	20,1
1979	24,8	1985	22,4		
1980	28,1	1986	21,5		

Fuente: IBGE/Pesquisa Nacional por Muestra en Domicilio 1976/89

La pobreza casi absoluta de la gran mayoría de la población de Brasil, configura el perfil de una "sociedad antidemocrática que perdió la dimensión humana y absoluta de la vida y del propio hombre", (73) y demuestra la perversa violación al derecho a la educación, derecho básico y elemental para todas las personas, en este caso para los niños y las personas marginadas por esa situación, negándoles la condición necesaria para el efectivo ejercicio de la ciudadanía. Como dijeron Laurício Neumann y Osvaldo Dalpiaz, en su trabajo titulado "Realidad Brasileña", "negar el derecho de educación libre, consciente y participante a una persona es negarle el derecho de vivir, es negarle el derecho de ser, cerrarle la puerta para la vida y el futuro. Negar el derecho de educación para la vida a una persona es negarle el derecho de participación, es negarle la razón y la espiritualidad, es

reducirla a la humilde condición de objeto, aparato, máquina de producción ... Negar el derecho de educación libre a una persona es negarle Dios, que quiso el hombre esencialmente libre". (74)

III.13. Derecho al Trabajo

La Constitución de 1969 trató de ese derecho social, primeramente en el Capítulo IV "De los Derechos y Garantías Individuales" que en su párrafo 23 dice: que "es libre el ejercicio de cualquier trabajo, oficio o profesión, observadas las condiciones de capacidad que la ley establecer", y después en la parte que se refiere al Orden Económico y Social en su artículo 165 decía asegurar a los trabajadores derechos específicos que visaban la mejoría de la condición social de los mismos. (75) La libertad de escoger una profesión debe estar relacionada con la capacidad de poder ejercerla, bien como a las limitaciones de formación profesional y de mercado de trabajo. El derecho al trabajo hoy en día está consignado en la mayoría de las constituciones modernas, y fue consagrado a partir del siglo XIX con la "revolución industrial" en la que los trabajadores pasaron a hacer exigencias de orden económico y social con vista al ejercicio de ese derecho.

Las conquistas conseguidas por los movimientos y luchas sociales con el tiempo fueron incorporadas a las constituciones de un gran número de países, etapa esa conocida

como del "constitucionalismo social" pues la positivación de las conquistas laboristas son conocidas como "derechos de los trabajadores". En el caso de Brasil, eso no es diferente, a partir de la Constitución de 1934 esos derechos aparecen fijados en todos los demás Textos Magnos. Así es que la Carta de 1969 procuraba, entre otros derechos, asegurar un salario mínimo al trabajador capaz de satisfacer sus necesidades y las de su familia, un salario familiar para los dependientes de los trabajadores, una igualdad de salario y de criterios de admisión para todas las personas, independiente de sexo, color y estado civil, una duración de la jornada laboral no superior a ocho horas al día, unas vacaciones anuales remuneradas, una asistencia sanitaria, hospitalaria y médica preventiva, una seguridad social en casos de enfermedad, vejez, invalidez y muerte, un seguro de desempleo, un seguro contra accidentes de trabajo, protección a la maternidad, una jubilación por tiempo de trabajo, que para las mujeres sería a los treinta años de servicio, reconocimientos de las convenciones colectivas de trabajo, estabilidad en el empleo, con indemnización al trabajador despedido sin justa causa, etc.

El Texto Constitucional de 1988 dice en su artículo 5º, apartado XIII, que "es libre el ejercicio de cualquier trabajo, oficio o profesión, atendidas las calificaciones profesionales que la ley establecer". Como podemos observar esa redacción es idéntica a la que consta en la Constitución de 1969, el legislador constituyente procuró no hacer ninguna

innovación para invocar la libertad de ejercicio de una determinada actividad laboral. Con todo el Texto de 1988, aún dentro del Título destinado a la protección y garantía de los Derechos y Garantías Fundamentales, consignó un Capítulo exclusivo para tratar de los derechos sociales, entre otros el derecho al trabajo (art. 6º). Los llamados derechos de los trabajadores están consignados en el artículo 7º que mantienen todos aquellos derechos ya señalados en la Constitución anterior, y además, consigna algunas conquistas de la clase trabajadora, tales como: el gozo de vacaciones con la remuneración añadida de más un tercio de esa misma remuneración; el permiso, con duración de 120 días, sin perjuicio del empleo y del salario a la mujer embarazada, la licencia paternidad en los términos de la ley; la protección para el mercado de trabajo de la mujer, la asistencia gratuita a los hijos y dependientes de trabajador desde el nacimiento hasta los seis años de edad en guarderías y escuelas infantiles; la protección jurídica al trabajador y al empleo por motivo de la informática, etc. (76)

La cuestión del derecho al trabajo en Brasil, no fue simplemente una cuestión de tener libertad para trabajar dentro de la capacidad de cada uno. Más que eso dependió de la situación económica porque atravesaba todos los países del mundo, con la crisis energética del petróleo, y también en caso de Brasil de la situación política que privilegiaba determinados sectores de la economía nacional razón por la que

una gran parte de la población brasileña, por no disponer de medios para su capacitación y formación profesional, se quedaron al margen del proceso de desarrollo que, por increíble que parezca, ha experimentado el país, consiguiendo alcanzar la 8ª posición entre las mayores economías del mundo. Con ya hemos visto, el derecho al trabajo, como un derecho social, estaba constitucionalmente previsto y garantizado, mientras tanto factores de orden político, que privilegiaban la producción de productos para exportación con vistas a que el país consiguiese superávit en el balance comercial, para ahorrar divisas y con eso posibilitar el pago del servicio de la deuda externa que siempre se acumulaba, impidió que pudiera haber en él un plan de empleo equitativo.

En ese particular los gobiernos del régimen militar nada hicieron para aumentar el nivel de empleo, ni tampoco instituyeron mecanismos legales para que las clases empresariales fuesen sensibilizadas u obligadas a crear más y nuevos empleos, pues la tasa de desempleo en todo el período de la transición no consiguió presentar una disminución significativa, conforme se puede deducir del período constante de la tabla siguiente:

Tabla VIII
Tasas de Desempleo Período 1976/1989

Año	Tasa	Año	Tasa	Año	Tasa	Año	Tasa
1976	1,84	1979	2,76	1984	4,3	1987	3,6
1977	2,32	1981	4,3	1985	3,4	1988	3,8
1978	2,36	1983	4,9	1986	2,4	1989	3,0

Fuente: IBGE/Pesquisa Nacional por Muestra en Domicílios 1976/89

Luego al inicio de la distensión política - en 1974, el Gobierno del Presidente Geisel decidió desmembrar el Ministerio del Trabajo y de la Seguridad Social en otros dos: el Ministerio del Trabajo (MT) y el Ministerio de la Seguridad y Asistencia Social (MPAS). (77) El primero para desempeñar las funciones específicas de las relaciones del trabajo, y el segundo, como prevé su propia denominación, encargado de normalización y control de las actividades de seguridad social y prestación de asistencia médica y sanitaria a todos los trabajadores brasileños, con excepción de los funcionarios de las reparticiones públicas de la Unión y de los estados de la federación, que poseían régimen jurídico propio - funcionarios públicos federales y estaduais - y que contaban para tanto con órganos de seguridad y asistencia sanitaria específicos. Con la creación del MPAS el Instituto Nacional de Seguridad Social pasó a integrar ese Ministerio, siendo su principal órgano, tanto cuidaba de la parte de seguridad social, como de la parte de asistencia médica y sanitaria. Más tarde, en 1977, fue

instituido el Sistema Nacional de la Seguridad Social (SINPAS) compuesto de tres órganos básicos: el Instituto Nacional de Seguridad Social (INPS), el Instituto Nacional de Asistencia Médica de la Seguridad Social (INAMPS) y el Instituto Nacional de Recaudación de la Seguridad Social (IAPAS).

La legislación laborista vigente en el periodo continuó siendo básicamente la misma prevista en la Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT) aprobada en 1943 aún bajo la vigencia de la Constitución de 1937 (dictadura de Getúlio Vargas) habiendo este instrumento jurídico sufrido muchas alteraciones durante todo el período. Hubo una tentativa de hacer una actualización de la CLT cuando en 1974 el Ministro del Trabajo constituyó una comisión para así proceder. Al final del Gobierno Geisel un anteproyecto fue presentado al Presidente quien lo sometió a la consideración de las fuerzas políticas y de los sindicalistas mereciendo total rechazo, principalmente, en cuanto al liderazgo sindical que no contempló las ansiedades de la clase obrera. En el campo de la seguridad social en enero de 1976 el Gobierno dictó el Decreto n° 77.077 que consolidó las Leyes de la Seguridad Social armonizando con la Ley Orgánica la demás legislación complementaria de la seguridad y asistencia social.

Otro punto crucial en el derecho al trabajo fue la cuestión salarial. Hasta el inicio de la transición en 1974 los salarios eran corregidos solamente una vez por año, basado

en los índices de la inflación de los doce últimos meses anteriores al mes de concesión del reajuste, cuyos coeficientes eran fijados y publicados por el gobierno. Ocurre que antes de la apertura política la inflación no había alcanzado a 20%, y a partir de 1974 ese porcentual empezó a acelerar alcanzando en 1979 al porcentual de 53,9%. (78) Los trabajadores, incluso los funcionarios públicos, que ya venían perdiendo en todos esos años el poder adquisitivo de sus salarios, ya que los índices calculados por el Gobierno, según órganos de los sindicatos, eran manipulados por los órganos oficiales de estadística, y no representaban verdaderamente la inflación ocurrida (índice de costo de vida) empezaron a movilizarse para conseguir una corrección salarial justa y compatible con la realidad económica, pues ya no soportaban más el "arrocho" (aprieto) de sus salarios. La política salarial vigente hasta 1979 posibilitó una mayor concentración de renta, es decir, más recursos para aquella pequeña parcela de la población que ya detentaba una gran suma de recursos, y el empobrecimiento cada vez más acentuado de la gran mayoría de los trabajadores, especialmente de la clase media. Con la situación crítica de la clase obrera y la presión de las fuerzas políticas y sociales, el Gobierno decidió en 1979 enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que fue aprobado y transformado en la Ley 6.708 que definía una nueva política salarial. Por este texto legal los reajustes estarían basados en el índice nacional de precios al consumidor (INPC), se estableció una diferenciación de las tasas de reajuste de acuerdo con los niveles de salarios, con

base en el mayor salario mínimo, la tasa de aumento de productividad sería negociada anualmente por ocasión del acuerdo colectivo de cada categoría, y los reajustes pasarían a ser semestrales. Vigente esa política salarial, que preveía un aumento de 10% por arriba del INPC para los trabajadores que ganasen hasta tres salarios mínimos, y a partir de ahí con índices iguales o inferiores al INPC, la inflación continuó subiendo y algunos economistas del Gobierno y del Fondo Monetario Internacional (FMI) atribuyeron ese hecho a esa política salarial, haciendo que las autoridades de la área económica-financiera del Gobierno del Presidente João Figueiredo, procurando combatir la inflación, editarse en el período de 1979/83 seis textos legales sobre la política salarial, conforme la tabla abajo consignada lo detalla:

Tabla IX (I)

Porcentual de Reajuste de los Salarios - 1979/1983 (I)

Bases Salariales	Ley 6.708/79	Ley 6.886/80	D.L.2.012/83
Hasta 3 SM*	110% del INPC	110% del INPC	100% del INPC
De 3 a 7 SM	100% del INPC	100% del INPC	95% del INPC
De 7 a 10 SM	100% del INPC	100% del INPC	80% del INPC
De 10 a 15 SM	80% del INPC	80% del INPC	80% del INPC
De 15 a 20 SM	80% del INPC	50% del INPC	50% del INPC
Más de 20 SM	80% del INPC	Negociación	Negociación

Tabla IX (II)

Porcentual de Reajuste de los Salarios - 1979/1980 (II)

Bases Salariales		Ley 2.024/83	Ley 2.045/83	Ley 2.065/83
Hasta 3	SM*	100% del INPC	80% del INPC	100% del INPC
De 3 a 7	SM	100% del INPC	80% del INPC	80% del INPC
De 7 a 10	SM	80% del INPC	80% del INPC	60% del INPC
De 10 a 15	SM	80% del INPC	80% del INPC	60% del INPC
De 15 a 20	SM	50% del INPC	80% del INPC	50% del INPC
Más de 20	SM	Negociación	80% del INPC	0%

Fuente: Livio W. R. de Carvalho en Políticas Salariales en Brasil, Revista Sociedad e Estado, Volumen 1, Brasilia.

* SM = Salario Mínimo

La pérdida salarial de los trabajadores en todos los sectores era consecuencia de la manipulación que las autoridades de las áreas económica y financiera hacían de los índices de inflación, que no siempre correspondían a la realidad de subida de los precios, como también a la utilización de un índice base, como el INPC, que estaba siempre por abajo de esa inflación.

Además para la corrección de los salarios de los funcionarios públicos civiles y militares, el Gobierno concedía un reajuste inferior al propio INPC, como se puede observar en seguida:

Tabla X

Indices de Inflación y de Corrección de Salarios - 1979/1983

Año	Inflación	INPC	Salario Mínimo	S*.Militar	S.Civil
1979	77,20	50,09	88,00	40,20	40,00
1980	110,20	95,32	101,10	75,00	56,30
1981	95,20	91,15	106,00	105,60	73,00
1982	99,70	97,87	97,50	105,60	96,20
1983	210,13	172,90	142,50	105,70	82,00

*S=Suelo. Fuente: Livio W. R. de Carvalho en Políticas Salariales en Brasil, Revista Sociedad y Estado, Volumen 1, Brasília.

En los primeros años de la apertura política - hasta 1977, Brasil vivió la era del llamado "milagro económico", con un crecimiento acentuado de su producto interior bruto (PIB) y con lo que hubo en ese período una acentuada mejoría de la tasa de empleo. Ello llevó al aprovechamiento del trabajo de la mujer y del menor. En el caso de la mujer, que todavía aún permanece marginada en el campo del trabajo, hubo una creciente participación en el mercado de trabajo, pasando de 18,5% en 1970 a 36,9% en 1985, en términos absolutos, pasó de 6 millones a 18,5 millones. (79) Esa creciente participación del trabajo femenino se verificó en todos los sectores de la economía, pero se destaca con mayor énfasis en el sector electrodoméstico y electrónico, donde ellas alcanzaron a constituir el 24% del total de los trabajadores. Es importante señalar que esa participación no se tradujo en buenos salarios,

vez que el salario medio de las mujeres fue 50 a 60% inferior al de los hombres.

Los gobiernos militares contribuyeron a dificultar el ejercicio al derecho al trabajo, a la vez que entre otras políticas estableció mecanismos de incentivos fiscales y de inversión para centralización de mercados de empleos, con la creación de centros, distritos, zonas y polos industriales en determinadas regiones, elegidas de acuerdo con las conveniencias de la política económica, que no privilegiaban el empleo y sí a los grupos económicos, que instalaban industrias y fábricas para la producción con vistas a la exportación. Con eso gran parte de la población, principalmente de los estados del Norte y del Nordeste, quedaban sin poder trabajar por falta de empleo y también por no poseer las cualificaciones exigidas cuando en esas regiones se instalaron industrias para las cuales no habían trabajadores o profesionales debidamente preparados, obligando que esas empresas recogieran a otras personas del sur del país o de otros países para ocupar esos puestos de trabajo. Como por ejemplos podemos citar las implantaciones de los centros industriales de Pernambuco y Bahía, como también el Centro Petroquímico de Camaçari en Bahía, donde los empleos especializados son ocupados por profesionales de otros estados o de fuera del país. Esa política industrial hizo que se fuese dando un cierto énfasis a determinadas formaciones profesionales más técnicas, como en los casos de las formaciones para las áreas tecnológicas y de

informática, comprometiendo, por cierto, el empleo de un número mayor de personas que no disponían y no tenían condiciones, por motivo de la situación política, social y económica del país, para obtener la preparación necesaria, ya que los gobiernos no las preparaban adecuadamente para que pudiesen atender a los avances tecnológicos de demanda del mercado de trabajo.

En Brasil jamás hubo la preocupación por una política salarial que fuese capaz de establecer una distribución justa de la renta, y por consiguiente, la política económica ha llevado a una concentración de renta cada vez más desigual. La gran parte de los trabajadores brasileños ganaban menos de dos salarios mínimos, y solamente una pequeña minoría, alrededor de 1% de la población económicamente activa percibía más de 20 salarios mínimos. Mientras tanto, había una disparidad muy grande entre el menor salario (salario mínimo) y los salarios más altos, principalmente pagos para las empresas multinacionales.

La Justicia del Trabajo, aunque considerada por muchos empresarios y laboristas como tutelar y protectora de los derechos de los trabajadores, no pudo huir a la regla de la Justicia de una manera general en Brasil muy lenta y sufriendo la intervención del Poder Central, lo que en muchos casos comprometió, por su lentitud y parcialidad, el pleno alcance del derecho al trabajo.

Además de los puntos citados, otros aspectos se puede analizar con relación al cumplimiento del derecho al trabajo que implicaron su violación, a saber: las empresas establecían criterios de admisión injustos, dificultando la libre concurrencia entre todos aquéllos en condiciones de se presentar al empleo; los patrones en muchos casos efectuaron despidos a mujeres embarazadas, líderes sindicales, trabajadores considerados como pertenecientes o simpatizantes del comunismo, etc.; los acuerdos colectivos de trabajo, en que encajaban algunos derechos conquistados con mucha lucha a través de huelgas, no fueron cumplidos por los patrones; la forma de ingreso en el servicio público era el del "clientelismo", pocas veces se realizó concurso público, se admitía a las personas no por sus méritos y sí por poseer padrinos (parlamentarios, altos gestores de la Administración Pública, etc). Ello en todos los niveles y esferas de Poder.

A pesar de que las normas jurídicas laborales y de seguridad social, provenientes de la Consolidación de las Leyes del Trabajo, aprobado en 1943, por el entonces Presidente Getúlio Vargas, durante el período de la transición fueron mucho contestadas por los líderes de los sindicatos, el 29 de abril de 1986, es decir ya con un Presidente de la República civil, fue concedido a Getúlio Vargas por la Ley 7.470 el título de Patrono de los Trabajadores de Brasil, lo que parece por decirlo menos una incoherencia.

III.14. Derecho a la Huelga

El derecho a la huelga, integrante de los derechos sociales, bien podría ser analizado como parte del derecho al trabajo, pues es entendido como un derecho del trabajador, es decir un derecho conquistado por los trabajadores a lo largo de un período de muchas luchas en varios países de Europa y de América, cuestión no diferente en Brasil, fue consagrado en nuestro ordenamiento constitucional en la Constitución de 1946 que fue la cumbre de todo un proceso de redemocratización que vivió Brasil a partir de 1937 con la Constitución de 1937 y el establecimiento del llamado Estado Nuevo, un régimen duro, severo y también arbitrario. La legislación ordinaria respeto del derecho a la huelga inicialmente estaba prevista en la Consolidación de las Leyes del Trabajo, documento legal aprobado en 1943, que todavía permanece vigente en algunos puntos. Específicamente la Ley nº 4.330 de 1º de junio de 1964 reguló ese derecho en la forma establecida en el artículo 158 de la Constitución de 1946. En 1978, ya en el período de la transición fue editado el Decreto-Ley nº 1.632 de 4 de agosto que disponía sobre la prohibición de huelga en los servicios públicos y en actividades esenciales de interés de la "seguridad nacional". La Constitución de 1969 garantizó el derecho a la huelga en su artículo 165, apartado XX, que con la enmienda nº 18, de 1981, pasó a tener el número XXI, aseguraba a todos los trabajadores el derecho a la huelga, con excepción de lo previsto en el artículo 162 de la misma Carta

Constitucional que no permitía huelga en los servicios públicos y actividades esenciales, según lo establecido por la ley. (80)

La Ley nº 4.330 de 1964 que estuvo en vigor por todo el período de transición, trataba de organizar y disciplinar el derecho a la huelga. Con sus 32 artículos creaba grandes dificultades para que los trabajadores pudiesen ejercer ese derecho. Para la consecución de una huelga había todo un ritual que los trabajadores habían de cumplir, por medio de sus sindicatos de clase, y como sabemos esos sindicatos, por estar atados o mismo subordinados al Ministerio del Trabajo, no representaban los intereses de los trabajadores. Ello provocó que por un buen tiempo los trabajadores estuviesen casi imposibilitados para defender sus derechos y por mismo, de luchar por mejores condiciones de vida. Esa Ley determinaba entre otros requisitos que para la realización de una huelga habría que proceder a una convocatoria previa por escrito publicada en periódicos con antelación mínima de 10 días de la fecha prevista para su inicio, decisión que debería ser tomada en Asamblea General, con aprobación por voto secreto de 2/3 de los asociados en primer convocatoria o 1/3 en segunda convocatoria, con la presencia siempre de un delegado del Ministerio del Trabajo. También, prohibía la huelga en la administración pública, específicamente para los funcionarios regidos por el Estatuto de los Funcionarios Públicos. La legislación ordinaria brasileña estuvo llena de incoherencias durante todo el período de arbitrariedad y pos-arbitrariedad lo

que también ocurrió en el campo del derecho laboral, pues con todas las exigencias contenidas en la Ley 4.330/64 (documento legal que reglamentaba el derecho a la huelga), el penúltimo artículo de tal texto decía que "la autoridad que impedir o intentar impedir el legítimo ejercicio de huelga será responsable por eso acto en la forma de la legislación en vigor".

Con la aparición de las primeras huelgas a nivel de categoría profesional, debido a las serias dificultades sociales y económicas porque atravesaba el país, el gobierno del Presidente Ernesto Geisel dictó el 4 de agosto de 1978 el Decreto-Ley nº 1.632 disponiendo la prohibición de huelgas en la administración pública y en actividades esenciales de interés de la seguridad nacional, con lo que se buscaba contener la ola de huelga que empezaba a multiplicarse por todo el territorio nacional. La innovación de ese instrumento legal en relación a la Ley 4.330/64 fue que previó y definió por primer vez las actividades consideradas esenciales en el interés de la seguridad nacional, mientras que el otro, permaneció igualmente vigente con todas sus limitaciones al ejercicio del derecho a la huelga. Tanto uno como otro preveían sanciones, con penas de advertencia, suspensión hasta 30 días, y rescisión de contrato de trabajo o dimisión cuando se trataba de funcionarios públicos.

La Constitución de 1988 en el Capítulo de los Derechos Sociales, artículo 9º, asegura el derecho a la huelga dando competencia a los trabajadores para decidir sobre la oportunidad de ejercerlo y sobre los intereses que deban por medio de ese derecho defenderlos. Pero ese mismo artículo que aparentemente generaliza y liberaliza el derecho a la huelga se dispone en su párrafo 1º que "la ley definirá los servicios o actividades esenciales y dispondrá sobre el acatamiento de las necesidades básicas de la comunidad", y en su párrafo 2º que los "abusos cometidos sujetan los responsables a las penas de la ley." (81) Por la percepción del contenido del artículo citado, el trabajador es quien decide en sentido unilateral sobre la necesidad y oportunidad de se hacer una huelga, pero luego, y seguida, el párrafo primero prevé que una ley definirá los servicios y actividades esenciales que para la realización de una huelga tendrán que satisfacer algunos requisitos en el intento de no sacrificar o causar problemas al orden económico y social, y principalmente a las personas. Así fue como en 1989 el gobierno del Presidente José Sarney editó una Medida Provisional - instrumento legal que tiene fuerza de ley, previsto en el Texto Constitucional de 1988 - transformada en la Ley nº 7.783 el 26 de junio que dispone sobre el ejercicio del derecho a la huelga, define las actividades esenciales y regula las condiciones para atender las necesidades básicas de la comunidad. Esa ley procura traducir el espíritu del precepto constitucional, deroga las anteriores Ley 4.330/64 y el Decreto-Ley 1.632/78, pero con referencia al derecho a la

huelga en la administración pública, remite a una ley complementaria, conforme está previsto en la Constitución de 1988, la que no había sido promulgada hasta el final del proceso de transición.

En los primeros años de la transición el derecho a la huelga prácticamente no podía ser ejercitado tanto por motivo de las medidas de represión impuestas a los sindicatos, o porque los sindicalistas procuraban obedecer a las normas dictadas por el Gobierno militar como porque la legislación aplicable al derecho de huelga era muy rígida, y además, el país atravesaba una seria crisis económica, con desempleo y recesión en todos los sectores de la economía nacional, ocasionando miseria y hambre entre los trabajadores, puesto que ya había pasado los efectos del "milagro económico brasileño". Con la política salarial vigente, que hacía que cada día los trabajadores ganasen menos, empezaron a emerger las insatisfacciones dentro de las fábricas, como también aparecer algunos líderes sindicalistas, llamados "auténticos", que hasta entonces no pertenecían a los sindicatos existentes. Con la aparición del denominado "nuevo sindicalismo" empezaron en las industrias de São Bernardo do Campo, estado de São Paulo, los primeros movimientos de obreros en defensa de pérdidas salariales que venían ocurriendo a lo largo de los cuatro años anteriores. Esas manifestaciones tuvieron su origen dentro de las propias fábricas, organizadas por comisiones. En 1978 los metalúrgicos de São Paulo, comandados por la Oposición

Sindical, hicieron la primera huelga general de categoría desde 1964, lo que hasta entonces era una propuesta de organización sindical. A partir de ahí ello "empieza a crear raíces profundas en el terreno fértil de las grandes movilizaciones obreras".(82) Los trabajadores en su derecho de huelga luchaban por mejores condiciones en el sitio de trabajo; por reposición salarial, por una menor jornada de trabajo, por cumplimiento a las cláusulas de acuerdos colectivos de trabajo, etc. Las reposiciones salariales fueron en gran parte el motivo principal que llevó, anualmente, millones de trabajadores a decretar huelgas, por fábricas o categorías profesionales y algunas veces huelga general de carácter nacional. Esas paralizaciones con el pasar del tiempo aumentaban, alcanzando ya en 1979 a todo Brasil que, según datos del Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socio Económicos (DIEESE), a un total de 430 huelgas abarcando 3.241.500 trabajadores, (83) destacándose en ese año las huelgas de las fábricas de la región industrial del ABC (Santo André, São Bernardo y São Caetano) en donde los metalúrgicos siempre estaban al frente de las reivindicaciones laborales. A partir de ese momento la ola de huelga se expandió por todo el país, hasta alcanzar en 1989 - último año de la transición - un total de 3.164 huelgas.

Para una mejor comprensión del fenómeno de huelgas en Brasil, en el período que se estudia, se presenta la tabla siguiente:

Tabla XI
Huelgas en el Período 1978 a 1989

Año	Número de Huelgas	Año	Número de Huelgas
1978	24*	1984	492
1979	430**	1985	619
1980	144	1986	1.004
1981	150	1987	2.193
1982	144	1988	1.914
1983	347	1989	3.164

Fuente: NEPP/UNICAMP (1980 a 1987) y Ministerio de Trabajo
* Estado e Oposição no Brasil, ** DIEESE.

En defensa del derecho a la huelga, los obreros desarrollaron, en el período de la transición, una variedad de formas de lucha, conforme sintetiza Vito Giannotti en su trabajo titulado "Reconstruyendo Nuestra Historia - 100 años de lucha operaria", (84) a saber: huelga de brazos cruzados y máquinas paradas; huelgas con enormes piquetes de hasta 15 personas; huelga con piquetes en los portones de las fábricas o en los autobuses de las fábricas; huelga con ocupación de fábrica, llegando a hacer rehenes; huelga operación "tortuga"; huelga programada por sector; huelga llamada "Vaca Brava", de la que nunca se sabía su continuación o no; huelga por fábricas; huelga de categoría de trabajador; huelga intercategorías; huelga nacional de una categoría, y huelga general.

Los resultados conseguidos por los trabajadores con los movimientos huelguistas no siempre fueron satisfactorios , pues el gobierno en muchos casos decretó la ilegalidad de esas huelgas, reprimiendo con violencia esos movimientos, decretando intervención en sindicatos, arresto de varios líderes sindicales y intentos de encuadrarlos en la Ley de Seguridad Nacional, cesación de millares de mandatos de dirigentes sindicales, además de ejecución de medidas intimidatorias con relación a la pérdida de empleo a los obreros y funcionarios que participasen de esos movimientos. Así mismo las grandes conquistas obtenidas por la clase obrera se debieron a la lucha en el ejercicio del derecho de huelga. La huella de la represión militar en los movimientos huelguistas aparece clara en lo ocurrido en Volta Redonda, estado del Río de Janeiro en noviembre de 1988 cuando fuerzas de Ejercito de Tierra, con aparatos bélicos y millares de soldados, reprimieron con violencia la huelga de los metalúrgicos de la Compañía Siderúrgica Nacional, causando la muerte de tres trabajadores que se encontraban en las dependencias de esa fábrica. Tal siniestro episodio causó conmoción en la opinión pública nacional, pero los comandantes militares dijeron que el incidente ocurrió en la confrontación entre las tropas militares y los trabajadores, y que las tropas estaban procurando defender el patrimonio nacional, y nada más que eso fue investigado. (85)

Citas y Notas:

- (1) **Constituições do Brasil.** Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal, Brasília, 1986, pág. 469.
- (2) Un completo relato sobre las torturas y muertes cometidas por el régimen militar durante el período de 1964 a 1979 aparece en el libro **Brasil Nunca Mais.** Arquidiocese de São Paulo, Editora Vozes, 20ª edição, Petrópolis, 1987.
- (3) SKIDMORE, Thomas E.: "A Lenta via brasileira para a democratização: 1974/1985". **Democratizando o Brasil.** Editora Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1988, pág. 37.
- (4) PINHEIRO, Paulo Sérgio: **Democracia x Violência.** Comissão Teotonio Vilela, Editora Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1986, pág. 111.
- (5) BICUDO, Hélio: **Do Esquadrão da Morte aos Justiceiros.** Edições Paulinas, São Paulo, 1988. Presenta un completo relato de la actuación de los escuadrones de la muerte y de los justiceros en Brasil,
- (6) DIMENSTEIN, Gilberto: **A Guerra dos meninos - Assassinatos de Menores no Brasil.** Editora Brasiliense, 2ª edição, São Paulo 1990. Discurre sobre el trato que se daba a los niños que vivían en la calle.
- (7) VEIGA, Sandra Mayrink y FONSECA, Isaque: **Volta Redonda - Entre o aço e as armas.** Editora Vozes, Petrópolis, 1990.
- (8) **Constituições do Brasil,** ob. cit. (1), pág. 469
- (9) **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.** Senado Federal, Brasília, 1988, pág. 5.

(10) Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, cit. (9), pág. 9.

(11) Ibidem, pág. 9.

(12) "A Tortura no Brasil", Comitê Brasileira pela Anistia, Seção de São Paulo em Revista de Cultura nº 1, enero/febrero de 1983, Petrópolis, pág. 30.

(13) Brasil Nunca Mais, ob cit. (2), pág. 239.

(14) Ibidem, pág. 215.

(15) "O Triunfo da Verdade", en Revista VEJA. Rio de Janeiro, 30.11.83.

(16) "Violência Policial no Brasil". Relatório Américas Watch. Publicación conjunta de PAB/SP, Comissão Teotonio Vilela, Comissão de Justiça e Paz de São Paulo, Centro Santo Dias de Direitos Humanos e Núcleo de Estudos da Violência da USP, São Paulo, diciembre de 1987, pág. 41.

(17) BICUDO, Hélio: Direitos Cíveis no Brasil, Existem?. Editora Brasiliense, São Paulo, 1987, pág. 92.

(18) Relatório Américas Watch, ob. cit.(16), pág. 67.

(19) "Torturas e Execuções Extra Judiciais nas cidades Brasileiras". Documento de Amnistia Internacional. Londres, junio de 1990, pág. 7.

(20) "Foto criou crise grave na polícia" en Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 16.05.1987.

(21) "Militares Confirmam Torturas con uso de Gás" en Correio Brasiliense. Brasília, 22.11.1988.

(22) "PM Começa a investigar tortura de 20 soldados" en Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 20.07.1987.

(23) Además de los libros citados sobre violencia urbana y policíaca en Brasil, se consultaron, también, los siguientes: O Direito da População à Segurança. FISCHER, Rosa Maria, Editora Vozes, 1985; Violência, Povo e Polícia. BENEVIDES, Maria Victoria. Editora Brasiliense, 1985; Violência e Cultura no Brasil. OLIVEN, George Ruben. Editora Vozes, 1986; A Violência no Brasil. PIRES, Cecília. Editora Moderna, 1987; O Massacre dos Posseiros. KOTSCHO, Ricardo. Editora Brasiliense, 1982; Repúblicas Fechadas - as prisões no Brasil. DIAS, Francisco Ícone Editora, 1990; O Império da Violência. Ícone Editora, 1988; Relatório Americas Watch. OAB/São Paulo, 1989; Gritos de Justiça. Mário Simas, Editora FTD, 1986.

(24) "São Paulo tem por mês 178 casos de agressões a menor" en O Globo. Rio de Janeiro, 16.05.1988.

(25) Constituições do Brasil, ob. cit. (1), pág. 468.

(26) ALVES, Maria Helena Moreira: Estado e Oposição no Brasil (1964/1984). Editora Vozes, 5ª edição, Petrópolis, 1989, pág. 213.

(27) La División de Censura de Diversiones Públicas del Departamento de Policía Federal dictó, durante el período, diversos actos de limitación o prohibición de la libertad de expresión, entre ellos: Portaria nº 19 de 17.06.75 que prohíbe la grabación en discos, cintas o cualquier otro medio de reproducción sonora de espectáculos que hayan sido calificados impropios para menores; Portaria nº 30 de 18.08.75 que establece normas a ser seguidas por programa de diversión y espectáculo público que contengan audiciones musicales; Portaria 18 de 13.07.78 que dispone sobre censura previa de material publicitario referente a películas cinematográficas;

Portarias nº 1 de 11.01.80, nº 1 de 02.04.85 que disponen sobre censura de las letras musicales.

(28) I Seminário do Grupo Tortura Nunca Mais. Editora Vozes, Petrópolis, 1987, pág. 42.

(29) JORGE, Fernando: Cale a Boca Jornalistas!. Editora Vozes, 2ª edição, São Paulo, 1989, pág. 133.

(30) FALCÃO, Armando: Tudo a Declarar. Editora Nova Fronteira, 2ª edição, Rio de Janeiro, 1989, pág. 374.

(31) Ibidem, pág. 376.

(32) "Convenção contra Tortura é Avanço" en Folha de São Paulo, São Paulo, 20.06.1987.

(33) "Império sofreu veto 4 anos antes de chegar ao Brasil" y "Sarney e Igreja censuran Je Vous Salue Mari" en Folha de São Paulo, São Paulo, 30.05.1990.

(34) "Globo pedia para ser censurada" en Folha de São Paulo, São Paulo, 06.06.1990.

(35) Direitos Humanos - Estudos e Debates. Comissão Nacional de Justiça, Rio de Janeiro, 1980, pág. 67.

(36) Constituição da República Federativa do Brasil, ob. cit. (10), pág. 5.

(37) Ibidem, pág. 470.

(38) Ibidem, págs. 6 y 11.

(39) Recurso Extraordinario nº 88.558 al Supremo Tribunal Federal sobre derecho de respuesta por ofensa al honor.

Recurso Extraordinário nº 95.872. sobre el derecho a la imagen haya visto divulgación con fines comerciales sin consentimiento de la persona en causa. Serviço de Jurisprudência do STF, Brasília.

(40) Constituições do Brasil, ob. cit. (1), pág. 469.

(41) Constituição de 1988, ob. cit. (10) pág. 7.

(42) CUNHA, Manuela Carneiro da: Os Direitos do Índio - Ensaios e Documentos. Editora Brasiliense, São Paulo, 1987, pág. 32.

(43) Constituições do Brasil, ob. cit. (1), pág. 466.

(44) "Presidente cassa direitos políticos de 123 de uma so vez" en Jornal O DIA. Rio de Janeiro, 28.05.1987.

(45) PINHEIRO, Paulo Sérgio: "Direito de Participar do Governo e da Oposição" en Direitos Humanos no Brasil - Conferência para Educadores. Seção Brasileira da Anistia Internacional, Editore MPA, São Paulo, 1986, pág. 85.

(46) Constituições do Brasil, ob. cit. (1), pág. 469.

(47) El control de entrada y salida de personas en todo el territorio brasileño es realizado por el Departamento de Policía Federal, Órgano del Ministerio de Justicia, con sede central en Brasília.

(48) "Brasil abriga asilado, mas há casos em que o País não permite que fiquem" en O Globo. Rio de Janeiro, 19.01.1987.

(49) Se tiene una idea de la real situación de los brasileños que por motivos económicos y sociales fueron obligados a dejar sus tierras consultando: WAGNER, Carlos: Brasiguaios: Homens sem Pátria. Editora Vozes, Petrópolis, 1990; en Cadernos de

Justiça e Paz n° 2 "Migração O caminho da miséria". Comissão Pontifícia de Justiça y Paz del estado de Paraná, junio de 1981.

(50) Constituições do Brasil, ob. cit. (1), pág. 468.

(51) Constituição de 1988, ob. cit. (10), págs. 8/9.

(52) MATTA, Roberto da: O que faz o Brasil, Brasil. Editora Rocco, 3ª edição, Rio de Janeiro, 1989, pág. 47.

(53) CARDOSO, Hamilton B.: "Limites do Confronto racial e aspectos da experiência negra do Brasil - reflexões" en Movimentos Sociais na Transição Democrática. Editora Cortez, São Paulo, 1987, pág 91.

(54) Ibidem, pág. 103.

(55) Consciente de las dificultades que los negros enfrentan para ejercer sus derechos, el estudioso Manoel de Almeida Cruz presenta en su libro Alternativas para Combater el racismo. Edições Núcleo Cultural Afrobrasileiro, Salvador, 1989, algunos métodos para superar tal violencia.

(56) OLIVEIRA, Severino, "A Falta de Consciência: A Violência contra o Negro" en Cadernos GAJOP, octubre de 1986, pág. 89.

(57) "CDDPH investigará racismo" en Jornal O Comércio. Pernambuco, 25.11.1989.

(58) Varios hechos de trabalho esclavo en las fincas más lejanas del interior de Brasil que consistía en hacer trabajar a las personas sin recibir sueldo y sin posibilidad de salir de los sitios donde se encontraban, fueron denunciadas por los principales periódicos del país, como se puede ver en algunos titulares: "O Terror no Meio do Mato", O Liberal, Paraná, 6 de

julio de 1986; "Serviço é Comum no Norte", Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 8 de julio de 1986; "Escravidão em Alta", Revista Isto é São Paulo, 10 de julio de 1986; "Documento Denuncia Trabalho Escravo em 167 Fazendas", Folha de São Paulo, 27 de diciembre de 1986.

(59) Constituição do Brasil, ob. cit. (1), pág. 469.

(60) Decisão del Supremo Tribunal Federal acerca del derecho de reunión. Recurso Extraordinario 97.278 de 10.11.1982 Servicio de Jurisprudencia del STF, Brasília.

(61) Constituição do Brasil, ob. cit. (1), pág. 470.

(62) "Câmara unânime legaliza UNE" en Jornal do Comércio. Rio de Janeiro, 26.05.1985.

(63) Constituição de 1988, Ob. cit. (10), págs. 6/7.

(64) Constituição do Brasil, ob. cit. (1), pág. 468.

(65) BASTOS, Celso Ribeiro: Comentários à Constituição do Brasil. Editora Saraiva, São Paulo, 1989, págs. 55/56.

(66) Representación de Inconstitucionalidad presentada al Supremo Tribunal Federal por el Procurador General de la República contra la ley del estado de Paraíba que hacía exigencias para el ejercicio de la libertad de religión. Brasília, 22.11.1985.

(67) Constituição do Brasil, ob. cit. (1), pág. 475.

(68) Constituição de 1988, ob. cit. (10), págs. 138; 139 y 141.

- (69) D'ANGELIS, Wagner Rocha, "A Educação que temos e a Educação que queremos" en Caderno de Justiça e Paz nº 3. Comissão de Justiça e Paz do Paraná, janeiro de 1983, pág. 7.
- (70) FREITAG, Bárbara: Nova República: Um balanço, Planos, Verbas e Boas Intenções. Editora L/PM, Porto Alegre, 1986, pág. 126.
- (71) HALFPAP, Luiz Carlos: Direitos Humanos - Estudos e Debates. Comissão Nacional de Justiça e Paz, 1980, pág. 136.
- (72) NEUMANN, Laurício y DALDIAZ, Osvaldo: Realidade Brasileira - Visão Humanizadora. Editora Vozes, 4ª edição, 1987, Petrópolis, pág. 71.
- (73) Ibidem, pág. 73.
- (74) Ibidem, pág. 73.
- (75) Constituições do Brasil, ob. cit. (1), págs. 469 y 472.
- (76) Constituição do Brasil de 1988, ob. cit. (10), pág. 12.
- (77) SIMÕES, Carlos: A Lei do Arrocho. Editora Vozes, Petrópolis, 1986, pág. 103.
- (78) CARVALHO, Lívio de; "Políticas Salariais no Brasil: Efeitos e Sugestões" en Revista Sociedade e Estado, nº 1. Editora Universidade de Brasília, junio de 1986, Brasília, pág. 120.
- (79) "Mulher/Trabalho". Estudio del Conselho Nacional de los Derechos de la Mujer. Brasília.
- (80) Constituições do Brasil, ob. cit. (1), págs. 584/585.

(81) Constituição de 1988, ob. cit. (10), pág. 12.

(82) GIANNOTTI, Vito: A Liberdade Sindical. Editora Brasiliense 2ª edição, São Paulo, págs. 14 y 15.

(83) LEITE, Márcia de Paula: O Movimento Grevista no Brasil. Editora Brasiliense, São Paulo, 1987.

(84) GIANNOTTI, Vito: Reconstruindo Nossa História - 100 anos de Luta Operária. Editora Vozes, Petrópolis, 1988, pág. 82.

(85) Un amplio relato del incidente ocurrido entre huelguistas y policías militares en la Compañía Siderúrgica Nacional, Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro, está contenido en el libro Volta Redonda Entre o Aço e as Armas de Sandra Mayrink Veiga y Issaque Fonseca. Editora Vozes, Petrópolis, 1990.

CAPITULO IV

ANALISIS DEL IMPACTO DE LA SITUACIÓN BRASILEÑA SOBRE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL PERIODO DE TRANSICIÓN

IV.1. Situación Jurídica.

IV.2. Situación Política.

IV.3. Situación Económica y Social.

Citas y Notas.

CAPITULO IV

ANALISIS DEL IMPACTO DE LA SITUACION BRASILEÑA SOBRE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL PERIODO DE TRANSICION

IV.1. Situación Jurídica

Al empezar la transición democrática estaba vigente en Brasil la Constitución de 1969, otorgada por la Junta Militar que sustituyó al Presidente Arthur da Costa e Silva. Esa Constitución fue editada con el nombre de Enmienda Constitucional número 1, fundamentada en los actos "revolucionarios". En principio ese Texto ocasionó una cierta confusión o polémica en el seno jurídico nacional en cuanto a la validez de la Constitución de 1967 pues esta había sido del todo reformada por la mencionada Enmienda nº 1. Algunos juristas brasileños procuraron "legitimar" el orden jurídico posterior a 1964, en este caso la Enmienda Constitucional nº 1, como hizo el profesor Manuel Gonçalves Ferreira Filho (1) intentando justificar jurídicamente que había fundamento constitucional para que la Junta Militar alterara la Constitución de 1967 basado en el "poder constituyente revolucionario", argumento este contestado y rechazado por otros juristas como fue el caso del profesor José Ribas Vieira, que en su ensayo "El Autoritarismo y el Orden Constitucional en Brasil" (2) dijo que "el hecho de la existencia del Acto Institucional (como fundamento de la Enmienda nº 1) ya es una prueba cabal que el

'orden revolucionario' habíase sobrepuesto al orden constitucional de 1967" y que, el supuesto poder constituyente atribuido a la Junta Militar derivaba del Acto Institucional nº 5 y no de la Constitución de 1967. En esa problemática de considerar la Enmienda número 1 como un nuevo texto constitucional o simplemente una enmienda a la Carta de 1967 prevaleció la corriente que entendía ser ésta una nueva Constitución. Incluso a ese respecto hubo pronunciamiento del Supremo Tribunal Federal, máxima Corte de Justicia de Brasil.

La Constitución de 1969 trajo en su seno los actos de excepción toda vez que en su artículo 181 aprobaba y excluía de apreciación judicial los actos arbitrarios practicados en base a los mismos. Además, el artículo 182 literalmente decía que "continúan vigentes el Acto Institucional nº 5 y los demás actos dictados posteriormente" y que, solamente el Presidente de la República, con consentimiento del Consejo de Seguridad Nacional, podría cesar la vigencia de esos actos. Como se ve el régimen jurídico nacional quedaba así sujeto a dos ordenes políticos institucionales: una Constitución aunque otorgada por el movimiento militar consignaba principios teóricos de un Estado de Derecho y, paralelamente a los Actos Institucionales y Complementarios que se sobreponían a todos los principios que podían caracterizar un real Estado de Derecho. En ese momento histórico-institucional que perdura hasta 1978 prevaleció lo que se llamó un "Estado de Excepción Híbrido o Régimen Mixto", (3) en el que la preeminencia de los actos de la "revolución"

sobre el orden constitucional configura el poder ilegítimo del aparato militar en relación a los demás sectores del Estado.

Los efectos dañinos de los actos institucionales sobre los derechos fundamentales de las personas y instituciones democráticas brasileñas, ahora respaldados por la Enmienda Constitucional n° 1, motivaron que algunos políticos de la oposición ocupasen la tribuna del Congreso Nacional para denunciar esa digresión jurídico-institucional que maculaba los principios de un Estado Democrático, situación esa que el profesor Josaphat Marinho consideró como "ruinas de todo un cuadro institucional desfigurado, en una sociedad deprimida por la inseguridad, por el miedo y por la indiferencia política".

(4)

Movido por la fuerza de la arbitrariedad, ese Estado de Excepción, también conocido como Estado de Seguridad Nacional, aniquiló todos los derechos fundamentales de los ciudadanos brasileños. El Acto Institucional n° 5 - sin olvidar los efectos dañinos de los actos anteriores también discriminatorios - perpetuaba en manos del Presidente de la República toda la fuerza contra las instituciones legales vigentes (partidos políticos, sindicatos, asociaciones estudiantiles, etc) y contra todos los ciudadanos, pues él podía de conformidad con su conveniencia cesar o suspender mandatos electivos de Senadores, Diputados, Concejales y hasta suplentes, decretar la suspensión de los derechos políticos de

cualquier ciudadano por plazo de diez años, dimitir sumariamente funcionarios públicos, y suspender la garantía del Habeas Corpus en los casos de los llamados crímenes políticos contra la seguridad nacional, el orden económico y social y la economía popular.

En base a ese instrumento del movimiento militar, los gobiernos hicieron varias casaciones de mandatos de parlamentarios y suspensiones de derechos políticos, sin que a los alcanzados fuese dado cualquier recurso de defensa, ya que los actos administrativos basados en los actos de excepción estaban exceptuados de apreciación judicial.

El establecimiento de la Justicia Militar como foro especial para el juzgamiento de delitos cometidos por persona civil contra la seguridad nacional, como lo determinaba el Acto Institucional n° 6, fue una otra forma de se conculcar los derechos fundamentales consignados en la Constitución vigente. La falta de definición y la generalización de los crímenes políticos previstos en la Ley de Seguridad Nacional tornaba casi común encuadrar los ciudadanos (profesores, estudiantes, sindicalistas, trabajadores y otros) en esa Ley los que eran obligados a ser juzgados por la Justicia Militar y seguir los tramites del código de Justicia Militar, con serias y graves complicaciones para las personas presuntamente implicadas, así como para sus abogados, cuando las tenían, por la rigidez y sigilo en la conducción de un proceso.

La convivencia de un orden constitucional definido por la "revolución" con otro orden jurídico institucional autoritario también hijo del régimen militar permitió la introducción en el escenario jurídico de Brasil de la pena de muerte de la persona que fuese acusada y condenada por la Justicia Militar por práctica de crimen de "guerra psicológica adversa, revolucionaria o subversiva", en los términos de la Ley de Seguridad Nacional. Esa brutal disposición apareció en el Acto Institucional nº 14 y fue mantenido en la Constitución de 1969 en su artículo 153, apartado 11, y se mantuvo en el sistema jurídico nacional hasta ser derogada por la Enmienda Constitucional nº 11 de 13 de octubre de 1978 que empezaría a regir el 1 de enero de 1979. Una vez más la Justicia brasileña sufre un duro golpe por no estar claramente determinado lo que consistía "guerra revolucionaria adversa, psicológica o subversiva", expresión solo entendida en los medios militares y afectos a la Doctrina de Seguridad Nacional.

La Constitución de 1969 (Enmienda Constitucional nº 1 a la Constitución de 1967), como observamos anteriormente, surgió del libre arbitrio de una Junta Militar poseída de un poder constituyente anómalo que procuró institucionalizar los mecanismos de represión y se presentaba por demás concentradora dando plenos poderes de naturaleza política y administrativa al Poder Ejecutivo Central. Ese Poder como soberano, interfería sobre manera en la organización y funcionamiento de los dos otros Poderes (Legislativo y Judicial), incluso en los

gobiernos de los estados y municipios. Fue una Constitución autoritaria no solamente durante la vigencia de los actos de excepción hasta 1978, sino también después de la derogación de los mismos pues se mantenía en vigor casi todas las leyes del arbitrio, como por ejemplo la Ley de Seguridad Nacional. En ese mismo Texto Constitucional fueron insertadas, con ocasión de la enmienda que derogó los actos institucionales y complementarios, la medida de emergencia y el estado de emergencia, también llamadas medidas de salvaguardia de la seguridad nacional.

A pesar de las inconveniencias jurídicas que en parte aludimos arriba, esa Constitución contuvo algunas disposiciones que pretendían resguardar y asegurar los derechos fundamentales como aquellas consignadas en el Capítulo destinado a los Derechos y Garantías Individuales, donde aparecen la mayoría de los derechos humanos consagrados en los textos jurídicos contemporáneos, nacionales y supranacionales, sobre los derechos civiles y políticos. En el apartado "Orden Económico y Social" se preconiza la justicia social y el desarrollo nacional y asegura a los trabajadores varios derechos sociales objeto de conquistas a lo largo de las luchas obreras en Brasil, y por fin, dentro del Título destinado a la Declaración de Derechos se refiere al derecho a la educación y a la protección a la cultura, todo con claridad y sin dejar duda en cuanto a los destinatarios de esos derechos. No obstante, ocurre que esos derechos para su eficacia dependían de la

voluntad política para su implementación y respecto a los mecanismos de garantía y también, para apoyar financiera y materialmente la Justicia, que habría de actuar con imparcialidad y autonomía.

Esa laguna entre el formal constitucional y la voluntad de los gobiernos llevó a una disociación entre lo teórico aconsejable y racionalmente deseado y lo autoritario rutinario y perversamente aplicado. Ello ha llevado al notable jurista y político Afonso Arinos de Melo Franco a afirmar que "los derechos individuales no están jurídicamente garantizados, existen solamente en el empeño de las autoridades superiores de no cometer excesos", empeño que comúnmente no era frenado. Por otro lado, hay juristas que aunque reconociendo al carácter centralizador y autoritario de esa Constitución habiendo reducido el Poder Legislativo "a una casa de tertulias académicas" (5), privilegiando al Ejecutivo Central, admiten que teóricamente ese Texto Constitucional no ha sido malo y que "sus principios son buenos. Aunque le ha faltado mecanismos de aplicación llevando a la hipertrofia del Poder Ejecutivo y a la insolvencia de todo el sistema de modo que los principales derechos se transformaron en derechos no existentes". (6)

Aún analizando la Constitución de 1969, verificamos que en ella están consagrados algunos principios básicos para un posible Estado de Derecho, que son los de igualdad, legalidad, irretroactividad de las leyes y control judicial, y

algunas garantías constitucionales más indispensables para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales, como el Habeas Corpus, el Mandamiento de Seguridad y la Acción Popular. El Texto Constitucional en referencia, en su artículo 153, aseguraba a los brasileños y a los extranjeros residentes en el país la inviolabilidad de los derechos concernientes a la vida, a la libertad, a la seguridad y a la propiedad. Añade en su párrafo primero que "todos son iguales ante la ley, sin distinción de sexo, raza, trabajo, creencia religiosa y convicciones políticas y que será castigado por ley la discriminación de raza". Ese precepto procura preconizar el principio de la igualdad en "lato sensu", fundamento básico para la formación de régimen democrático que implicaría una convivencia pacífica, armónica y solidaria entre todos los individuos, soporte mayor para la construcción de una sociedad social y jurídicamente justa. La cuestión de la legalidad estaba tratada en el párrafo 2º de ese mismo artículo que dice "nadie será obligado a hacer o a dejar de hacer alguna cosa sino por ley". Ahí se verificaría el imperio de la ley, nada se puede obligar a nadie, aunque sea el Estado, a falta de una ley que así lo justifique. Exclusivamente la ley es requisito para la legalidad de cualquier acto, ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Judicial pueden crear obligaciones nuevas o reconocer derechos nuevos que no aquellos estrictamente definidos por la ley, incluso ese principio se aplicaría a la creación o aumento de tributos para lo cual habría de existir una ley aprobada en el año anterior a la vigencia de la recaudación de los mismos.

El tercer principio, el de Irretroactividad de la ley, apareció consignado en el párrafo 3º con la siguiente redacción: "la ley no perjudicará el derecho adquirido, el acto jurídico perfecto y la cosa juzgada". Este principio busca garantizar la eficacia del derecho o de la norma jurídica, asegura la plenitud de un derecho propio contra la arbitrariedad de terceros y protege una decisión judicial ya juzgada en última instancia. Se entiende que esa disposición constitucional podría ser una garantía para la actuación de la Justicia y una protección a los derechos adquiridos y ciertos de los ciudadanos. El cuarto principio, denominado Control Judicial, previsto en el párrafo 4º significa que "la ley no podrá excluir de apreciación del Poder Judicial cualquier lesión de derecho individual". Más tarde esa disposición recibió, a través de la Enmienda nº 7 de 14 de abril de 1977 una modificación en la que se decía la entrada en juicio podrá ser condicionada a que se agoten previamente las vías administrativas siempre que no sea exigible la garantía de instancia ni hayan pasado más de 160 días para decidir sobre la solicitud. Esas exigencias limitaban el derecho de acudir a los tribunales y, como con mucha propiedad señala la profesora Selma Regina Aragão "ha de ser mirada con reservas, pues el Poder Judicial no puede quedarse como espectador paciente mientras los derechos individuales dañados pasan a ser administrados de forma excesivamente burocrática".(7) Como hemos visto, los actos practicados en base a los actos de excepción estaban fuera de apreciación judicial, incluso en grado de recurso.

Con la introducción de la Enmienda Constitucional n° 11/78 que derogó los Actos de excepción el Gobierno militar, con la aprobación del Congreso Nacional, creó nuevos mecanismos de garantía del poder en sustitución al Acto Institucional n° 5, tales fueron las "Medidas de Emergencia" para restablecer el orden público y la paz social en los sitios que estuvieran amenazado por "graves perturbaciones", y el "Estado de Emergencia" con la misma finalidad, pero con carácter nacional. La decretación de esos instrumentos de salvaguardia correspondía al Presidente de la República que la comunicaría posteriormente al Congreso Nacional. Además de esos mecanismos, ya estaba previsto en la Constitución de 1969 la posibilidad de ser decretado el "Estado de Sitio" con objetivo semejante a los dos anteriores, esta vez utilizable en caso de guerra. Esos instrumentos de seguridad nacional autorizaban la suspensión de varios derechos fundamentales, y tenían como preocupación básica, según los contenidos en sus propios textos, "repeler las actividades subversivas".

Con la desaparición de los actos de excepción del escenario jurídico-institucional brasileño, el Gobierno que ya estaba realizando alteraciones en la Constitución por medio de enmiendas desde 1972 continuó hasta noviembre de 1985. Algunas de esas enmiendas tuvieron repercusión en los derechos fundamentales, entre ellas la de número 7/77 que reformó el Poder Judicial instituyendo en su estructura el Consejo Nacional de la Magistratura, y la de número 8/77 que

institucionalizó la elección indirecta, por medio de un Colegio Electoral, de los Gobernadores de los estados y de dos tercios de los Senadores. Para la edición de esas dos enmiendas el Presidente de la República decretó el receso del Congreso Nacional (Cámara de los Diputados y Senado) en una clara maniobra y violación de los derechos constitucionales con el fin de imponer sus reglas para mantenerse en el poder. A partir de este episodio no hubo más receso parlamentario forzoso y las enmiendas siguientes pasaron a ser "apreciadas" por el Congreso Nacional. Comenzaron a surgir las enmiendas de liberalización del régimen autoritario destacándose la de n° 11/78 que extinguió la pena de muerte y derogó los actos de excepción, la de número 15/80 que restableció elecciones para Gobernadores y Senadores por sufragio universal con voto directo y secreto, la de número 25/85 - en la Nueva República - que restableció elecciones directas para Presidente y Vicepresidente de la República, y la de número 26/86 que convocó una Asamblea Nacional Constituyente, para la elaboración de una nueva Constitución. Vale destacar que esos instrumentos de alteración de la Constitución eran siempre de iniciativa del Poder Ejecutivo Central, por cuestiones meramente políticas.

Existieron durante todo el período de la transición institutos jurídicos de carácter constitucional de garantía de los derechos fundamentales, a saber: el "Habeas Corpus", el "Mandamiento de Seguridad" y la "Acción Popular".

La Carta Constitucional de 1969 preveía el "Habeas Corpus" como un instrumento jurídico que protegería al ciudadano, contra los abusos y los excesos de autoridad, en protección de un derecho fundamental como es el derecho a la libertad de movimiento o libre circulación. Se otorgaría el Habeas Corpus siempre que alguien sufriese o se hallase amenazado de sufrir violencia o coacción en su libertad de movimiento por ilegalidad o abuso de poder, y con respecto de las transgresiones disciplinarias no cabría Habeas Corpus. Este mecanismo de garantía constitucional permaneció inactivado por una buena parte del período de la transición pues el Acto Institucional nº 5 impedía utilizarlo en defensa de presuntos delitos, cuyas penalidades estaban establecidas en la Ley de Seguridad Nacional.

El "Mandamiento de Seguridad", un instrumento jurídico de creación brasileña, colocado a disposición de toda persona física o jurídica para la protección de cualquier derecho líquido y cierto, no amparado por el Habeas Corpus o el Habeas Data, lesionado o amenazado de lesión por un acto de cualquier autoridad. Es una acción civil de tramitación sumario especial destinada a subsanar las ofensas a los derecho subjetivos individuales o colectivos, privados o públicos, a través de una orden correctiva o impeditiva de la ilegalidad, orden que ha de ser cumplida específicamente por la autoridad coactiva en acatamiento de la notificación judicial. (8)



La "Acción Popular" es una de las garantías previstas constitucionalmente de las que dispone todo ciudadano como forma de anular los actos lesivos al patrimonio público. Figuró en la Constitución de 1969 con el texto siguiente: "cualquier ciudadano será parte legítima para proponer acción popular tendiente a anular actos lesivos al patrimonio de entidades públicas". El ciudadano podría accionar la Justicia contra actos practicados por autoridades o personas que han lesionado bienes del Estado. La legislación brasileña considera patrimonio público los bienes y derechos de valor económico, artístico, histórico o turístico. No obstante, como ese medio constitucional fue desvirtuado en la práctica como un instrumento de oposición política entre una Administración a la otra que le sigue, se exige al Poder Judicial prudencia en su apreciación para que no se "impida la realización de obras y servicios públicos esenciales a la comunidad que se pretende proteger". (9)

Además de las medidas excepcionales vigentes, otra limitación incluida en la Constitución de 1969 que privilegiaba el centralismo del Poder Ejecutivo en detrimento de los demás Poderes de la República, fue la relativa a la cuestión de juzgar la inconstitucionalidad de una ley, puesto que esta Carta Mayor solo atribuía esa prerrogativa al Procurador General de la República a quien correspondía evaluar a su arbitrio si cabía o no promover una cuestión de inconstitucionalidad ante el Supremo Tribunal Federal. El cargo

de Procurador General de la República era nombrado por el Presidente de la República quien en la mayoría de los casos tuvo la iniciativa legislativa o directamente legisló cuando de las veces que decretó el receso obligatorio del Congreso Nacional o cuando los proyectos de leyes eran transformados en leyes por "decurso de plazo", es decir sin aprobación del Congreso, como también a través de Decretos-Leyes que poseían fuerza de ley y que eran de competencia exclusiva del Jefe del Gobierno de la Nación.

El orden institucional brasileño vigente en la transición ha tenido dos períodos distintos. El primero de convivencia imprecisa e ilegítima de los Actos Institucionales y Complementarios con la Constitución de 1969, con la preeminencia y la prevalencia de los primeros sobre la Carta Magna, situación esa que el profesor Antonio Colomer Viadel llama de "constitucionalismo de excepción", (10) constituyendo así en un Estado híbrido o mixto, y el segundo, con la promulgación de la Constitución de 1988 que instituyó en Brasil el Estado Democrático de Derecho, con fundamento en principios de pluralismo político y participación democrática, por lo tanto libre de los resquicios del autoritarismo militar que ha sobrevivido por casi todo el período de transición.

Conforme hemos señalado en Capítulos anteriores, la Constitución de 1969, aún conteniendo en su seno los actos de excepción, contenía también los derechos fundamentales

considerados imprescindibles a toda la persona humana adoptados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la ONU e incluidos en las Constituciones de los países dicho civilizados. La nueva Carta Constitucional de 1988 mantuvo esos derechos dándoles una redacción más compatible con los principios democráticos e incorporó otros derechos fundamentales y garantías de forma para que el País volviera a ser efectivamente un Estado de Derecho. Las garantías constitucionales de protección de los derechos fundamentales pasaron a tener una doble figura jurídica que funcionan como una garantía de los derechos consignados en la Constitución puestos a disposición de los ciudadanos para exigir la efectividad de sus derechos y, a la vez, como un derecho fundamental reconocido como tal por el propio Texto Mayor. Los derechos fundamentales consignados en esta Carta están contenidos en cinco Capítulos del Título II "De los Derechos y Garantías Fundamentales", a saber: en el Capítulo I "De los Derechos y Deberes Individuales y Colectivos", en el Capítulo II "De los Derechos Sociales", en el Capítulo III "De la Nacionalidad", en el Capítulo IV "De los Derechos Políticos", y en el Capítulo V "De los Partidos Políticos".

El ordenamiento jurídico infraconstitucional vigente en este periodo en su casi totalidad estuvo formado por la legislación de los años 40, 50 y 60, como por ejemplo, el Código Penal que es proveniente del Decreto-Ley 2.848 de 7 de diciembre de 1940. Básicamente fueron textos legales surgidos

con anterioridad al régimen militar de 1964 que fueron aprobados con base en las Constituciones de 1937 y 1946 y que estuvieron vigentes en la transición y todavía aún permanecen en vigor. Hubieron algunas tentativas legislativas en los años 70 y 80, incluso del propio poder central, en el sentido de que fuesen aprobados nuevos códigos de derecho, pero esas iniciativas no obtenían éxitos en virtud de los obstáculos creados por intereses políticos.

Por lo contrario, para ajustar la legislación penal militar que venía rigiendo desde el año de 1938 a sus medidas arbitrarias, el régimen militar apresuróse a dictar los Decretos-Leyes n° 1.001 el Código Penal Militar, n° 1.002 el Código de Proceso Penal Militar y n° 1.003 la Ley de Organización Judicial Militar todos de 1969. Ellos trataban de las acciones militares y de las infracciones a la Ley de Seguridad Nacional que alcanzaban también a los ciudadanos civiles. Esos documentos legales, de extremo rigor, ajustaron la Justicia Militar a los tiempos implacables de represión de los opositores del régimen impuesto.

En el desarrollo de este estudio, ya se ha señalado algunos de los derechos fundamentales que constan en la Constitución de 1969 y que también están fijados en el Texto Constitucional de 1988. Ahora, hay que destacar otros derechos también incluidos en este nuevo Texto Constitucional. Inicialmente se ha referido a las nuevas garantías

constitucionales que se puede clasificar en 1) mecanismos de protección política o parlamentaria y 2) mecanismos de protección y garantía jurídica.

Veamos cuales son los primeros: 1) la "Reserva de Ley" significa que toda vez que un derecho fundamental va a ser reglamentado, conforme determina la Constitución, esto había de hacerse por medio de una ley complementaria, es decir, por medio de una ley de mayor rango en el proceso legislativo brasileño. Con todo, la Constitución de 1988 apenas se refiere textualmente a este mecanismo en el artículo 7.1 que trata de la protección del empleo contra el despido arbitrario o sin justa causa. Los demás derechos, no está claro, habrán de ser reglamentado por ley ordinaria, pues sus redacciones alude tan solamente a que será hecho por ley, sin especificar que tipo de ley. 2) La "Rigidez en la revisión Constitucional" aparece en el artículo 60, párrafo 4, apartado IV de esta Carta cuando establece que "no será objeto de deliberación la propuesta de enmienda tendente a abolir ... los derechos y garantías individuales". Como se puede verificar los derechos fundamentales no están sujetos a modificación por medio de enmiendas a la Constitución. 3) La "Protección Jurisdiccional Ordinaria". En virtud de ella la ley no podrá excluir de la apreciación judicial cualquier lesión o amenaza al derecho, cuestión que se traduce en la garantía de los derechos fundamentales a la actuación de la Justicia. Cualquier persona al sentirse lesionada o amenazada de lesión en sus derechos

puede someterla a la apreciación del Juez o órgano judicial competente que no podrá recusar a suministrar la prestación jurisdiccional que le fue debidamente solicitada. El Poder Judicial, en este caso, emitiría decisión a pedido de la parte perjudicada no debiendo pronunciarse sobre cuestiones que no fueron demandadas ni emitir sentencias de naturaleza diversa de la pedida. 4) "Recurso de Inconstitucionalidad". En virtud de él es competente para conocer y juzgar acción directa de inconstitucionalidad el Supremo Tribunal Federal. Por la nueva Constitución podrá interponer esa acción el Presidente de la República, la Mesa del Senado Federal, la Mesa de la Cámara de los Diputados, la Mesa de las Asambleas Legislativas de los estados, los Gobernadores de los estados, el Procurador General de la República, el Consejo Federal de la Orden de Abogados de Brasil y partidos políticos con representación en el Congreso Nacional. Las acciones de inconstitucionalidad deberán recibir el pronunciamiento del Procurador General de la República.

En segundo lugar, la vigente Constitución de 1988 instituyó nuevos mecanismos de protección y garantía jurídica con vistas, especialmente, a garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales, a saber: el "Mandamiento de Seguridad Colectivo" que ha venido dar respuesta a un reclamo existente de forma difusa en particular en las asociaciones de clase, en el sentido de que fuesen admitidas acciones en favor de los derechos de sus asociados. Puede ser entablado por partidos políticos con representación en el Congreso Nacional,

entidades de clase o asociación legalmente constituida y, aún, por organizaciones sindicales en defensa de sus miembros y asociados. El mismo no se presta a la defensa del derecho individual de uno o de algunos afiliados de partido político, de sindicato o de asociación, pero sí de la categoría, es decir de la totalidad de sus afiliados, que tengan un derecho o una prerrogativa que defender en juicio. Por su parte el "Habeas Data", es un nuevo instrumento constitucional en el ordenamiento jurídico brasileño que aparece en este Texto Máximo en el artículo 5. LXXII y está destinado a dar a conocer datos e informaciones relativas a la persona del impetrante que consten en bancos de datos de entidades gubernamentales o de carácter público, con el fin de rectificación. Tratase de un instrumento específico de protección al derecho a la intimidad y a la vida privada, está exento de costas judiciales facilitando por consiguiente el ejercicio de esa acción civil. El "Mandamiento de Injunción", de otro lado, se concederá siempre que la falta de una norma reglamentaria torne inviable el ejercicio de los derechos y libertades constitucionales y de las prerrogativas inherentes a la nacionalidad y a la soberanía popular. Ese Instituto de protección ha surgido como una de las creaciones en sistema jurídico, que podrá tornar efectivo el ejercicio de los derechos fundamentales que permanecen inactivos por ausencia de una legislación ordinaria que defina e integre esos derechos y que de otra forma tendrían su eficacia suspendida a la espera de una norma reglamentaria.

Este medio constitucional solamente protege los derechos fundamentales especificados en el Documento Constitucional.

Los derechos fundamentales consignados en la Constitución de 1969 no tenían eficacia plena ni tampoco aplicación inmediata, se ha visto que la utilización de los mecanismos constitucionales de garantía de esos derechos estaban sujetos al arbitrio de las autoridades represivas, principalmente, el Habeas Corpus que no podía ser interpuesto en defensa del derecho a la libre circulación. La Constitución de 1988 dispone que las normas que definen los derechos y garantías fundamentales tienen aplicación inmediata. Ese principio de aplicabilidad inmediata de los derechos fundamentales puede quedar condicionado en los siguientes casos: 1) cuando la Constitución expresamente señale que el derecho será ejercido en los términos y en la forma que establezca la ley. 2) cuando el derecho no posee elementos mínimos que aseguren su aplicación, es decir cuando el vacío semántico es tan acentuado que transformaría al magistrado en legislador. Existen preceptos constitucionales que para su eficacia requieren leyes complementarias o reglamentarias futuras que desarrollen más plenamente la materia de que tratan. Son normas llamadas programáticas o rectoras que consignan principios que deben orientar las acciones del Estado, pero que, no obstante, poseen eficacia jurídica y la propia Constitución de 1988 prevé instrumentos jurídicos destinados a garantizar su efectividad.

Están en esa situación algunos de los derechos económicos, sociales y culturales.

Para tener una amplia comprensión de la situación de los derechos fundamentales en Brasil en el período de la transición hay que se aludir a la posición del Gobierno brasileño con relación a los instrumentos jurídicos internacionales. Brasil ha sido signatario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 12 de diciembre de 1948, y también apoyó las Declaraciones que son apenas documentos de reconocimiento de esos derechos a nivel supranacional y regional, como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial de 1963, la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación a la Mujer de 1967, y la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Deshumanos o Degradantes de 1975. Por otro lado, bajo alegación de no aceptar ingerencia de Cortes externas, porque no admitía la transferencia de la jurisdicción brasileña en materia de derechos humanos hacia organismos internacionales, y de no concordar con instrumentos jurídicos internacionales "visiblemente contrarios a los principios de la soberanía nacional," (11) este país ha dejado de firmar, en algunos casos, y de ratificar, en otros, los más importantes

documentos jurídicos internacionales de protección de los derechos humanos como son el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo Opcional del Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos, todos de 1966, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, y la Convención Internacional sobre la Eliminación y la Represión del Apartheid de 1973. Con el establecimiento del Gobierno civil de la Nueva República, a partir de 1985 el Presidente José Sarney firmó y encaminó a la consideración del Congreso Nacional, para deliberación con fines de ratificación, cuatro de estos documentos, que fueron la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, la Convención Americana de los Derechos Humanos y los Pactos de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En 1989 fueron ratificadas la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención Interamericana para Prevención y Sanción de la Tortura.

IV.2. Situación Política

El Presidente de la República, General Ernesto Geisel que se comprometió al inicio de su Gobierno a promover una "apertura lenta, gradual y segura" del sistema político brasileño, se ha visto envuelto en diversas complicaciones políticas dentro de las Fuerzas Armadas con los Oficiales

superiores que formaban la "línea dura" y que propugnaban por el endurecimiento del régimen y eran contrarios al proceso de apertura, y que, más que eso, eran favorables a la represión política y social. El Presidente, por momentos daba muestras de querer continuar con la apertura y por otros procedía a un rígido control e intervención en las instituciones políticas y democráticas que todavía aún estaba actuando.

Con el fin de perseguir a su supuesto objetivo, con base en la Doctrina de Seguridad Nacional - Desarrollo y Seguridad - y siguiendo los pasos estratégicos delineados por el mentor político del Gobierno, el General Golbery do Couto e Silva, (12) Ministro-Jefe del Gabinete Civil, el Presidente Geisel en 1977 en base al Acto Institucional nº 5, decretó el receso del Parlamento para imponer a través de dos enmiendas a la Constitución reformas en el Poder Judicial, y establecer normas "casuísticas", alterando el sistema electoral y creando la figura del Senador llamado "bionico" que debería ser electo de forma indirecta por las Asambleas Legislativas de los estados, violando el derecho que todo el ciudadano tienen de elegir libre y directamente sus representantes y promoviendo un atentado a la Constitución vigente. Ese recurso discrecional fue utilizado por el Presidente para sobreponer a la norma constitucional que preveía que la Constitución solo podría ser alterada con la mayoría absoluta de los parlamentarios en el Congreso Nacional, mayoría que él no poseía. El Gobierno militar bajo la excusa de ejecutar la reforma del poder

judicial, impuso en esa ocasión también normas electorales "casuísticas" en las que demostraba su temor por el ascenso del partido de oposición en las elecciones generales de 1974 procurando, a todo costo, dotar al sistema jurídico electoral de normas que lo beneficiase en próximas elecciones.

El Gobierno del Presidente Geisel actuó políticamente con doble cara, continuó con la persecución a las personas presuntamente comunistas, cesando mandatos y suspendiendo derechos políticos en base al temible y perverso AI-5. Son de resaltar algunos casos, a saber: la cesación del Diputado del MDB Lisaneas Maciel, un intrépido combatiente del régimen militar, que en defensa de dos otros Diputados que iban a ser cesados pronunció un discurso en la Cámara de los Diputados en el que decía entre otras cosas "que solo la fuerza había permitido al Gobierno permanecer en el Poder". Sus palabras alcanzaron de inmediato al Presidente de la República de modo que su nombre fue añadido a la lista con los nombres de los otros dos. (13) En junio de 1977, por considerar ofensivas a la dignidad y a la autoridad del Presidente de la República las opiniones del Diputado Alencar Furtado, destacado opositor del MDB, emitidas durante un programa de televisión del MDB permitido por ley, cesó su mandato de diputado y suspendió sus derechos políticos por diez años. Enjuició el Diputado Francisco Pinto como infractor de la Ley de Seguridad Nacional, por haber éste pronunciado un discurso considerado ofensivo a la autoridad del Presidente Augusto Pinochet con ocasión de su

visita a Brasil en 1974 para participar de la toma de posesión del General Geisel, hecho considerado como de buena voluntad para con la promesa de normalización democrática del país, puesto que no se cesó el mandato del parlamentario de inmediato en base al AI-5. No obstante, ese Diputado luego fue juzgado vio su mandato cesado y sus derechos políticos suspendidos. Por otro lado, tampoco se permitieron los excesos, cuando por él definidos, de algunos miembros de las Fuerzas Armadas, como fueron los casos de la dimisión del General Ednardo d'Avila Melo, que comandaba el II Ejército de Tierra, localizado en São Paulo, responsable por el DOI-CODI de esta región, donde ocurrieron y llegaron al conocimiento de la opinión pública las muertes del periodista Vladimir Herzog en 1975, y del sindicalista Manuel Fiel Filho en 1976. Así mismo, dimitió sin consultar al Alto Comando de las Fuerzas Armadas el Ministro del Ejército de Tierra, General Sylvio Frota, considerado líder de la "línea dura" militar, por no concordar con las actitudes y pretensiones políticas del mismo. También, se aceptó incondicionalmente la renuncia del General Hugo Abreu, un ejemplar militar que consiguió liquidar la "guerrilla subversiva" en la región de Amazonia - Norte de Brasil - del cargo de Ministro-Jefe del Gabinete Militar, porque él no concordó con la indicación hecha por el Presidente Geisel del General João Figueiredo para sustituirlo en la Presidencia de la República. Esas actuaciones del General Geisel daban una demostración de fuerza y de liderazgo en el comando de la Nación.

La necesidad del Gobierno militar de legitimarse a través de elecciones era tan imperiosa que sus adeptos valían de todo y cualquier medio que pudiera inhibir a sus adversarios. En 1976, el Ministro de Justicia preparó un Decreto-Ley aprobado por el Presidente Geisel, que llevó el número 6.639/76, conocido como Ley Falcão, en que determinaba que durante las campañas para las elecciones municipales de 1976 la publicidad política en la radio y en la televisión se limitarían a la presentación del nombre, número y un sucinto currículum de cada candidato, y en el caso de la televisión, a una foto del mismo, todo eso en reducidísimo espacio de tiempo. Esa exigencia que cercenaba el derecho de expresión y el derecho del elector a ser informado, fue incorporada, a través de enmienda, a la Constitución de 1969, y ha prevalecido en las elecciones generales de 1978. Así "el silencio sería impuesto en todas las direcciones, negándose a la oposición la oportunidad de debatir y criticar las políticas del Estado" (14). Con eso pretendía el Gobierno aniquilar el avance del MDB en las elecciones futuras.

A finales de 1979, aún dentro de la estrategia del General Golbery do Couto e Silva, ahora Ministro-Jefe del Gabinete Civil del Presidente João Figueiredo, se articula la modificación del sistema político-partidario. El bipartidismo con 13 años de existencia en el escenario político nacional, cedía lugar al pluripartidismo. Esa medida entendida como una forma de liberalización del proceso político-partidario,

formaba parte del complejo juego político planeado por el General Golbery para intentar seccionar y provocar la implosión del MDB. Este no consiguió la mayoría en el Congreso Nacional por causa de las medidas extemporáneas adoptadas por el Gobierno, pero aparecía potencialmente fuerte en las intenciones de voto del electorado brasileño a condición de que en las próximas elecciones superase al partido que apoyaba el Gobierno. Con la nueva legislación político-partidaria fueron creados varios partidos políticos. A esos partidos se afiliaron parlamentarios y políticos oriundos de los dos partidos que existían antes, el ARENA y el MDB. La preocupación en ese momento decía relación a quienes debería hacer coalición para disponer de mayoría en el Congreso. El Gobierno aún continuó deteniendo la mayoría, ya que los Diputados y Senadores que integraban el ARENA pasaron a constituir el Partido Democrático Social (PDS), el nuevo soporte parlamentario del Gobierno.

Con el temor de perder las elecciones municipales que estaban previstas para 1980, el Gobierno consiguió aprobar una ley cambiando esas elecciones en todo el Brasil para el año de 1982 de modo que coincidiera con las elecciones generales en todo el país, incluso de Gobernadores de los estados. El pleito electoral de 1982, a pesar de que el PMDB - partido máximo de la oposición - consiguió una expresiva votación eligiendo 10 Gobernadores en los principales estados de la Federación (como de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, etc), y no logrando la mayoría en el Congreso Nacional porque

prevaleció, todavía, la introducción de los Senadores "bionicos", y también la incapacidad de organización de los nuevos partidos políticos de oposición.

Aunque haya sido utilizado artificios para mantenerse en el poder a través de elecciones con el objetivo de legitimarse por medio del voto, todos los gobiernos militares del período de la transición realizaron elecciones como podemos verificar: en 1974 elecciones generales en todos los niveles, de forma directa, excepto para Gobernadores de los estados que eran indicados por el Presidente de la República y elegidos indirectamente por medio de un Colegio Electoral; en 1976 elecciones municipales para Alcaldes y Concejales, excepto para los Alcaldes de las Capitales que fueron nombrados por los Gobernadores de los estados; en 1978 elecciones generales en todos los niveles, excepto Gobernadores; en 1982 elecciones generales directa en todos los niveles, incluso para Gobernador de los estados, Alcaldes y Concejales; en 1985 elecciones directas para Alcaldes de las capitales de los estados; en 1986 elecciones generales para Diputados, Senadores y Gobernadores; en 1988 elecciones directas para Alcaldes y Concejales, y en 1989, por primer vez desde de 1964, elecciones directas y libres para Presidente de la República, haya que las elecciones para la Presidencia de la República en 1973, 1978 y 1985, se realizaron por vía indirecta de un Colegio Electoral, que se reunía en Brasilia.

Como ya hemos tratado en el apartado 10 del Capítulo II, los gobiernos militares no dispensaron la debida importancia y consideración a los órganos de defensa y protección de los derechos humanos, sus acciones políticas tomadas en ese campo tuvieron la finalidad de inhibir o dificultar de forma drástica las actuaciones de esos órganos. El Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana, el único órgano oficial a nivel federal, creado por una ley pocos días antes de que fuese deflagrado el movimiento militar de marzo de 1964, vio su ley de creación modificada para aumentar el número de miembros en el Colegiado, y tornar sus reuniones y decisiones secretas, con el fin de dar la mayoría al Gobierno, y con eso mantenerlo en el silencio. Así fue casi todo el período de la transición, y solamente con la implantación del Gobierno civil de la Nueva República en 1985 ese Consejo volvió a actuar en la averiguación de denuncias que eran presentadas sin, con todo, presentar los resultados esperados por la sociedad. También en el gobierno de la Nueva República se ha creado por ley el Consejo Nacional de Defensa del Consumidor, y el Consejo Nacional de los Derechos de la Mujer, una conquista de los movimientos de mujeres en todo el Brasil.

Con la presión ejercida por sectores de la sociedad civil, principalmente de la Iglesia Católica, de la Asociación Brasileña de Prensa y de la Orden de Abogados de Brasil, el Gobierno empezó a desarticular los mecanismos de censura. En

principio fue retirada la censura previa a la llamada gran prensa de difusión pública (grandes periódicos, radios y cadenas de televisión), y a partir de 1978 a la popularizada prensa alternativa, que actuaban con más agresividad en las denuncias de corrupción y violación de los derechos humanos. Esa tolerancia vigilada con los medios de comunicación, no eliminó el control arbitrario que existía por parte del Ministerio de Justicia, ni tampoco fueron derogados los mecanismos "legales" punitivos, como por ejemplo la Ley de Seguridad Nacional. Mientras tanto la simple eliminación de la censura previa a la prensa escrita, hablada y televisada, hizo que los casos de violación a los derechos fundamentales, especialmente a la vida y a la integridad física y moral, fuesen publicados y llegasen al conocimiento de la opinión pública, rompiendo por consiguiente el silencio sobre los actos bárbaros practicados por el régimen militar, y desvaneciendo la cultura del miedo.

El Gobierno del Presidente Geisel que había iniciado la transición no podía quedarse inerte en su poder amorfo, oyendo su propia voz, ni tampoco ajeno a los reclamos de la multitud que pedía desde las tribunas a las calles, cambio en el sistema político y concesión de una amnistía amplia, general e ilimitada para todas las personas alcanzadas por actos del régimen militar. Así, en un decreto, el Presidente Geisel revocó en 1978 los decretos de expulsión del país de 120 personas, pero dejando fuera los principales líderes políticos

que aún se encontraban en el exilio. Sin embargo, en agosto de 1979 ya en el Gobierno del Presidente General João Figueiredo, fue aprobada una ley que llevó el número 6.683/79, concediendo amnistía, documento legal que fue muy discutido y polemizado en el Congreso porque los parlamentarios principalmente de partidos de oposición querían una ley que concediese amnistía total. Así mismo esta ley trajo de vuelta al país a todos los políticos y militantes que estaban en el exilio por motivos políticos. Esta ley restableció los derechos políticos de aquellas personas que los habían perdidos por fuerza y en virtud de los actos institucionales. El proceso de amnistía continuó desarrollándose gradualmente: en 1985 el Ministro del Trabajo concedió amnistía a todos los dirigentes sindicales destituidos de sus puestos desde 1964, en ese mismo año la Enmienda Constitucional 26/85 volvió a hablar de ella, y finalmente la Constitución de 1988 en sus Disposiciones Transitorias también concede amnistía, en el sentido de que todas las personas que tuvieron sus derechos violados durante el régimen militar volviesen a ejercerlos plenamente.

La introducción del derecho de voto facultativo a las personas analfabetas, consignado en la Constitución de 1969 por la Enmienda de nº 25/85, fue un hecho político de considerable significado en el derecho electoral brasileño. Como se sabe una gran parcela de la población de Brasil no sabe leer ni escribir y a ellas fue negado el derecho de voto, por todo el período de existencia de la Nación. Con esa medida de carácter democrático

las fuerzas políticas intentaron dar una mayor legitimidad a la representación política nacional, ya que con eso aumentaría el número de electores, con una mayor participación de los ciudadanos brasileños.

Como parte de la agenda política de la transición, constaba la elaboración de una nueva Carta Constitucional que estuviera libre de la casuística y de los actos arbitrarios impuestos por el régimen militar. Así, por medio de una enmienda a la Constitución de 1969 fue convocada una Asamblea Nacional Constituyente integrada por parlamentarios (Diputados y Senadores) electos en 1986, y que empezaría sus trabajos en febrero de 1987. Este hecho se tradujo en el ápice de todo el proceso de la transición y llevó al país a un efectivo Estado Democrático de Derecho. Esta era la esperanza de una sociedad que hasta entonces había vivido oprimida y con sus derechos fundamentales conculcados.

No se puede dejar de mencionar que en ningún momento los gobiernos del período de la transición se manifestaron favorable a promover oficialmente una investigación sobre las muertes, las desapariciones, las torturas y la violación general de los derechos fundamentales de que fueron víctimas muchos de los ciudadanos brasileños por actos de las fuerzas de represión. Con el restablecimiento de un gobierno civil, los seguidores del régimen militar afirmaban que realizar una investigación por los crímenes cometidos por ese régimen

significaría un "revanchismo", ya que el gobierno había concedido amnistía, amplia, general e irrestricta en la que los responsables de tales actos estarían incluidos. Así, los presuntos responsables por muertes y torturas practicadas en tal período quedaron impunes y libres de cualquier acusación.

IV.3. Situación Económica y Social

La transición hacia la democracia se ha iniciado justo al final del período de crecimiento económico brasileño llamado "milagro económico" que empezó en 1967 y terminó en 1973. El Producto Interior Bruto (PIB) que de acuerdo con la política de crecimiento tuvo su auge en 1973 con una tasa de 14%, empezó a presentar una decadencia en 1974 llegando a 9,8%, un índice todavía alto para un país en desarrollo, continuando esa caída durante todo el período hasta alcanzar tasas negativas como en el caso de 1981 que presentó una tasa negativa de 1,9. En el año de 1974 la deuda externa de Brasil, que desde el año de 1973 venía acelerando pasando de 3 mil millones en 1972 a 12 mil millones de dólares en 1973, alcanzó la cifra de 17 mil millones de dólares. La tasa de inflación anual que en los cuatro primeros años de la década de los setenta se mantuvo estable, alrededor de 18%, ya en 1974 experimenta una alza considerada alcanzando 34,5, y a partir de la cual no ha parado jamás de subir, habiendo alcanzado en 1989, último año de la transición, una tasa de 1.764,9%.

En el año de 1974 las cosas empezaron a cambiar para peor con el primer conflicto del petróleo cuyo barril de crudo pasa de 3 para 12 dólares, siendo Brasil importador del 60% del petróleo que consumía. Se añadió a ese grave factor el incremento del interés de la deuda externa presionado por la dificultad de la economía de los Estados Unidos de América, lo que aumentó el total de la deuda externa brasileña.

La situación económica de Brasil con el pasar de los años 70 y 80 continuaba empeorando, ahora afectada por el segundo conflicto del petróleo en 1977, por el aumento de las tasas de interés internacionales cobradas por los Estados Unidos de América que subieron de 11,8% en 1978 a 21,5 en 1980. Se suma a ese cuadro negativo, la pérdida de valor de sus productos de exportación en el mercado internacional de casi un 50% en los años de 1980 a 1985. (15)

En el esfuerzo de procurar mantener al día los compromisos asumidos con los acreedores internacionales, los gobiernos de la transición intentan estimular la producción de productos agrícolas destinados a la exportación, en detrimento de la producción de productos básicos de alimentación para el consumo interno, con el objetivo de captar divisas y con eso efectuar el pago, de por lo menos, el servicio de la deuda que en 1985 fue alrededor de 12 mil millones de dólares, lo que correspondió al 5% de toda la producción nacional. El

incremento de la exportación no generó ningún beneficio directo para la población brasileña.

La reducción de la deuda externa y el combate de la inflación fueron metas constantes de los Gobiernos del régimen militar. La población que ya venía pagando a partir de 1974 las consecuencias del "milagro económico" que apenas propició un mayor endeudamiento externo, una mayor concentración de la renta en manos de pocos y una brutal desigualdad social, se vio enfrentada a la responsabilidad de pagar por algo cuando en la definición de las políticas económicas de los Gobiernos, no ha sido llamada a opinar ni a compartir. Esa situación económica de Brasil que configuraba un estado casi de insolvencia, se debió a la decisión exagerada de los Gobiernos del régimen militar de contraer préstamos en el exterior, como también a la forma de negociación de esa deuda, cuyos términos, según muchos analistas económicos, fueron contrarios a los intereses nacionales y podrían haber comprometido la soberanía nacional.

Grandes proyectos puestos en ejecución en este período, tales como, construcción de centrales nucleares en Angra de los Reyes, estado de Río de Janeiro, construcción de la más grande central hidroeléctrica del mundo en Itaipú, estado de Río Grande del Sur, construcción del ferrocarril del acero, construcción de la carretera Transamazónica, construcción de la puente ligando las ciudades de Río de Janeiro y Niterói, el gran proyecto Carajás, en la Amazonia, y otros

grandiosos emprendimientos, se presentaron también como factores del endeudamiento externo de Brasil.

Encontrándose al borde de la insolvencia, Brasil recurre en 1983 al Fondo Monetario Internacional (FMI) para dentro de las normas de esa entidad monetaria compatibilizar y reorganizar su economía con vista a generar divisas para el pago del servicio de su deuda externa y obtener, del mismo, préstamos con los que pudiese hacer frente a alguna inversión interna. Con motivo de la crisis a partir de 1974, el país no tuvo más posibilidad de realizar la amortización de su deuda, limitándose apenas a buscar medios, a través de negociación con el FMI y con los acreedores internacionales, para dentro de su exigua capacidad proceder al pago del servicio de la deuda externa. Así mismo, en 1987 tuvo que suspender el pago por completo, estableciendo una moratoria unilateral.

Con la política impuesta por el Fondo Monetario Internacional y las dificultades internas para superar su crisis económica, Brasil experimentó un alto índice de desempleo, una disminución del poder adquisitivo de los salarios (bajos salarios x aumento de los precios de los productos), y un aumento de la pobreza de la mayoría de la población, llegando a la condición de miseria casi absoluta. Solamente una ínfima parcela de la sociedad sale ganando con esa crisis, aquélla formada por empresarios que comercializaban

con productos de exportación y los especuladores del mercado financiero.

Las políticas económicas a partir de 1986 tendieron a fijar un índice no superior a 2% del PIB para el pago del servicio de la deuda a diferencia del 5% - 12 mil millones de dólares - pagados en 1985. Sin embargo, los factores de orden externo y la incontrolada inflación que persistieron en todo el período, no permitió lograr los resultados esperados, muy por el contrario la deuda externa continuó subiendo y la inflación fuera de control. Para combatir la inflación e intentar estabilizar la economía, el Gobierno de la Nueva República, a partir de 1986, aplicó varios planes económicos estableciendo congelación de precios de productos, de tarifas públicas y de salarios (Planes Cruzado I y II, Plan Bresser y otros), pero la eficacia de esos planes duró cuatro meses como mucho, debido a que la única cosa que fue posible controlar y congelar fueron los salarios de los trabajadores y de los funcionarios públicos, los demás componentes de la economía, principalmente los productos alimenticios subían día a día.

Como hemos podido observar la política económica de los dos primeros Gobiernos del período de la transición, estuvo dirigida al estímulo para la exportación, sea de productos de las estatales, como también los de las empresas privadas. A pesar de la crisis a que hemos hecho referencia, Brasil no paró de producir, habiendo alcanzado la posición 8ª en la economía

mundial y 4º en la lista de mayores productores de alimentos, pero en contraste a esas posiciones ocupa la 6ª en desnutrición significando que el país está entre los seis países del mundo con mayor carencia alimenticia, y que aún, detenta una de las mayores tasas de mortalidad infantil, de 63 por cada 1.000 nacimientos. Hay que decir que hubo un descenso en la tasa de mortalidad infantil en el período visto que en 1976 acusaba 92/1.000.

Dentro de su política económica los Gobiernos militares buscaron definir y ejecutar programas y proyectos de desarrollo integrados para las diversas regiones del país. En ese sentido se crearon y fortalecieron organismos regionales destinados a financiar y controlar proyectos para esas regiones, que eran tocados con recursos financieros del presupuesto de la Nación, obtenidos de incentivos fiscales para inversión en la propia región. Como principales órganos regionales, podemos citar: la Superintendencia del Desarrollo de la Amazonia (SUDAM) para la región Norte; la Superintendencia del Desarrollo del Nordeste (SUDENE) para la región Nordeste; la Superintendencia del Desarrollo del Centro-Oeste (SUDECO) para la región del Centro Oeste, y la Superintendencia del Desarrollo del Sur (SUDESUL) para la región Sur. Cada órgano se encargaba de aprobar y financiar proyectos específicos de cada región, cuyas directrices eran aprobadas por el Consejo de Desarrollo Social que era presidido por el Jefe de la Nación.

Para el Nordeste, región más castigada por las constantes sequías y que presenta la más grande extensión de pobreza de todo el Brasil, el Gobierno definió una serie de programas especiales que buscaban aminorar el sufrimiento de la población nordestina, y al mismo tiempo identificar y aprovechar económicamente los recursos naturales existente en esa región. Entre esos programas destacamos el Programa de Aprovechamiento de Recursos Hidráulicos; el Programa de Redistribución de Tierras no Nordeste (PROTERRA); el Programa de Desarrollo Integrado del Nordeste (POLONORDESTE); el Programa de Asistencia a las Áreas y Poblaciones Afectadas por la Sequía y también el Proyecto Sertanejo. Hubieron varios otros en todo el país como el Programa de Desarrollo de los Cerrados (POLOCENTRO) que englobaba estados de más de una región, destinado a la producción de granos y de horti-fruti cultura; el Programa de Desarrollo Regional Integrado (PDRI) que contó con fondos del Banco Mundial y de otros organismos de crédito internacional, el Programa del Desarrollo del Pantanal, y el Programa Nacional del Alcohol (PROALCOOL) este último para financiación de proyectos con vista a la producción de alcohol para servir como combustible de vehículos.

Tanto los programas como los proyectos de esos Gobiernos recibieron ácidas críticas de expertos que no pertenecían al régimen, de ecologistas y de los más diversos sectores de la sociedad, a veces por los criterios esencialmente técnico-burocráticos con que eran desarrollados,

sin la participación efectiva de la población que sería directamente afectada como si fuera posible "aceptar que lo económico se separe de lo humano así como el técnico se separe del ético", (16) y, otras veces, por haber procurado beneficiar a personas o grupos ya poseedores de renta alta. Si tenían la intención de aminorar la situación de pobreza de los brasileños, eso no aconteció porque los pobres se quedaron más pobres.

Dentro de la estrategia de desarrollo social establecida en los Planes Nacionales de Desarrollo, los Gobiernos instituyeron fondos con recursos presupuestarios de la Nación y de loterías administradas por el Gobierno, para financiación de proyectos de interés del sector público en áreas de Salud, Saneamiento Básico, Educación, Trabajo y Seguridad y Asistencia Social. Fueron muchos esos instrumentos. Entre ellos se destacaron el Fondo de Apoyo al Desarrollo Social (FAS) creado por la Ley 6.168 de 9 de diciembre de 1974 con cuyos recursos financieros se construyó escuelas, hospitales, hoteles y otros equipos comunitarios por todo Brasil, sea de iniciativa pública o privada, y fue posible realizar programas de carácter social destinados a los ciudadanos; el Fondo Nacional de Apoyo al Desarrollo Urbano (FNDU) creado por la Ley 6.256 de 22 de octubre de 1975 constituido por recursos internos y externos que estaban destinados a la implantación y mejoría de la infraestructura urbana, principalmente del sistema vial de transporte público,

saneamiento ambiental y seguridad pública, e instalación de centros sociales urbanos que se destinaban a la práctica de actividades comunitarias en los campos de la educación, cultura, deportes, salud, nutrición, trabajo, recreación y ocio. Con anterioridad al FNDU el Gobierno había creado el Programa Nacional de Centro Sociales Urbanos, por medio del Decreto 75.922, de 1 de julio de 1975 y construyó con recursos propios de la Nación más de un centenar de Centro Sociales Urbanos (CSU) en las principales ciudades del país.

Con el objetivo de sanear la carencia de viviendas por todo el territorio nacional existió el Banco Nacional de Habitación (BNH) entidad creada en el primer Gobierno militar posterior al 64, que administraba los recursos financieros del Sistema Financiero de Habitación, provenientes de las cotizaciones efectuadas por las empresas en nombre de sus trabajadores, y que constituía el Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio (FGTS), y del ahorro particular. Esa entidad financió durante muchos años la construcción de viviendas para la clase popular y para la clase media, habiendo funcionado hasta mediados del último Gobierno de la transición, sin con todo conseguir solucionar el grave problema de habitación, que todavía aún se presenta con un déficit de cerca de 4 millones de viviendas. El BNH - órgano gestor del SFH - en la búsqueda de amenizar la angustiante situación de gran parcela de la población pobre, instituyó el Fondo de Apoyo a la Producción de Viviendas para la Población de Renta Baja, con el intento de

estimular el mercado constructor para producir viviendas para la población más necesitada. Esos mecanismos oficiales nada o poco significaron en la solución del problema de la vivienda.

En el campo de la Seguridad Social, el Gobierno militar, ya en 1974, instituyó por la Ley 6.179 de 11 de diciembre el beneficio de la seguridad social para los mayores de 70 años de edad y para los inválidos que estaban marginados del sistema oficial. Ese beneficio alcanzaba a todas las personas mayores de 70 años de edad y a aquellas personas incapacitadas definitivamente para el trabajo, que no estuviera ejecutando trabajo remunerado, no percibiese remuneración alguno y que no fuesen mantenidos por aquellos de los cuales dependiesen obligatoriamente. Esas personas tendrían derecho a una renta mensual vitalicia correspondiente a 60% del salario mínimo del lugar de pago, y también a la asistencia sanitaria en los puestos de salud oficiales. Además de las limitaciones arriba señaladas los pretendientes a esos beneficios habían de tener cotizado por 12 meses consecutivos o no, en cualquier tiempo, en la Seguridad Social en caso de campesinos haber trabajado en el campo por cinco años, aún sin afiliación a la Seguridad Social, y haber ingresado en el sistema después de completar 60 años de edad. El valor de 60% del salario mínimo regional era ínfimo, así considerado porque el salario mínimo brasileño estaba como uno de los más bajo del mundo, entre 50 a 60 dólares mensuales.

La legislación del Sistema de Seguridad Social excluía a los empresarios rurales de sus beneficios. Con la edición de la Ley 6.260 de 6 de noviembre de 1975 los beneficios de la Seguridad Social fueron extendidos a esas personas en caso de jubilación por invalidez y vejez, así como a sus dependientes para efectos de pensión y auxilio funeral.

Con la finalidad de aminorar la situación de los obreros dispensados sin causa justa o por paralización total o parcial de las actividades de la empresa, el Gobierno de la Nueva República instituyó por la Ley 2.284 de 10 de marzo de 1986 el Seguro de Desempleo con cargo a los recursos del Fondo de Asistencia al Desempleado previsto en la Ley 4.923/65, por lo tanto anterior a la transición. El trabajador desempleado para recibir ese Seguro debía demostrar haber recibido salarios en los últimos seis meses y haber cotizado para la Seguridad Social por lo menos durante 36 meses, y debía no poseer renta propia suficiente para el mantenimiento propio y el de su familia. El valor de ese beneficio no podría ser inferior a 70% del salario mínimo ni superior a 1,5 salario mínimo para los que percibían, cuando estaban trabajando, más de 3 salarios mínimos, y todo eso por una duración de hasta cuatro meses.

En la Nueva República, el Presidente José Sarney encomendó varios estudios sócio-económicos a órganos del propio Gobierno, como la Fundación Instituto Brasileño de Geografía y

Estadística (IBGE) y también a instituciones particulares. Uno de los estudios más importante fue el encomendado al profesor Helio Jaguaribe, (17) renombrado científico social, para que presentase un informe "sobre los graves problemas sociales brasileños", y presentase soluciones para acabar con la miseria en Brasil. Ese documento, titulado "Brasil-2.000", ha sido entregado al Presidente en mayo de 1986 y dado énfasis a los programas de bienestar social como una forma de superar el estado de pobreza y sanar la deuda interna hasta el año 2.000. El Gobierno del Presidente José Sarney ha puesto en ejecución varios programas sociales de apoyo a la población más pobre, entre ellos, citamos el programa de distribución de leche a los hijos de familia de baja renta, el Programa de Distribución de Alimentos (PAP) para la población de baja renta, y otros específicos, bajo la coordinación de la Secretaría Especial de Asuntos Comunitarios (SEAC), órgano directamente subordinado a la Presidencia de la República, especialmente creado para coordinar los programas sociales del Gobierno José Sarney, que llegó a adoptar el lema publicitario "Todo por el Social", dada la intención de privilegiar tal área social. Mientras tanto, la corrupción, los desmanes administrativos, la prevaricación y la malversación del dinero público en esta área, y particularmente en la Secretaría en cuestión, entorpecieron sus resultados, conforme se puede comprobar por las denuncias que aparecieron en los periódicos y jamás averiguadas por el gobierno federal.

En el último Gobierno de la transición, el Ministerio de la Justicia por intermedio del Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana, desarrolló algunos proyectos y campañas buscando concienciar la población acerca de sus derechos fundamentales. Entre esas campañas se destacaron la denominada "Vamos Vivir Sin Violencia" que llamaba a todos los ciudadanos ante la necesidad de no practicar violencia y respetar y colaborar con los órganos de seguridad, otra fue llamada "Pinte sus Derechos" promovida por ocasión de la conmemoración del 40º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1988, traducida en un concurso destinado a los niños y jóvenes estudiantes de las escuelas de enseñanza básica y media en el que ellos dibujaron los derechos humanos consagrados en ese Documento Universal. También ese Ministerio procuró proveer a las Policías Civiles y Militares de vehículos para combatir la violencia urbana, principalmente en las capitales.

Saliendo de las acciones de los Gobiernos en el campo económico y social que pudieron haber tenido repercusión en los derechos fundamentales, subrayando que esas acciones oficiales poco repercutieron positivamente en esos derechos, pasamos a verificar algunas de las actuaciones y participaciones de otros segmentos de la sociedad civil en el campo social relacionadas con los derechos humanos. En el Capítulo II de este trabajo, hemos visto de una forma genérica como actuaron la Iglesia Católica, la Asociación de Prensa, el Orden de Abogados de

Brasil, los sindicatos, y algunos movimientos de defensa de los derechos humanos, pero es necesario para un mejor entendimiento que se hagan aún ciertas consideraciones a cerca de la importante y decisiva influencia que tuvieron esos órganos y entidades de la sociedad civil en el proceso de redemocratización del país, y, consecuentemente, en la posibilidad del efectivo ejercicio de los derechos fundamentales.

En primer término, la actuación de los movimientos sociales, sean los de carácter secular, es decir los que estaban formalmente organizados, sean los llamados "movimientos emergentes", surgidos con el "crecimiento y ampliación de los problemas urbanos", (18) que representaban a las clases populares marginadas y que no tenían otra forma de llegar hasta las élites dirigentes con sus desconformidades y sus reivindicaciones, a no ser por medio de protestas y de manifestaciones colectivas, sensibilizó a los demás segmentos de la sociedad para también reivindicar sus derechos. La política económica practicada por los Gobiernos de la transición que, hasta cierto punto ha llevado Brasil a modernizar su parque tecnológico, presentó una seria contradicción en cuanto a que su población permaneció o se ha quedado más pobre, porque conforme señala el profesor Vicente Faleiros (19) el costo que la población (privilegiada) tuvo que pagar para tener más teléfono más carreteras y más industrias ha significado (para las clases pobre y media) menos salario,

menos alimentos, menos acceso a la vivienda, menos empleo, y con todo eso, más pobreza.

Las manifestaciones y protestas llevadas a cabo por los movimientos sociales, algunas pacíficas (que presentaban sus reivindicaciones directamente a los órganos del Gobierno y a los políticos), y otros que surgieron inesperadamente, practicando actos contra el patrimonio público y de terceros, como por ejemplos los de "quiebra-quiebra" y depredaciones de trenes y autobuses ocurridos en todo el país a partir de 1974, tenían por objetivo común reivindicar mejoría en la precaria situación urbana y de la calidad de vida en sus ciudades en lo referido a transporte público, limpieza urbana, saneamiento básico, iluminación pública, vivienda, agua potable, etc. Con el pasar del tiempo esos movimientos se articularon con los movimientos sindicales y políticos de oposición, para exigir la vuelta al Estado de Derecho y al cumplimiento de los derechos de ciudadanía a fin de posibilitar, y que de cierto modo posibilitó, el escenario de "algunos caminos en torno de la creación de una noción de ciudadanía colectiva, donde las propuestas concretas de gestión de la ciudad y el cuestionamiento de las prácticas existentes han obtenido alguno espacio de reflexión en el interior de las agencias del Estado". (20)

Los órganos no gubernamentales de defensa de los derechos humanos, que empezaron a surgir casi al mismo tiempo

que las medidas de distensión política, tuvieron una destacada actuación en la movilización de la sociedad ya que en esos órganos convergían todo tipo de denuncia de violación de los derechos fundamentales y ellos se encargaban de llevarla o someterla al conocimiento de la opinión pública por todos los medios que fuese posible, como también de hacerla llegar hasta una autoridad administrativa, policíaca o judicial, para una posible averiguación. En algunos casos se pusieron abogados a la disposición de la persona que vieron sus derechos violados o los de su familia para entablar juicio y acompañarlos en el penoso proceso. Entre esos órganos, destacamos las Comisiones de Derechos Humanos del Consejo Federal de la Orden de Abogados del Brasil, diseminadas por todo el país, como también las Comisiones de Justicia y Paz y los Centros de Derechos Humanos de la Iglesia Católica que aún existen en todo Brasil, destacando especialmente la Comisión de Justicia y Paz de la Archidiócesis de São Paulo que bajo la inspiración del Cardenal Don Paulo Evaristo Arns, protector mayor de los pobres y de las personas que fueron oprimidas, perseguidas y humilladas por el régimen militar.

Los Centros Eclesiásticos de Base (CEB,s) una nueva forma de se trabajar la evangelización de los pueblos con sus acciones de carácter religioso y cultural, actuaron preferentemente por los pobres, surgieron en cada parroquia, en cada iglesia católica en las grandes y pequeñas ciudades y en las zonas campesinas. En las grandes ciudades trabajaba con



la población de la periferia que vivían en "favelas" (chabolas) con los marginados, con los desempleados y trabajadores de baja renta, y en el campo, con los campesinos sin tierra y sin comida. El buen desempeño de las CEB,s se debió a las posiciones firmes y decididas de los Obispos progresistas de la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil (CNBB) y de teólogos y religiosos adeptos de la llamada "teología de la liberación".

Las Campañas de la Fraternidad, promovidas todos los años por la CNBB, fueron eventos importantes para alertar a los ciudadanos a rescatar sus derechos fundamentales. Tuvieron su comienzo en los primeros años de la dictadura militar y han permanecido durante todo el período de la transición, cada año enfocando un tema relacionado con los derechos humanos y la visión cristiana. Por ejemplo, citamos la campaña de 1983, titulada "Fraternidad Sí, Violencia No". Esas Campañas contaron con el apoyo de la Santa Sede y más recientemente con el apoyo personal del Santo Padre Juan Pablo II, además de los sermones y de las plegarias sobre el tema que eran hechas por los Curas en sus Parroquias o Iglesias en todos los rincones de Brasil, y de su divulgación en las radios y en las televisiones, alcanzando y sensibilizando los católicos para la práctica de la solidaridad y comprensión humanas.

Los sindicatos, que en el inicio de la transición fueron un apéndice del Gobierno y funcionaron como órganos

represores que servía a los intereses del régimen militar para en cambio recibir beneficios asistenciales como donación de terrenos para implantación de colonias de vacaciones, hospitales, becas para los hijos de sus dirigentes, préstamos personales, etc. (21) tuvieron a partir de 1978 una destacada y decisiva actuación en las conquistas sociales que se concretaron la nueva Constitución de 1988. La legislación para creación y funcionamiento de sindicatos estaba consignada en el documento aprobado en 1943 por el Presidente "populista" Getúlio Vargas, titulada Consolidación de las Leyes de Trabajo (CLT) que entre otras limitaciones a la libertad sindical decía que "son deberes de los sindicatos colaborar con los poderes públicos en el desarrollo de la solidaridad", y aún determinaba que en los estatutos de las entidades sindicales debería constar "la afirmación de que la asociación (sindicato) actuará como órgano de colaboración con los poderes públicos y las demás asociaciones, en el sentido de solidaridad social y de la subordinación de los intereses económicos y profesionales y el interés nacional", y así fue por un largo período.

En 1977 empezaron las luchas de los sindicatos por una reposición salarial de 34,1% de la inflación pasada que el Gobierno había quitada a los trabajadores, con la manipulación de los índices de inflación. Esa maniobra del Gobierno ha sido denunciada en un informe del Banco Mundial de 1976, y fue suficiente para que toda la clase trabajadora se manifestase favorable a luchar por un derecho que el Gobierno persistía en

no reconocer. Ese movimiento acompañado de huelgas empezó por São Paulo - mayor parque industrial brasileño - donde ya existían sindicatos fuertes con dirigentes con mentalidad distinta de los antiguos "pelegos", es decir dirigentes sindicales que eran sumisos al régimen militar. A partir de ahí las luchas se tornan constantes, las huelgas salen de las fábricas y se van a las calles. Hay violentas represiones, así, en 1979 por causa de un piquete con ocasión de la huelga de los metalúrgicos de São Paulo ocurrió el asesinato del obrero Santo Dias, líder sindical, atribuido a la Policía de aquel estado.

Los sindicatos que defendían en las fábricas y en las calles los derechos de los trabajadores, van poco a poco consiguiendo su legitimidad y apoyo en el seno de la sociedad. Las fuerzas sindicales progresistas crearon la Central Única de los Trabajadores (CUT) que no es la única, pero buscaba ese objetivo, y también surgió la Confederación General de los Trabajadores (CGT) en sustitución de la Coordinación de las Clases Trabajadoras (CONCLAT). Sin embargo, otras facciones conservadoras que propugnaban por un sindicato no combativo y conciliador consiguieron organizar y formar su entidad, así surgió la Unión Sindical Independiente (USI). El "nuevo sindicalismo" brasileño defendió y defiende una total libertad sindical, con autonomía administrativa y financiera de los sindicatos, el pleno derecho a la huelga y la derogación de la CLT, que aún está vigente, entre otras reivindicaciones de

carácter estrictamente laboral. Gracias a la actuación de los sindicatos con sus luchas trabadas durante los últimos once años de la transición a la democracia ha sido posible incluir en la Constitución de 1988 derechos sociales que hace mucho tiempo se reclamaba.

Citas y Notas:

- (1) VIEIRA, José Ribas: *O Autoritarismo e a Ordem Constitucional no Brasil*. Editora Renovar, Rio de Janeiro, 1988, pág. 91.
- (2) Ibidem, pág. 91.
- (3) Ibidem, pág. 90.
- (4) MARINHO, Josaphat Ramos: "Exceção e Legalidade". Discurso pronunciado en el Senado Federal, Brasília el 3 de noviembre de 1969, publicación del Senado, pág. 7
- (5) MARTINS, Ives Gandra da Silva: "A Constituição de 1967". Conferencia pronunciada en el seminario sobre constituciones de Brasil. Instituto Tancredo Neves/Fundación Freiedric Naumann. Brasília, pág. 92.
- (6) Ibidem, pág. 102.
- (7) ARAGAO, Selma Regima: *Direitos Humanos do Mundo Antigo ao Brasil de Todos*. Editora Forense, Rio de Janeiro, 1990, pág. 119.
- (8) MEIRELLES, Hely Lopes: *Mandado de Segurança*. Editora Revista de los Tribunales, São Paulo, pág. 8.
- (9) Ibidem, pág. 89.
- (10) COLOMER VIADEL, Antonio: *Introducción al constitucionalismo Iberoamericano*. Ediciones de Cultura Hispánica-AECI, Madrid, 1990, págs. 87/96.
- (11) *Revista OAB* n° 19, 2° Quadrimestre de 1982, 2ª edição, Rio de Janeiro, pág. 371.

(12) Para una mejor comprensión del centralismo del Poder Ejecutivo Federal y de las estrategias del Gobierno militar hay que analizar la obra del General Golbery do Couto e Silva, que fue Ministro-Jefe del Gabinete Civil del Presidente Ernesto Geisel, titulada *Conjuntura Política Nacional - O Poder Executivo e Geopolítica do Brasil*. Editora José Olympio, Rio de Janeiro, 1981.

(13) SKIDMORE, Thomas E.: "A lenta via brasileira para a democratização: 1974/1985 en *Democratizando o Brasil*. Editora Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1988, pág. 40.

(14) ALVES, Maria Helena Moreira: *Estado e Oposição no Brasil*. Editora Vozes, 5ª edición, Petrópolis, 1989, pág. 195.

(15) A.A.V.V.: *A Dívida e a Pobreza. Quanto Custa Acabar com a Miséria no Brasil*. Editora Brasiliense/Instituto de Ação Cultural, 3ª edición, Rio de Janeiro, 1986. Esta obra presenta una síntese del proceso y evolución de la deuda externa brasileña y sus graves consecuencias.

(16) NEWMANN, Laurício y DALPIAZ, Osvaldo: *Realidade Brasileira - Visão Humanizadora*. Editora Vozes, Petrópolis, 4ª edición, 1987, pág. 140.

(17) Para un perfecto diagnóstico de la situación económica y social de Brasil y sus consecuencias se puede consultar las obras de JAGUARIBE, Hélio: *Brasil 2.000: para un nuevo pacto social*. Editora Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1986; y *Brasil, Reformas ou Caos*. Editora Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1989.

(18) MOISES, José Alvaro y MARTINEZ-ALIER, Verena: "A Revolta dos Suburbanos ou 'Patrão o trem atrasou'" en *Contradições Urbanas e Movimentos Sociais*. Editora Paz e Terra/CEDEC, 3ª edición, Rio de Janeiro, 1985, pág. 49.

(19) FALEIROS, Vicente de Paula: "Estado e Massas na Atual Conjuntura" en Revista del Departamento de Sociologia, n° 1, da Universidade de Brasília, junio de 1986, pág. 31.

(20) JACOBI, Pedro: "Movimentos Sociais Urbanos numa Época de Transição: Limites e Potencialidades" en Movimentos Sociais na Transição Democrática. Editora Cortez, São Paulo, 1987, pág.22.

(21) Para comprensión de la historia, de la evolución de los sindicatos, de las expectativas y de las propuestas del nuevo sindicalismo en Brasil se puede consultar GIANNOTTI, Vito: Reconstruindo Nossa História - 100 anos de Luta Operária. Editora Vozes, Petrópolis, 1988; A.A.V.V: Sindicatos en Una Época de Crise. Editora Vozes/CEDEC, Petrópolis, 1984; IBRAHIM, José: Perspectivas do Novo Sindicalismo. Ediciones Loyola/CEDAC São Paulo, 1988.

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

I. La transición a la democracia en Brasil, como ya se ha señalado, se inició con el discurso de distensión del Presidente General Ernesto Geisel en el que se comprometía a realizar una apertura gradual hacia la democracia que siguiendo la estrategia del régimen militar aseguraba al país la normalización democrática. El mismo, como ya también se ha visto, fue un proceso lento debido a los factores políticos, sociales y económicos presentes en el período así como al largo período de ejercicio de la Presidencia de la República - 5 y 6 años - que correspondió a cada uno de los tres Presidentes que dirigieron la Nación durante el período de que se trata.

También quedó establecido en este trabajo, que desde el comienzo de la transición y hasta 1978, el régimen militar desarrolló una persecución constante de todo aquel individuo que fuese considerado contrario u opositor a los principios de la Doctrina de Seguridad Nacional, en verdad, considerado subversivo o perturbador del orden político y social en virtud de sus acciones o ideales. En este período, por tanto, existió la figura del preso político que, en concepto de la autoridad, no era tal sino un terrorista y un agitador. En tal categoría se encuadró siempre a los líderes de los movimientos políticos, de movimientos de acción armada, a los líderes estudiantiles, sindicales o de asociaciones de clase, a los sacerdotes

progresistas, a algunos profesionales liberales (abogados y otros), a los intelectuales y demás individuos que en el entender de los militares amenazaban con sus acciones o ideas la seguridad del Estado. Esa parte de la población que, en su mayoría, puede ser calificada como "los intelectuales" de la Nación, tuvo una destacada actuación al final de la década de los años 70, en la campaña por el otorgamiento general e ilimitado de amnistía en tanto la misma beneficiaría a sus líderes y militantes condenados durante los años pasados en virtud de las leyes de excepción que rigieron la acción de los gobiernos militares.

En este contexto, ya ampliamente explicitado a lo largo de la tesis, se puede establecer como una primera afirmación de importancia que en el inicio de la transición política la práctica sistemática de violación de los derechos fundamentales constituía básicamente práctica estatal, es decir, que era ordenada y ejercida por los agentes y órganos de represión estatales en tanto ellos entendían que las personas que eran alcanzadas por esa represión estaban contra la existencia y permanencia del Estado Autoritario. Aún más, la responsabilidad estatal se extendía al "olvido" intencionado de los gobiernos militares del hecho de que los presidios, penitenciarias y manicomios brasileños estaban llenos de ciudadanos indefensos, que muchas veces, ni siquiera habían podido presentar formalmente una queja ni mucho menos habían sido sometidos a un juicio legítimo antes de su encierro. Todo

ello, sin hablar de las promiscuas condiciones de esos mismos sitios penales. Siendo así, sólo con el surgimiento de otras voces, sólo con la emergencia de los movimientos sociales y de los centros de derechos humanos esos hechos comienzan a ser cuestionados, la sociedad se informa y se sensibiliza con toda esa problemática.

II. A partir de esta primera afirmación, simple constatación de una realidad, es posible advertir que la historia reciente de los derechos humanos en Brasil, desde el punto de vista de las reivindicaciones, presentan tres fases diferenciadas, a saber: una primera fase centrada específica y exclusivamente en la lucha contra la tortura de los presos políticos que se traducía, en términos de garantías individuales, en la defensa del derecho a la integridad física y moral de los encarcelados. En esta primera etapa se perfilan como agentes defensores de los derechos fundamentales, en el ámbito interno, algunos sectores de la iglesia católica y, en el ámbito externo, la organización Amnistía Internacional. El final de esta fase puede situarse en el año de 1975.

Una segunda fase, que comienza en 1975 y se completa en 1979, por lo tanto ocurre ya dentro de la prometida "distensión lenta y gradual". La misma se caracterizaría por centrarse no sólo en la defensa del derecho a la integridad física y moral de los presos políticos, sino por haberse desarrollado, también, la lucha por la reconquista de los

derechos políticos de la ciudadanía y por la lucha por el restablecimiento de las libertades democráticas. Es un período claramente marcado por el establecimiento del pluripartidismo político, por la concesión de amnistía general, por las campañas contra la ley de seguridad nacional, por el surgimiento de los movimientos sociales y surgimiento del "nuevo sindicalismo", el desarrollo de las huelgas por mejores salarios y por una cierta liberalización de la censura. Durante esta segunda fase, ya son varios los sectores de la sociedad que luchan en defensa de los derechos humanos, entonces los agentes defensores se han multiplicado, particularizado y especializado según su área de mayor interés.

La tercera fase, que comienza en 1979, se traduce en la movilización en favor del establecimiento y ejercicio de los derechos de carácter social y económico y por lo tanto, en términos de objetivos perfectamente diferenciada de la segunda. En esta tercera fase la persecución contra los políticos y líderes contrarios al régimen militar cede lugar a la violencia y persecución contra las clases populares principales agentes activos de esta demanda de reconocimiento de derechos económico-sociales que lograron comprometer la supervivencia del régimen en razón de reivindicaciones y reclamaciones de justicia social. En esta fase, entonces, los agentes defensores de los derechos humanos se habían desplazado de la categoría predominantemente individual, intelectual, de liderazgo o de elite, a otra más general, masiva e indiferenciada en cuanto a

su ocupación o procedencia, fenómeno que evidenciaba un notable avance en lo relativo a la toma de conciencia generalizada sobre la problemática de la existencia de derechos fundamentales y de su constante desconocimiento o violación por parte de las autoridades.

En relación con este tema de conciencia generalizada, hay que señalar que la clase media brasileña estuvo involucrada en la defensa de los derechos fundamentales en la medida en que sus hijos, que solían ser los líderes de los movimientos y de las organizaciones políticas clandestinas, eran perseguidos o encarcelados por el régimen militar. Superada esa fase inmediata o imperiosa - la de defensa de los presos políticos - la clase media dejó de preocuparse por la problemática de los derechos humanos y no participó en el momento en el que la misma se traducía en la conquista de los derechos económicos y sociales para las clases trabajadoras del Brasil. No obstante, la clase media se benefició del "milagro económico", que como ya hemos visto no se tradujo en ningún momento en acciones de justicia social general, en tanto muchos de sus integrantes eran empleados de las grandes empresas y grupos económicos nacionales o internacionales u ocupaban altos cargos en la Administración Pública.

Sin embargo, con el pasar del tiempo, a partir de 1980, esta situación varía. Los problemas económicos y sociales alcanzan básicamente a todos los sectores de la sociedad y,

entonces, las reivindicaciones de naturaleza económica y social, antes sostenidas sólo por los sectores populares, pasan a ser tratados como cuestiones de derechos humanos por la gran mayoría de la población brasileña. Exceptuábanse de esta situación y de un modo general los altos cargos empresariales que nunca se sintieron alcanzados en sus intereses por medida alguna de los gobiernos militares.

En este esquema de ideas y considerando la tercera fase señalada como un momento de mayor concientización sobre el tema de los derechos humanos, es necesario no olvidar que la crisis económica existente unida a la crónica y aguda injusticia social verificada durante todo el período de transición hizo que aumentase el contingente de pobreza con todo lo que ello implica: más marginalidad, más delincuencia, más violencia urbana, más violencia policíaca, y, consecuentemente, más violación de los derechos fundamentales de la persona humana en Brasil.

III. En este estado de cosas, y esto se dice como una tercera afirmación de importancia, se quiso confundir o distorsionar el concepto de derechos humanos que estaba en sus diferentes manifestaciones en constante reivindicación. En determinado momento se hizo recurrente la pregunta sobre qué sucedía con los derechos humanos de las víctimas, sobre quién se preocupaba de defender sus derechos fundamentales, queriéndose con ello identificar el concepto y la problemática

suscitada hasta entonces sólo con la defensa de los derechos de unos pocos delincuentes y transgresores del orden público y social en detrimento de los derechos de las personas que eran víctimas de sus atentados. Otra retórica utilizada decía que hablar de derechos humanos servía sólo para defender a delincuentes de la acción legítima de la policía. Un discurso de esa naturaleza, y como es obvio, no pudo menos que facilitar la actuación de la policía en detrimento de las garantías individuales, sufriendose un grave revés en los logros obtenidos hasta el momento en favor de la normalización de las mismas garantías. Así los ciudadanos "policías" aparecen luchando contra sí mismos en tanto beneficiarios como cualquier otro individuo de tales derechos humanos y que en tanto vivían, como los demás, en un sistema que les negaba el ejercicio de sus derechos y aún los violaba abiertamente.

Se hace esta última reflexión con particular interés puesto que normalmente en el discurso sobre los derechos humanos en Brasil se ha considerado al ciudadano brasileño en función del papel social que el mismo desempeñara: policía, intelectual, profesor, estudiante, sacerdote, político, obrero, gobernante, etc. encerrándose en esa categoría y olvidándose de comprender que éste mismo ciudadano formaba parte de la sociedad brasileña en su conjunto como uno ciudadano más y que en cuanto tal estaba también sujeto, constantemente, a ser agente activo o pasivo de las violaciones a esos derechos que

se cometieron, así como también, a ser beneficiarios de la protección y defensa de sus derechos fundamentales.

IV. Señaladas estas tres afirmaciones básicas, se puede intentar determinar más específicamente aquellos hechos, acciones, actitudes sociales y políticas que incidieron preponderantemente en el desarrollo y/o estancamiento del planteamiento sobre la cuestión de los derechos humanos en el seno de la sociedad brasileña. Como ha sido detalladamente expuesto a lo largo de este trabajo, la situación de los derechos fundamentales en la transición a la democracia se vio afectada por diferentes hechos y acontecimientos originados tanto en la acción de los gobiernos militares como en el quehacer de los diferentes sectores de la sociedad civil. Algunos de ellos, por cuanto son considerados los principales factores que fueron determinando la precaria situación de los derechos fundamentales en Brasil durante este período de anormalidad institucional y la puesta en debate del tema de los derechos humanos, merecen una mención detenida y específica.

Entre los mismos se pueden distinguir factores políticos-jurídicos desfavorables y favorables y en factores sociales, también desfavorables, en tanto fueron determinando la precaria situación de los derechos, o favorables, en tanto servían para la puesta en debate del tema de la violación de los derechos, y por ende, del tema de los derechos mismos, a saber:

1) La tentativa de equiparar las nociones de Estado Democrático con Estado de Seguridad Nacional:

El régimen militar confundió Estado Democrático con Estado de Seguridad Nacional intentando, mediante textos legales, privilegiar las cuestiones de Seguridad del Estado en detrimento de las cuestiones políticas y sociales. Para el régimen militar el desarrollo de la Nación debía caminar en paralelo con la seguridad de la Nación, de otra forma no era posible su consecución, política dentro de la cual fueron trazados los Objetivos Nacionales Permanentes que, evidentemente, no daban prioridad ni tampoco importancia a los derechos fundamentales del hombre.

2) La creación de una institucionalidad de excepción:

El Estado así entendido como Estado de Seguridad Nacional, un Estado de Excepción, estableció para su propia supervivencia una organización institucional y política y mecanismos específicos para su funcionamiento. Así, fortaleció el Poder Ejecutivo Central, debilitó el Poder Legislativo y subyugó el Poder Judicial. Y, como consecuencia de todo ello, dejó abandonados los derechos fundamentales, en tanto las instituciones políticas y jurídicas ideadas no fueron aptas para garantizar y a hacer cumplir esos derechos.

3) La dictación de una legislación de excepción:

El Estado con sus normas legales ilegítimas

prohibió o limitó, según los casos, el ejercicio de los derechos fundamentales.

4) El establecimiento de una política económica neoliberal:

El Estado, sin consultar al Parlamento o la población civil, dictó y ejecutó a gusto de sus adeptos y sumisos la política económica y social del país que, siendo de naturaleza neoliberal, no hizo más que aumentar las tasas de concentración de renta, de un lado, y la pauperización, de otro.

5) Las presiones internas y externas tendientes a poner en debate del tema de la violación de los derechos humanos:

El Estado, las poquísimas veces que esbozó una cierta preocupación por los derechos fundamentales, lo hizo nada más que para dar satisfacción a las presiones internas sostenidas por las fuerzas políticas de oposición y movimientos sociales de la sociedad civil o a las presiones externas provenientes de gobiernos y entidades internacionales. No actuó por iniciativa propia, ni demostró jamás interés alguno por evitar o prevenir una posible violación.

6) La falta de conciencia social sobre la posesión y legitimidad de ciertos derechos como fundamentales:

La sociedad en general con su actitud de pasividad

ante la cuestión de los derechos fundamentales, adoptó una posición de comodidad en relación a la actuación de los gobiernos, esperando de éstos solución para todos los males y problemas que afectaban el país, vislumbrándose un Estado paternalista milagroso que, como una panacea, podía resolver todas las dificultades de la población brasileña. Ello hizo de la "esperanza" el camino para la solución de todos los problemas y retrasó, hasta cuando la propia supervivencia estuvo amenazada, la demanda de cualquier derecho como legítimo.

7) El acomodo de la clase política al discurso oficial sobre los derechos humanos que desvirtuaba su verdadero sentido:

La sumisión de la mayoría de los políticos, por miedo, conveniencia o interés personal, al yugo del poder militar como una forma de conseguir y mantener privilegios hizo que esos políticos entendiesen los derechos humanos como una "cosa" de subversivos, izquierdista o de defensores de delincuentes. También esos políticos con su omisión y pasividad contribuyeron a que la transición brasileña ocurriese en un período excesivamente largo.

8) La falta de educación general sobre los derechos humanos:

La falta de una cultura de los derechos fundamentales como también el desconocimiento de esos derechos por la abrumadora mayoría de los brasileños, y también por

muchos de aquellos que militaban en entidades y movimientos de derechos humanos, limitó su defensa solamente a casos relacionados con un escaso número de derechos, generalmente con aquellos relativos al derecho a la vida o a la integridad física y moral.

A raíz de la situación anterior, se padeció durante todo el período una grave inexistencia de campañas preventivas por el respeto de los derechos fundamentales. No se les enseñó en las escuelas ni en las facultades, ni tampoco se habló o se discutió acerca de programas, seminarios o de cualquier otro evento relacionados con los derechos humanos en los grandes centros de decisiones. Todo lo cual, y como es evidente, redundó en una lentísima toma de conciencia real y completa sobre el tema, que aún hoy no está concluida.

9) Desarrollo de una concepción "clasista" de los derechos humanos:

Las elites brasileñas (clase alta y media) mantienen durante todo el período un comportamiento de indiferencia para con la realidad política y social del país no involucrándose en los acontecimientos que se vinculaban a los derechos fundamentales, en tanto ellos, general y genéricamente no se veían directamente alcanzados por los actos de los gobiernos militares. Ello, con la sola excepción, ya analizada, de determinados presos políticos pertenecientes a dicha clase y

sólo en función de poner fin a esa situación particular y concreta.

10) La existencia de organizaciones especialmente dedicadas a la defensa de los derechos humanos que, si bien desarrollaron una labor muy positiva, en otros sentidos operaron como límites impensados para una mayor ampliación del debate sobre derechos humanos:

La defensa de los derechos fundamentales estuvo restringida a órganos y organizaciones de derechos humanos, o a autoridades y personas que militaban en ellas, como si la cuestión de derechos humanos fuese privilegio o vocación de unos pocos. Muchas veces estas organizaciones específicas y exclusivamente dedicadas al tema, y por ende, claramente, estigmatizadas, amedrentaban muchos otros individuos interesados o sensibilizados para participar en el debate social del mismo.

11) La excesiva particularización de las reivindicaciones de derechos como factor, de un lado, impulsor y, de otro restrictivo de la toma de conciencia general y amplia de la cuestión de los derechos fundamentales:

Los grupos sociales (organizados o no), los sindicatos y algunos sectores políticos se caracterizaron por actuar en defensa de sus propios intereses, pero, fundamentalmente, en busca de una solución a sus problemas y sus dificultades momentáneas, si bien es cierto que a mediados

de la transición, esos sectores sociales ya empezaban a exigir la redemocratización y el restablecimiento del Estado de Derecho, como modo de poner fin a la aguda crisis socio-económica ya generalizada e imparable.

12) El lamentable papel desarrollado por el poder judicial brasileño gravemente comprometido con el régimen arbitrario:

Es un hecho reconocido que la lentitud y la parcialidad de la justicia, que no mantuvo una posición firme y decidida en la garantía del ejercicio de los derechos fundamentales, facilitó la actuación de los órganos de represión.

13) El excesivo "individualismo" brasileño imperante en el periodo:

La omisión y la irresponsabilidad de muchos ciudadanos brasileños individualmente considerados, no asumiendo sus actos y procurando siempre responsabilizar a terceras personas por acciones u omisiones que realizaban o deberían realizar, y con ello, atribuyéndose a sí mismos la condición de responsables y honestos, limitó las muchas acciones generales que debieron realizarse para mejorar esta situación de precariedad de los derechos fundamentales. En cambio, se impone la ley de los más fuertes, de los más "sabios" y de los más audaces, donde lo más importante para el

ciudadano brasileño era saber sacar ventaja individual de todo, en detrimento de la solidaridad social.

14) El corporativismo insolidario:

En el mismo sentido, por exceso de individualismo, en el ámbito colectivo la solidaridad de grupo o de corporaciones de ciudadanos brasileños sólo posibilitó que intentaran defender sus propios intereses, y como mucho más los de aquellos que defendían o aceptaban las mismas ideas o los mismos intereses. Pero, impidió cualquier otro planteamiento o cuestionamiento más generalizado. Aunque, evidentemente, no se puede desconocer que esa misma acción comunitaria, por limitada que haya sido, posibilitó la toma de determinado grado de conciencia sobre los derechos y por ende impulsó en su medida el despertar social.

V. Además de estas significativas consideraciones, reflexión aparte merece la particular situación socio-económica del Brasil y su incidencia en la efectividad de los derechos de su población. Al respecto cabe preguntarse: ¿Puede haber cumplimiento y eficacia de los derechos fundamentales en un país en el cual durante un período de dieciséis años poco se ha hecho eficazmente para acabar con el analfabetismo? ¿Donde, durante el período, se vivió una inflación acumulada superior a 300 millones por ciento? ¿Donde la renta per cápita fue y continua siendo una de las más bajas del mundo? ¿Donde el poder de compra de los salarios en el período perdió su valor

en un 40 por ciento? ¿Donde prácticamente no se incrementó el número de nuevos empleos, para una población que crecía a casi 3 por ciento al año? ¿Donde la mayoría de la población vivía y vive en la miseria? ... País en el que, a la vez, y en contraste con lo que arriba se interroga, ostentó la octava posición entre las más florecientes economías mundiales, el rango de cuarto país exportador de alimentos del mundo y de cuarto país exportador de material bélico, y cuya economía a pesar de las consecuencias de las crisis internas e internacionales creció en un promedio superior al de casi todos los demás países en desarrollo.

¿Que país es ese que con tanta riqueza no consiguió exterminar la miseria que aún persigue su pueblo, y garantizar y estimular el ejercicio de los derechos fundamentales? ¿Que filosofía inspiró las acciones de este Estado? Es imperativo preguntarse esto para intentar averiguar el porqué de la grave desatención al tema que nos interesa. Es imperativo reflexionar sobre la implantación en el país durante todos estos años de una filosofía política que no contempló entre sus objetivos primordiales al establecimiento y garantía de los derechos fundamentales en favor de sus ciudadanos.

Es evidente también, que además de la existencia de una filosofía política adversa - que no es el caso exponer ni tratar aquí - mucho tiene que ver en el estado de cosas que se analiza la actitud individual concertada e interesada de los

dirigentes del poder público y de una elite de funcionarios beneficiarios del régimen militar, de empresarios y de algunos "protegidos" profesionales, que intentaron siempre forjar y presentar ante la opinión pública una situación falsa de una realidad social brasileña que claramente resultaba inquietante y desalentadora. No solamente en el régimen militar sino también en la "nueva república", con un gobierno civil, las cosas en general sucedieron de la misma forma, el manejo informativo se hacía cómplice de desmanes y corrupciones en todos los niveles de la Administración Pública y en los demás sectores de la sociedad brasileña. Entonces, al lado de la filosofía inspiradora, mucho tuvo que ver la actitud de aquellas personas que, de cualquier forma, por estar en el poder, pudieron haber hecho algo para acelerar el proceso de transición y volver al país más rápidamente a un Estado Democrático de Derecho que normalizara la situación de las garantías individuales, pero que nada hicieron. En cambio, movido por su interesada posición fueron capaces de justificar las barbaries acaecidas y de encontrar y pregonar una lógica que justificara tanto las violaciones de los derechos fundamentales como su propio comportamiento acomodaticio.

Esta misma lógica justificadora y acomodaticia hizo que todos aquellos que detentaron alguna fracción de poder político o económico, pensaran que era posible manipular el sufrimiento de las personas como si fuera un objeto, permitió que intentaran conducir a la "masa" sufrida y desesperada a un

punto sin retorno, en provecho de sus ambiciones personales, no siendo pocos los que se aprovecharon de este sufrimiento ajeno para alcanzar posiciones políticas envidiables, por medio de promesas engañosas que sólo servían para perpetuarlos en sus posiciones. Esa misma lógica posibilitó que muchos de ellos se hiciesen ricos, se acomodaran en el poder y callaran delante de los "poderosos", mientras que la "masa", ese gran contingente de la población brasileña, permanecía violentada, pobre y en la miseria.

Mucho hay, entonces, de fenómeno causa-efecto en la situación económica, en la filosofía política, y no me extenderé en ello pues los mismos no son objeto de este trabajo. Pero, mucho hay, también, de este fenómeno en la propia formación y cultura de un pueblo, mejor dicho en la falta de formación y de cultura del conjunto del pueblo brasileño, víctimas o victimarios, opresores u oprimidos, acerca de la realidad de los derechos fundamentales del hombre. Hizo falta que la sociedad brasileña, en su conjunto, supiera y tuviera íntimamente interiorizado que los derechos fundamentales son, y se cree han de ser en cualquier parte del universo donde haya vida humana, inmutables, imprescriptibles, inajenables, inviolables e irrenunciables, que los derechos humanos son uno para todo ser humano, independientemente de su raza, color, creencia religiosa, convicción filosófica o política, situación económica y social, convención social o de cualquier rasgo físico o biológico. Hizo falta que estuviera en todos

íntimamente asumido que a la persona debe atribuírsele y respetársele su dignidad en tanto carácter propio de la condición humana, su autonomía en tanto capacidad para escoger y elegir su plan de vida, y su inviolabilidad en tanto ser intocable en sus decisiones con derecho a no ser interferido por terceros.

A partir de esta última reflexión, es posible afirmar

1) que la constitucionalización de los derechos fundamentales y sus mecanismos de garantía no fueron suficiente para que esos derechos fuesen cumplidos y respetados por lo Estado y por los ciudadanos.

2) que los Derechos Fundamentales en la Transición hacia la Democracia en Brasil fueron violados genéricamente, y que en esa situación todos los ciudadanos brasileños fueron, a la vez, víctimas y victimarios. Vieron sus derechos violados y trasgredidos, no solamente aquéllos que perdieron sus vidas, sufrieron agresiones a su integridad física y moral, que no pudieron expresar sus pensamientos libremente, que no tuvieron oportunidad de librarse de la pobreza, etc. sino también aquellas personas que cometieron en nombre de una falacia los barbarismos más atroces, aquéllas que callaron o se alejaron, por cualquier motivo, para no presenciar el sufrimiento ajeno y el suyo propio. Así, todos fueron cómplices, por acción u omisión.

3) que fueron agentes violadores:

. Los militares de todas las fuerzas armadas en todos los niveles que participaron y convivieron con el poder, por acción, connivencia, sumisión o miedo;

. Los políticos que en su mayoría, por interés o conveniencia, no supieron o no quisieron reaccionar en defensa de los derechos fundamentales;

. Las elites poseedoras del poder económico, por su indiferencia, su connivencia y afán de provecho;

. Los que deliberadamente callaron y que envueltos en sus castas, no quisieron mirar la realidad a su alrededor;

. Los desprovistos de solidaridad, desunidos y arrogantes, que procuraban a todo costo sacar provecho de una realidad visiblemente cruel, demostrando insensibilidad e incomprensión a los graves problemas de una sociedad a la que ellos pertenecían;

. Los acomodados, hombres inertes y pasivos a los gritos de salvación y de justicia de sus hermanos, y

. Los ciudadanos comunes que, desposeídos por la fuerza de sus derechos de ciudadanía, buscaron en las ciudades

y en los campos, su forma de supervivencia siendo arrastrados por esa forma de vida a incurrir en múltiples violación a los derechos fundamentales de otros, convertidos así tanto en víctimas como en autores de diversas violaciones.

Las conclusiones que aquí llegamos, objeto de un detenido análisis de todos los asuntos contenidos en este estudio, pensamos que no tiene la pretensión de anular o agotar otras que se puedan extraer de este mismo tema para una más exacta comprensión de la situación de los derechos fundamentales en la transición de Brasil, tampoco el desarrollo de este tema de la forma que aquí está tratado en si mismo excluye o abarca todo aquello que se podrá escribir o concluir sobre él. Lo que hemos pretendido ha sido llenar de cierta forma una laguna que, a nuestra modesta y sencilla percepción y estudio, necesitaba de algunas aportaciones.

Consciente de esas conclusiones, aún así no podríamos y mismo no queremos menospreciar, ni tampoco tenemos la intención de desmerecer las importantes contribuciones dadas al proceso de transición política por aquellos individuos, grupos y movimientos sociales, sindicatos, iglesia católica y entidades privadas que estuvieron siempre en la defensa de aquellos ciudadanos que vieron sus derechos violados.

BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFÍA:

DERECHOS HUMANOS Y FILOSOFÍA DEL DERECHO

ANUARIOS de Derechos Humanos n°s 1, 2, 3, 4 y 5. Instituto de Derechos Humanos, Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1981 / 1988.

CASTAN TOBEÑAS, José: Los Derechos Del Hombre. Editorial REUS, Madrid, 1985

CASTRO CID, Benito de: El Reconocimiento de los Derechos Humanos. Editorial Tecnos, Madrid, 1982.

DIAZ, Elías: Estado de Derecho y Sociedad Democrática. Taurus Ediciones, 6ª edición, Madrid, 1988

DIAZ, Elías: De la Maldad Estatal y la Soberanía Popular. Editorial Debate, Madrid, 1984.

DIAZ, Elías: Sociología y Filosofía del Derecho. Taurus Ediciones, Madrid, 1988.

FERNANDEZ GALIANO, ANTONIO: Introducción Filosófica al Derecho. Editorial CEURA, Madrid, 1986.

FERNANDEZ GARCÍA, Eusebio: Teoría de la Justicia y los Derechos Humanos. Editorial Debates, Madrid, 1987.

FERNANDEZ GARCÍA, Eusebio: La Obediencia al Derecho. Editorial Civitas, Madrid, 1987

KELSEN, Hans: La Idea del Derecho Natural. Editorial Nacional México, 1979

LUCAS VERDU, Pablo: "Derechos Individuales". Nueva Enciclopedia Jurídica. Barcelona, 1955.

MARTINEZ MORAN, Narciso: Derechos Fundamentales. Facultad de Derecho/Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1988.

PECES-BARBA, Gregorio: Derechos Fundamentales. Sección de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1986.

PECES-BARBA, Gregorio, HIERRO SANCHEZ-PESCADOR, Liborio, IÑIGUEZ DE ONZOÑO, Santiago y LLAMAS, Angel: Derecho Positivo de los Derechos Humanos. Editorial Debate, Madrid, 1987.

PECES-BARBA, Gregorio: Escritos sobre Derechos Fundamentales. EUDEMA, Ediciones de la Universidad Complutense de Madrid, 1988

PEREZ-LUÑO, Antonio Enrique: Los Derechos Fundamentales. Editorial Tecnos, Madrid, 1988.

PEREZ-LUÑO, Antonio Enrique: Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución. Editorial Tecnos, Madrid, 1984

PEREZ-LUÑO, Antonio Enrique: Los Derechos Humanos: significación, estatuto jurídico y sistema. Universidad de Sevilla, Sevilla, 1979.

PERIS, Manuel: Juez, Estado y Derechos Humanos. Editora Fernando Torres, Valencia, 1976.

RUIZ-GIMENEZ CORTES, Joaquín: El Concilio y los Derechos Humanos. Edicusa, Madrid, 1968.

RUIZ-GIMENEZ CORTES, Joaquín: "El Derecho a la Intimidad". Periódico YA, Madrid, de 14 de enero de 1969.

SANTIAGO NINO, Carlos: Ética y Derechos Humanos. Editorial Paidós, Buenos Aires, 1984.

SANTIAGO NINO, Carlos: Introducción al Análisis del Derecho". Editorial Astrea, Buenos Aires, Argentina, 1980.

SANCHES-AGESTA, Luis: Lecciones de Derecho Político. Editora Granada, Granada, 1959.

SANCHEZ DE LA TORRE, A.: Teoría y Experiencia de los Derechos Humanos. Ed. Del Toro, Madrid, 1968.

TADEU BARBOSA, Julio Cesar: O que é Justiça? Editora Brasiliense, São Paulo, 1984.

TRUYOL Y SERRA, Antonio: Los Derechos Humanos. Editorial Tecnos, Madrid, 1984.

W. DORNELLES, João Ricardo: O que são Direitos Humanos? Editora Brasiliense, São Paulo, 1989.

2) DERECHO CONSTITUCIONAL, DERECHOS HUMANOS, POLITICA Y SOCIOLOGIA EN BRASIL

ALVES, Maria Helena Moreira: Estado e Oposição no Brasil (1964 /1984). Editora Vozes, 5ª edición, Petropolis, 1989.

ARAGÃO, Selma Regina: Direitos Humanos - Do Mundo Antigo ao Brasil de Todos. Editora Forense, Rio de Janeiro, 1990.

- BAFFA, Airton: *Nos Porões do SNI*. Editora Objetiva, Rio de Janeiro, 1989.
- BASTOS, Celso Ribeiro y MARTINS, Ives Gandra: *Comentários à Constituição do Brasil*, 2º Volume. Editora Saraiva, São Paulo, 1989
- BAZARRA, Carlos: *O que é a Teologia da Libertação?*. Edições Paulinas, Rio de Janeiro, 1987.
- BENEVIDES, Maria Victoria: *Violência, Povo e Polícia*. Editora Brasiliense, São Paulo, 1983.
- BETO, Frei: *O que é Comunidade Eclesial de Base*. Editora Brasiliense, São Paulo, 1985.
- BICUDO, Hélio: *Direitos Cíveis no Brasil, Existem?*. Editora Brasiliense, São Paulo, 1982.
- BICUDO, Hélio: *Do Esquadrão da Morte aos Justiceiros*. Edições Paulinas, São Paulo, 1988.
- BICUDO, Hélio: *Segurança Nacional ou Submissão*. Editora Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1984.
- BIDEGAIN DE URAN, Ana Maria: *Nacionalismo, Militarismo e Dominação na América Latina*, Editora Vozes, Petrópolis, 1987.
- BRASIL *Nunca Mais*. Arquidiocese de São Paulo, Editora Vozes, Petrópolis, 24ª edição, 1989
- BRITTO, Antonio: *Assim Morreu Tancredo*. Editora L/PM, Porto Alegre, 32ª edição, 1986.

CADERNOS GAJOP n's 2, 3, 4, 5, 6, 7. , Gabinete de Assessoria às Organizações Populares, Centro Luiz Freire, Olinda, 1985/1990.

CAMARGO, Aspásia y DINIZ, Eli: Continuidade e Mudança no Brasil da Nova República. Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1989.

CARDOSO, Fernando Henrique: A Democracia Necessária. Editora Papirus, São Paulo, 1985.

COLOMER VIADEL, Antonio: Introducción al constitucionalismo Iberoamericano, Ediciones de Cultura Hispánica, Madrid, 1990.

COMPARATO, Fábio Konder: Para Viver a Democracia. Editora Brasiliense, São Paulo, 1989.

CONDIÇÕES das Prisões no Brasil. Relatório Américas Watch/OAB, São Paulo, 1989.

CONSTITUIÇÃO da República Federativa do Brasil. Centro Gráfico do Senado Federal, Brasília, 1988.

CONSTITUIÇÃO da República Federativa do Brasil - Quadro Comparativo. Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal, Brasília, 1986.

CONSTITUIÇÕES do Brasil. Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal, Brasília, 1986.

CRUZ, Manoel de Almeida: Alternativas para Combater o Racismo. Editora Núcleo Cultural Afro-Brasileiro, Salvador, 1989.

CUNHA, Manuela Carneiro da: Os Direitos do Índio - Ensaios e Documentos. Editora Brasiliense, São Paulo, 1987.

- DA MATTÁ, Roberto: O que faz o Brasil, Brasil?. Editora Rocco, Rio de Janeiro, 1989.
- DEMOCRACIA x Violência. Comissão Teotônio Vilela, Editora Paz e Terra, São Paulo, 1986.
- DIAS, Francisco: República Fechada, as prisões no Brasil. Ícone Editora, São Paulo, 1990.
- DIMENSTEIN, Gilberto: A Guerra dos Meninos - Assassinatos de Menores no Brasil. Editora Brasiliense, São Paulo, 1990.
- DIMENSTEIN, Gilberto: A República dos Padrinhos. Editora Brasiliense, São Paulo, 1988.
- DIREITOS Humanos. Edições Paulinas, 2ª edição, 1978.
- DIREITOS Humanos: Um Desafio à Comunicação. Edições Paulinas, São Paulo, 1983.
- DIREITOS Humanos - Estudos e Debates. Comissão de Justiça e Paz de Santa Catarina, 1980.
- DIREITOS Humanos. Revista OAB, nº 19, Rio de Janeiro, 1982.
- DIREITOS Humanos no Brasil - Conferências para Educadores. Sección Brasileña de Amnistía Internacional, Editora e Artes Gráficas MDP, São Paulo, 1986.
- DOIMO, Ans Maria: Movimento Social Urbano, Igreja e Participação Popular. Editora Vozes, Petrópolis, 1984.
- ESTADO, Cidadania e Movimentos Sociais. AAVV. Editora da Universidade de Brasília, 1986

ESTADO da Transição: Política e Economia na Nova República.
AAVV. Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1988

ESTERCI, Neide: Conflito no Araguaia - Peões e Possaíros Contra a Grande Empresa, Editora Vozes, Petrópolis, 1987.

EXIGÊNCIAS Éticas da Ordem Democrática. Seminário Sociedade Igreja e Democracia. Ediciones Loyola, São Paulo, 1989.

FAJARDO, Elias: Em Julgamento a Violência no Campo. Editora Vozes, Petrópolis, 1988.

FERNANDES, Florestan: A Transição Prolongada. O Período pós-constitucional. Cortez Editora, São Paulo, 1990.

FERNANDO, Jorge: Cale a Boca Jornalista! Editora Vozes, Petrópolis, 1989.

FIGUEIREDO, Marcus Faria: Política de Coerção no Sistema Político Brasileiro. Comissão Nacional de Justiça e Paz, Rio de Janeiro, 1978.

FISCHER, Rosa Maria: O Direito da População à Segurança. Editora Vozes, Petrópolis, 1985.

FLEISCHER, David: Da Distensão à Abertura - As eleições de 1982. Editora Universidade de Brasília, Brasília, 1988.

FORJAZ, Maria Cecília Spina: Da Distensão à Abertura Política: Os percalços da Estratégia Militar (1974/1978). Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas.

FREIRE-MAIA, Newton: Brasil: Laboratório Racial, Editora Vozes, 8ª edição, Petrópolis, 1987.

FURTADO, Celso: O Brasil Pós Milagre, Editora Paz e Terra, 8ª edição, Rio de Janeiro, 1983.

GIANNOTTI, Vito: A Liberdade Sindical no Brasil. Editora Brasiliense, São Paulo, 1987.

GIANNOTTI, Vito: Reconstruindo nossa História - 100 anos de Luta Operária no Brasil. Editora Vozes, Petrópolis, 1988.

GOFREDO, Gustavo Senchal de, y outros: Direitos Humanos - Um Debate Necessário II. Editora Brasiliense, São Paulo, 1989.

GRAEL, Dickson M.: Aventura, Corrupção, Terrorismo - A sombra da impunidade. Editora Vozes, Petrópolis, 1985.

IBRAHIM, José: Perspectiva do Novo Sindicalismo. Edições Loyola, São Paulo, 1988.

IGREJA, os Presos e a Sociedade. Editora Vozes, Petrópolis, 1989.

JAGUARIBE, Hélio: Brasil: Reforma ou Caos. Editora Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1989.

KONTZI, Flávio, (organização): Nova República: Um Balanço. Editora L/PM, São Paulo, 1986.

KOTSCHO, Ricardo: O Massacre dos Posseiros - Conflictos de Terras no Araguaia-Tocantins. Editora Brasiliense, São Paulo, 1982.

KOTSCHO, Ricardo: Explode um Novo Brasil - Diário da Campanha das Diretas. Editora Brasiliense, São Paulo, 1984.

- LA MOUNIER, Bolívar: Partidos e Utopias: O Brasil no limiar dos anos 90. Edições Loyola, São Paulo, 1989.
- LEITE, Márcia de Paula: O Movimento Grevista no Brasil. Editora Brasiliense, São Paulo, 1987.
- LEITE, Márcia de Paula: Reivindicações Sociais dos Metalúrgicos. CEDEC nº 3, 1984.
- LESBAUPIN, Ivo do Amaral: As Classes Populares e os Direitos Humanos. Editora Vozes, Petrópolis, 1984.
- LOBO, Amílcar: A Hora do Lobo, a Hora do Carneiro - Memória dos Vencidos. Editora Vozes, Petrópolis, 1989.
- MACEDO, Carmen Cinira de Andrade: Tempo de Génesis - O Povo das Comunidades Eclesiais da Base. Editora Brasiliense, São Paulo, 1986.
- MAIA, Rosane: As Graves em 1989. Secretaria de Emprego e Salário do Ministério do Trabalho, Brasília, 1990.
- MAINWARING, Scott: Igreja e Política no Brasil. Editora Brasiliense, São Paulo, 1989.
- MARICATO, Hermínia: Política Habitacional no Regime Militar - Do Milagre Brasileiro à Crise Económica. Editora Vozes, Petrópolis, 1987.
- MARTINS, Roberto R.: A Segurança Nacional. Editora Brasiliense São Paulo, 1986.
- MARINHO, Josaphat Ramos: Lei Orgânica dos Partidos Políticos. Revista de Informação Legislativa, nº 12, Senado Federal, Brasília, 1966.

- MARINHO, Josaphat Ramos: **Exceção e Legalidad.** Senado Federal en 3 de noviembre de 1969, Brasília.
- MEIRELLES, Hely Lopes: **Mandado de Segurança.** Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1989.
- MELO SOBRINHO, Noeli Correa de: **O Advogado e a Crise na Administração da Justiça.** OAB, Rio de Janeiro, 1985.
- MENDES, Candido: **A Inconfidência Brasileira.** Editora Forense, Rio de Janeiro, 1986.
- MENDES, Candido: **Mudança do Século, Mudança da Igreja.** Comissão Nacional de Justiça e Paz, Rio de Janeiro, 1978.
- MIGRAÇÃO: **O Caminho da Miséria.** Comissão de Justiça e Paz do Paraná, 1981.
- MODERNIZAÇÃO e Consolidação Democrática no Brasil da Nova República. AAVV. Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1989.
- MOISES, José Álvaro y outros: **Contradições Urbanas e Movimentos Sociais.** Editora Paz e Terra/CEDEC, São Paulo, 1985.
- MULHER e Trabalho. Boletins de 1 a 4, del Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, Brasília.
- NEUMANN, Laurício, y DALPIAZ, Osvaldo: **Realidade Brasileira - Visão Humanizadora.** Editora Vozes, Petrópolis, 1985.
- OLIVEIRA, Miguel Darcy de, y outros: **A Dívida e a Pobreza (quanto custa acabar com a miséria no Brasil.** Editora Brasileira, 3ª edição, 1986.

- OLIVEN, Ruben George: **Violência Cultural no Brasil**. Editora Vozes, Petrópolis, 1986.
- PAIVA, Leda del Caro y outros: **Transição Democrática e Política Social no Brasil**. NEPP/Universidade de Brasília, 1988.
- PATARRA, Ivo: **Fome no Nordeste Brasileiro**. Editora Marco Zero Rio e Janeiro, 1982.
- PECAUT, Daniel: **Intelectuais e a Política no Brasil**. Editora Ática, São Paulo, 1990.
- PERFIL dos Atingidos. Projeto Brasil Nunca Mais, Editora Vozes, Petrópolis, 1988.
- PESQUISA Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD. Síntese dos Resultados, IBGE, Rio de Janeiro, 1988.
- PETRINI, João Carlos: **CEBs: Um Novo Sujeito Popular**. Editora Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1984.
- PIRES, Cecília: **A Violência no Brasil**. Editora Moderna, São Paulo, 1987.
- RELATORIO do VI Encontro Nacional de Direitos Humanos. Movimento Nacional de Direitos Humanos, MNDH, Brasília, 1990.
- REVOGAÇÃO da Lei da Segurança Nacional. Comissão de Justiça e Paz de São Paulo, 1982.
- RIBEIRO BASTOS, Celso y GANDRA MARTINS, Ives: **Comentários à Constituição do Brasil, 2º Volumen**. Editora Saraiva, 1989.
- SADER, Emir, y outros: **Constituinte e Democracia no Brasil de Hoje**. Editora Brasiliense, São Paulo, 1985.

- SANTA CRUZ, Rosalina: *Discriminação da Mulher*. Comissão de Justiça e Paz, São Paulo, 1988.
- SANTOS JUNIOR, Belisário dos, y outros: *Direitos Humanos - Um Debate Necessário*. Editora Brasiliense, São Paulo, 1988
- SILVA, Golbery do Couto e: *Conjuntura Política Nacional/O Poder Executivo e a Geopolítica do Brasil*. José Olympio Editora, Rio de Janeiro, 1981.
- SILVA, Percy da: *Discriminação Racial - O Negro*. Comissão de Justiça e Paz de São Paulo, 1989.
- SILVA, Hélio: *A Vez e a Voz dos Vencidos - Militares x Militares*. Editora Vozes, Petrópolis, 1986.
- SIMAS, Mário: *Gritos de Justiça*. Editora FTD, São Paulo, 1986.
- SIMÕES, Carlos: *A Lei do Arrocho*. Editora Vozes, Petrópolis, 1986.
- SINDICATOS em Época de Crise. Centro de Estudos de Cultura Contemporânea - CEDEC, Editora Vozes, Petrópolis, 1984.
- SIKDMORE, Thomas E.: *Brasil de Castelo a Tancredo - 1964/1985*. Editora Paz e Terra, São Paulo, 1988.
- SOUZA, Paulo Roberto: *Quem Paga a Conta? Dívida, déficit inflação nos anos 80*. Editora Brasiliense, São Paulo, 1989.
- SOUZA, Percival de: *O Império da Violência*. Ícone Editora, São Paulo, 1988.
- SOUZA MARTINS, José de: *Os Camponeses e a Política no Brasil*, Editora Vozes, Petrópolis, 1990.

STEPAN, Alfred (organizador) y outros: **Democratizando o Brasil**. Editora Paz e Terra, São Paulo, 1988.

SUPLICI, Eduardo Matarazzo: **Da Distribuição da Renda e dos Direitos à Cidadania**. Editora Brasiliense, São Paulo, 1988.

TORTURA e Execuções Extra-Judiciais nas Cidades Brasileiras. Documento da Anistia Internacional, Londres, 1990.

UNE contra o SNI (A). Editora Alfa Omega, São Paulo, 1987.

USTRA, Carlos Alberto Brilhante: **Rompendo o Silencio**. Editerra Editorial, Brasília, 1987.

VEIGA, Sandra Mayrink y FONSECA, Isaque: **Volta Redonda, Entre o Aço e as Armas**. Editora Vozes, Petrópolis, 1990.

VIEIRA, Gilberto: **Acorda Brasil - O que você deve saber sobre a Constituição de 1988**. Editora Saraiva, São Paulo, 2ª edição, 1989.

VIEIRA, José Ribas: **O Autoritarismo e a Ordem Constitucional no Brasil**. Editora Renovar, Rio de Janeiro, 1988.

VIOLENCIA. Revista Tempo e Presença, nº 246. CEDI, Rio de Janeiro, 1989.

VIOLENCIAS Autorizadas nas Áreas Rurais. Documento da Anistia Internacional, Londres, 1988.

VIOLENCIA Contra a Mulher. Relatório del I Encuentro Nacional de Delegadas, CNDM, Brasília, 1986.

VIOLENCIA no Campo. Documento do Conselho Federal da OAB, Brasília, 1985.

**VIOLENCIA Policial no Brasil: Execuções Sumárias e Tortura em
São Paulo e Rio de Janeiro. OAB/Comissão de Justiça e Paz de
São Paulo, 1987.**

**XAUSA, Leonidas R.: A Constituinte Questionada. Editora L/PM,
Porto Alegre, 1986.**

**WAGNER, Carlos: Brasiguaios: Homens sem Pátria. Editora Vozes,
Petrópolis, 1990.**

APENDICE I

Los Derechos Fundamentales en la Constitución de 1967

(Enmienda Constitucional n° 1, de 17 de octubre de 1969)

APENDICE I *

CONSTITUCIÓN BRASILEÑA DE 1967

(Enmienda Constitucional n° 1 de 17 de octubre de 1969)

TITULO II

De la Declaración de Derechos

CAPITULO I

De la Nacionalidad

Art. 145 - Son brasileños:

I - De nacimiento:

a) Los nacidos en territorio brasileño, aún de padres extranjeros, siempre que éstos no estén en Brasil a servicio de su país;

b) Los nacidos fuera del territorio nacional, de padre o madre brasileña, siempre que cualquier de ellos esté a servicio del Brasil; y

c) Los nacidos en el extranjero, de padre brasileño o madre brasileña, siempre que no estén éstos a servicio del Brasil, y que se registren en una repartición brasileña competente en el exterior o, si no se registren, si vienen a residir en el territorio nacional antes de alcanzar la mayoría de edad. En este caso, alcanzada tal edad, deberán, en el plazo de cuatro años optar por la nacionalidad brasileña;

* Traducción del doctorando.

II - Naturalizados:

a) Los que adquieran la nacionalidad brasileña, en los términos del art. 69, apartados IV y V, de la Constitución de 24 de febrero de 1891;

b) Los que la adquieran en la forma que la ley establecer:

1) Los nacidos en el extranjero, que hayan sido admitidos en Brasil durante los primeros cinco años de vida, establecidos definitivamente en el territorio nacional. Para preservar la nacionalidad brasileña, deberán manifestarse por ella, de forma inequívoca, dentro de los dos años posteriores a alcanzar la mayoría de edad;

2) Los nacidos en el extranjero, que residiendo en el país antes de alcanzada la mayoría de edad, hagan curso superior en establecimiento nacional y soliciten la nacionalidad dentro de un año después de su titulación;

3) Los que, por otro modo, adquieran la nacionalidad brasileña, exigidas a los portugueses apenas residencia por un año ininterrumpido, idoneidad moral y sanidad física.

.....

CAPITULO II

De los Derechos Políticos

Art. 147 - Son electores los brasileños mayores de dieciocho años, que se hayan inscrito en la forma establecida por la ley.

1º - La inscripción y el voto son obligatorios para los brasileños de ambos sexos, excepto en los casos previstos en ley.

2º - Los militares podrán inscribirse a partir del grado de oficiales, aspirante a oficiales, guardas-marinas, subtenientes o suboficiales, sargentos o alumnos de las escuelas militares de enseñanza superior para formación de oficiales.

3º - No podrán inscribirse como electores:

a) Los analfabetos:

b) Los que no sepan expresarse en la lengua nacional; y

c) Los que estén privados, temporal o definitivamente de sus derechos políticos.

Art. 148 - El sufragio es universal y el voto es directo y secreto, excepto en los caso previstos en esta Constitución. Los partidos políticos tendrán representación proporcional, total o parcial, en la forma que la ley establecer.

Art. 149 - Asegurada al ciudadano amplia defensa, podrá ser declarada la pérdida o suspensión de sus derechos políticos.

.....

CAPITULO III

De los Partidos Políticos

Art. 152 - La organización, el funcionamiento y la extinción de los partidos políticos serán regulados en ley federal, observados los siguientes principios:

I - Régimen representativo y democrático, basado en la pluralidad de partidos y en la garantía de los derechos fundamentales del hombre;

II - Personalidad jurídica, mediante registro de los estatutos;

III - Actuación permanente, dentro del programa aprobado por el Tribunal Superior Electoral, y sin vinculación, de cualquier naturaleza, con la acción de gobiernos, entidades o partidos extranjeros;

IV - Fiscalización financiera;

V - Disciplina partidaria;

VI - Ámbito nacional, sin perjuicio de las funciones deliberativas de los directorios locales;

VII - Exigencia de apoyo para constituirse de un cinco por cien del electorado que haya votado en la última elección general para la Cámara de los Diputados, distribuidos, por lo menos, en siete estados, con el mínimo de un siete por cien en cada uno de ellos, y

VIII - Prohibición de coaliciones partidarias.

Párrafo Único - Perderá el mandato en el Senado Federal, en la Cámara de los Diputados, en las Asambleas Legislativas y en las Cámaras Municipales, quien, por actitudes o por el voto, se opusiera a las directrices legítimamente establecidas por los órganos de dirección partidaria o dejar el partido bajo cuyo patrocinio fue electo. La pérdida del mandato será decretada por la Justicia Electoral, mediante representación del Partido, asegurado el derecho de amplia defensa.

CAPITULO IV

De los Derechos y Garantías Individuales

Art. 153 - La Constitución asegura a los brasileños y a los extranjeros residentes en el país la inviolabilidad de los derechos concernientes a la vida, a la libertad, a la seguridad y a la propiedad, en los términos siguientes:

1º - Todos son iguales ante la ley, sin distinción de sexo, raza, trabajo, creencia religiosa y convicciones políticas. Será castigado por la ley la discriminación de raza.

2º - Nadie será obligado a hacer o dejar de hacer alguna cosa, sino es por motivo establecido en la ley.

3º - La ley no perjudicará el derecho adquirido, el acto jurídico perfecto y la cosa juzgada.

4º - La ley no podrá excluir de la apreciación del Poder Judicial cualquier lesión de derecho individual.

5º - Es plena la libertad de conciencia y está asegurado a los creyentes el ejercicio de los cultos religiosos que no contraríen el orden público y las buenas costumbres.

6º - Por motivo de creencia religiosa o de convicción filosófica o política, nadie será privado de cualquier de sus derechos, excepto si son usados para eximirse de obligación legal a todos impuestos, caso en que la ley podrá determinar la pérdida de los derechos incompatibles con la excusa de conciencia.

7º - Sin carácter de obligatoriedad, será prestada por brasileños, en los términos de la ley, asistencia religiosa a las fuerzas armadas y auxiliares, y, en los establecimientos de

internación colectiva, a los interesados que la soliciten, directamente o por intermedio de sus representantes legales.

8º - Es libre la manifestación de pensamiento, de convicción política o filosófica así como la prestación de información independientemente de censura, excepto en cuanto a diversiones y espectáculos públicos, respondiendo cada uno, en los términos de la ley, por los abusos que cometa. Se asegura el derecho de respuesta. La publicación de libros y periódicos no dependen de visto bueno de la autoridad competente. No será, sin embargo, tolerada la propaganda de guerra, de subversión del orden o de discriminación por razón de religión, de raza o de clase, ni a las publicaciones y manifestaciones contrarias a la moral y a las buenas costumbres.

9º - Es inviolable el secreto de la correspondencia y de las comunicaciones telegráficas y telefónicas.

10 - La casa es el asilo inviolable del individuo; nadie podrá en ella penetrar en la noche, sin consentimiento del morador, a no ser en caso de crimen o desastre, ni durante el día, fuera de los casos y en la forma que la ley establecer.

11 - No habrá pena de muerte, de prisión perpetua, de destierro o confiscación, excepto en los casos de guerra externa, psicológica adversa, revolucionaria o subversiva, en los términos que la ley determinar. Esta dispondrá también, sobre la pérdida de bienes por daños causado al erario, o en caso de enriquecimiento ilícito en el ejercicio del cargo, función o empleo en la Administración Pública, Directa o Indirecta.

12 - Nadie será detenido sino es en caso de flagrante delito o por orden escrito de autoridad competente. La ley dispondrá sobre la prestación de fianza. La prisión o detención

de cualquier persona será inmediatamente comunicada al Juez competente, que la cancelará si no fuera legal.

13 - Ninguna pena podrá afectar más allá de la persona del delincuente. La ley regulará la individualidad de la pena.

14 - Se impone a todas las autoridades el respeto a la integridad física y moral del detenido y del presidiario.

15 - La ley asegurará a los acusados amplia defensa, con los recursos a ella inherentes. No habrá foro privilegiado ni tribunales de excepción.

16 - La instrucción criminal será contradictoria, observando la ley anterior, en lo relativo al crimen y a la pena, excepto cuando con ello se agrava la situación del reo.

17 - No habrá prisión civil por deuda, multa o costas, excepto en caso de depositario infiel o de responsable por incumplimiento de obligación alimenticia, según la forma establecida por la ley.

18 - Se mantiene la institución del Jurado, que tendrá competencia en el juicio de los crímenes dolosos contra la vida.

19 - No será concedida la extradición de extranjero por crimen político o de opinión, ni, en caso alguno, la de un brasileño.

20 - Se otorgará Habeas Corpus siempre que alguien sufra o se hallar amenazado de sufrir violencia o coacción en su libertad de movimiento, por ilegalidad o abuso de poder. En las transgresiones a las normas de disciplina no cabrá Habeas Corpus.

21 - Se concederá Mandamiento de Seguridad para proteger derecho determinado y cierto no amparado por Habeas Corpus, sea cual sea la autoridad responsable por la ilegalidad o abuso de poder.

22 - Se asegura el derecho de propiedad, excepto en caso de expropiación por necesidad o utilidad pública o por interés social previa y justa indemnización en dinero. En caso previsto en el art. 161 permitiese al expropiado aceptar el pago en títulos de la deuda pública, con cláusula de exacta corrección monetaria. En caso de peligro público inminente las autoridades competentes podrán hacer uso de propiedad particular asegurando al propietario indemnización ulterior.

23 - Es libre el ejercicio de cualquier trabajo, oficio o profesión, observadas las condiciones de capacidad que la ley establecer.

24 - La ley asegurará a los autores de inventos industriales privilegio temporal para su utilización, así como la propiedad de las marcas de industria y comercio y la exclusividad del nombre comercial.

25 - A los autores de obras literarias, artísticas y científicas pertenece el derecho exclusivo a utilizarlas. Ese derecho es transmisible por herencia, por el tiempo que la ley determine.

26 - En tiempo de paz, cualquier persona podrá entrar con sus bienes en el territorio nacional, permanecer o salir de él, respetados los preceptos de la ley.

27 - Todos pueden reunirse sin armas, no interviniendo la autoridad sino para mantener el orden. La ley podrá determinar los casos en que será necesaria la comunicación previa a la

autoridad, así como la designación, por ésta, del local de la reunión.

28 - Se asegura la libertad de asociación para fines lícitos. Ninguna asociación podrá ser disuelta, sino en virtud de decisión judicial.

29 - Ningún tributo será exigido o aumentado sin que la ley lo establezca, ni cobrado, en cada año, sin que la ley que lo hubiera instituido o aumentado esté en vigor antes del inicio del año financiero, en especial la tarifa arancelaria y la de transporte, o el impuesto sobre productos de industria y o el impuesto lanzado por motivo de guerra y demás casos previstos en esta Constitución.

30 - Es asegurado a cualquier persona el derecho de representación y de petición a los Poderes Públicos, en defensa de derechos o contra abusos de autoridad.

31 - Cualquier ciudadano será parte legítima para proponer acción popular para anular actos lesivos al patrimonio de entidades públicas.

32 - Será concedida asistencia judicial a los necesitados, en la forma de la ley.

33 - La sucesión de bienes de extranjeros situados en el Brasil será regulada por la ley brasileña, en beneficio del cónyuge o de los hijos brasileños, siempre que no les sea más favorable la ley personal aplicable al causante.

34 - La ley dispondrá sobre la adquisición de la propiedad rural por brasileños e extranjeros residente en el país, así como por persona natural o jurídica, estableciendo condiciones, restricciones, limitaciones y demás exigencias, para la defensa

de la integridad del territorio, la seguridad del Estado y la justa distribución de la propiedad.

35 - La ley asegurará la expedición de certificaciones requeridas a las reparticiones administrativas para la defensa de derechos y esclarecimientos de situaciones.

36 - La especificación de los derechos y garantías expresos en esta Constitución no excluye otros derechos y garantías originados del régimen y de los principios que ella adopta.

37 - El abuso de derecho individual o político, con el propósito de subversión del régimen democrático o de corrupción implicará la suspensión de aquellos derechos de dos a diez años la cual será declarada por el Supremo Tribunal Federal, mediante representación del Procurador General de la República, sin perjuicio de acción civil o penal específica para el caso, asegurándose al causante amplia defensa.

Párrafo único - Cuando se tratar del titular de un cargo electivo, el proceso de suspensión no dependerá de la Cámara a que pertenecer.

.....

TITULO III

Del Orden Económico y Social

.....

Art. 165 - La Constitución asegura a los trabajadores los siguientes derechos, además de otros que, en los términos de la ley, sirvan a la mejoría de su condición social:

I - Salario mínimo capaz de satisfacer, conforme las condiciones de cada región, sus necesidades normales y las de su familia.

II - Salario familiar a los dependientes.

III - Prohibición de diferencia de salarios y de criterio de admisiones por motivo de sexo, color y estado civil.

IV - Salario de trabajo nocturno superior al diurno.

V - Integración en la vida y en el desenvolvimiento de la empresa, con participación en los beneficios y, excepcionalmente, en la gestión, según lo establecido por la ley.

VI - Duración diaria del trabajo no excedente a ocho horas, con intervalo para descanso, excepto en los casos especialmente previsto.

VII - Reposo semanal remunerado y en los días festivos civiles y religiosos, de acuerdo con la tradición local.

VIII- Vacaciones anuales remuneradas.

IX - Higiene y seguridad en el trabajo.

X - Prohibición de trabajo en industrias insalubres, a mujeres y menores de dieciocho años, de trabajo nocturno a menores de dieciocho años y de cualquier trabajo a menores de doce años.

XI - Descanso remunerado a las mujeres embarazadas, antes y después del parto, sin perjuicio del empleo y del salario.

XII - Fijación de los porcentajes de empleados brasileños en los servicios públicos dados en concesión y en empresas de determinadas ramas comerciales e industriales.

XIII- Estabilidad, con indemnización al trabajador despedido, o fondo de garantía equivalente.

XIV - Reconocimiento de las convenciones colectivas del trabajo.

XV - Asistencia sanitaria, hospitalaria y médica preventiva.

XVI - Seguridad social en los casos de enfermedad, vejez, invalidez y muerte, seguro desempleo, seguro contra accidentes del trabajo y protección de la maternidad, mediante contribución del Estado, del empresario y del empleado.

XVII- Prohibición de distinción entre trabajo manual, técnico o intelectual, o entre los profesionales respectivos.

XVIII- Colonias de vacaciones y clínicas de reposo, recuperación y convalecencia, mantenidas por el Estado, conforme disponer la ley.

XIX - Jubilación para la mujer, a los treinta años de trabajo, con sueldo integral; y

XX - Huelga, excepto en el caso previsto en el art. 162. (No será permitida huelga en los servicios públicos y actividades esenciales, definidas en ley).

.....

TITULO IV

De la Familia, de la Educación y de la Cultura

Art. 176 - La educación, inspirada en el principio de la unidad nacional y en los ideales de libertad y solidaridad humana, es derecho de todos y deber del Estado, y será dada en el hogar y en la escuela.

APENDICE II

Los Derechos Fundamentales en la Constitución de 1988

APENDICE II*

CONSTITUCION DE 1988

(Promulgada en 5 de octubre de 1988)

TITULO II

DE LOS DERECHOS Y GARANTÍAS FUNDAMENTALES

CAPITULO I

DE LOS DERECHOS Y DEBERES INDIVIDUALES Y COLECTIVOS

Art. 5º - Todos son iguales ante la ley, sin distinción de cualquier naturaleza, garantizándose a los brasileños y a los extranjeros residentes en el país, la inviolabilidad del derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la seguridad y a la propiedad, en los términos siguientes:

I - Los hombres y las mujeres son iguales en derechos y obligaciones, en los términos de esta Constitución;

II - Nadie será obligado a hacer o dejar de hacer alguna cosa sino es por causa legal;

III - Nadie será sometido a tortura ni a trato inhumano o degradante;

IV - Es libre la manifestación del pensamiento, prohibiéndose el anonimato;

* Traducción del doctorando.

V - Se asegura el derecho de respuesta, proporcional al agravio, además de la indemnización por daño material, moral o a la imagen;

VI - Es inviolable la libertad de conciencia y de creencia, siendo asegurado el libre ejercicio de los cultos religiosos y garantizada, en la forma de la ley, la protección a los locales de culto y sus liturgias;

VII - Se asegura, en los términos de la ley, la prestación de asistencia religiosa en las entidades civiles y militares de internación colectiva;

VIII - Nadie será privado de derechos por motivo de creencia religiosa o de convicción filosófica o política, excepto si ello se utiliza para eximirse de obligación legal a todos impuesta y se recusa de cumplir prestación alternativa, fijada en ley;

IX - Es libre la expresión de la actividad intelectual, artística, científica y de comunicación, independientemente de censura o licencia;

X - Son inviolables la intimidad, la vida privada, el honor y la imagen de las personas, asegurado el derecho a indemnización por el daño material o moral motivado por la violación;

XI - La casa es asilo inviolable del individuo, nadie puede penetrar en ella sin consentimiento del morador, excepto en caso de flagrante delito o desastre, o para prestar socorro, y durante el día sólo por determinación judicial;

XII - Es inviolable el secreto de la correspondencia y de las comunicaciones telegráficas, de datos y de las comunicaciones telefónicas, excepto, en último caso, por orden judicial, en

las hipótesis y en la forma que la ley establecer para fines de investigación criminal o instrucción procesal penal;

XIII - Es libre el ejercicio de cualquier trabajo, oficio o profesión, atendidas las calificaciones profesionales que la ley establecer;

XIV - Se asegura a todos el acceso a la información y se resguarda el secreto de la fuente, cuando sea necesario en el ejercicio profesional;

XV - Es libre el movimiento en el territorio nacional en tiempo de paz, pudiendo cualquier persona, en los términos de la ley, entrar, permanecer o salir de él con sus bienes;

XVI - Todos pueden reunirse pacíficamente, sin armas, en sitios abiertos al público, independientemente de autorización, siempre que no frustren otra reunión anteriormente convocada para el mismo local, siendo apenas exigido previa comunicación a la autoridad competente;

XVII - Es plena la libertad de asociación para fines lícitos, y prohibida la de carácter paramilitar;

XVIII- La creación de asociaciones y, según la forma legal, la de cooperativas no dependen de autorización, siendo prohibida la intervención estatal en su funcionamiento;

XIX - Las asociaciones solo podrán ser compulsivamente disueltas o ver sus actividades suspendidas por decisión judicial, exigiéndose, en el primer caso, la tramitación en juzgado;

XX - Nadie podrá ser compelido a asociarse o a permanecer asociado;

XXI - Las entidades asociativas, cuando están expresamente autorizadas, tienen legitimidad para representar a sus afiliados judicial o extrajudicialmente;

XXII - Se garantiza el derecho de propiedad;

XXIII- La propiedad atenderá a su función social;

XXIV - La ley establecerá el procedimiento para expropiación por necesidad o utilidad pública, o por interés social, mediante justa y previa indemnización en dinero, resguardados los casos previstos en esta Constitución;

XXV - En caso de inminente peligro público, la autoridad competente podrá hacer uso de propiedad particular, asegurando al propietario indemnización ulterior, en caso de ocurrir daño;

XXVI - La pequeña propiedad rural, así definida en ley desde que trabajada por una familia, no puede ser objeto de embargo en pago de deudas provenientes de su actividad productiva, disponiendo la ley sobre los medios de financiación para su desarrollo;

XXVII- A los autores pertenece el derecho exclusivo de utilización, publicación o reproducción de sus obras, transmisibles a los herederos por el tiempo que la ley establecer;

XXVIII- Se aseguran, en los términos establecidos por la ley:

a) La protección a las participaciones individuales en obras colectivas y a la reproducción de imagen y voz humanas, inclusive en las actividades deportivas;

b) El derecho de fiscalización del aprovechamiento económico de las obras que habiendo creadas o en las que

participen, a los creadores, a los intérpretes y a las respectivas representaciones sindicales y asociativas;

XXIX - La ley asegurará a los autores de inventos industriales privilegio temporal para su utilización, así como protección a las creaciones industriales, a la propiedad de las marcas, a los nombres de empresas y a otros signos distintivos, función del interés social y el desenvolvimiento tecnológico y económico del país;

XXX - Se garantiza el derecho de herencia;

XXXI - La sucesión de bienes de extranjeros situados en el país será regulada por la ley brasileña en beneficio del cónyuge o de los hijos, siempre que no sea más favorable la ley personal del aplicable al causante;

XXXII- El Estado promoverá, en la forma que lo establezca la ley, la defensa del consumidor;

XXXIII- Todos tienen derecho a recibir de los órganos públicos informaciones de su interés, o de interés colectivo o general, que serán prestadas en el plazo de la ley, so pena de responsabilidad, exceptuadas aquellas cuyo secreto sea imprescindible a la seguridad de la sociedad y del Estado;

XXXII - Se asegura a todos, independientemente del pago de tasas:

a) El derecho de petición a los Poderes Públicos, en defensa de derechos o contra legalidad o abuso de poder;

b) La obtención de certificaciones en reparticiones públicas, para la defensa de sus derechos y el esclarecimiento de situaciones de interés personal;

XXXV - La ley no excluirá de la apreciación del Poder Judicial lesión o amenaza a derecho;

XXXVI - La ley no perjudicará el derecho adquirido, el acto jurídico perfecto y la cosa juzgada;

XXXVII- No habrá juicio o tribunal de excepción;

XXXVIII-Se reconoce la institución del Jurado, con la organización que va a ser instituida por la ley, quedando asegurada:

a) La plenitud de defensa;

b) El secreto de las votaciones;

c) La soberanía de los veredictos;

d) La competencia para juzgar los crímenes dolosos contra la vida;

XXXIX - No hay crimen sin ley anterior que lo defina, ni pena sin previa conminación legal;

XL - La ley penal no podrá retroceder, excepto para beneficiar el reo;

XLI - La ley castigará cualquier discriminación atentatoria de los derechos y libertades fundamentales;

XLII - La práctica de racismo constituye crimen sin fianza es imprescriptible y está sujeto a la pena de reclusión, en los términos establecido por la ley;

XLIII- La ley considerará crímenes sin fianza y no susceptibles de gracia o amnistía la práctica de la tortura, el tráfico ilícito de tóxicos y drogas afines, el terrorismo y los

definidos como crímenes "hediondos", por ellos respondiendo los mandantes, los ejecutores y los que, pudiendo evitarlos, no lo hagan;

XLIV - Constituye crimen sin fianza e imprescriptibles la acción de grupos armados, civiles o militares, contra el orden constitucional y el Estado Democrático;

XLV - Ninguna pena podrá extenderse más allá de la persona del condenado, pudiendo la obligación de reparar el daño y la decretación del perdimiento de bienes ser, en los términos de la ley, extendidas a los sucesores y contra ellos ejecutadas, hasta el límite del valor del patrimonio transferido;

XLVI - La ley regulará la individualidad de la pena y adoptará, entre otras medidas, las siguientes:

- a) Privación o restricción de la libertad;
- b) Pérdida de bienes;
- c) Multa;
- d) Prestación social alternativa;
- e) Suspensión o interdicción de derechos;

XLVII - Quedan prohibidas las penas de:

- a) Muerte, excepto en caso de guerra declarada;
- b) Carácter perpetuo;
- c) Trabajos forzados;
- d) Destierro;

e) Crueles;

XLVIII- La pena será cumplida en establecimientos diferentes, de acuerdo con la naturaleza del delito, la edad y el sexo del apenado (sujeto penalizado);

XLIX - Se asegura a los presos el respeto a su integridad física y moral;

L - A las presidiarias se aseguran condiciones para que puedan permanecer con sus hijos durante el período de amamantamiento;

LI - Ningún brasileño será extraditado, excepto el naturalizado, en caso de crimen común, practicado antes de la naturalización, o en caso de probada implicación en tráfico ilícito de sustancias tóxicas y drogas afines, en la forma que establezca la ley;

LII - No será concedida extradición de extranjero por crimen político o de opinión;

LIII - Nadie será procesado ni sentenciado sino por la autoridad competente;

LIV - Nadie será privado de la libertad o de sus bienes sin el debido proceso legal;

LV - A los contendientes, en proceso judicial o administrativo y, a los acusados en general, se asegura la contradictoria y amplia defensa, con los medios y recursos a ella inherentes;

LVI - Son inadmisibles, en el proceso, las pruebas obtenidas por medios ilícitos;

LVII - Nadie será considerado culpable hasta tramitación en juzgado de sentencia penal condenatoria;

LVIII- El civilmente identificado no será sometido a la identificación criminal, excepto en las hipótesis previstas en ley;

LIX - Será admitida acción privada en los crímenes de acción pública, si ésta no hubiera sido intentada en el plazo legal;

LX - La ley solo podrá restringir la publicidad de los actos procesales, cuando la defensa de la intimidad o el interés social lo exigiera;

LXI - Nadie será detenido sino en flagrante delito o por orden escrito y fundamentado de autoridad judicial competente, excepto en los casos de transgresión militar o crimen propiamente militar, definidos en ley;

LXII - La detención de cualquier persona y el local donde se encuentre detenido será comunicado inmediatamente al Juez competente y a la familia del preso o, a la persona por él indicada;

LXIII - El detenido será informado de sus derechos, entre los cuales el de permanecer callado, siéndole asegurada la asistencia de la familia y del abogado;

LXIV - el detenido tiene derecho a la identificación de los responsables por su prisión o por su interrogatorio;

LXV - La prisión ilegal será inmediatamente dejada sin efecto por la autoridad competente;

LXVI - Nadie será llevado a prisión o en ella mantenido, si la ley admitir la libertad provisional, con o sin fianza;

LXVII- No habrá prisión civil por deuda, excepto la del responsable por el incumplimiento voluntario e inexcusable de obligación alimenticia y la del depositario infiel;

LXVIII- Se concederá Habeas Corpus siempre que alguien sufra o se halle amenazado de sufrir violencia o coacción en su libertad de movimiento, por ilegalidad o abuso de poder;

LXIX - Se concederá Mandamiento de Seguridad para proteger derecho determinado y cierto, no amparado por Habeas Corpus o Habeas Data, cuando el responsable por la ilegalidad o abuso de poder haya sido la autoridad pública o agente de persona jurídica en el ejercicio de atribuciones del poder público;

LXX - El Mandamiento de Seguridad Colectivo puede ser impetrado por:

a) Partido político con representación en el Congreso Nacional;

b) Organización sindical, entidad de clase o asociación legalmente constituida y en funcionamiento hace por lo menos un año, en defensa de los intereses de sus miembros o asociados;

LXXI - Se concederá Mandamiento de Injunción siempre que la falta de norma reglamentaria torne inviable el ejercicio de los derechos y libertades constitucionales y de las prerrogativas inherentes a la nacionalidad, a la soberanía y a la ciudadanía;

LXXII - Se concederá Habeas Data:

a) Para proteger el conocimiento de informaciones relativas a la persona del impetrante, constantes en registros o bancos de datos de entidades gubernamentales o de carácter público;

b) Para la alteración de datos, cuando no se prefiera hacerlo por proceso sigiloso, judicial o administrativo;

LXXIII- Cualquier ciudadano es parte legítima para proponer acción popular tendiente a anular acto lesivo al patrimonio público o de entidades de que el Estado participe, a la moralidad administrativa, al medio ambiente y al patrimonio histórico y cultural, atribuyéndosele al autor, excepto comprobada mala fe, exención de costas judiciales y de carga de la acción;

LXXIV - El Estado prestará asistencia jurídica integral y gratuita a los que justifiquen insuficiencia de recursos;

LXXV - El Estado indemnizará al condenado por error judicial, así como el que fuere detenido por tiempo superior a la condena;

LXXVI - Son gratuitos para los que han justificado ser pobres, en la forma de la ley:

a) El registro civil de nacimiento;

b) La certificación de defunción;

LXXVII- Son gratuitas las acciones de Habeas Corpus y Habeas Data, y, en la forma de la ley, los actos necesarios para el ejercicio de la ciudadanía.

Párrafo 1º - Las normas que definen los derechos y garantías fundamentales son de aplicación inmediata.

Párrafo 2º - Los derechos y garantías expresados en esta Constitución no excluyen otros originados del régimen y de los principios por ella adoptados, o de los tratados

internacionales de los que la República Federativa de Brasil sea parte.

CAPITULO II

DE LOS DERECHOS SOCIALES

Art. 6º Son derechos sociales la educación, la salud, el trabajo, el ocio, la seguridad y la asistencia social, la protección a la maternidad y la infancia, la asistencia a los desamparados, en la forma establecida en esta Constitución.

Art. 7º Son derechos de los trabajadores urbanos y rurales, además de otros que tiendan a la mejoría de su condición social:

I - La relación de empleo protegida contra despido arbitrario o sin justa causa, en los términos que la ley complementaria establezca, que preverá indemnización compensatoria, entre otros derechos;

II - El seguro de desempleo, en caso de desempleo no voluntario;

III - El fondo de garantía del tiempo de servicio;

IV - El salario mínimo, establecido en la ley, unificado, capaz de atender a sus necesidades vitales básicas y a la de su familia como vivienda, alimentación, educación, salud, ocio, vestuario, higiene, transporte y seguridad social, con reajustes periódicos que le preserven el poder adquisitivo, prohibiéndose la utilización de este mínimo como base para cualquier otro fin;

V - El nivel salarial proporcional a la extensión y a la complejidad del trabajo;

VI - La irreductibilidad del salario, excepto el dispuesto en convención o acuerdo colectivo;

VII - La garantía de salario, jamás inferior al mínimo, para los que perciben remuneración variable;

VIII- El undécimo tercer salario con base a la remuneración integral o no valor de sueldo de la jubilación;

IX - La remuneración del trabajo nocturno superior a la del diurno;

X - La protección del salario en la forma de la ley, constituyendo crimen su retención dolosa;

XI - La participación en los beneficios o resultados, desligada de la remuneración y, excepcionalmente, la participación en la gestión de la empresa, conforme sea definido por ley;

XII - El salario familiar para sus dependientes;

XIII - La duración del trabajo normal no superior a ocho horas diarias y cuarenta y cuatro semanales, concedida la compensación de horarios y la reducción de la jornada, mediante acuerdo o convención colectiva de trabajo;

XIV - La jornada de seis horas para el trabajo realizado en turnos ininterrumpidos de reemplazo, excepto lo establecido por negociación colectiva;

XV - El reposo semanal remunerado, preferentemente a los domingos;

XVI - La remuneración del servicio extraordinario superior de un mínimo de cincuenta por ciento de la normal;

XVII - El goce de vacaciones anuales remuneradas con al menos un tercio más del salario normal;

XVIII - Licencia a la mujer embarazada, sin perjuicio del empleo y del salario de duración de ciento y veinte días;

XIX - La licencia por paternidad, en los términos establecidos en ley

XX - La protección del mercado de trabajo de la mujer, mediante incentivos específicos, en los términos de la ley;

XXI - El aviso de despido previo que ha de ser proporcional al tiempo de servicio, siendo el mínimo de treinta días, en los términos que establezca la ley;

XXII - La reducción de los riesgos inherentes al trabajo, por medio de normas de salud, higiene y seguridad;

XXIII - La remuneración adicional para las actividades penosas, insalubres o peligrosas, en la forma establecida por ley;

XXIV - La jubilación;

XXV - La asistencia gratuita de los hijos y dependientes, desde el nacimiento hasta el seis años de edad, a guarderías y pre-escuelas;

XXVI- El reconocimiento de las convenciones y acuerdos colectivos de trabajo;

XXVII- La protección motivada de la informática, en la forma definida en la ley;

XXVIII- El seguro contra accidentes de trabajo a cargo del empresario, sin excluir la indemnización a que este está obligado, cuando incurrir en dolo o culpa;

XXIX - La acción por deudas resultantes de las relaciones de trabajo, con plazo prescriptivo de:

a) cinco años para el trabajador urbano, hasta el límite de dos años después de la extinción del contrato;

b) hasta dos años después de la extinción del contrato, para el trabajador rural;

XXX - La prohibición de diferencia de salarios, de ejercicio de funciones y de criterio de admisión por motivo de sexo, edad, color o estado civil;

XXXI - La prohibición de cualquier discriminación en lo tocante a salario y a criterios de admisión del trabajador minusválido;

XXXII- La prohibición de distinción entre trabajo manual, técnico e intelectual o, entre los profesionales respectivos;

XXXIII-La prohibición de trabajo nocturno, peligroso o insalubre a los menores de dieciocho años y de cualquier trabajo a menores de catorce años, excepto en condición de aprendiz;

XXXIV- La igualdad de derechos entre el trabajador permanente y el trabajador temporal;

Párrafo único - Se aseguran a los trabajadores domésticos los derechos previstos en los apartados IV, VI, VIII, XV, XVII, XIX, XXI y XXIV, bien como su integración a la seguridad social.

Art. 8º Es libre la asociación profesional o sindical, observado lo siguiente:

I - La ley no podrá exigir autorización del Estado para la fundación de sindicato, exceptuado el registro en el órgano competente, prohibiéndose al Poder Público la intervención en la organización sindical;
.....

Art. 9º Se asegura el derecho a la huelga, compitiendo a los trabajadores decidir sobre la oportunidad de ejercerlo y sobre los intereses que deban defender por medio de él.

Párrafo 1º - La ley definirá los servicios o actividades esenciales y dispondrá sobre la forma de atender a las necesidades ineludibles de la comunidad.

Párrafo 2º - Los abusos cometidos sujetan los responsables a las penas de la ley.

Art. 10 Se asegura la participación de los trabajadores y de los empresarios en cualquier organismo del Poder Público en los que sus intereses profesionales o laborales sean objeto de discusión y deliberación.

Art. 11 En las empresas de más de doscientos empleados, se asegura la elección de un representante de estos con la finalidad exclusiva de promover el entendimiento directo con los empresarios.

CAPITULO III

DE LA NACIONALIDAD

Art. 12 Son brasileños:

I - De nacimiento:

a) Los nacidos en la República Federativa de Brasil, aunque de padres extranjeros siempre que éstos no estén a servicio de su país;

b) Los nacidos en el extranjero, de padre brasileño o madre brasileña, siempre que cualquier de ellos esté a servicio de la República Federativa de Brasil;

c) Los nacidos en el extranjero, de padre brasileño o madre brasileña, si son registrados en repartición brasileña competente, o si pasan residir en la República Federativa antes de ser mayor de edad y, alcanzada ésta, opten en cualquier tiempo por la nacionalidad brasileña;

II - Naturalizados:

a) Los que, en la forma de la ley, adquieran la nacionalidad brasileña, exigiéndose a los originarios de países de lengua portuguesa apenas residencia por un año ininterrumpido e idoneidad moral;

b) Los extranjeros de cualquier nacionalidad, residentes en la República Federativa de Brasil hace más de treinta años ininterrumpido y sin condenación penal, si requieran la nacionalidad brasileña;

Párrafo 1º - A los portugueses con residencia permanente en el país se existir reciprocidad en favor de los brasileños, serán atribuidos los derechos inherentes al brasileño de nacimiento, excepto en los casos previsto en esta Constitución.

Párrafo 2º - La ley no podrá establecer distinción entre brasileños de nacimiento y naturalizados, excepto en los casos

previstos en esta Constitución.
.....

CAPITULO IV

DE LOS DERECHOS POLITICOS

Art. 14 La soberanía popular será ejercitada por el sufragio universal y por el voto directo y secreto, de valor igual para todos y, que puede ejercerse en los términos establecidos por la ley mediante:

- I - Plebiscito;
- II - Referéndum;
- III - Iniciativa popular;

Párrafo 1º - La inscripción electoral y el voto son:

- I - Obligatorios para los mayores de dieciocho años;
- II - Facultativos para:
 - a) Los analfabetos;
 - b) Los mayores de setenta años;
 - c) Los mayores de dieciséis y menores de dieciocho años.

Art. 15 Está vedada la cesación de derechos políticos, cuya pérdida o suspensión solo se puede ordenarse en los casos de:

- I - Cancelación de la naturalización por sentencia tramitada en juzgado;

III - Condena criminal tramitada en juzgado y mientras duraren sus efectos;

IV - Negativa a cumplir una obligación a todos impuesta o cumplir la prestación alternativa, en los términos de Art. 5º, VIII;

V - Improbidad administrativa, en los términos del art. 37, 4º.

.....

CAPITULO V

DE LOS PARTIDOS POLITICOS

Art. 17 Es libre la creación, fusión, incorporación y extinción de partidos políticos, resguardados la soberanía nacional, el régimen democrático, el pluripartidismo y los derechos fundamentales de la persona humana ...

.....

TITULO VIII

DEL ORDEN SOCIAL

CAPÍTULO III

DE LA EDUCACIÓN, DE LA CULTURA Y DEL DEPORTE

Art. 205 - La educación, derecho de todos y deber del Estado y de la familia, será promovida y estimulada con la colaboración de la sociedad tendiendo al pleno desenvolvimiento de la persona su preparación para el ejercicio de la ciudadanía y su calificación para el trabajo.

LISTA DE TABLAS

	Pág.
I - PRODUCTO INTERIOR BRUTO (PIB) - 1974/1989	- 116
II - INDICES DE INFLACIÓN - 1974/1989	- 118
II - VALOR PORCENTUAL DEL SALARIO MINIMO 1974/1989	- 119
IV - PROCESOS CONOCIDOS POR EL SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - 1975/1985	- 161
V - ASESINATOS EN EL CAMPO - 1974/1989	- 218
VI - ENTRADA Y SALIDA DE PERSONAS - 1987/1989	- 265
VII - TASAS DE ANALFABETISMO - 1976/1989	- 294
VIII - TASAS DE DESEMPLEO - 1976/1989	- 299
IX - PORCENTUAL DE REAJUSTE DE LOS SALARIOS - 1979/1983 (I)	- 302
PORCENTUAL DE REAJUSTE DE LOS SALARIOS - 1979/1983 (II)	- 303
X - INDICES DE INFLACIÓN Y DE CORRECCIÓN DE SALARIOS - 1979/1983	- 304
XI - HUELGAS EN EL PERIODO 1978/1989	- 314